DIARIO DE SESIONES DE LAS **CORTES DE ARAGÓN**

Número 41
Año 2012
Legislatura VIII

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ ÁNGEL BIEL RIVERA

Sesión plenaria núm. 44
Celebrada el jueves 13 y el viernes 14 de diciembre de 2012

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la sesiones plenarias de la Cámara celebradas los días 21 y 22 y 23 de noviembre de 2012.

2. Debate y votación del dictamen de la Comisión de Educación, Universidad, Cultura y Deporte sobre el proyecto de ley de autoridad del profesorado en la Comunidad Autónoma de Aragón.

3. Debate y votación de las enmiendas a la totalidad, de devolución, presentadas al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, por los GG.PP. Chunta Aragonesista, de Izquierda Unida de Aragón y Socialista, respectivamente.

4. Debate y votación de las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón:
— Enmienda a la totalidad, de devolución, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.
— Enmienda a la totalidad, con texto alternativo, presentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

5. Debate y votación de las enmiendas a la totalidad, de devolución, presentadas al proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón por los GG.PP. Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida de Aragón, respectivamente.

6. Comparecencia del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, a solicitud de los veintidós diputados del G.P. Socialista, para informar sobre la prestación del servicio de teleasistencia en Aragón.

7. Debate y votación de la moción número 78/12, dimanante de la interpelación número 74/12, sobre política de planificación educativa del Gobierno de Aragón, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

8. Debate y votación de la moción número 79/12, dimanante de la interpelación número 85/12, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de recaudación de impuestos, presentada por el G.P. Socialista.

9. Debate y votación de la proposición no de ley número 240/12, relativa a la consolidación de un sistema ferroviario público y social, presentada por el G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

10. Debate y votación de la proposición no de ley número 366/12, relativa al proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, presentada por el G.P. del Partido Aragonés.

11. Debate y votación de la proposición no de ley número 383/12, sobre la integración, a todos los efectos, del Hospital de Jaca en el Servicio Aragonés de Salud, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

12. Debate y votación de la proposición no de ley número 401/12, relativa a la contratación y las percepciones salariales del profesorado interino, presentada por el G.P. Socialista.

13. Debate y votación de la proposición no de ley número 404/12, relativa a la decisión de impedir la existencia de un Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, presentada por el G.P. Socialista.

14. Interpelación número 71/12, relativa a gestión de residuos e instalaciones de gestión, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el portavoz adjunto del G.P. Chunta Aragonesista, Sr. Palacín Eltoro.

15. Interpelación número 82/12, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de empresas públicas, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans.

16. Interpelación número 90/12, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de educación y, en concreto, en la educación desarrollada en el ámbito rural, formulada a la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Socialista Sra. Pérez Esteban.

17. Interpelación número 97/12, sobre la política general del Gobierno de Aragón en relación con los laboratorios de análisis para diagnóstico clínico del Salud, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la portavoz del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

18. Interpelación número 105/12, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de discapacidad, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la diputada del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sra. Luquin Cabello.

19. Interpelación número 111/12, relativa a la racionalización del empleo público, formulada al consejero de Hacienda y Administración Pública por la diputada del G.P. Socialista Sra. Fernández Abadía.

20. Interpelación número 112/12, relativa a crecimientos turísticos y más en concreto en turismo rural, formulada al consejero de Economía y Empleo por el diputado del G.P. Socialista Sr. García Madrigal.

21. Pregunta número 2.869/12, relativa al nuevo edificio de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, formulada a la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Socialista Sra. Pérez Esteban.

22. Pregunta número 2.973/12, relativa al coste de su decisión de cerrar los sábados las bibliotecas de la Diputación General de Aragón y, entre ellas, la Biblioteca de Aragón, formulada a la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

23. Pregunta número 2.968/12, relativa a las medidas de apoyo al sector del calzado de la comarca del Aranda, formulada al consejero de Economía y Empleo por el diputado del G.P. Socialista Sr. García Madrigal.

24. Pregunta número 2.976/12, relativa al abastecimiento de agua a la comarca de Cariñena, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado del G.P. Socialista Sr. Laplana Buetas.

25. Pregunta número 3.027/12, relativa a las personas de las que prevé prescindir el Gobierno de Aragón en Sarga en 2013, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado del G.P. Socialista Sr. Laplana Buetas.

26. Pregunta número 2.980/12, relativa a las graves consecuencias del drástico recorte, casi el 90%, de las ayudas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales a la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

27. Pregunta número 2.981/12, relativa a la convocatoria para contratar servicios presenciales de intérpretes de lengua de signos, formulada al consejero de

Sanidad, Bienestar Social y Familia por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

28. Pregunta número 3.010/12, relativa al mapa sanitario de Azuara y Belchite, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por el diputado del G.P. Socialista Sr. Alonso Lizondo.

29. Pregunta número 3.024/12, relativa a la reestructuración del personal a partir de la fusión de Sodemasa y Sirasa, formulada al consejero de Presidencia y Justicia por el diputado del G.P. Socialista Sr. Laplana Buetas.

Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, el Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera, acompañado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, y por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. D. Javier Velasco Rodríguez, así como por el secretario primero, Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, y por el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. Alfonso Vicente Barra. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

Están presentes en el banco del Gobierno la presidenta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª Luisa Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Presidencia y Justicia; de Hacienda y Administración Pública; de Economía y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes; de Política Territorial e Interior; de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; de Industria e Innovación; de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, y de Sanidad, Bienestar Social y Familia.

SUMARIO

Dictamen de la Comisión de Educación, Universidad, Cultura y Deporte sobre el proyecto de ley de la autoridad del profesorado en la Comunidad Autónoma de Aragón. 3653

— La diputada Sra. Ferrando Lafuente, del G.P. Popular, presenta el dictamen

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chunta Aragonesista, defiende enmiendas

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, defiende enmiendas

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. Socialista, defiende enmiendas

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. del Partido Aragonés, interviene en contra

— La diputada Sra. Ferrando Lafuente, del G.P. Popular, interviene en contra

— Votaciones

— Los diputados Sres. Barrena Salces y Briz Sánchez y las diputadas Sras. Pérez Esteban y Ferrando Lafuente explican el voto de sus grupos

Enmiendas a la totalidad, de devolución, presentadas al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 3664

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, Sr. Fernández de Alarcón Herrero, presenta el proyecto de ley

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chunta Aragonesista, defiende una enmienda a la totalidad

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, defiende una enmienda a la totalidad

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco, del G.P. Socialista, defiende una enmienda a la totalidad

— El diputado Sr. Campoy Monreal, del G.P. Popular, interviene en contra

— El diputado Sr. Blasco Nogués, del G.P. del Partido Aragonés, interviene en contra

— Votaciones

— Los diputados Sres. Aso Solans, Briz Sánchez, Blasco Nogués, Ibáñez Blasco y Campoy Monreal explican el voto de sus grupos

Enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. . . . 3674

— La señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, Sra. Serrat Moré, presenta el proyecto de ley

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta Aragonesista, defiende una enmienda de totalidad

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, defiende una enmienda de totalidad

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. del Partido Aragonés, interviene en contra

— La diputada Sra. Ferrando Lafuente, del G.P. Popular, interviene en contra

— La diputada Sra. Pérez Esteban fija la posición del G.P. Socialista

— Votaciones

— El diputado Sr. Barrena Salces y las diputadas Sras. Ibeas Vuelta, Herrero Herrero, Pérez Esteban y Ferrando Lafuente explican el voto de sus grupos

En miendas a la totalidad, de devolución, presentadas al proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. . . 3685

— El consejero de Hacienda y Administración Pública, Sr. Saz Casado, presenta el proyecto de ley

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. Chunta Aragonesista, defiende una enmienda de totalidad

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, defiende una enmienda de totalidad

— El diputado Sr. Garasa Moreno, del G.P. Popular, interviene en contra

— El diputado Sr. Ruspira Morraja fija la posición del G.P. del Partido Aragonés

— La diputada Sra. Fernández Abadía fija la posición del G.P. Socialista

— Votaciones

— Los diputados Sres. Soro Domingo, Ruspira Morraja y Garasa Moreno explican el voto de sus grupos

Comparecencia del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia para informar sobre la prestación del servicio de teleasistencia en Aragón.. 3695

— La diputada Sra. Broto Cosculluela, del G.P. Socialista, explica la solicitud de comparecencia

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sr. Oliván Bellosta, intervie

— La diputada Sra. Broto Cosculluela replica

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica

— La diputada Sra. Luquin Cabello interviene en nombre del G.P. de Izquierda Unida de Aragón

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta interviene en nombre del G.P. Chunta Aragonesista

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró interviene en nombre del G.P. del Partido Aragonés

— La diputada Sra. Susín Gabarre interviene en nombre del G.P. Popular

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sr. Oliván Bellosta, contesta

Moción núm. 78/12, dimanante de la interpelación núm. 74/12, relativa a la política de planificación educativa del Gobierno de Aragón. 3704

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chunta Aragonesista, defiende la moción

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, defiende una enmienda

— La diputada Sra. Herrero Herrero fija la posición del G.P. del Partido Aragonés

— La diputada Sra. Vera Laínez fija la posición del G.P. Socialista

— El diputado Sr. Celma Escuin fija la posición del G.P. Popular

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija un texto transaccional

— Votación

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Briz Sánchez y Celma Escuin y las diputadas Sras. Herrero Herrero y Vera Lainez explican el voto de sus grupos

Moción núm. 79/12, dimanante de la interpelación núm. 85/12, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de recaudación de impuestos.. . . 3710

— La diputada Sra. Fernández Abadía, del G.P. Socialista, defiende la moción

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. Chunta Aragonesista, defiende una enmienda

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición del G.P. de Izquierda Unida de Aragón

— El diputado Sr. Ruspira Morraja fija la posición del G.P. del Partido Aragonés

— El diputado Sr. Solana Sorribas fija la posición del G.P. Popular

— La diputada Sra. Fernández Abadía fija un texto transaccional

— Votaciones

— Los diputados Sres. Ruspira Morraja y Solana Sorribas y la diputada Sra. Fernández Abadía explican el voto de sus grupos

Proposición no de ley núm. 240/12, sobre la consolidación de un sistema ferroviario público y social. 3715

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, defiende la proposición no de ley

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chunta Aragonesista, defiende enmiendas

— El diputado Sr. Blasco Nogués, del G.P. del Partido Aragonés, defiende una enmienda

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco fija la posición del G.P. Socialista

— El diputado Sr. Galve Juan fija la posición del G.P. Popular

— El diputado Sr. Aso Solans fija un texto transaccinal

— Votaciones

— Los diputados Sres. Aso Solans, Briz Sánchez, Blasco Nogués, Ibáñez Blasco y Galve Juan explican el voto de sus grupos

Proposición no de ley núm. 366/12, sobre medidas fiscales para la sostenibilidad energética. 3720

— El diputado Sr. Boné Pueyo, del G.P. del Partido Aragonés, defiende la proposición no de ley

— El diputado Sr. Romero Rodríguez, del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, defiende una enmienda

— El diputado Sr. Soro Domingo fija la posición del G.P. Chunta Aragonesista

— El diputado Sr. Becerril Gutiérrez fija la posición del G.P. Socialista

— La diputada Sra. Arciniega Arroyo fija la posición del G.P. Popular

— El diputado Sr. Boné Pueyo fija un texto transaccional

— Votaciones

— Los diputados Sres. Romero Rodríguez, Boné Pueyo y Becerril Gutiérrez y la diputada Sra. Arciniega Arroyo explican el voto de sus grupos

Proposición no de ley núm. 383/12, sobre la integración, a todos los efectos, del Hospital de Jaca en el Servicio Aragonés de Salud. 3727

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta Aragonesista, defiende la proposición no de ley

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del Partido Aragonés, defiende una enmienda

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la posición del G.P. de Izquierda Unida de Aragón

— El diputado Sr. Alonso Lizondo fija la posición del G.P. Socialista

— La diputada Sra. Orós Lorente fija la posición del G.P. Popular

— Votación

— Las diputadas Sras. Luquin Cabello, Ibeas Vuelta y Orós Lorente y los diputados Sres. Ruspira Morraja y Alonso Lizondo explican el voto de sus grupos

Proposición no de ley núm. 401/12, sobre la contratación y las percepciones salariales del profesorado interino. . . . 3734

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. Socialista, defiende la proposición no de ley

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró, del G.P. del Partido Aragonés, defiende una enmienda

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición del G.P. de Izquierda Unida de Aragón

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición del G.P. Chunta Aragonesista

— El diputado Sr. Peris Millán fija la posición del G.P. Popular

— Votación

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Peribáñez Peiró y Peris Millán y la diputada Sra. Pérez Esteban explican el voto de sus grupos

Proposición no de ley núm. 404/12, sobre la decisión de impedir la existencia de un impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito.. 3740

— El diputado Sr. Sada Beltrán, del G.P. Socialista, defiende la proposición no de ley

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. Chunta Aragonesista, defiende una enmienda

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del Partido Aragonés, defiende una enmienda

— El diputado Sr. Romero Rodríguez fija la posición del G.P. de Izquierda Unida de Aragón

— La diputada Sra. Vallés Cases fija la posición del G.P. Popular

— El diputado Sr. Sada Beltrán fija un texto transaccional

— Votación

— Los diputados Sres. Ruspira Morraja y Sada Beltrán y la diputada Sra. Vallés Cases explican el voto de sus grupos

Interpelación núm. 82/2012, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de empresas públicas. . 3747

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, interpela

— El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, contesta

— El diputado Sr. Aso Solans replica

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica

Interpelación núm. 90/12, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de educación y, en concreto, en la educación desarrollada en el ámbito rural. 3751

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. Socialista, interpela

— La consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, Sra. Serrat Moré, contesta

— La diputada Sra. Pérez Esteban replica

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica

Interpelación núm. 97/12, sobre la política general del Gobierno de Aragón en relación con los laboratorios de análisis para diagnóstico clínico del Salud. 3756

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta Aragonesista, interpela

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sr. Oliván Bellosta, contesta

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica

Interpelación núm. 105/12, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de discapacidad. 3761

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, interpela

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sr. Oliván Bellosta, contesta

— La diputada Sra. Luquin Cabello replica

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica

Interpelación núm. 111/12, relativa a la racionalización del empleo público. . . . 3766

— La diputada Sra. Fernández Abadía, del G.P. Socialista, interpela

— El consejero de Hacienda y Administración Pública, Sr. Saz Casado, contesta

— La diputada Sra. Fernández Abadía replica

— El consejero Sr. Saz Casado duplica

Interpelación núm. 112/12, relativa a crecimientos turísticos y, más en concreto, en turismo rural. 3771

— El diputado Sr. García Madrigal, del G.P. Socialista, interpela

— El consejero de Economía y Empleo, Sr. Bono Ríos, contesta

— El diputado Sr. García Madrigal replica

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica

Pregunta núm. 2869/12, relativa al nuevo edificio de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. . . 3775

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. Socialista, pregunta

— La consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, Sra. Serrat Moré, contesta

— La diputada Sra. Pérez Esteban replica

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica

Pregunta núm. 2973/12, relativa al coste de su decisión de cerrar los sábados las bibliotecas de la Diputación General de Aragón y, entre ellas, la Biblioteca de Aragón. 3776

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta Aragonesista, pregunta

— La consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, Sra. Serrat Moré, contesta

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica

Pregunta núm. 2968/12, relativa a las medidas de apoyo al sector del calzado de la comarca del Aranda. 3777

— El diputado Sr. García Madrigal, del G.P. Socialista, pregunta

— El consejero de Economía y Empleo, Sr. Bono Ríos, contesta

— El diputado Sr. García Madrigal replica

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica

Pregunta núm. 2976/12, relativa al abastecimiento de agua a la comarca de Cariñena. 3778

— El diputado Sr. Vicente Barra, del G.P. Socialista, pregunta

— El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, contesta

— El diputado Sr. Vicente Barra replica

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica

Pregunta núm. 3027/12, relativa a las personas de las que prevé prescindir el Gobierno de Aragón en Sarga en 2013. . 3780

— El diputado Sr. Laplana Buetas, del G.P. Socialista, pregunta

— El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, contesta

— El diputado Sr. Laplana Buetas replica

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica

Pregunta núm. 2980/12, relativa a las graves consecuencias del drástico recorte, casi el 90%, de las ayudas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales a la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón.. 3781

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta Aragonesista, pregunta

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sr. Oliván Bellosta, contesta

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica

Pregunta núm. 2981/12, relativa a la convocatoria para contratar servicios presenciales de intérpretes de lengua de signos.. 3782

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta Aragonesista, pregunta

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sr. Oliván Bellosta, contesta

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica

Pregunta núm. 3010/12, relativa al mapa sanitario de Azuara y Belchite.. . 3783

— El diputado Sr. Vicente Barra, del G.P. Socialista, pregunta

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sr. Oliván Bellosta, contesta

— El diputado Sr. Vicente Barra replica

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica

Pregunta núm. 3024/12, relativa a la reestructuración del personal a partir de la fusión de Sodemasa y SIRASA. . . 3784

— El diputado Sr. Laplana Buetas, del G.P. Socialista, pregunta

— El consejero de Presidencia y Justicia, Sr. Bermúdez de Castro Mur, contesta

— El diputado Sr. Laplana Buetas replica

— El consejero Sr. Bermúdez de Castro Mur duplica

El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños por favor.

Comienza la sesión *[a las nueve horas y treinta minutos]*.

Primer punto del orden del día: lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones plenarias de la Cámara celebradas los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2012, que entiendo que son aprobadas por asentimiento de la Cámara.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: debate y votación del dictamen de la Comisión de Educación, Universidad, Cultura y Deporte sobre el proyecto de ley de la autoridad del profesorado en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra un miembro de la Comisión de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por tiempo de diez minutos, que va a intervenir..., sí, puede intervenir, señora Ferrando. Diez minutos.

Dictamen de la Comisión de Educación, Universidad, Cultura y Deporte sobre el proyecto de ley de la autoridad del profesorado en la Comunidad Autónoma de Aragón.

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias, presidente.

Señorías, buenos días a todos.

Este es sin duda un día importante para los profesores y maestros de esta comunidad autónoma, y lo es porque hoy, aquí, se va a votar un proyecto de ley que ampara uno de los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución, el derecho a la educación, al desarrollo de la personalidad humana desde el respeto a los principios democráticos de la convivencia y desde el respeto también a los derechos y libertades fundamentales.

Abordamos en esta sesión plenaria una de las leyes que sin lugar a dudas va a aportar un serio y decidido apoyo a nuestro sistema educativo, porque respalda el pilar fundamental sobre el que descansa la educación, es decir, el profesorado.

Supone para mí un honor presentar el informe del trabajo realizado por la ponencia encargada de estudiar este proyecto de ley de autoridad del profesor en la Comunidad Autónoma de Aragón, iniciativa calificada y admitida el 22 de febrero de este año.

El proyecto de ley fue presentado en esta Cámara el pasado 27 de abril por la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte como un instrumento para solucionar eficazmente determinados problemas de convivencia de los que adolecen los centros docentes. Fue presentado también para abrir nuevos espacios a la protección real del profesorado y reconocer, reforzar y prestigiar la figura del profesor.

Las tres enmiendas a la totalidad de los grupos que integran la oposición fueron debatidas y rechazadas en la sesión plenaria del pasado 10 de mayo, y en cuanto a las enmiendas parciales, éstas pasaron a estudiarse en la ponencia encargada ad hoc y que se constituyó el pasado 1 de junio. Integrada por don Adolfo Barrena, en representación de Izquierda Unida de Aragón; por don Gregorio Briz, en representación de Chunta; por doña María Teresa Pérez, por el PSOE; doña María Herrero, por el PAR, y por quien les habla, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la ponencia se ha reunido en tres sesiones y ha contado con el valioso asesoramiento de los servicios jurídicos de esta Cámara, representados por la letrada doña Olga Herraiz.

El trabajo de la ponencia ha versado sobre las sesenta y cuatro enmiendas parciales presentadas a este proyecto de ley: treinta y tres del Grupo Parlamentario Socialista, trece del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista y dieciocho de Izquierda Unida de Aragón. Respecto al contenido de las mismas, cuarenta y cuatro se referían al articulado; tres, a las disposiciones adicionales; una, a la creación de una disposición transitoria; catorce, a la exposición de motivos, y dos, al título de la ley.

De las cuarenta y cuatro enmiendas al articulado, la número diecisiete fue retirada, y de un total de diez aprobadas, cinco del PSOE y otras cinco de Chunta, es decir, casi un 25%, cuatro de ellas lo fueron a partir de la elaboración de un texto transaccional.

Las tres enmiendas a las disposiciones adicionales fueron rechazadas, aunque sí se aprobó la cuarenta y ocho, del PSOE, que contemplaba la creación de una disposición transitoria.

En cuanto a las catorce enmiendas presentadas a la exposición de motivos, retirada la número sesenta y dos, se aprobaron tres del PSOE, una de ellas, la cincuenta y cuatro, tras la redacción de un texto transaccional.

El informe de la ponencia se llevó a la Comisión de Educación, Universidad, Cultura y Deporte el pasado 30 de noviembre, y el dictamen de la misma es el que hoy traemos a esta Cámara. Se mantienen vivos toda una serie de votos particulares y enmiendas de los Grupos Socialista, de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida de Aragón, que van a ser objeto de debate y votación.

Como coordinadora de esta ponencia, quiero agradecer el trabajo realizado por los representantes de todos los grupos parlamentarios, por cuantas aportaciones se han hecho eco de su voluntad para mejorar el texto y, fundamentalmente, por el clima de cordialidad en el que se ha desarrollado todas las sesiones. Y agradezco, como no puede ser de otra manera, el trabajo, el apoyo y la especial dedicación de la letrada doña Olga Herraiz, porque gracias a su labor meticulosa ha sido posible acomodar este proyecto de ley a la normativa, a la redacción técnica y al oportuno ordenamiento de sus contenidos.

Este es el resumen del trabajo realizado. Queda, pues, presentado para su debate y votación.

Muchas gracias, señor presidente. *[Aplausos.]*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.

Pasamos a continuación a la defensa conjunta de los votos particulares formulados y de las enmiendas mantenidas en este proyecto de ley durante un tiempo de diez minutos por cada grupo parlamentario.

Empezamos por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Va a intervenir el diputado señor Briz por tiempo de diez minutos.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Estamos ante la aprobación de una ley que Chunta Aragonesista siente discrepar con el Grupo Popular, con la portavoz señora Ferrando, porque creemos que este día no es importante para los docentes. Esta ley de autoridad pensamos que es innecesaria, no prioritaria, irrelevante y, más todavía, un fraude de ilusión, porque van a crear una ilusión ilusoria entre los docentes, porque no va a cambiar nada con respecto a su situación de seguridad en las aulas. Por tanto, creemos que lo único que hacen es llevarnos de nuevo a algo que les gusta mucho al Partido Popular y es un sistema jerárquico y yo no diría de autoridad, sino autoritario y, quizá, rancio educativamente, donde la tarima se erradicó hace mucho tiempo y volvemos efectivamente a ella.

Miren, señorías, nosotros creemos que el carácter de autoridad pública ya está recogido en las leyes, la protección está reconocida en la legislación vigente, y no es necesario este planteamiento ni esta ley. Creemos que es más importante hacer otras cosas, como hemos enmendado en este proyecto de ley, que hemos enmendado de forma —entendemos— sensata y constructiva para mejorar ciertas cosas, y lo que nos interesaba fundamentalmente es el papel del profesorado, la valoración social, y eso se hace con recursos y con medios, no quitando la paga extraordinaria de este mes. Lógicamente, ese es el principio de la valoración social: el prestigio de la figura del profesor, no a través de leyes caducas, sino a través de planteamientos constructivos y, seguramente, distintos a los que se plantean aquí.

Esta ley no va a subsanar las carencias del sistema educativo y, además, le digo, señora consejera, como hago siempre, que usted se va a meter en un berenjenal increíble, y se lo digo con todo el cariño del mundo, se va a judicializar la vida educativa, porque la presunción de veracidad en los tiempos que corren, los padres no la van a asimilar con facilidad y, si no, al tiempo, y como ahora hay tasas jurídicas o judiciales, esto va a ser divertido, a ver cómo se hace esto para determinadas familias; en todo caso, será disuasorio. Yo ya le aviso con tiempo para que luego no me diga que esto no iba a ser así.

Tenemos un decreto de derechos, la Carta de Derechos y Deberes, aprobada hace muy poco tiempo, que era una buena herramienta para conciliar la convivencia en los centros, y ustedes han pensado que es mejor hacer esta ley de autoridad.

Nosotros hemos presentado lógicamente en nuestras enmiendas, que pasaré a explicar ahora, unos planteamientos distintos, porque creemos que hacen falta más recursos, no recortar plantillas, no recortar programas, no recortar instalaciones, y eso significa pérdida de la consideración social. Queremos, lógicamente, que haya más medios y no tanto una autoridad como la autoridad que se consigue a través del prestigio de la ejecución profesional diaria, con una calidad y un respeto suficiente. Eso es lo que planteamos desde Chunta Aragonesista.

Nosotros ya planteamos la enmienda a la totalidad, y ahora, en este trámite parlamentario, hemos presentado una serie de enmiendas que me gustaría pasar a referir.

Han sido rechazadas algunas enmiendas, otras han sido aceptadas, porque creíamos que, en un ejercicio de coherencia y de responsabilidad, había que intentar mejorar algunas cuestiones de este texto porque pueden tener una efectividad negativa a la hora de su aplicación.

Nosotros, por supuesto, en una de las enmiendas fundamentales, dijimos que había que suprimir la autoridad pública, porque ya existe, porque no es necesario y, por lo tanto, nos parecía innecesario.

Decíamos también en algunas de estas enmiendas que había que mejorar o plantear una serie de medidas para mejorar la convivencia escolar. Eso sí que es importante, la prevención en la convivencia.

También decíamos en nuestras enmiendas que había que apoyar y reconocer la función docente.

Todas estas se rechazaron.

También dijimos que en la convivencia de los centros tienen que participar los sectores educativos y decíamos que habrá que inculcar, que habrá que potenciar en los centros una serie de valores que erradiquen definitivamente la violencia de género, la xenofobia y otros valores negativos que ahora se están desarrollando en las aulas.

Y, por supuesto, como he dicho hace un momento, habría que desarrollar la carta de derechos y deberes de los centros aprobada en 2011, como acabo de decir. Esa era una de nuestras enmiendas importantes.

Y en la enmienda siete dijimos que había que eliminar un referente de autoridad. Eso lo tenemos muy claro y constantemente hemos presentado esta enmienda de eliminación de autoridad.

Pero hay una enmienda que me parece constructiva en la que decíamos que había que dar la dotación a los centros públicos de medios materiales y personales suficientes y adecuados para el desarrollo de una labor educativa de calidad. Eso contribuye a la creación de autoridad del profesorado, medios materiales y personales. Y se está haciendo justo lo contrario. Esta enmienda no se admitió.

También volvíamos en la enmienda catorce a lo mismo: medios materiales necesarios para el desarrollo adecuado del ejercicio de la labor educativa y docente. No se aceptó tampoco.

Seguimos diciendo que la autoridad es reconocida ya por la legislación vigente y, por lo tanto, no era necesario. Volvíamos a insistir constantemente en nuestras enmiendas.

Y dijimos sobre el artículo 6, en una de nuestras enmiendas, que habría que suprimir la presunción de veracidad. ¡Cuidado con esto! Y les habla alguien que ha hecho expedientes disciplinarios en los centros, muchos, y sé lo que ocurre con esto, y no es vanidad, es simplemente experiencia epistemológica. Cuidado con la presunción de veracidad, señora consejera, se lo digo aquí en la tribuna con tiempo, cuidado con la presunción de veracidad. El tiempo lo dirá. Dijimos que había que acabar con la presunción de veracidad. El profesor no puede tener la verdad porque sí, ¡eso es un exceso!, y yo creo que es antidemocrático. Habrá que ver quién tiene la razón, porque no siempre el profesor tiene la razón. Y no está bien que se diga esto, parece que no sea popular, pero es cierto, habrá que com-

probar eso en el expediente y en el desarrollo. Pero la presunción de veracidad no se admitió tampoco.

Y, además, dijimos en el artículo 7, que habría que suprimir una cosa que nos parece que roza el autoritarismo y algunas otras cuestiones, yo creo que trasnochadas: el incumplimiento del deber de colaboración por parte de quien sea requerido para ello, por quien tenga la condición de autoridad, sistema casi, casi, yo diría que anticuado. Si usted no viene aquí a colaborar, se sanciona. ¡Ojo, vamos a ver! Hay situaciones familiares, situaciones profesionales, cada profesor es un mundo, cada alumno es otro, bueno, vamos a ver. Pues, aquí, ustedes, incumpliendo del deber de colaboración, sanción. También dijimos que eso había que quitarlo.

Y luego hay otra cosa que decíamos también de suprimir, la adicional primera, donde se habla de los centros docentes privados. Hay una contradicción, porque el artículo 8 dice, por un lado, que «los centros públicos y privados tendrán un plan de convivencia de acuerdo con las normas del departamento», pero luego, en la adicional primera, dice que «los centros privados tendrán autonomía para establecer sus normas de organización». O una cosa o la otra. Por lo tanto, también lo hemos enmendado.

Y es cierto también que se aprobó alguna enmienda, sobre todo, alguna que nos parece importante, en la que decíamos que el centro sea un ámbito de convivencia, de tolerancia, de pluralismo y de formación de valores democráticos. Por supuesto, este es el concepto que habrá que desarrollar.

Y luego, en el artículo 8, nos parecía muy importante, desde el punto de vista de la convivencia, que hubiese un protocolo de mediación preventivo. Eso nos parecía importante, y así lo planteamos y así se aceptó. Yo creo que esto puede ayudar mucho a no acabar en un problema mayor en los centros: protocolos de mediación.

Y, además, también planteábamos —fue aceptada esta enmienda— que los centros que lo soliciten podrán recibir apoyo formativo en estrategias de canalización y resolución de conflictos. También prevención, formación, para evitar los problemas que tiene, a veces, la convivencia en los centros.

Y luego, había otra cosa que nos preocupaba, yo creo que de forma importante y significativa, y era que cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito en el artículo 10, o falta, deberían de comunicarlo al Ministerio fiscal. Y esto, también tengo la experiencia de que me ha sucedido. Y, a veces, cuando hablas con el fiscal, la situación es compleja. Por eso, entendimos que no puede ser responsabilidad de los directores o directoras, sino que tiene que ser responsabilidad de la Administración, la comunicación al Ministerio fiscal, por la gravedad de los hechos. Esa enmienda también la presentamos y creemos que contribuye positivamente a la mejora del texto.

Es verdad que mantuvimos algunos votos particulares —con esto, termino—, porque creíamos que eran enmiendas, algunas formales, que no aportaban excesivamente nada al texto, y una de ellas, que presentó el Partido Socialista, porque mantenía en la enmienda veinte el concepto de autoridad y nos parecía que eso no era lo más propicio para el texto que nosotros defendíamos.

En todo caso —termino señorías—, creo que no es un buen día para los docentes, sino que es un día rutinario, vulgar, que harán sus exámenes y sus evaluaciones en los centros y que, seguramente, muchos de ellos ni se enterarán de que hemos aprobado, porque se va a aprobar con el voto del Partido Popular y del Partido Aragonés, una ley de autoridad del profesorado.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.

Pasamos, a continuación, al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Va a intervenir su portavoz, el señor Barrena, por tiempo de diez minutos.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor presidente.

Señorías.

Yo creo que todavía esta Cámara está a tiempo de evitar la aberración jurídica, legal, constitucional y democrática que se va a producir si se aprueba esta ley denominada «de autoridad del profesorado».

Empezaré por discrepar con la señora Ferrando, que yo creía que, hasta ahora, había actuado como portavoz de la ponencia, no como portavoz del Partido Popular. Pero su intervención ha sido en calidad de portavoz del Partido Popular, defendiendo las bondades de la ley del Partido Popular y del Partido Aragonés y proclamando que hoy es un gran día para el profesorado aragonés. Yo pienso que a partir de ahí, para que el profesorado aragonés, pero también toda la comunidad educativa, consideren que este es un gran día, lo que deben hacer es retirar esta ley y anunciar que van a dotar suficientemente los presupuestos para que haya los necesarios equipamientos, que van a dotar los presupuestos para no atracarles la paga extraordinaria a los trabajadores y trabajaras del sector educativo, que van a recuperar los programas que mejoran clarísimamente la calidad del servicio educativo y, por lo tanto, mejoran claramente la relación, que van a anunciar que se oponen a esa cacicada franquista que es la ley Wert que va a venir rematando lo que hoy van ustedes a aprobar aquí, si no cambian de opinión, y que van a empezar a darles al profesorado, al alumnado y a las familias las suficientes becas y ayudas para que no haya elementos de discriminación y para recuperar esa parte que tiene que tener el servicio educativo público de redistribución y de reequilibrio en lo personal y en lo social.

Por lo tanto, yo espero que para que de verdad puedan decir los profesores y profesoras que hoy es un gran día, luego, en la intervención del Partido Popular y del Partido Aragonés, les den esa noticia y no que les digan que desde hoy lo que consideran el PAR y el PP, que es fundamental en el servicio público educativo, es haberle dado más autoridad al profesor o la profesora, cuando le están recortando medios, le están recortando inversiones, cuando están empobreciendo el servicio público y cuando están apostando descaradamente por la enseñanza privada concertada y, de paso, por la enseñanza religiosa.

Miren ustedes, para reconocer al profesor o profesora como factor esencial de la calidad educativa no hace falta una ley que tiene clarísimas connotaciones fascistas de Estado totalitario. Díganme, si no, como se interpreta que el alumno o alumna, por aquello de que

esta ley decide que el profesor o profesora siempre tiene razón, va a estar obligado u obligada el niño o la niña incluso a pedir perdón si se ha equivocado, si va mal vestido, si ha tenido algo que el profesor o profesora considere comportamiento inadecuado. Dígannos qué es eso en el hecho educativo.

Y ustedes lo elevan a la categoría incluso de que tiene razón siempre el profesor o profesora, y a partir de ahí, la posibilidad que le queda al niño o la niña, al padre o la madre, que no están de acuerdo a acabar en el juzgado. Claro, por eso han subido las tasas, para recaudar más, ¿no?, incluso por problemas que se podrían resolver, como se están resolviendo, con los planes de convivencia y no con la porra y el pito, no el del sereno.

Dígannos si no es fascista y totalitario establecer en una ley que se le puede recabar al profesor para que pida..., y entonces, la familia tiene obligación de darlo, datos personales, que son los que el centro pueda considerar necesarios. Esos datos, ¿cuáles van a ser? ¿En función de su etnia, del color, del nivel económico, de la ideología de sus padres y madres, datos sanitarios, si tiene expediente, de qué tipo? Eso se llama tener un fichero policial. Y encima, ustedes preservan el totalitarismo obligando a las familias a prestar su colaboración, si no, con sanción, pero encima rizan más el rizo y dicen que si la familia no colabora, por la cual la sancionan, las instituciones públicas les darán los datos que hayan querido pedir. ¡Eso es inconstitucional! Ya les aviso que esto acabará en el Constitucional si ustedes siguen en esto.

Porque hay algo que no pueden tocar, todavía, y son los derechos y libertades que en este país se han conseguido después de cuarenta años negros de dictadura. Y uno tiene derecho incluso, fíjese, a la protección de datos. Y no pueden ustedes coger por la vía de la gatera y romper ese planteamiento.

Cometen ustedes con esta ley otra cosa de todo punto…, lo voy a dejar en una inseguridad jurídica tremenda, y es considerar que por el arte de uno de los artículos de esta ley, el profesorado de la enseñanza privada, que no es funcionario y, por lo tanto, no tiene la capacidad de ser nombrado autoridad pública, según esta ley, ustedes dicen que sí. Y, hombre, me habrán oído defender siempre la capacidad de autogobierno y la capacidad de tomar decisiones en este Parlamento, pero siempre en el marco de lo que se puede y no se puede hacer. Y ustedes no pueden saltarse principios básicos y fundamentales, y ustedes no pueden considerar en todo el sistema educativo aragonés, en función del criterio jerárquico, autoritario, retrogrado y profundamente conservador, que la relación en el hecho educativo se basa en el principio jerárquico y en el principio de la autoridad. Eso es lo que tampoco pueden hacer, señorías.

Les hemos planteado alternativas. Primero, les hemos pedido que retiraran la ley, porque es innecesaria, además. La propia Fiscalía General del Estado ya reconoce la característica de autoridad pública al profesorado. No hace falta otra cosa, señorías. Lo que hace falta es lo que a través de las enmiendas les hemos planteado. Y les hemos planteado, de verdad, dotar al sistema educativo aragonés de un marco claro de relación, de un marco claro de convivencia, que apueste por la mediación, no por la sanción, que cuente con apoyos suficientes para tratar esos problemas que, evidentemente, se dan, relacionados no con el hecho educativo solo, sino con el hecho social, y saben ustedes que las políticas que están desarrollando están obligando a la ciudadanía a soportar condiciones, a soportar penurias y, por lo tanto, a tener dificultades. Y esas dificultades, ni en la escuela ni en la calle se resuelven con la policía, ni con la sanción.

Las dificultades se resuelven con políticas sociales. Y en el tema del que estamos hablando, señorías, se resuelven y garantizan con algo que ustedes han quitado, y son unas ratios adecuadas, no masificadas, es la posibilidad de programas de atención a la diversidad, a las necesidades culturales, a las necesidades educativas, a las necesidades sociales. Es facilitar programas de integración, es facilitar programas de acogida, es posibilitar desdobles y refuerzos, es posibilitar que en las escuelas, en los institutos, en los colegios, además de aprender que dos y dos son cuatro, se aprenda también lo que es una relación en una sociedad que nos gustaría —lo defenderemos— que fuera democrática, pero también ustedes, con esta ley, están atentando contra la calidad democrática de la sociedad en la cual vivimos.

Señorías, insisto, estamos a tiempo de evitar la vergüenza que va a suponer que esto se apruebe hoy en esta Cámara.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.

Pasamos, a continuación, al Grupo Parlamentario Socialista. La señora Pérez puede intervenir por tiempo también de diez minutos.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presidente.

El pasado mes de diciembre se debatía, además, ya en periodo de vacaciones navideñas, aprisa y corriendo, diría yo, y hoy entendemos por qué se hacía con tantísima prisa, porque este Gobierno ocultaba sus intenciones o, mejor dicho, aunque se podía vislumbrar cuál era la intención y el propósito del Partido Popular con la educación, todavía no se había materializado. Se debatía, como digo, el informe de la ley de autoridad del profesorado en el Consejo Escolar de Aragón, un informe que fue aprobado en aquel momento por la mayoría de los miembros, que confiaron en la buena voluntad de un Gobierno que resonaba todavía desde la oposición a ecos de aquellos discursos grandilocuentes que prometían grandes mejoras, inversiones y avances en nuestra educación. Por eso, en diciembre del 2011 fue aprobado, aun contando con algún voto en contra y alguna abstención, fundamentalmente porque justificaban que no era necesario legislar en esta materia, puesto que se contaba ya con un instrumento, la Carta de derechos y deberes en la convivencia de los centros docentes aragoneses, que había sido, además, un ejemplo de esfuerzo, de compromiso, de participación, así como de consenso por el resultado obtenido. Todo el mundo se identificaba claramente con esa herramienta y con su utilidad.

Les voy a reconocer y les voy a confesar que la primera vez que oí hablar de la autoridad del profesorado, allá por el año 2009, en la Comunidad de Madrid, me parecía un sueño, una ocurrencia traída al siglo XXI

que dibujaba en mi imaginario interior una escuela en blanco y negro propia del *Florido Pensil*, aquella obra de teatro que hace ya unos años recorrió los teatros de nuestro país. Lo reconozco, lo confieso, esa fue mi sensación cuando oí hablar a la señora Aguirre de semejante ocurrencia. No me podría imaginar —lo digo sinceramente— que tres años después estuviésemos debatiendo esto en esta Cámara. Me entristece enormemente y lo reconozco: para mí no es un día grande, señora Ferrando, para mí y le aseguro que tampoco para los profesores que precisamente hoy, en un día de movilizaciones a nivel nacional de la escuela pública, en defensa de una escuela pública de calidad, están manifestándose por el resto del país.

Ya mostramos cuál era nuestra posición cuando conocimos la intención de este Gobierno: nuestro rechazo absoluto a esta ley por varios motivos, pero sobre todo, por uno, porque no es necesaria y no resuelve ninguno de los problemas. Más bien al contrario, como suele hacer este Gobierno cuando legisla o cuando actúa, que genera y generará más problemas. Y así sucede donde ya se ha impuesto.

Por cierto, es curioso observar cuán diligente es este Gobierno para imponer ese manual ideológico claro, manual extendido por todo el país, que vemos cómo, poco a poco, se va imponiendo en aquellas comunidades autónomas que, fruto de las últimas elecciones, han ido gobernando importando el modelo de aquellas comunidades autónomas que son sus referentes.

Nos tendrán que decir qué es lo que ha resuelto la Ley de autoridad en la enseñanza madrileña, nos lo tendrán que decir, porque nosotros, al menos por la información que tenemos, creemos que más que resolver ha creado más conflictos.

El 10 de mayo se debatieron tres enmiendas de devolución, que fueron rechazadas por la mayoría parlamentaria de esta Cámara, por el Partido Popular y el Partido Aragonés, y a partir de ahí, se abrió el trabajo de ponencia hasta llegar al día de hoy. Y la verdad es que hicimos todos un ejercicio de esfuerzo y de compromiso por intentar modificar la intención inicial del Gobierno. Y podría reproducir el mismo discurso que el 10 de mayo, puesto que de las treinta y tres enmiendas presentadas por este grupo, tan solo cinco han sido admitidas y solo en cuestiones formales.

El texto que hoy se somete a votación es, lamentablemente, en esencia, aquel que pedíamos su retirada y lo pedimos por convicción, por responsabilidad y por respeto. Por respecto al colectivo al que va dirigido esta ley, un colectivo, el profesorado, que no se merece el trato denigrante que está recibiendo de sus gobiernos, del Gobierno autonómico y del Gobierno central; en un momento en el que son objeto de los mayores recortes salariales, laborales y sociales en la historia democrática; en un momento en el que se les desprotege, se les desmantela de sus derechos, de sus recursos, de sus servicios, de las mejoras, asuntos estos que sí hacen sentirse fuerte con autoridad, con legitimidad, y que ustedes, parece ser que lo que no son capaces de asegurar en el ejecutivo, en sus políticas, lo imponen en el legislativo y colgándoles exclusivamente una chapa de autoridad. Por cierto, por respeto también al profesorado, porque esta ley se ha hecho al margen de ellos; esta ley no lleva ni una sola coma del profesorado, de las aportaciones del profesorado. Es algo que también caracteriza al Partido Popular.

El apoyo y el reconocimiento al profesorado que tanto dicen no se consigue reconociendo su autoridad por ley, sino disminuyendo la ratio en las aulas, respetando a sus representantes, no sometiéndoles a un cuestionamiento constante, impulsando una política de estabilidad y convocando oposiciones, con infraestructuras en condiciones, con el respeto a la autonomía y al horario del profesorado, facilitando y propiciando su formación permanente. Eso es el reconocimiento social del profesorado y lo que desde la política tienen que ustedes impulsar.

Esta ley es un sarcasmo y una provocación en toda regla, con más de mil profesores menos en este curso, con una subida estrepitosa de alumnos en las aulas, con una reducción de más de un 40% de su formación, con unos presupuestos, un proyecto de presupuestos para el año 2013 que nos conduce a un sistema educativo, a un escenario de hace más de treinta años, con un recorte de más de dos mil profesores, con masificación en las aulas, eliminación de formación. Un sarcasmo, señorías, de quien es la única causante de sus males y sus desvelos, quien está provocando una situación insostenible, pero técnicamente insostenible por falta de medios, moralmente, les quiera compensar reconociéndolos como autoridad.

La falta de respeto que este Gobierno está demostrando con los profesores quieren penalizarla si viene de parte de los alumnos o de las familias.

¿Se sienten realmente, señora consejera, con autoridad para exigir lo que ustedes no hacen?

No están dando un buen ejemplo. Quien cuestiona, quien ataca, quien agrede, quien vulnera los derechos y la dignidad del profesorado no son los alumnos ni las familias, sino este Gobierno, el Partido Popular y sus dirigentes.

Nuestras enmiendas se basaban en tres principios fundamentalmente: una educación en valores y en principios democráticos que garanticen la convivencia en el centro a través de la comunicación, del diálogo, pero ya vemos cuál es su propuesta en aras a ese avance en esa profundización en principios democráticos, la eliminación de la educación para la ciudadanía y de la sustituta y volver de nuevo a esa religión, a ese uniformismo que ustedes tanto critican, pero que es lo único que hacen.

Como segundo principio, la participación, la participación de la comunidad educativa para construir, para llegar a resolver los problemas, para hacer partícipes a las familias de lo que pasa en los centros. También vemos cuál es su política en materia de participación, rompiendo absolutamente la interlocución con los mayores representantes o con las representaciones más importantes del sector educativo, o eliminando las ayudas, las subvenciones para actividades y para colaborar.

Y en tercer lugar, como principio, la mediación como herramienta de resolución de conflictos y los planes de convivencia como marco general de funcionamiento.

Esas eran las líneas maestras y esas eran las líneas rojas de nuestras enmiendas que, evidentemente, el Partido Popular y el Partido Aragonés no han aceptado. No hemos tenido suerte.

Lamentamos, como digo, lamentamos profundamente que hoy, día 13 de diciembre, día nacional de movilización en la escuela por la defensa de una escuela en igualdad de condiciones y una escuela pública de calidad, vaya a protagonizar, vayamos a protagonizar en este Parlamento un ejercicio de hipocresía y de cinismo político, materializando que con la aprobación de esta ley por el Partido Popular y por el Partido Aragonés se demuestre que este Gobierno es juez y verdugo al mismo tiempo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.

Pasamos, a continuación, al turno en contra.

La señora Herrero, por tiempo de diez minutos, puede intervenir por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señor presidente.

Yo tengo que decir que no me alegra nada que se apruebe esta ley con los votos favorables del Partido Popular y del Partido Aragonés y ya está, después de escuchar los discursos de los otros tres partidos de la oposición, no me alegra nada. Pero tengo una sensación, y es que yo les preguntaría, no sé, me gustaría saberlo, si es que lo tienen claro, si ustedes, a lo largo de la legislatura, piensan apoyar alguna de las leyes, alguno de los proyectos de ley que vengan del Gobierno. Porque la sensación que yo tengo es que no, desde luego, hasta ahora. Ojalá me equivoque y ojalá en un futuro no sea así. *[Rumores.]* Hasta ahora, tengo la sensación de que no es así, ¿no?

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Es así y, al menos, y en esta ley, por la experiencia que yo tengo, desde luego, me parece que sus enmiendas, pues, en algunos casos, son más bien excusas para mantener su posición contraria a esta ley.

Una ley que cuando ustedes saben bien que en los principios, cuando se habló de esta ley, los agentes sociales, la comunidad educativa, estuvo a favor mayoritariamente y tuvo una buena acogida este anteproyecto de ley. ¿Qué ha pasado después? Porque resulta que tiene una buena acogida, que yo sé de buena tinta de muchos profesores que están en el aula, a pie de aula cada día, que leyeron el documento y que les pareció bien. Indudablemente, claro que también harían algún apunte sobre cosas, como en todas las leyes, que se pueden mejorar, que se pueden cambiar o que, quizás, podrían enmendarse. Pero, en general, tuvo una buena acogida. Y a mí me da la sensación de que es que hay determinadas cuestiones, hay determinadas leyes que según de quién vienen, ¡punto!, están en contra, y esta es la actitud que están tomando. Y yo no sé, sinceramente, si esto hace mucho bien a la sociedad, que en definitiva es a quien nos debemos todos. Porque yo puedo estar de acuerdo, y claro que puede haber leyes que un grupo comparta más o menos y, bueno, tenemos experiencias de muchos tipos, pero, sinceramente, lo de las enmiendas es tremendo.

Indudablemente, las enmiendas que siguen vivas y que este grupo parlamentario no apoya, pues, no todas son iguales. En algunos casos, planteaban algunos aspectos que no son propios de esta ley, que estaríamos hablando de otra ley o del desarrollo de la una ley posterior. Y tiene toda la lógica que no las admitamos. Pero en otros casos, es que venían a hablar de algo que nada tenía que ver con la ley. Pero les voy a decir: hay muchos casos, que me los he apuntado, uno por uno, y si quieren lo puedo decir, pero fácilmente lo pueden ver y lo verán en el resultado de la votación de los artículos, que hay artículos de esta ley y párrafos de esta ley que no han sido enmendados por los grupos o por algunos grupos y después esos grupos han votado a favor de esas enmiendas, enmiendas incluso de supresión. O sea, un grupo parlamentario presenta una enmienda para suprimir un artículo, otro grupo parlamentario no ha enmendado ese artículo porque le ha parecido bien, porque, si no, lo hubiera enmendado, y luego resulta que vota a favor la enmienda de supresión. ¿Eso es incoherencia o no es incoherencia? ¿Eso es estar en contra por estar en contra o no es estar en contra por estar en contra? O no admitir algunas transacciones que, sinceramente, eran transacciones totalmente constructivas, generosas, manteniendo al cien por cien vivo el espíritu y la intención de esa enmienda, y simplemente por cambiar una cuestión formal de darle una mejor redacción o de situarla en otro sitio de la ley, no lo han querido admitir. Es decir, una actitud totalmente contraria a que les admitan transacciones e incluso yo creo que hasta que les admitan enmiendas, que es que como que, bueno, ahí ponemos las enmiendas, porque así tenemos nuestra razón formal para estar en contra.

Pero es que ustedes estaban en contra desde el principio y de cualquier manera, cuando los colectivos a quienes se les presentó este anteproyecto no lo acogieron así. Sinceramente, a mí me parece que tendríamos todos, por supuesto, todos, tendríamos que hacer un esfuerzo…, el Gobierno también, quizás, de poder mejorar esos cauces de participación para ver si así podemos llegar a más acuerdos con todos los grupos, pero los demás grupos también de hacer un esfuerzo por llegar a acuerdos a favor de la mayoría.

Esta ley no le hace mal a nadie y, en todo caso, creo que aporta aspectos positivos, sinceramente, yo creo que lo hace así. Que, seguramente, habrá también algunos aspectos mejorables que pueden suscitarnos interrogantes, pues, claro que sí. Eso es normal, pero en una ley tampoco se puede prever absolutamente todo y tampoco es fácil que sea cien por cien a gusto de todos. Eso es así. Pero yo creo que el objeto de la ley, que es reconocer la autoridad pública del profesor y fomentar la consideración y el respeto del profesorado, sinceramente, creo que es un objeto, aparte de legítimo, yo creo que compartido ampliamente por la sociedad y, desde luego, por la comunidad educativa y por el profesorado, entiendo que también.

Claro que no hay que confundir autoridad con poder, es que no tiene nada que ver. Poder y autoridad no tienen nada que ver, y es más, dentro de la autoridad, incluso podríamos hablar, cuando hablamos de la autoridad de los profesores, de la autoridad cultural o de la autoridad pedagógica, que tampoco es lo mismo. Si quieren, entramos en ese debate, pero no es de eso de lo que a ustedes les ha interesado hablar en la tramitación de esta ley. No es de eso ni mucho menos.

Y a la vista está que en las intervenciones de los tres grupos parlamentarios han hablado un poco de la ley, pero la mayor parte del tiempo la han utilizado para hablar de otras cuestiones relacionadas con la educación, pero, desde luego, no con el objeto de esta ley, que además es muy clara, muy breve y muy sintética, y me parece que no dice nada de todas esas cosas que han criticado desde la tribuna y durante los diez minutos de que disponían.

Hace referencia la ley también al Decreto 73/2011, de la carta de derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa y las bases de normas de convivencia. A mí me parece que es importante que se hable de este decreto también en la ley y así lo hace, y que, desde luego, no podemos confundir una cosa con otra. Nosotros le planteamos eso a la consejera en su momento y lo hemos dicho también en la ponencia, porque, indudablemente, que haya una ley no significa que se invalide ese decreto o el contenido de ese decreto o de esa carta de derechos y deberes y de esas normas de convivencia, que a mí me parece que fueron positivas y que tuvieron también un proceso participativo y que nosotros pensamos que hay muchos de esos aspectos que van a seguir funcionando y que tienen que seguir funcionando y que en el desarrollo de esta ley, hay que hacerlos suyos también.

Y se sigue aquí hablando de un panorama que es que, de verdad, de una visión catastrofista de la educación y de la realidad que, sinceramente, creo que no nos lleva a ningún sitio y que no es verdad, y que no son verdad muchas de las cosas, y que esa visión no es cierta. ¿Qué haya cosas mejorables? Claro. ¿Qué hay cosas por las que estamos pasando un mal momento y que se han tomado medidas que a nosotros nos gustaría que fuesen lo más coyunturales posibles, porque creemos que, desde luego, tienen sus efectos, pueden tener sus efectos negativos en la calidad del sistema, etcétera, etcétera? Sí, es verdad. Y creemos que tenemos que salir de esta y que tenemos que cambiar determinadas cuestiones. Pero siguen aquí enfrentándonos con el eterno debate de la pública y la privada, que si claro, que si todos los profesores, que si los de la pública, que si los de la concertada. Lo queramos o no, el 25% del alumnado de esta comunidad autónoma está escolarizado en centros concertados, y el 20% de los centros son concertados. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es su propuesta? Si ustedes, mañana, estuvieran…, especialmente, el señor Barrena, que con eso, yo creo que ha consumido cinco minutos de su tiempo hablando de eso… ¿Qué haría usted mañana si tuviese mayoría absoluta? Me pregunto yo. ¿Qué haría, cuál es su modelo? ¿Cerraría esos centros?

Estamos hablando de tratar en igualdad de condiciones a todos los alumnos, a los alumnos, que son un 25% los que van a los centros concertados, a todos los alumnos, con independencia de que vayan a centros concertados o a centros privados. Y a nosotros, eso nos parece que eso es sumamente progresista, que tiene el principio de equidad sumamente claro y que ustedes deberían compartirlo también.

Por tanto, señor presidente, termino, nuestra posición es contraria a las enmiendas que siguen estando vivas, que no cambiamos el voto a ninguna de ellas, y apoyaremos esta ley, que, quizás, no es la mejor de las leyes, pero que creemos que no hace mal a nadie y que puede, en algunos casos, aportar un punto de vista o dar un paso adelante en positivo en esta cuestión.

Y, desde luego, cuando hablamos del problema de la disciplina, el problema de la disciplina escolar no está en la escuela, y de eso, si quieren, podemos hablar largo y tendido en otra ocasión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.

Pasamos al Grupo Parlamentario del Partido Popular. La señora Ferrando, por tiempo de diez minutos, puede intervenir.

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias, señor presidente.

Señorías.

Habida cuenta de que el criterio contrario a este proyecto de ley ya se demostró, ya se manifestó a través de las tres enmiendas a la totalidad presentadas respectivamente por los tres grupos de la oposición, pues, no es de extrañar que lo que aún se mantiene vivo pretenda, por un lado, desvirtuar el espíritu y el objetivo esencial de la ley y, por otro, intente superar injustificadamente su ámbito de aplicación.

Lamento que los portavoces del Partido Socialista, de Chunta y de Izquierda Unida de Aragón hayan ido torticera y demagógicamente por derroteros absolutamente ajenos a lo que hoy aquí se está debatiendo. Lamento también que los informes objetivos de la OCDE, el informe PISA, el Defensor del Profesor, los observatorios del funcionamiento del sistema educativo o que los datos aportados por la propia comunidad educativa, por el Consejo Escolar del Estado, por el Consejo Escolar de Aragón, el Justicia de Aragón, diferentes sindicatos, las familias y un buen número de sentencias judiciales que avisan de la urgente necesidad de erradicar el desorden y la falta de respeto en las aulas, insisto, lamento profundamente que todo ese clamor social no signifique para ustedes absolutamente nada.

Y, finalmente, lamento que en su injustificado afán por sacarle el rédito electoral a cualquier discurso, sigan mezclando churras con merinas en lugar, señora Pérez, de subir a esta tribuna a explicar con valentía por qué este Gobierno se ha visto obligado a incrementar ratios hasta donde permite la LOE, claro, y ustedes también lo hicieron. Por qué ha tenido que ampliar el horario lectivo del profesorado, por qué no se pueden mejorar las infraestructuras educativas o dotar a los centros de más plantillas y, en definitiva, señora Pérez, por qué el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón tienen que tomar medidas que abominan tomar. Sea valiente, sea valiente y suba aquí a reconocer que son ustedes los últimos responsables de tantas penurias y de tantos recortes, que entraron en tal espiral de despilfarro que hoy todos, españoles y aragoneses, debemos responder a las deudas que ustedes dejaron y que han sido sus modelos educativos los que nos han llevado al estrepitoso fracaso de nuestros alumnos y, de paso, al descrédito de nuestros docentes. *[Aplausos.]*

Intuyo, señora Pérez, que carecen ustedes del coraje suficiente para admitir todos y cada uno de sus errores y que van a seguir anclados, contra viento y marea, en magnificar las bonanzas de su desafortunada concepción de la enseñanza.

Aun así, les ruego a todos que presten mucha atención a lo que les voy a leer y reproducir literalmente: «Ley de autoridad del profesorado. Suena bien, ¿verdad? De esto vamos a hablar ahora, no de la escuela pública, no de la escuela concertada, no de la educación en general, sino del proyecto de ley de autoridad del profesorado. ¿La ley es necesaria? Sí. ¿La ley puede ayudar a los profesores? Sí. Es necesaria porque los profesores necesitan saber que tienen el respaldo de las Administraciones Públicas. Necesitan sentirse protegidos y suficientemente dignificados en su tarea».

Pero continúa el texto. «¿En qué avanza este proyecto de ley? Desde el punto de vista jurídico, en la presunción de veracidad. También creo que la ley va a ser una especie de muro o de freno para aquellos que consideran que el dinero de sus impuestos presupone tener a los profesores a su servicio o creen que todo vale».

Continúo leyendo: «La defensa de la escuela pública no entra en guerra con la escuela privada concertada porque es complementaria a la primera. De hecho, la LOE lo dice bien claro: «Todos los centros sostenidos con fondos públicos serán iguales en derechos y deberes». Y si compartimos los deberes, es necesario que también compartamos el derecho a la protección jurídica».

Aquí termina este texto que les quería leer y que pronunció el pasado 25 de febrero de 2011 una homóloga suya, señora Pérez, la señora Ortega Martínez, portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista durante el debate y votación de la ley de autoridad del profesorado en el Parlamento de La Rioja, diputada a la que quiero agradecer su sensata intervención, porque me va a permitir no abundar en determinados argumentos.

Señor Briz, para su tranquilidad, le diré que esta ley concisa, directa…

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: ... y responsable no es otra cosa que la respuesta del Gobierno de Aragón a los frecuentes casos de acoso y a las presiones sufridas por un buen número de maestros y profesores. Es una ley que a nivel autonómico, únicamente pretende —a nivel jurídico, también— complementar la insuficiente respuesta del Código Penal, que únicamente contempla la violencia de alta intensidad.

Le voy a tranquilizar todavía más, señor Briz. Léase y léanse todos, por favor, el punto 14 de la exposición de motivos y el punto 2 del artículo 124 del anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad educativa, donde, textualmente, se expresa: «En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan señalar o aportar los propios alumnos».

Pero por si el amparo de esta futura ley orgánica les parece todavía un argumento insuficiente, añadiré algunos datos más.

Como saben, el sindicato independiente ANPE puso en marcha en 2005 un servicio nacional, el Defensor de Profesor, para atender de manera gratuita, de manera inmediata y, por supuesto, confidencial, a cuantos docentes fueran víctimas de conflictividad o de violencia en las aulas. En Aragón, este servicio ha registrado un 64% de llamadas de profesores de secundaria, un 22% de llamadas de profesores de educación primaria, un 9% de llamadas de profesores de ciclos formativos y ¡ojito al dato!, un más que alarmante 6% de llamadas de maestros de infantil, hasta ahí ha llegado la falta de respeto en las aulas. En términos generales, casi el 45% de las denuncias se derivaban de problemas a la hora de dar clase. Según el mismo sindicato, el ambiente en las aulas ha mejorado notoriamente en aquellas comunidades autónomas en las que se ha aprobado una ley o un decreto para defender la autoridad del profesorado. Los datos son tozudos, señorías, y en estas comunidades autónomas las bajas laborales han pasado de un 14 a un 10%, los estados de ansiedad entre el profesorado se han reducido dos puntos y las depresiones han caído de un 19% a un 13%.

Es muy triste, señorías, que la consecuencia de tantos años de desgobierno, de todo vale y de colegueo nos obliguen a recuperar la consideración de los maestros y de los profesores a base de decretos y leyes. Pero más triste es todavía que los autores de tales desmanes educativos escondan la cabeza debajo del ala mientras otros arreglan sus desperfectos.

Este grupo parlamentario está firmemente convencido de que esta ley beneficiará a la comunidad educativa, fundamentalmente, a los alumnos, porque proteger jurídicamente al profesorado es esencial para desarrollar plenamente el derecho a la educación, que no es otro que el derecho a aprender, por supuesto, pero también el derecho a enseñar. Esta ley es un instrumento más hacia una educación de calidad, es la lógica respuesta de un Gobierno responsable al compromiso de la presidenta de Aragón de atender una demanda social. Es un paso decido hacia una educación mejor, una educación que devuelva cada sector a su sitio.

En definitiva, es un avance más hacia una educación que desde el respeto, la responsabilidad y el esfuerzo llegue a ser, ahora más que nunca, nuestro principal motor de desarrollo.

Muchas gracias. *[Aplausos.]*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.

Señorías, vamos a comenzar la votación.

Ocupen sus escaños, por favor.

Señorías, empezamos con la votación conjunta de los artículo 2 y 10 bis, disposiciones adicionales segunda, segunda bis, segunda ter, disposición derogatoria única, disposición finales primera y segunda y rubrica de los capítulo I y III del proyecto de ley. Señorías, comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, treinta y seis; en contra veintiocho. Quedan aprobadas las disposiciones citadas.**

Pasamos al artículo 1, que corresponde a votación de los votos particulares y las enmiendas mantenidas… Artículo primero, enmiendas, en votación también conjunta, enmiendas números 1, 2 y 3, de los tres grupos parlamentarios, de Chunta Aragonesista, Izquierda

Unida y Socialista. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, veintiocho; en contra, treinta y seis. Quedan rechazadas.**

Y votamos al artículo 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y tres: a favor, treinta y seis; en contra, veintisiete. Queda aprobado.**

Y pasamos al artículo 3. Votos particulares de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida frente a la enmienda número 6, de Chunta Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos sesenta y uno: a favor, cuatro; en contra, cincuenta y seis. Quedan rechazados.**

Enmiendas números 4, 5, 7 y 8, también correspondientes al artículo 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, veintiocho; en contra, treinta y cuatro. Quedan rechazadas.**

Y votamos el artículo 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, treinta y cinco; en contra, veintiocho. Queda aprobado el artículo 3.**

Y pasamos al artículo 4. Votos particulares de Izquierda Unida frente a las enmiendas 10 y 13, del Grupo Socialista, y 12, de Chunta Aragonesista, y frente al texto transaccional aprobado con la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Socialista. Votación conjunta. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, veinticinco; en contra, treinta y nueve. Quedan rechazados.**

Y votamos las enmiendas números 9, 14 y 15. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y dos: a favor, veinticinco; en contra, treinta y cuatro. Quedan rechazadas.**

Y votamos la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, veintiuno; en contra, treinta y seis; siete abstenciones. Queda rechazada la enmienda.**

Y votamos el artículo 4. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, treinta y seis; en contra, veintiocho. Queda aprobado el artículo 4.**

Y pasamos al artículo 5. Votos particulares de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida frente a la enmienda 20, del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, veintiocho; en contra, treinta y seis. Quedan rechazados.**

Y votamos las enmiendas 18 y 19. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, ninguno. Vamos a volver a votar. Estamos votando las enmiendas 18 y 19. Señorías, comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y tres: a favor, veintisiete; en contra, treinta y cinco.**

Votamos las enmiendas números 21 y 22, del Grupo Parlamentario Socialista, también votación conjunta. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y tres: a favor, veinticuatro; en contra, treinta y cinco; cuatro abstenciones. Quedan rechazadas.**

Y votamos el artículo 5. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, treinta y seis; en contra, veintiocho. Queda aprobado el artículo 5.**

Y pasamos al artículo 6, enmiendas 23 y 24. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y tres: a favor, veintiséis; en contra, treinta y siete. Quedan rechazadas.**

Volvemos a votar la 23 y la 24 a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, veintiocho; en contra treinta y seis. Quedan rechazadas.**

Y votamos la enmienda número 25. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, veintiuno; en contra, treinta y seis; siete abstenciones.**

Y votamos el artículo 6. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y tres: a favor, treinta y tres; en contra, veintiocho. Queda aprobado.**

Y pasamos al artículo 7. Enmiendas números 26, 27 y 28. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y tres: a favor, veintisiete; en contra, treinta y seis. Quedan rechazadas.**

Y votamos el artículo 7. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, treinta y cinco; en contra, veintiocho. Queda aprobado el artículo 7.**

Y pasamos a la rúbrica del capítulo II, la enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Socialista que votamos. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, veinticuatro; en contra, treinta y seis; cuatro abstenciones. Queda rechazado.**

Y votamos la rúbrica del capítulo II. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y tres: a favor, treinta y cinco; en contra, veintiocho. Queda aprobada la rúbrica.**

Y pasamos al artículo 8. Votos particulares de los Grupos Parlamentarios Socialista e Izquierda Unida frente a la enmienda 32, de Chunta Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, cuatro; en contra, cincuenta y cinco. Queda rechazada.**

Voto particular del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón frente al texto transaccional aprobado con la enmienda número 33. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, veinticinco; en contra, treinta y siete. Queda rechazado.**

Y votamos las enmiendas números 30 y 31. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, veintiocho; en contra, treinta y cuatro. Quedan rechazadas.**

Y votamos el artículo 8. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y tres: a favor, treinta y tres; en contra, veintiocho. Queda aprobado el artículo 8.**

Y pasamos al artículo 9, la enmienda número 34, de Izquierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y dos: a favor, siete; en contra, treinta y uno; veinte abstenciones. Queda rechazada.**

Y votamos la enmienda 35, del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y dos: a favor, veinticuatro; en contra, treinta y dos. Queda rechazada.**

Y votamos el artículo 9. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, treinta y cinco; en contra, veintiocho. Queda aprobado el artículo 9.**

Y pasamos a la enmienda número 36, que propone introducir un artículo 9 bis nuevo. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y tres: a favor, veintisiete; en contra, treinta y seis. Queda rechazada.**

Y pasamos al artículo 10, enmiendas 37 y 38. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, veintisiete; en contra, treinta y cinco. Quedan rechazadas.**

Y votamos el artículo 10. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, treinta y seis; en contra, veintiocho. Queda aprobado el artículo 10.**

Y pasamos a las enmiendas números 40, 41, 43 y 44. Votación conjunta. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, veintiocho; en contra, treinta seis. Quedan rechazadas.**

Y votamos la disposición adicional. Primero, la enmienda número 45. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, veintiocho; en contra, treinta y seis. Queda rechazada la enmienda.**

Y votamos la disposición adicional primera. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, treinta y cuatro; en contra, veintiocho. Se aprueba la disposición adicional primera.**

Y votamos la enmienda número 46, que propone una disposición adicional nueva. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, veintisiete; en contra, treinta y cuatro. Queda rechazada la enmienda.**

Y votamos la enmienda número 47, que también propone una disposición adicional nueva. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, veinticuatro; en contra, treinta y seis; cuatro abstenciones.**

Y pasamos a la exposición de motivos. Votos particulares de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida frente a las enmienda 51 y 55, del Grupo Socialista y frente al texto transaccional aprobado con la enmienda número 54. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, veintiocho; en contra, treinta y seis. Quedan rechazados.**

Y votamos las enmiendas números 49, 59 y 60 y 52, 56 a 58 y 61. Votación conjunta. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, veintiocho; en contra, treinta y seis. Quedan rechazadas.**

Y votamos la enmienda número 50. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, siete; en contra, treinta y cinco; veintiuna abstenciones. Queda rechazada la enmienda.**

Y votamos la número 53. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta: a favor, seis; en contra, treinta y cuatro, y diecinueve abstenciones. Queda rechazada la enmienda.**

Y pasamos a la votación de la exposición de motivos. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro. A favor, treinta y seis; en contra, veintiocho. Se aprueba la exposición de motivos.**

Título de la ley, enmienda número 63, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, veintiocho; en contra, treinta y seis. Queda rechazada.**

Y votamos la enmienda 64, del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, veintiuno; en contra, treinta y seis; siete abstenciones. Es desestimada.**

Y votamos el título de la ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, treinta y seis; en contra, veintiocho. Se aprueba el título de la ley.**

Y pasamos al turno de explicación de voto.

Señor Barrena, puede intervenir.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señorías, hemos votado a favor de todas y cada una de las enmiendas que se habían planteado, excepto algunas en las que nos hemos abstenido porque no iban en la dirección que nosotros pensamos. No hemos votado a favor absolutamente nada, ni siquiera el título, y lo hemos hecho porque, ciertamente, no podemos apoyar una ley que nos presenta el Gobierno, que ya sé que el Gobierno, con esto, le quiere dar la presunción de veracidad al profesorado, pero según la portavoz del Partido Aragonés, el Gobierno de la comunidad autónoma también tiene presunción de que lo hace todo bien. Yo le devuelvo la perogrullada: ¿cuántas leyes y propuestas de la oposición va a aprobar el Gobierno? Entonces, nos cambiamos luego la respuesta cuando usted lo considere.

Y sobre el planteamiento que ha hecho la portavoz del Partido Popular de que esto era lo urgente y de que esto era lo necesario, mire, hay miles y miles de profesores, profesoras, alumnos, alumnas, padres, madres, manifestándose diariamente —hoy tienen ustedes otra, hoy tienen ustedes otra—, reclamando —bueno, y en toda España, evidentemente—, clamando contra la ley esa que se defiende con ardor de toro bravo y clamando contra las medidas que ustedes están planteando. Y le puedo asegurar que en ninguna de ellas he visto ninguna petición de más autoridad para el profesorado, en ninguna. Sí que veo menos recortes, menos masificación de aulas, más presupuestos, que cobren la paga del verano el profesorado interino, que no cierren programas… De eso, sí que veo, y mire por dónde, el partido que gobierna aquí, los dos partidos que gobiernan aquí, de pronto dicen que lo que todo el mundo está pidiendo en la comunidad educativa es una gorra y una porra. Pues, mire usted, no. Les están pidiendo otra cosa. Otra cosa es que ustedes vivan en su nube, vivan en su burbuja, no atiendan lo que

de verdad reclama la ciudadanía y sigan empeñados en que lo hacen todo bien. Pues, bueno, sigan ustedes así, pero el gran problema es que están haciendo el hoyo tan grande que cuando consigamos sacarles de ahí, pues, va a haber que trabajar mucho más para recuperarlo. Háganselo mirar, ¿eh?, por el camino que van.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.

Señor Briz, puede intervenir.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señorías, no se ha podido evitar algo que era posible todavía hasta la votación, y se ha aprobado una ley que creemos que va a tener consecuencias negativas, lo hemos dicho ya.

Y me gustaría explicar que nuestro voto ha sido coherente en virtud a que era una ley que no nos parecía conveniente, aunque se aprobaran algunos temas menores, y la estructura de la ley, la ley de autoridad, de la autoridad del profesorado y la presunción de veracidad, creemos que es algo absolutamente negativo.

Y le querría decir a la portavoz del Partido Aragonés que no sé si pedir disculpas por el voto que hemos tenido. Nuestro voto suele ser coherente, riguroso y serio. No es, a lo mejor, como el de ustedes, que muchas veces es indiscriminado. Da igual quien presente las cosas, porque ustedes votan a favor siempre que le convenga a su interés partidista. Por tanto, yo creo que ustedes, lecciones pocas.

Y le voy a decir otra cosa: en la democracia, cuando un partido político presenta una enmienda, otros partidos políticos que creen que el texto mejora pueden aprobar, lógicamente y de forma lícita, esa enmienda. Por lo tanto, no entiendo porque dice que es incoherente que votemos una enmienda de otro partido si mejora ese texto. No quiero dar lecciones, pero es el aeiou de la democracia en este momento.

Y le quiero decir a la portavoz del Partido Popular que no les hemos llamado a ustedes, al Partido Popular, ni torticero, ni demagógico, ni ninguna cosa que se le parezca. Hemos hablado de argumentos educativos y políticos, y me gustaría que centrasen en ese terreno los debates, porque cuando ustedes utilizan el lenguaje, se ve exactamente lo que piensan.

Ha hablado de «desorden en las aulas». Esto no es Beirut. «Desorden en las aulas», pero cuidado con el lenguaje.

Y ha seguido hablando de que esto va a ser disuasorio. No se puede educar con amenazas. Esta ley será una amenaza para los alumnos y profesores, alumnos y profesores, porque algún profesor no se va a querer meter en según qué situaciones seguramente.

Y mire, yo, señora Ferrando, le emplazo a lo siguiente: dentro de un año, en las futuras Navidades, quiero, si es posible, que usted traiga la mejoría en convivencia escolar y en problemas que se han erradicado con esta ley de autoridad. Le emplazo al año que viene para que nos diga en qué ha mejorado todo esto, pero con sinceridad, con un informe serio. Le emplazo aquí en esta tribuna para que lo hagan. A ver si esta ley, realmente, lo que creemos es que va a conseguir la judicialización, un modelo jerárquico, autoritario, rancio y, como les digo a ustedes, yo he tropezado muchas veces en la tarima, pero gracias que se quitó. Ahora, ustedes la vuelven a poner, aunque sea de forma metafórica.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.

Señora Herrero, ¿va a intervenir? No lo va a hacer.

Señora Pérez, puede intervenir.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Hemos votado en contra porque consideramos esta ley innecesaria, improcedente e inoportuna.

Para empezar, señora Ferrando, hacía usted referencia a la Ley de autoridad de La Rioja. Igual, si hubiesen traído ustedes ese texto en lugar de copiar, de hacer un *copyright* de la de Madrid, que tantos daños está causando a la educación y a la educación pública, en particular, igual habrían tenido alguna otra posición de otro grupo y más acercamiento. Pero ustedes han ido al extremo, como están haciendo últimamente. Digo que es innecesaria porque ya se reconoce la autoridad en las distintas normativas que tenemos.

Y lamentaba la señora Herrero esa visión catastrofista que dice que tienen los grupos de la oposición de la educación. A nosotros nos preocupa enormemente la visión catastrofista, casi delictiva, diría yo, que ustedes tienen de las aulas aragonesas y, por ende, de nuestros jóvenes. Nos preocupa mucho. Y de la excepción, evidentemente, hacen la norma, y eso es muy peligroso legislando.

Nos parece improcedente porque lo que se va a producir con esta ley es que se va a judicializar la vida de los centros, y creo que los principios inspiradores que deben de tener en toda la normativa debe ser la convivencia, debe ser el pacto, debe ser el diálogo, que esta ley no lo refleja. E inoportuna porque con la que está cayendo, con un recorte de más un 14% en educación no universitaria, que ustedes van a infringir en este presupuesto si no se remedia… Por cierto, señora Ferrando, responderé a la pregunta que me hacía en la tribuna. ¿Sabe por qué ustedes han echado a más de mil profesores, han subido la ratio, han eliminado los programas de bilingüismo, 2.0, programas de formación? Porque la ciudadanía confió en sus engaños, señora Ferrando, porque la ciudadanía confió en sus promesas, que han resultado ser engaños y mentiras y les dieron la mayoría absoluta. Exclusivamente, por eso están haciendo lo que están haciendo.

Y si la señora Rudi quiere reconocer realmente al profesorado, que empiece por ayudarlo, porque la autoridad del profesorado empieza porque su Gobierno le atienda, le apoya, le escuche y responda a sus necesidades. Y puede hacerlo rectificando los presupuestos que están presentados en esta Cámara.

Y concluyo. Nuevamente la sociedad vuelve a dar un ejemplo a la política. Hay una iniciativa en Huesca, que es «Abrazo a la educación», en la que en momentos determinados del día, alumnos, familias y profesores se abrazan y se besan en defensa de la educación. Del abrazo, al palo, que es lo que ustedes acaban de aprobar hoy, lamentando muchísimo que la sociedad vuelve a dar un ejemplo a la política y a ustedes como partido.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.

Señora Ferrando, puede intervenir.

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Señor presidente.

No tengo palabras para definir la sarta de desatinos que acaba de pronunciar la portavoz del Grupo Socialista cuando ha sido la política educativa de su partido, esa política educativa del colegueo la que nos ha conducido hasta donde estamos.

Este y no el que pretenden hacernos creer, señorías, es el inconfundible sello de un partido, el PSOE, que ha perdido definitivamente el rumbo y el oremus, que no admite más modelo educativo que el suyo, a pesar de su fracaso; que se precia de defender al cuerpo docente y después es incapaz de apoyar su prestigio mediante una ley como esta. Este es su sello, señora Pérez, el de la responsabilidad, el de la unidad de criterio, el de la firmeza. Sí, señor, la misma responsabilidad y la misma unidad de criterio que les llevó a votar a favor de esta ley en La Rioja, en contra en Galicia y ahora, en Aragón, y abstenerse en Madrid y en Valencia. En Madrid, no les parecería tan mal, que no votaron en contra, porque simplemente se abstuvieron.

En cuanto al señor Barrena, le agradezco que haya bajado el tono en su explicación de voto, porque, de verdad, vaya poniendo al día su calendario, porque su discurso es ya obsoleto, señor Barrena, y ya hace varias décadas que disfrutamos de democracia. Creo que el juego ya no le da para más.

Rectificar es de sabios y asumir la responsabilidad es de valientes. Empeñarse en algo que no funciona es de poco inteligentes y culpar a otros de los errores propios, señora Pérez, es de cobardes. Señorías, defínanse ustedes como consideren.

Muchas gracias. *[Aplausos.]*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: debate y votación de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley de urbanismo de Aragón por los Grupos Parlamentarios Aragonesista, Izquierda Unida y Socialista, respectivamente.

Para la presentación del proyecto de ley —silencio, señorías—, el consejero de Obras Públicas tiene la palabra.

Diez minutos, señor consejero.

Enmiendas a la totalidad, de devolución, presentadas al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.

El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERRERO): Gracias, presidente, y buenos días.

Buenos días, señorías.

El Gobierno de Aragón presenta a las Cortes hoy un proyecto de modificación de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. Presenta una amplia modificación de ley, una modificación legal consensuada técnicamente que pretende facilitar la gestión urbanística en Aragón. Desde esta tribuna, en diez minutos, voy a intentar sintetizar las claves de este proyecto legislativo.

¿Por qué el proyecto ha planteado una modificación de la ley y no una revisión? Señorías, cuando comparecí en el Pleno de las Cortes hace un año hablando de la política urbanística, puse de manifiesto que Aragón solo será competitivo para la implantación y desarrollo de industrias y servicios si nuestra normativa urbanística permite una gestión más ágil para asentar inversión en que sustenten actividad económica y empleo.

Por ello, la Ley de Urbanismo de Aragón es necesario modificarla para que el urbanismo sea un medio para resolver necesidades y problemas, más que una carga que reduzca la actividad económica y encarezca la vivienda. Por ello, dije en noviembre del 2011 que se debían de identificar las responsabilidades de cada uno de los actores que contribuyen al desarrollo y coordinar y simplificar los procedimientos. Esta necesidad fue puesta de manifiesto con motivaciones diferentes por las entidades locales, por los colegios profesionales, por lo propios grupos políticos con representación en esta Cámara y por el sector de la construcción desde antes de las elecciones del 2011.

Señorías, los objetivos definidos en la memoria del proyecto descritos en su parte expositiva son simplificar la regulación y la tramitación de los planes, reconducir la intervención de la Diputación General de Aragón hacia las mejoras de los instrumentos y procedimientos de planificación y la protección de los valores de interés supramunicipal, disminuir la complejidad y el exceso de intervención administrativa en los sistemas de gestión urbanística, el fomento de la rehabilitación, diferenciar el papel de la comunidad autónoma en el ámbito de las grandes ciudades y en el medio rural, limitar el intervencionismo no justificado, adaptar los requisitos de la ley a las necesidades de cada municipio y adecuar la urbanización al proceso de edificación.

Lo que se pretende es que el modelo urbanístico de cada territorio, de cada municipio se defina desde el plan general de cada municipio. El modelo urbanístico no puede planificarse desde la ley, como se obliga con la Ley 3/2009, y más en un territorio tan diverso, tan dispar como Aragón. Por ello, nuestro concepto es que debe ser cada ayuntamiento el que, a través del plan general, defina los modelos de crecimiento, la incorporación o no de terrenos al proceso urbanizador, el que defina las necesidades, las reservas, los servicios, los parámetros urbanísticos adecuados. Por ello, esta ley da más autonomía a los ayuntamientos, en contra de lo que algunos de ustedes han manifestado en la prensa antes que en estas Cortes.

Señorías, podía darles cumplido detalle del porqué de cada una de las mejores —luego lo voy a hacer—, pero me centraré en exponer las razones principales por las que el proyecto de ley es un proyecto de modificación, por lo que el proyecto está redactado con una técnica legislativa adecuada, por qué el proyecto favorece a los intereses públicos y a los ayuntamientos, por qué es un proyecto que refuerza la autonomía municipal.

Y para ello, quiero empezar rebatiendo la enmienda a la totalidad que luego va a presentar el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, que plantea este grupo. ¿Por qué se plantea una modificación de la normativa existente y no una nueva ley de urbanismo? ¿Se

trata de una renuncia al ejercicio de las competencias exclusivas da la comunidad autónoma? Para dar respuesta a esta cuestión, me permitirán que haga una pequeña reflexión del desarrollo histórico del urbanismo, pero eso sí, pasando por una cuestión prioritaria, que es el respeto a la Constitución.

La competencia en materia de urbanismo está afectada, tal y como determinó el Tribunal Constitucional en el año 1997, por la competencia exclusiva estatal recogida en los artículos 149.1.1 y 1.13 de la Constitución. Por ello, el Estado mantiene la competencia exclusiva en la regulación de las competencias básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de derechos y deberes constitucionales y en el establecimiento de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Y es que para hablar de esto, hay que saber qué concepto tenemos del urbanismo.

El urbanismo, en el primer texto normativo español, en el año cincuenta y seis, y hasta la Ley del Suelo del ochenta y seis, era el arte de hacer ciudades, el arte de hacer ciudades, sin ninguna implicación de financiación municipal, sin ninguna implicación de intento del justo reparto de las plusvalías derivadas de la recalificación urbanística. Es a partir de la ley del ochenta y seis, de la ley española del ochenta y seis, cuando se mezcla el urbanismo con los derechos y deberes de la propiedad del suelo. Y desde entonces están mezclados, desde entonces están mezclados y han generado muchísimos problemas. Ya me gustaría a mí poder volver a hacer una ley urbanística como la que intenté en la Ley 2/92, cuando era Director General de Ordenación del Territorio, que hice una ley que luego ustedes derogaron, y era una ley que hablaba de la ordenación del territorio, de la ordenación urbanística, pero no se mezclaba con el reparto del patrimonio. El propio Estatuto de Autonomía de Aragón también planteaba esto.

Por ello, sencillamente, no es posible hoy hacer una revisión global antes de que se haga una revisión global de los derechos urbanísticos que están planteados por la legislación estatal en ejecución de ese intento, intento siempre infructuoso, de repartir justamente las plusvalías derivadas de la recalificación urbanística. Hasta que este paso llegue por parte del Estado, plantear una modificación es lo posible, lo necesario, lo útil para la actividad económica y la gestión de las viviendas en Aragón. Esa es la explicación del porqué de una modificación y no una revisión, y vamos a plantear algunos de los aspectos.

La modificación simplifica, me interesa resaltar el cambio creado en la regulación de las licencias, la ejecución de obras, la distribución de competencias, la reducción de plazos, clarifica el trámite ambiental, reconduce la intervención del Gobierno de Aragón hacia la protección de los valores de interés municipal… Les puedo dar artículos de todo esto, pero en diez minutos es imposible. La Ley prevé un procedimiento de homologación para que los informes al planeamiento de desarrollo puedan ser facultativos en los municipios mejor dotados de asesoramiento urbanístico, se elimina la intervención urbanística autonómica en un montón de trámites, se clarifica la intervención de los órganos autonómicos, se suprime la intervención del Gobierno de Aragón en muchos convenios urbanísticos municipales, se garantiza el acceso a todos los ciudadanos, la ley permite e intensifica la rehabilitación desde todos los puntos de vista y utiliza una técnica de confiar en los ayuntamientos. Son los ayuntamientos los que tienen que adaptar a su territorio las cargas, las densidades, y se apuesta por que cada municipio, vistas las necesidades de ese municipio, las peculiaridades, tome decisiones a su iniciativa sobre muchas cosas.

Se ha hablado mucho estos días de cesiones de suelo. Miren ustedes, no son necesarias ni convenientes las mismas cesiones en Monzón, en Villafranca, en Valdespartera, en el Polígono de las Armas o en Aceralia. La densidad de viviendas debe de estar en proporción con cada territorio, y no es cierto que una menor densidad dé mejores resultados urbanísticos. Como saben ustedes, una menor densidad dificulta enormemente las soluciones al transporte colectivo, es totalmente incompatible con medios de transporte colectivo, es complicado.

¿Qué es mejor? Las cincuenta y tres viviendas por hectárea sobre suelo bruto de Valdespartera, las cuarenta y ocho de Arcosur, que ha habido que aumentar para hacer viable Arcosur… Por cierto, no sé para qué, además de mil quinientas, ha habido que aumentar el 10% de aprovechamiento, no sé a qué responde. ¿Son esas mejores que, por ejemplo, las noventa y cuatro viviendas del polígono Universidad? ¿O son mejores que las ciento sesenta que se propusieron en Aceralia y que, afortunadamente, no se van hacer? ¿Cuál es la mejor densidad? Pues, miren ustedes, para cada zona del territorio será distinto, como para el ensanche de Teruel son treinta y una viviendas por hectárea.

Voy a pasar rápidamente porque no me queda nada más que decirles que es muy importante el procedimiento que hemos utilizado para hacer esta ley. La elaboración ha sido la elaboración lógica, hemos hecho un documento previo, se ha hablado de ese documento previo con diecinueve instituciones, con todos los ayuntamientos de Aragón, con las principales asociaciones, grupos, colegios profesionales, y se ha trabajado exhaustivamente en el trabajo técnico de estos documentos. Se recibieron seiscientas ochenta sugerencias, se han aprobado ciento noventa y cinco acciones, y, evidentemente, este es un documento técnicamente consensuado, que ahora viene a las Cortes, viene adonde tiene que venir para ser políticamente consensuado, y ojalá lo sea.

Las críticas que ha habido de que no es un documento político, miren ustedes, es un documento técnico que a partir de hoy va a ser un documento político, pero, en cualquier caso, es un documento que facilita la gestión urbanística de Aragón.

La modificación ofrece soluciones, ofrece soluciones para los problemas que había, los problemas que había, por ejemplo, para la Armentera de Monzón, ofrece soluciones a mantener suelos industriales urbanizados con menor costo, con menores cesiones, en definitiva, esto, señorías, es lo que se pretende con la reforma planteada: resolver problemas técnicos existentes, reales, de aplicación de la ley, sentidos por todos los ayuntamientos de todos los partidos políticos, por todos los técnicos, clarificar competencias, coordinar procedimientos, dar más autonomía a los ayuntamientos, simplificar, eliminar obstáculos al desarrollo

y todo lo demás, todas las demás lecturas sobre los objetivos de esta reforma son frutos de la insaciable necesidad de algunos de oponerse a todo, sin mirar si es conveniente o no para Aragón ni para sus municipios, ni para sus habitantes.

Señorías, espero que aprueben esta ley porque es conveniente para Aragón y los aragoneses.

Muchas, gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

Pasamos a la defensa de las enmiendas a la totalidad, empezando por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Va a intervenir el diputado señor Briz por tiempo de diez minutos.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías.

Señor consejero, ustedes apelan al consenso, y espero que en esta ley lo podamos comprobar, pero, evidentemente, en un principio, nos permitirá por lo menos que tengamos una discrepancia y no por el hecho sistemático de oponernos por la oposición simplemente, sino porque hay argumentos de cierto peso, por lo menos desde nuestra perspectiva, para poder oponerse.

Yo creo que el urbanismo es un tema tan sensible por las implicaciones sociales y económicas que ha tenido en los últimos tiempos, que deberíamos ser muy cuidadosos, extremadamente cuidadosos en los planteamientos.

Yo creo que en los ayuntamientos —y usted, consejero, lo sabe igual o mejor que yo— ha habido un grave problema con el urbanismo, ha habido una especulación con el urbanismo, y cuando hemos iniciado en los ayuntamientos un plan general de urbanismo se han encendido todas las alarmas, porque todo el mundo quería saber qué ocurría con sus terrenos, hasta dónde llegaba la línea roja de urbanizable, de no urbanizable… La verdad es que yo he tenido mucho interés por el urbanismo en los últimos años y, por lo tanto, creemos que en este momento, donde en el centro del problema social están los desahucios y la mala política urbanística y de vivienda que se ha hecho en este país, y el modelo tendría que servirnos para aprender de lo que no debería de hacerse, seguramente, señor consejero, vuelven ustedes otra vez a la carga con un modelo semejante, y creemos que este proyecto de ley tiene unas características que no son las más favorables para un nuevo modelo de urbanismo y de vivienda.

Además, usted ha justificado de una manera bastante precisa por qué hacen esto como una modificación y no como una nueva ley. Bueno, es una cosa que se puede respetar, pero creemos que es una mala sistemática; un mal procedimiento, porque ha sido muy complejo tener que seguir esa modificación. Un nuevo proyecto ofrece un planteamiento más global desde el procedimiento. Aun así y todo, hemos presentado esta enmienda a la totalidad y ochenta enmiendas más, que veremos a ver si se pueden consensuar.

En definitiva, creemos que debía haber hecho un texto íntegro, pero, claro, usted también justifica a continuación que las competencias estatutarias que tenemos dependen de lo que diga normativamente el Estado respecto a las plusvalías, etcétera. Bueno, es una justificación, pero nosotros creemos que el Estatuto de Autonomía deja muy claras las competencias que Aragón tiene en urbanismo y que, desde luego, no sería necesaria seguramente una propuesta consensuada con el Estado. Siempre, luego, se podría modificar la norma al respecto de lo que ocurriese con las plusvalías.

Usted sabe que en el Estatuto de Autonomía, en el artículo 61.9, lo pone muy claro, que es un título competencial exclusivo de la comunidad autónoma, y nosotros creemos que aquí vuelve a haber otra vez una especie de seguidismo, una vuelta de tuerca a lo que sería la involución autonómica, y se lo decimos textualmente, y por eso ya no nos gusta excesivamente el modelo procedimental que plantean.

Y luego, en este proyecto de ley, nos parece que hay una deficiente regulación, y se lo voy a decir con otra palabra más clara: desregularización de la actividad edificatoria. Nos da la sensación de que hay una liberalización de aspectos peligrosos a la hora del urbanismo y creemos, además, que beneficia más al interés privado sobre el público y beneficia más el interés particular sobre el general. Y explicaremos esto o le explicamos.

Usted dice que la edificabilidad depende de dónde y cómo. Bueno, pues, no lo vemos de esta manera. En la edificabilidad, hay que poner límites a la construcción, porque, si no, se produce lo que ha ocurrido durante estos años: una cierta depredación, una cierta especulación o una especulación en carne viva. Desde luego, creemos que setenta y cinco viviendas por hectárea es algo que se debe fijar como límite en todo caso siempre y así lo vamos a decir. Porque el modelo que ustedes plantean sería, lógicamente, un modelo de congestión residencial donde se volvería a los años sesenta y setenta, donde, bueno, pues, usted lo ha dicho hace un momento, a construir viviendas. Pues, evidentemente, ese modelo no nos parece el mejor.

Y por otra parte, nos da la sensación de que se apuesta en este proyecto de ley más por la especulación de las viviendas, por el modelo que ha fracasado en España, que por los equipamientos, nos da la sensación de que aquí se va en contra de esos equipamientos, se rebajan las reservas del suelo, en zonas verdes, en zonas sanitarias, educativas, aparcamientos, deportivas. Y le voy a poner un ejemplo para que nadie se lleve a error: ustedes dicen que en sectores de uso residencial, la reserva será de dieciocho metros cuadrados por vivienda, y nosotros decimos que no, que seis metros cuadrados por habitante, y esa es la clave. Hagamos lo que ya estaba y podía funcionar mejor, porque la reserva de suelo, al final, beneficia a lo público y a los equipamientos y al servicio público.

En suelo industrial, ahí podríamos debatir y discutir, pero, lógicamente, también bajan del 14 al 8% en la reserva de suelo. Y esto, para cualquier persona que no sepa mucho de urbanismo, significa que tenemos menos suelo público para equipamiento, para hacer colegios, para hacer centros de salud, para hacer aparcamientos, para hacer pabellones deportivos. Yo voy por barrios de Zaragoza, por colegios y por barrios de nueva creación que no tienen apenas equipamientos en muchas cuestiones y, por lo tanto, eso es importante.

Y en todo caso, esta decisión que ustedes toman en este proyecto de ley significaría que algunos ayuntamientos, como el de Zaragoza, tendrían mucho suelo que no estaría en su poder para este tipo de equipamientos. Por lo tanto, nos parece que no es positivo todo esto, incluso nos da la sensación, señor consejero, que esta ley, lamentablemente, como no se podía esperar otra cosa del Partido Popular, favorece a los promotores, eliminando obligaciones a través de excepciones que perjudican al ciudadano y a la Administración Pública.

Y, bueno, nosotros hemos querido —vamos a hacerlo así— en esta enmienda a la totalidad, y vamos a plantear, lógicamente, que estamos en contra de este modelo desarrollista, que propicia la burbuja otra vez y creará un mal modelo de ciudad y que hará colmenas de nuevo, sin duda, porque sabemos qué significa la edificabilidad.

Y usted ha dicho que no perjudica la autonomía municipal. Bueno, pues, eso también es discutible, porque uno de los planteamientos que hace es que en caso de grave incumplimiento de los municipios en materia urbanística, se podrá suspender planeamiento urbanístico, y nosotros decimos que eso tendrá que ser desde las Cortes de Aragón, desde la institución que realmente representa a los ciudadanos. Cuidado con estas cosas, porque a veces se puede utilizar de una manera o de otra.

Y nosotros vemos también en temas de otro calado, dentro de este proyecto de ley, que hay cosas que no quedan absolutamente claras, y en las enmiendas lo iremos planteando: el suelo no urbanizable especial, la participación ciudadana, los plazos que se dan para algunos tipos de actuaciones, el control del patrimonio público del suelo que no sirva para pagar expropiaciones, el Consejo de Urbanismo de Aragón que creemos que tiene que desarrollar un papel importante, bueno, los plazos para suelo urbanizable, que el silencio no sea afirmativo para desarrollar determinadas actuaciones, evitar la desregularización solamente por intereses económicos, no incrementar determinados porcentajes de edificabilidad para vivienda.

Bueno, hay un rosario de cosas en este proyecto de ley, señor consejero, que si usted y los representantes del Partido Popular y el Partido Aragonés quieren, se pueden mejorar y cambiar, y, a lo mejor, con esas políticas de consenso, podemos llegar a algún punto.

Ahora bien, si la norma, con todas las bondades que ustedes quieran plantear, porque es curioso que en su intervención, señor consejero, ni habla de reservas de suelo, ni de equipamientos, o sea, ha hablado de edificabilidad de una manera que depende de la zona, y bueno, usted sabe que eso…, yo soy un lego en urbanismo, pero usted sabe que la edificabilidad es un tema tremendo, y si se desregulariza al albur de lo que decidan en cada sitio, usted sabe lo que eso puede significar.

Por lo tanto, si a quien beneficia esta norma es al interés privado, pues, lógicamente, vamos a estar en contra, y por todas estas razones que le he planteado más o menos concretas y algunas de forma más general, que precisaremos en las enmiendas cuando se desarrolle en la ponencia este proyecto de ley, pues, lógicamente, vamos a votar en contra de este proyecto de ley, y en esto consiste nuestra enmienda a la totalidad. No creemos que se pueda jugar otra vez con el futuro de muchos españoles, de crear un modelo absolutamente imposible, donde el urbanismo y la especulación salvaje se lleve por delante todo lo que es el derecho a la vivienda de muchos ciudadanos en este país, que, por supuesto, en este momento, no disfrutan de ello ni mucho menos.

Por lo tanto, señor consejero, están a tiempo de rectificar algunas cuestiones y, por lo tanto, nosotros, en principio, votaremos en contra de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, intervendrá el señor Aso por tiempo de diez minutos.

El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor presidente.

Voy a empezar diciendo que nuestro grupo, yo, personalmente, estoy seguro de que el Gobierno aprobará finalmente esta propuesta de modificación y, probablemente, cuando acabe la votación, el señor consejero, el Grupo Popular, probablemente también el Partido Aragonés, aunque tiene un papelón, estén contentos, pero yo creo que no es para sentirse orgullosos, y no es para sentirse orgullosos porque el procedimiento que ha utilizado en primer lugar el Gobierno, desde luego, nosotros consideramos que no es el adecuado, y no es el adecuado porque modificar ciento setenta y cuatro de los doscientos noventa artículos ha sido un trabajo ingente para los miembros de la oposición, para nosotros, el poder cotejar las leyes y más allá de las explicaciones someras que usted ha podido dar en relación a este hecho, nosotros creemos que solo tenía un fin, que era dificultar la labor de los grupos de la oposición en el texto legislativo y cómo iba a quedar.

He dicho de pasada la posición del Partido Aragonés, que, como socio del anterior Gobierno, aprobó una ley de la que hoy modifican ciento setenta y cuatro de los doscientos noventa artículos más las disposiciones transitorias. Antes nos han dicho a nosotros si era coherente hablar de votar un artículo que no hemos enmendado, pero es que ustedes, en este caso el Partido Aragonés, entiendo, votará a favor de una ley que aprobó recientemente y que en tres añitos, pues, modificamos ciento setenta y cuatro artículos de los que se fijaron en su momento. Por tanto, entendemos que de coherencia no nos den muchas lecciones.

Desde luego, creo —se lo decía al señor consejero— que no es una cuestión para sentirse orgulloso, porque mi percepción, la de nuestro grupo parlamentario es que esta ley tampoco durará en el tiempo, lo cual es un problema serio, y yo creo que lo que debería de haber hecho el Gobierno —se lo dije, creo que en la primera comparecencia que usted tuvo— era haber citado a los grupos de la oposición, habernos sentado todos y hablar, previamente a traer este proyecto aquí, de cuáles eran nuestras intenciones, de cuáles eran nuestras ideas y de qué podíamos aportar a la ley. Evidentemente, no nos hubiéramos puesto de acuerdo en todo, pero seguramente no hubiéramos venido aquí con ciento setenta y cuatro artículos modificados y con un texto que hemos tenido que leer con la ley actual, con las modificaciones, en unos, en una palabra, en

otros, era un párrafo entero, lo cual, desde luego, dificulta, como he dicho antes, enormemente el acuerdo.

Lo ha dicho usted: usted dice que, juntó a diversos sectores, y me parece bien que lo hiciese, que desde luego es positivo, pero no a todos los ayuntamientos, como usted ha dicho, porque a mí me consta que hay ayuntamientos, algunos de cierto nivel y de cierta importancia en el ámbito provincial que no fueron informados, por lo menos, sus técnicos, y, desde luego, no a estos grupos, como yo he dicho.

La reforma que el Gobierno plantea dice ser necesaria porque dinamiza el sector. Nosotros creemos que no va a dinamizar el sector, porque el sector, como usted sabe, está en una profunda crisis como consecuencia de la situación de la banca, como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, como consecuencia de que, a día de hoy, no se venden viviendas. Si quieren dinamizar el sector, no acaben, ni ustedes ni el Gobierno central, con las ayudas del ARI, y ya verá como hay muchísimos autónomos trabajando, electricistas, albañiles, fontaneros, trabajando en la rehabilitación de viviendas.

Ustedes no están buscando dinamizar el sector y, desde luego, nosotros consideramos que esa no es su principal apuesta. Dicen que quieren reducir el intervencionismo, pero lo que creo que hacen es reducir la participación en el urbanismo, y de ahí que puedan acabar o que pretendan acabar con el Consejo de Urbanismo de Aragón. Y desde luego la ley dice que hay un exceso de suelo clasificado, pero bien, si hay exceso de suelo clasificado, ¿por qué reducimos límites al aprovechamiento?, ¿para darles más?, ¿para quitar cesiones públicas? Nosotros creemos y, bueno, es la valoración que hacemos, que tiene un doble interés eliminar los límites en aprovechamiento privado: en primer lugar, grandes promotores fundamentalmente, a los que usted ha aludido en su intervención, en las zonas de la ciudad de Zaragoza fundamentalmente, que es, yo creo, por los que se está pensando, tienen activos de suelo, con unas densidades y unas viviendas concretas. Pues, bien, si les eliminamos esos límites, podrán tener unos activos que valgan más si les damos más viviendas, y dado que se ha devaluado el mercado de la vivienda, pues, conseguirán igualar sus activos y tendrán menos problemas.

Por otro lado, y ese es ya un problema más serio, es que, evidentemente, tendrán más viviendas para poder realizar en un futuro y volveremos, como también ha dicho el portavoz del Grupo Chunta Aragonesista, a situaciones como las que uno recuerda del señor Álvarez Cascos, ministro del Partido Popular, diciendo en sus últimos años que si un español pagaba treinta millones por un piso es porque se lo podía permitir y que la economía iba bien. Pues, bien, de aquellos polvos, estos lodos, y hoy, los pisos, en la economía española, no hay trabajador que lo pueda pagar más allá de que haya perdido su puesto de trabajo.

Señorías, esta ley acabará con algo que para nosotros es importante o pretende hacerlo, o, cuanto menos, reducir su importancia, que es el catálogo de edificaciones en los planes generales de ordenación urbana. Se nos puede llenar la boca hablando de los bienes de la Franja que pertenecen a la diócesis de Aragón y se nos puede llenar la boca de hablar de muchísimas cosas, pero la ley atenta o pretende hacerlo contra algo que para nosotros es fundamental, que los planes generales contengan catálogos de las edificaciones y de todas aquellas cuestiones necesarias para mantener la historia de nuestros lugares.

Es cierto, también se dijo por algún grupo, y usted lo ha citado, que salió en prensa, es cierto que la ley perjudica en algún extremo a los ayuntamientos, puesto que el silencio es positivo, y si al ayuntamiento se le pasa por lo que sea algo, pues, es positivo, y desde luego entendemos que la seguridad jurídica debe prevalecer. Y si el interés general fuera defender a la Administración, que representa al conjunto de la ciudadanía, no sería positivo. Es positivo porque pretende beneficiar el interés privado, no el del conjunto de la sociedad, que es el ayuntamiento. Por tanto, en ese aspecto, nosotros consideramos que la ley también va demasiado lejos.

Nosotros entendemos también que el texto, que nace de la modificación de un montón de artículos (he dicho ciento setenta y cuatro artículos), lejos de solucionar el problema de seguridad jurídica que hay en las Administraciones con las diferentes leyes urbanísticas que se han aprobado en los últimos años, pues, no lo resolverá, porque el texto no deja de ser un texto confuso, habida cuenta de que son modificaciones sobre una ley ya existente.

Desde luego, nosotros creemos que este modelo de ley atentará contra el modelo de ciudad mediterránea, del modelo de ciudad compacta por el que nosotros pensamos, por el que nosotros apostamos; no piensa en el colectivo, que es quien genera la plusvalías, y el colectivo, señorías, es el ayuntamiento, el que representa a los ciudadanos de cada localidad y, por tanto, entendemos que reducir las dotaciones de servicios, las reservas a la vivienda social, desde luego, no beneficia nada el interés general y, por tanto, el de las Administraciones Públicas, no entra en criterios de sostenibilidad ni desde luego entra en cuestiones de sostenibilidad. Esta ley no piensa, como he dicho, en el interés general, no piensa en un urbanismo social, no piensa en un urbanismo sostenible y, desde luego, no piensa en un urbanismo participativo. Como he dicho, esta ley piensa en el interés privado, en el de los grandes promotores que, desde luego, no es el interés que comparte nuestro grupo parlamentario.

Por todo ello, señorías, nuestro grupo va a pedir el voto para la propuesta que hoy planteamos de enmienda a la totalidad a la Ley de Urbanismo, indicándole al señor consejero nuestra voluntad, más allá de que entendemos que usted tiene mayoría y no saldrá adelante nuestra propuesta, de diálogo en las enmiendas que hemos presentado (ciento catorce), pero sí que le decimos que, desde luego…, a mí me tocó, y desde luego no es lo mismo hacer unas ordenanzas municipales en un ayuntamiento que hacer una legislación, lo entiendo perfectamente, pero yo hice dos ordenanzas municipales que se aprobaron por unanimidad. ¿Y sabe por qué? Porque me junté con los grupos de la oposición para poderlas redactar. Este no ha sido el caso y, desde luego, ha sido un mal comienzo para esta modificación de la ley.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Ibáñez tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista también ha presentado una enmienda a la totalidad, de devolución, de este proyecto de ley porque, señorías, este texto, este proyecto de modificación nunca se debió traer a esta Cámara. Esto no es una modificación de la ley en vigor, de la Ley 3/2009, sino que esto es una nueva ley que, como tal, se debería de haber tramitado en su caso. Lo que pasa, señor consejero, que usted se comprometió nada más tomar posesión a que iba a presentar una nueva ley de urbanismo y la realidad es que no le han dejado, el Gobierno del Partido Popular de Madrid no le ha dejado presentar su iniciativa, su propuesta de ley, y lo que nos ha traído aquí, señor consejero, una vez más, no es más que otra gran chapuza a las que usted nos tiene acostumbrados y, como decimos en la enmienda a la totalidad, una auténtica *boutade*, porque ha pretendido ser ingenioso, señor consejero, ha pretendido impresionar, pero creo que ya tendrá claro que no ha sido así.

Y mire, además de por lo que le he dicho, resulta esta norma totalmente injustificada, porque esta norma no tiene otra estrategia que la de permitir un aumento de los aprovechamientos lucrativos en el urbanismo, en detrimento del interés general. Por lo tanto, una vez más, este Gobierno antepone los intereses de los particulares, los intereses de unos pocos a los generales, y se lo voy a decir con casos concretos, se lo voy a demostrar.

Mire, el artículo 31 modifica la regularización de instalaciones y construcciones en suelo no urbanizable, lo que hará que se implanten usos en el no urbanizable, en lo conocemos como suelo rústico, usos propios del suelo urbano sencillamente por una lógica razón, por razón de costes, de inferiores costes, con lo cual, lo que plantea esta modificación, señor consejero, es que destrozado el suelo urbano y el urbanizable, vamos a especular y vamos a intentar destrozar también el rústico, el no urbanizable; en el artículo 40, que habla de las dotaciones de sistemas generales, plantean eliminar totalmente la exigencia de zonas verdes, los cinco metros cuadrados por habitante; en el artículo 42 reduce el suelo para equipamientos limitando el límite de densidad de ciento cincuenta viviendas/hectárea en suelo urbano consolidado, o el artículo 53, donde elimina la limitación de densidad de setenta y cinco viviendas hectárea en los nuevos desarrollos, señor consejero, que es algo que aparece históricamente en las leyes de urbanismo desde principios del siglo XX.

Por otra parte, con esa excusa de querer simplificar, desregular y lo que ha dicho aquí, que lo dijo también en la primera vez que habló de este tema, de intentar implantar empresas en Aragón, señor consejero, pero ¿no se da cuenta que con la ley anterior han sido cientos, miles de empresas las que se han instalado en Aragón? ¿Cómo nos puede decir ahora que usted pretende que no se instalan empresas en Aragón porque la ley urbanística no lo permite? ¿No será por una incompetencia suya y de su Gobierno el que no se haya instalado ninguna empresa en Aragón desde que ustedes gobiernan? Con esa intención que usted ha vendido de simplificar y desregular, lo que hace es darle una redacción más confusa y más difícil de interpretar, señor consejero, eso es lo que hace esta modificación, arbitrando complicados procedimientos administrativos con fines, como mínimo, poco claros, que debería de intentar explicarnos.

Se relajan preceptos de la ley actual, que pasan a ser meras recomendaciones o regulaciones subsidiarias, por lo que en lugar de facilitar la gestión a los ayuntamientos, sobre todo a los ayuntamientos pequeños, señor consejero, que somos la mayoría de Aragón, los deja absolutamente indefensos ante posibles promotores o urbanizadores, que son los únicos a los que el nuevo texto se lo pone más fácil, a los únicos que les facilita la labor esta modificación de la Ley Urbanística es a los privados, a los promotores y urbanizadores, y atenta frontalmente, señor consejero, contra la autonomía municipal, y no es que atente, la lamina. Por eso, estamos ansiosos desde el Grupo Parlamentario Socialista de ver la interpretación que desde el Partido Aragonés se hace de una norma que aprobaron conjuntamente con nosotros hace apenas tres años, que va contra la autonomía municipal y que va contra la propia autonomía de Aragón, porque hemos creído que se ha quedado bastante claro —lo ha dicho el consejero y lo hemos dicho desde todos los grupos de la oposición— que no hay un proyecto de ley urbanística en Aragón y se plantea esta *boutade*, porque el Gobierno central, el Partido Popular, no le deja ser autónomo al Gobierno de Aragón. Vamos a ver hasta dónde llega la coherencia del Grupo Aragonés en ese sentido y hasta dónde está dispuesto a apoyar este atropello.

El Gobierno de Aragón, a partir de la aprobación de esta modificación de ley, que esperamos que no se apruebe, puede hacer de su capa un sayo, puede hacer y deshacer en todo el territorio aragonés, cosa que con la ley actual no cabe ni siquiera en los planes y proyectos declarados de interés general.

Ustedes, señorías del Partido Popular, que en anteriores legislaturas —lógicamente, en la oposición— hacían auténticas soflamas desde esta tribuna sobre la autonomía municipal, parece ser que se les olvida esa defensa de la autonomía municipal desde el Gobierno. ¿Es consciente el Gobierno de Aragón de la realidad municipal aragonesa? ¿Es consciente el Gobierno de la debilidad de muchos municipios aragoneses, de la inmensa mayoría de ellos, tanto demográfica, administrativa y de recursos de todo tipo para hacer frente a esta ley? O peor todavía, ¿es precisamente por eso, porque el Gobierno es consciente de esa falta de capacidad técnica de la mayoría de los ayuntamientos aragoneses, por lo que ha decidido entregarle el territorio a la iniciativa privada, debilitando así todavía más a los municipios?

Porque, señor consejero, ya me dirá usted si la regulación que plantean del artículo 130 en la recepción de obras de urbanización, donde el silencio administrativo pasa de ser negativo a positivo, donde un ayuntamiento, cualquier ayuntamiento…, habrá ayuntamientos que lo podrán hacer, pero la mayoría de los ayuntamientos aragoneses no son capaces de, en tres meses, contestar justificadamente para hacerse cargo de una urbanización, y en caso de que no sea capaz de hacerlo, se tiene que tragar la urbanización esté

como esté. Ustedes cambian el silencio administrativo de sentido negativo, que es el que les interesa a los ayuntamientos, al sentido positivo, señor consejero, y eso no es apoyar a los ayuntamientos y apoyar la autonomía municipal.

O el artículo 25, que habla de la transformación, de la urbanización de suelo urbanizable no delimitado, en el que el ayuntamiento también debe resolver sobre la viabilidad o no de esa inversión, de esa ampliación que le propone un privado, debe resolver sobre su viabilidad o no, y si es negativamente, tiene que hacerlo motivadamente, y si no lo hace en el plazo de tres meses, una vez más, el promotor puede hacer aquello que ha planteado.

Lo mismo ocurre en el artículo 60, con los planes parciales de iniciativa no municipal, en lo que se vuelve a ver a los ayuntamientos totalmente incapacitados en el periodo de tiempo que les marca esta nueva norma de poder con los medios técnicos de que disponen los ayuntamientos, y como le digo, la inmensa mayoría de los ayuntamientos aragoneses van a estar totalmente indefensos ante los asuntos y los temas como los plantea la modificación de ley que ustedes nos traen aquí.

En definitiva, señorías, nos encontramos ante un texto que no plantea soluciones técnicas o son escasas las soluciones técnicas que plantea la aplicación de la ley anterior. Lo que este proyecto plantea, señor consejero, son aspiraciones ideológicas, esto es una aspiración ideológica, entiendo que suya y del Gobierno. Es una modificación de una ley que vuelve a caer en los mismos errores en los que se cayó en este país hace quince años, es una modificación que vuelve al urbanismo del señor Aznar y de la FAES, es una ley, es una modificación que lo que plantea es que todo el monte es orégano, que todo es urbanizable, que todo es susceptible de urbanizarse, filosofía falsamente liberalizadora, a nuestro juicio, y que tanto daño ha hecho a nuestro país y a su economía.

Señorías, para este grupo parlamentario, es realmente sorprendente que a estas alturas todavía haya personas que insistan en la desregulación total para resolver problemas, como si no conocieran nuestra reciente historia urbanística y los efectos tan desastrosos que ha tenido sobre nuestra sociedad. Y todavía nos sorprende más, señorías, que haya personas que para colmo tengan responsabilidades políticas que les permitan impulsar este tipo de leyes, como es usted, señor consejero, y como es la señora Rudi, presidenta de la comunidad autónoma.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.

Pasamos al turno en contra de las enmiendas.

Señor Campoy, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas gracias, presidente.

Señorías.

Señores y señoras diputados, hoy debatimos en estas Cortes las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley por el que se modifica la Ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón.

El señor consejero Fernández de Alarcón ha defendido con fundamento las razones para votar en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas. Les ha dado razones de forma y de fondo y les ha explicado, si le han querido atender, les ha razonado, si le han querido atender, y lo ha hecho de forma pormenorizada a cada grupo político, el porqué de votar en contra a las enmiendas a la totalidad y el porqué, señorías, de la necesidad, en estos momentos, de esta modificación.

Poco más puede añadir este grupo político en este sentido a la coherente exposición ya efectuada por el señor consejero. Y ya les anticipamos, para su tranquilidad, que este grupo político va a votar en contra de las tres enmiendas a la totalidad presentadas.

Señorías, el urbanismo no es una materia cualquiera, pero en este momento, en el actual contexto de crisis económica, menos. Por eso, este grupo político considera necesario, para tener un buen debate en el asunto que hoy nos debe ocupar, coger distancia, tener perspectiva, tener sosiego y, sobre todo, tener claro el contexto en el que nos movemos. Porque no nos movemos ni en el contexto del señor Aznar, ni en el noventa y nueve, ni en el 2009, nos movemos en el año 2012.

Debemos centrar el debate, por lo tanto, en la necesidad o no de la reforma y en si la reforma planteada resuelve problemas en vez de crearlos. Ese es el asunto que debemos debatir.

¿Por dónde comenzamos, señorías? ¿Es necesaria la reforma? Pues, a todas luces, sí. Si alguien en esta Cámara no tiene claro que el urbanismo desde el año 2008, año en que podríamos fijar la explosión de la burbuja inmobiliaria —y fíjense, la actual ley es del 2009—, hasta hoy ha cambiado radicalmente, que el contexto es otro totalmente diferente, es que tiene algún problema.

Si alguien en esta Cámara no tiene claro que hay que hacer algo y buscar soluciones al exceso de bolsas de suelo clasificado que existen en el mercado, a las prácticamente setecientas mil viviendas vacías con escasas posibilidades de venta que existen, es que se ha quedado en otra época o que, desde luego, no está en la actual.

Si alguien en esta Cámara no tiene claro que hay que realizar algo más que ajustes, que la actual situación socioeconómica requiere de actuaciones tremendamente urgentes, que hay que simplificar para facilitar, que hay que fomentar la rehabilitación, que hay que adaptar los requisitos de la ley a cada municipio, a cada territorio, de todo eso, de lo que nos ha hablado el señor consejero, de todo eso de lo que nos habla la reforma, si han perdido ustedes unos momentos en leerla, es que no tienen ningunas ganas de aportar soluciones a la problemática actual.

Y sobre todo, señorías, si alguien en esta Cámara no tiene totalmente claro a escasos días en que los activos tóxicos de las entidades financieras van a pasar a formar parte del llamado «banco malo», de la Sociedad de Gestión de Activos, que hay que modificar la ley, desde luego, ese alguien no está en la realidad de este momento, y si lo está, va buscando otra cosa diferente a la que este Parlamento, elegido democráticamente por ciudadanos y ciudadanas, está obligado

por lo momentos de dificultad que estamos padeciendo.

Porque, claro, uno ya llega a plantearse si para ustedes esto es un juego de suma cero. El Gobierno propone tal modificación, como es la que hoy nos ocupa, absolutamente necesaria, y ustedes se oponen; al Gobierno le gusta esto, a ustedes ni gota, y si el Gobierno está contento, como pasa hoy, porque trae una modificación de una ley absolutamente necesaria, señorías, en el contexto actual, ustedes buscan sus razones para estar en contra y, curiosamente, muy opuestos a la reforma, hasta tal punto de que han presentado los tres grupos enmiendas a la totalidad.

Pero es que además les he escuchado muy atentamente y parece que ustedes, ninguno de ustedes de los que han presentado enmiendas a la totalidad, tiene nada que ver con la problemática que existe hoy en día en relación con el urbanismo, nada que ver, solo crítica al Partido Popular. Han hablado de especulación salvaje, de plusvalías, de efectos catastróficos, de Aznar, de la FAES, y solamente ustedes, sin embargo, critican a quien responsablemente, hoy, debate aquí sobre una reforma traída a esta Cámara que consideramos absolutamente necesaria.

Y les tengo que recordar, por la seriedad del debate que hoy nos ocupa, que en Aragón, el Partido Popular dejó de gobernar en el año 1999, que ha sido otro grupo el que ha tenido responsabilidades políticas en materia de urbanismo en esta comunidad autónoma.

Y a ustedes, señores de Chunta Aragonesista, digo yo también que algo han tenido que ver con el urbanismo de Aragón. Y se lo digo de verdad y con el debido respeto, pero debo traerlo a colación del debate que hoy nos ocupa. Sin embargo, fíjense, el Gobierno presenta hoy una reforma necesaria y solamente hay críticas hacia el Gobierno. Entenderán, en estricta consecuencia, que si eligen el camino de crítica a quien propone la reforma, a lo que se deben de ver obligados mínimamente en un debate serio es a ejercitar algo de autocrítica, por lo menos, un poquito. Y a sumar, buscando soluciones, en vez de oponerse a la mayor, a la que tienen todo el derecho del mundo, faltaría más. E, insisto, se lo digo con el debido respeto y en los más estrictos términos del debate que hoy nos ocupa.

Llegados a este punto, quisiera remarcar algo, a nuestro modo de ver, tremendamente relevante. Si vamos al principio, a la metodología en la elaboración del documento de reforma de la norma urbanística, al nacimiento de la misma, vemos que se ha basado en la participación con un tremendo carácter técnico, y lo explico porque esto resultará extraño.

El primer documento se sometió a un proceso de trabajo con diecinueve entidades internas y externas al Gobierno de Aragón, participando —atiendan— los colegios profesionales de Arquitectos, Abogados e Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el Colegio de Registradores de la Propiedad, los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel, la tres diputaciones provinciales, un representante de las asociaciones de empresarios de Aragón y de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, las tres subdirecciones de Urbanismo, el Servicio de Coordinación de Planeamiento Urbanístico se la Dirección General de Urbanismo, la Dirección General de Vivienda, la Dirección General de Ordenación del Territorio, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y la Universidad de Zaragoza. Seguro que me dirán que poca participación, porque cuando no hay participación es que no hay y cuando la hay es poca. Pero toda esta participación ha habido en el debate previo de esta reforma. En resumen, todo el que tiene algo que decir en materia de urbanismo ha tenido la oportunidad de realizar aportaciones. Y esa, señorías, ha sido una de las principales novedades en la elaboración de la modificación: su alta participación técnica.

Y les digo que les resultará raro, que les resultará extraño, porque en la elaboración de la ley que hoy se pretende reformar, esto no se hizo. Pero es que además, señorías, como resultado de todo este proceso, se recibieron más de seiscientas ochenta sugerencias, que se han tomado en consideración o se han estimado total o parcialmente en más del 50%. Entre ellas, muchísimas del Ayuntamiento de Zaragoza, en las que —entiendo— están quienes hoy presentan enmiendas a la totalidad.

Por cierto, les insisto, nada de esto se hizo en la tramitación de la ley que hoy se pretende reformar.

En consecuencia, señorías, este Grupo Popular, a la vista del proyecto de ley que modifica la Ley 3/2009, objeto del presente trámite parlamentario, termina esta intervención manifestando, primero, el apoyo de este Grupo Popular a que se continúe con la tramitación parlamentaria iniciada; segundo, el rechazo contundente a todos y cada uno de los argumentos presentados en las enmiendas a la totalidad presentadas, y, por último, señorías, el apoyo firme de este grupo a los objetivos y contenidos de la reforma de la norma.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campoy.

Pasamos al turno de fijación de posiciones.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, el señor Blasco puede intervenir por tiempo de cinco minutos.

El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días.

Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, para fijar nuestra posición en relación con este proyecto de ley de modificación de la ley, y lo hacemos desde un punto de vista que a nosotros nos parece muy interesante, y es el análisis de la situación actual en la que se encuentra un sector tan importante como es el de la construcción, como es el del urbanismo. Un sector que durante muchos años ha tirado del carro cuando ha habido bonanza económica y que, indudablemente, en estos momentos, está sufriendo, seguramente, más que ningún otro sector la problemática en la que nos vemos envueltos en esta crisis económica, y, por lo tanto, entendemos que en esta situación, se deben de hacer los esfuerzos necesarios para tratar de poner sobre el papel un mapa que permita que haya una reactivación en este sector tan importante.

Porque llevamos diciendo hace tiempo que nos parecen bien las medidas de reducción del déficit, pero creemos absolutamente necesario poner las medidas necesarias y las medidas adecuadas para los distintos

sectores que les permitan reactivarse cuanto antes. No queremos, pues, dar lecciones a nadie, lo que queremos simplemente es intentar entre todos, y eso es lo que a nosotros nos gustaría, intentar entre todos que un sector que en los últimos años ha perdido uno de cada dos empleos…, mejor dicho, uno de cada dos empleos que se han perdido en el conjunto de España proceden de la construcción. Pero más aún, un sector que, según los técnicos, los especialistas, su reactivación arrastraría un número de actividades que en su conjunto alcanzarían entre el 14 y el 18% del PIB nominal total. Es decir, estamos hablando de la reactivación de un sector.

Y por eso, nosotros estimamos oportuno, desde el Partido Aragonés, que una ley que, efectivamente, se ha aprobó en el 2009, cuando la situación y el contexto económico era uno, hoy se pueda actualizar y se pueda adecuar a las necesidades y a la realidad, que no es la misma que en el 2009, y en muchas ocasiones, hemos pedido en esta misma Cámara que se actualicen leyes que hoy no responden a esa realidades. Hace poco hablábamos —es mucho más antigua, es cierto— de la ley hipotecaria. Pues, a lo mejor, no tenemos que perder tanto tiempo como con la ley hipotecaria y nos vemos en estos momentos en la necesidad de adecuar la ley a la necesidad real. Eso es lo que creemos que en estos momentos deben de hacer los gobiernos, siendo conscientes de la que está cayendo.

Porque, por otra parte, parte de la ley que se aprobó sigue manteniendo su vigor, sigue siendo eficaz en sus planteamientos. Pero, indudablemente, es necesario fijar nuevos criterio, criterios más eficaces, criterios más ágiles, criterios menos burocráticos, menos repetitivos, y, desde ese punto de vista, es desde el que el Partido Aragonés entiende positiva esta modificación de la ley.

La realidad territorial de Aragón es la que es, y no es lo mismo una ley de urbanismo que pueda dar satisfacción a una gran ciudad como Zaragoza, con setecientos cincuenta mil habitantes que a, por ejemplo, más de tres cientos ochenta pueblos de menos de doscientos cincuenta habitantes. Eso, una ley de urbanismo es muy difícil que lo pueda solucionar. O hacemos un reglamento absolutamente esperpéntico o es imposible de solucionar. Creemos que eso tendrá su solución a través de la ley de capitalidad. Pero es que además, efectivamente, a lo largo de estos años, ha habido también otros ordenamientos jurídicos a los que tenemos que adaptar la norma autonómica.

Se ha hablado aquí con mucha frecuencia en las intervenciones anteriores en relación con la autonomía municipal. Pero a la vez que se defiende la autonomía municipal, es curioso que se han oído intervenciones defendiendo el intervencionismo de la DGA, es decir, o queremos una cosa o queremos la otra, pero eso de que parte de los ayuntamientos tengan una autonomía, pero a la vez estén sujetos a una decisiones del Gobierno de Aragón, bien, tendrá que ser, pero no apuesten por una cosa y por la contraria, que nos parece que eso es un tanto contradictorio.

En este proyecto de modificación de la ley que se plantea, creemos que hay temas muy importantes: se habla de densidades, se habla de las cesiones, se habla de las reservas de viviendas que podrán satisfacer a sectores más vulnerables.

En definitiva, desde el Partido Aragonés estimamos que es oportuna esta modificación de ley, que tenemos un plazo de enmiendas ahora en la que podemos tratar sobre ellas y podemos tratar de mejorarla, pero, en cualquier caso, desde nuestro punto de vista, estamos a favor de tratar esas enmiendas parciales y, por lo tanto, votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad que se han presentado.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.

Ocupen sus escaños, señorías.

Vamos a votar las tres enmiendas a la totalidad.

Empezaremos con la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señorías, comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cinco: a favor, veintinueve; en contra, treinta y seis. Queda rechazada la enmienda.**

Y votamos la número 2, de Izquierda Unida de Aragón. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cinco: a favor, veintiocho; en contra, treinta y siete. Queda rechazada.**

Y, por último, votamos la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cinco: a favor, veintinueve; en contra, treinta y seis. Queda igualmente rechazada.**

Y pasamos al turno de explicación de voto.

Señor Aso, puede intervenir.

El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Muy brevemente.

Señor Blasco, no nos ha convencido. Ya le he dicho que tienen un papelón, porque modificar ciento sesenta y cuatro artículos de doscientos noventa, cuando ustedes lo apoyaron en plena crisis, no en un momento boyante, pues, desde luego, es un papelón y va a ser difícil que lo pueda justificar a lo largo del trámite.

Y, señor Campoy, usted sabe mucho más que yo de derecho, pero hay leyes, como usted sabe, que son atemporales. La Ley de expropiación forzosa es de 1954, y creo que han cambiado bastantes cosas desde 1954. Y la Ley de aviación civil —creo que tiene otro nombre, técnicamente— es de 1960.

Lo que nuestro grupo le estaba diciendo es que deberíamos de haber consensuado todos los grupos desde el principio, y no solamente consensuar o invitar a la participación a las asociaciones para que vaya a dar su opinión, para hacer una ley de urbanismo que sea atemporal o lo más atemporal posible. Porque, desde luego, tenemos la Ley estatal de 2007, la aragonesa que se adaptó a la estatal en el 2008, la aragonesa definitiva del 2009, hoy tenemos la del 2012, probablemente, tengamos ley estatal y, probablemente, tengamos que volver a modificar la ley aragonesa si la estatal modifica la aragonesa. Por tanto, desde luego, necesitamos urbanismo, estabilidad y seguridad jurídica.

Y finalizo diciendo que lamentamos enormemente que no haya podido salir adelante nuestra enmienda a la totalidad y la del resto de grupos, a los que agradezco su apoyo, porque desde luego nos permitiría empezar de cero para hacer una ley atemporal.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
El señor Briz puede intervenir.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

En principio, agradecer el apoyo del Partido Socialista y de Izquierda Unida a nuestra enmienda a la totalidad y lamentar que no haya prosperado, como era previsible.

Yo creo que el señor Blasco ha dado por buena esa teoría que yo he intentado plantear anteriormente del voto indiscriminado. En todo caso, ha dicho una cosa que me parece interesante y que es el meollo de la cuestión: ha hablado de lo económico, de desregularizar, de crear situaciones que lleguen a crear empleo. Eso, en urbanismo, ya sabemos lo que significa, y usted lo ha dicho bien, liberalizar. Sin darse cuenta, lo ha dicho, y ahí está la clave de la cuestión.

Y yo le preguntaría al señor Campoy, dentro de esa cortesía parlamentaria que nos une, señor Campoy, dígame usted, con toda la amabilidad que pueda, a quién beneficia esta ley, si la reducción de reservas beneficia al patrimonio público de suelo, a los ciudadanos o a quién. Y dígame también si el modelo de ciudades que se van a crear con esa edificabilidad que ustedes plantean también va a propiciar el beneficio de la ciudadanía y del patrimonio público en definitiva. Quiero que me conteste a eso. Y si usted es capaz de contestarme, pues, a lo mejor, yo empiezo a pensar de otra forma de esta ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
Señor Blasco, puede intervenir.

El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Realmente, si hubiera salido para intentar convencer a los grupos de la oposición de que votasen a favor, hubiera hablado haciéndole caso, además, a una intervención que tuvo el presidente de las Cortes al principio, hubiera hablado durante diez segundos, porque estaba convencido de que no les iba a convencer. Y como él dijo, cuando uno está convencido de eso, es mejor no hablar mucho.

Por lo tanto, mi intervención no ha sido para convencerlos, porque, además, es imposible. Partimos desde unos principios absolutamente distintos y será difícil que Izquierda Unida y el Partido Aragonés, en el concepto global, podamos estar de acuerdo. Pero, mire usted, en ningún momento he hablado de liberalización. Yo he hablado de mejora de los procedimientos administrativos, he hablado de mejorar el marco de relaciones en que la construcción y el urbanismo se pueda desarrollar en unos momentos problemáticos, he hablado de autonomía municipal, pero en ningún momento he hablado de liberalizar el suelo ni de hacer cosas raras con el suelo. He hablados simplemente de mejora de los procedimientos. Ahora, cada uno, después, entiende lo que entiende y lo lleva a su redil. Pero, en cualquier caso, desde el Partido Aragonés estamos convencidos de que solo mejorando las leyes y actualizándolas, seremos capaces de desarrollar, no este, cualquier otro de los temas.

Desde luego, no esperaba convencerles y no me siento nada frustrado.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
Señor Ibáñez, puede intervenir.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, agradecer a Chunta Aragonesista y a Izquierda Unida su voto favorable a nuestra enmienda a la totalidad, que lógicamente ya sabemos que no iba a salir.

Pero nosotros no estamos en la negación por la negación, señor Blasco, y vamos a ver si durante la tramitación de la ley en la ponencia, realmente, es cierto eso que dicen desde los grupos que apoyan al Gobierno que, realmente, les preocupa el problema y lo que quieren es buscar soluciones, porque hasta ahora, eso no ha sido así. Nadie ha dicho aquí desde el Grupo Parlamentario Socialista que no estuviera de acuerdo en que había que tomar decisiones relativas al urbanismo; desde el primer día que el consejero lo dijo en la comisión, dijimos que estábamos abiertos, pero las condiciones de la situación han cambiado. Señores que apoyan al Gobierno, con una chapuza como esta, no, con una chapuza como esta, no. El problema es que siguen negando la evidencia. Si todo el mundo está de acuerdo en lo que dicen, pero es que lo que plantean en la solución no soluciona lo que ustedes dicen que hay que solucionar. Pues, ¿no se dan cuenta? Si en lo que dicen que hay que solucionar estamos de acuerdo, pero planteen una herramienta útil para solucionar algo de lo que dicen que hay realmente de problema. Con soluciones como esta, no; con chapuzas como esta, no. Si lo han dicho ustedes mismos.

Fíjense como sería técnicamente esta ley que han tenido que ser diecinueve instituciones aragonesas, a las que solamente se les han aceptado correcciones técnicas, las que han hecho que esto tenga unos visos técnicos mínimos. Fíjense ustedes lo que salió del Gobierno de Aragón y se puso en conocimiento de esas instituciones. Si no hubiera sido por esa participación, si esto, en estos momentos, es una auténtica chapuza, entonces era totalmente infumable, señor consejero, y usted lo sabe.

Miren, lo que tenemos que hacer es —a ver si nos ponemos de acuerdo, señor Blasco, fundamentalmente, con ustedes, también con el Partido Popular—, sin que se puedan dar usos que en este momento solamente se pueden dar en el suelo urbano, a partir de ahora, eso se pueda hacer en suelo no urbanizable. Eso, ¿a quién beneficia? ¿Qué vamos a hacer, especular a partir de ahora en el suelo no urbanizable? Pues, eso es lo que plantea esta modificación.

O tendremos que ponernos de acuerdo en si los sistemas generales tengan unas dotaciones inferiores a las actuales y eso mejora en algo a los municipios y al territorio aragonés, o si es conveniente que el silencio sea positivo en lugar de negativo, teniendo en cuenta, señor Blasco, que la autonomía municipal es muy importante, sobre todo cuando se tienen medios. Quizá, el ayuntamiento de Zaragoza sí que la pueda tener. Pero, ¿por qué no es mejor que sea una ley autonómica

la que diga que la densidad tiene que ser esta en todos los sitios, que no dejar a ayuntamientos que no tienen capacidad técnica ni jurídica para defenderse ante posibles inversores, que sean ellos los que lo decidan?

Creo que los problemas los conocemos todos y creo que lo que tenemos que hacer, señorías —ahí van a encontrar al Grupo Socialista—, es intentar encontrar soluciones a los problemas, pero no, con esa excusa, intentar hacer una ley que solamente beneficia a los intereses privados y particulares.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.

Señor Campoy, puede intervenir.

El señor diputado CAMPOY MONREAL [desde el escaño]: Muchas gracias, presidente.

Señorías, necesitamos reformar, necesitamos actualizar el urbanismo para que sea acorde con el contexto actual.

A mí me da la impresión, cada vez más, que este Gobierno o este consejero, diga lo que diga, legisle lo que legisle y avance en lo que avance, a ustedes les parece siempre todo mal, porque siempre buscan una excusa para oponerse, siempre buscan una excusa para decir que no. Pero, en fin.

Y yo les contesto y yo les digo: de verdad, les digo que ya no tenemos tiempo para discutir sobre lo que está mal. Ahora toca el tiempo de adoptar las decisiones para reconducir y para solucionar los problemas. Y esta ley, este Gobierno y este consejero es lo que han hecho.

Por eso, hemos votado en contra de las tres enmiendas a la totalidad que ustedes han presentado. Porque esta ley, esta reforma de esta ley, ayuda a contextualizar, a adecuar el urbanismo al momento actual.

Muchas gracias. *[Aplausos.]*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campoy.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: debate y votación de las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.

Para la presentación del proyecto, la señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

Enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.

La señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señor presidente.

Señorías, buenos días.

Intervengo, en nombre del Gobierno de Aragón, para presentar el proyecto de ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.

Este proyecto de ley está inspirado fielmente en el artículo 7 de la Ley orgánica 5/2007, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, en el que se entiende, sin confusión posible, que las lenguas habladas en Aragón y sus modalidades lingüísticas son inequívocamente aragonesas.

La ley tiene básicamente dos objetivos: la defensa del uso y la protección, promoción y difusión de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón como mejor testimonio de nuestro patrimonio cultural, y, en segundo lugar, evitar que las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón puedan estar a merced de organismos reguladores ajenos a nuestra comunidad autónoma.

Formalmente, la ley está estructurada en un preámbulo, seis capítulos, cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

El preámbulo establece con claridad que «en Aragón, junto al castellano, se hablan lenguas y modalidades lingüísticas propias en determinadas zonas de Aragón, constituyendo estas un rico legado y un hecho singular dentro del panorama de las lenguas históricas de Europa». Y sigue diciendo este preámbulo que «estas lenguas, con sus modalidades lingüísticas configuradoras de una historia y una cultura propias, han de ser especialmente protegidas y fomentadas por la Administración aragonesa».

Su texto articulado recoge como elementos básicos los siguientes: en primer lugar, el reconocimiento de la pluralidad lingüística de Aragón y el derecho de uso a los hablantes de las lenguas y modalidades lingüísticas propias, al tiempo que garantiza que se promoverá su recuperación y enseñanza en las zonas de utilización preferente.

En segundo lugar, establece y distingue las zonas de utilización de las lenguas y modalidades lingüísticas propias en dos zonas: una zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa, propia de las áreas pirenaica y prepirenaica, con sus modalidades lingüistas, y otra zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia del área oriental, con sus modalidades lingüísticas propias, correspondiendo al Gobierno de Aragón la declaración de las zonas y municipios de utilización preferente, oídos los ayuntamientos afectados.

En tercer lugar, se crea la Académica Aragonesa de la Lengua como institución oficial competente para elaborar y determinar las normas y reglas de uso y como institución asesora en materia de lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. Esta institución, es decir, la Academia Aragonesa de la Lengua, estará formada por personas de reconocido prestigio en el ámbito de la filología, literatura y lingüística, preferiblemente, doctores y, preferiblemente, hablantes nativos, y que cuenten con una larga trayectoria en la práctica y fomento de los valores lingüísticos y literarios propios de la comunidad aragonesa.

La ley pone también especial énfasis en la difusión del patrimonio lingüístico aragonés, considerando que este está formado por el patrimonio bibliográfico y documental aragonés, así como por los usos, costumbres y demás bienes inmateriales, y que todo ello forma parte del patrimonio histórico-cultural de Aragón.

Pone, asimismo, énfasis en fomentar la investigación y documentación científica y la recogida exhaustiva de todo ello en nuevos soportes que garanticen su transmisión a las generaciones futuras y su difusión cultural.

También propone permitir en las zonas de utilización histórica predominante de lenguas y modalidades lingüísticas propias la denominación oficial de los topónimos en la lengua tradicionalmente utilizada en el territorio, y ello, sin perjuicio de lo que establezca la legislación aragonesa al respecto.

En resumen, y a modo de conclusión, yo les diría que estamos ante un proyecto de ley que faculta para todo, pero que no impone nada; que busca unir y no dividir o, dicho de otra manera, que pone el acento en lo que nos une, no en lo que nos separa. Un proyecto de ley que parte de la más fiel interpretación de nuestro Estatuto de Autonomía, que, en esta materia, dice lo que dice, y no es una casualidad que considere las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón como una parte singular y destacada de nuestro patrimonio cultural, un tesoro que es menester proteger, conservar, difundir y promover con convicción, desde la voluntariedad, sin coacción y sin imposición.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.

Para la defensa de las enmiendas a la totalidad, por tiempo de diez minutos, tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. La señora Ibeas puede intervenir por tiempo de diez minutos para defender la enmienda número 1.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor presidente.

Señora consejera, si ustedes querían proteger, si ustedes quieren entender este tesoro que tenemos en Aragón, desde luego, van por el camino absolutamente equivocado.

Hubo un tiempo aquí, en Aragón, en el que existía un consenso y ustedes lo han roto, pero además, por el momento, de forma definitiva. Hubo un tiempo en el que, aquí, estábamos de acuerdo en Aragón en la existencia de tres lenguas: del castellano, del aragonés y del catalán. Es más, no teníamos ningún problema en nombrarlas. Podíamos discrepar sobre si debía existir o no debía existir una ley, pero aquí nadie, en ese caso, se levantaba de ese consenso. Todos los grupos (el Grupo Popular, el Grupo Socialista, el Grupo Aragonés, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida), todos reconocíamos esta realidad trilingüe. Pero el consenso, señora consejera, se rompió —después de escucharle todo lo que ha dicho, hay que poner las cosas encima de la mesa con la mayor claridad posible—, se rompió por intereses electoralistas. Y el Grupo Popular y, en este caso, el Partido Popular y el Partido Aragonés, con esta reforma que ustedes plantean, están materializando una decisión que sentenciará a muerte, por ejemplo, al aragonés, que es nuestra lengua más vulnerable de las tres que tenemos aquí en Aragón.

Pero en el camino, han pasado muchas cosas, han sucedido muchas cosas que quizá conviene recordar.

Usted, señora consejera, señorías, y sobre todo los grupos que van a respaldar este proyecto, ¿recuerden la declaración de Mequinenza de 1984, suscrita bajo presidencia del don Santiago Lanzuela, del Partido Popular? ¡Reconocía el catalán como una lengua propia de Aragón!

Pero es que en el año 1993, también había consenso sobre nuestras tres lenguas, cuando el informe y la resolución del Justicia de Aragón sobre lenguas minoritarias señalaba expresamente que era sabido que existían esas tres lenguas, y las nombraba: «castellano, aragonés y catalán».

Ese consenso existía también en el dictamen de la Comisión Especial sobre Política Lingüística en Aragón, aprobado en estas Cortes, aprobado sin ningún voto en contra, ¡ninguno!, ni del Partido Popular en 1997, eso sí, con los votos a favor del Partido Aragonés, que no tenía tampoco ningún reparo en nombrar las tres lenguas: castellano, aragonés y catalán.

Y ese consenso seguía existiendo en el anteproyecto del año 2001 para una Ley de lenguas que fue elaborada desde un departamento que estaba regido por el señor Javier Callizo, del Partido Aragonés, y en ese anteproyecto aparecían nombradas las tres lenguas. Hoy, el señor Callizo ha cambiado el puesto, que es director general de Patrimonio Cultura, lo tiene usted, señora consejera, en su departamento, lo ha nombrado usted, y no sé que aires le han dado, pero al parecer, ahora, ha habido algún cambio, que desde luego no es filológico, es de otro tipo, y eso es lo que queremos centrar.

Teníamos, incluso, una Ley de Patrimonio Cultural que fue firmada bajo la Presidencia también del señor Santiago Lanzuela y que desde el año 1999 incluía una disposición final, la disposición final segunda, para que se proporcionara un marco jurídico específico con el que regular la cooficialidad del aragonés y del catalán. Esa disposición final segunda tuvo el respaldo del Partido Aragonés —lo recuerdo también aquí—, cuyo portavoz era, entonces, el señor Biel, hoy, presidente de estas Cortes.

Pues, así las cosas, señorías, se ha producido…, se produjo en un momento dado, evidentemente, una ruptura del consenso. Y esta ruptura llegó con la reforma del año 2007 del Estatuto de Autonomía, porque el Partido Aragonés y el Partido Popular dieron un giro a sus planteamientos anteriores, renegando del reconocimiento del aragonés como tal y renegando del catalán como lengua propia de Aragón.

Mi grupo parlamentario propuso entonces nombrar expresamente al aragonés y al catalán en el Estatuto. ¿Por qué? Porque queríamos darle el máximo rango a los derechos de sus hablantes. Y, sin embargo, no lo pudimos sacar adelante porque el resto de los grupos que están en esta Cámara, señorías, Partido Popular, Partido Socialista, Partido Aragonés e Izquierda Unida votaron en contra de nuestra iniciativa, de nuestra enmienda. Y salió adelante otra fórmula, una fórmula en la que no se nombraba, seguía sin nombrarse en el Estatuto de Autonomía, al aragonés y al catalán. Y así, señorías, es como nació finalmente, pues, esa Ley para el uso, la promoción y la protección de las lenguas propias de Aragón, que fue aprobada el día 17 de diciembre del año 2009, una ley que llegó a tener una vida escasa, escasa, por el poco desarrollo que ha tenido hasta el momento, pero que ya venía marcada por esa fractura que se estaba produciendo por el cambio del Partido Aragonés y del Partido Popular.

Mi grupo, saben perfectamente que participó decisivamente para que esa ley fuera realidad, porque aunque nos hubiera gustado que fuera una ley mucho más valiente y que fuera una ley mucho más comprometida, creíamos que era el momento de reconocer en

una ley los derechos de las personas que en Aragón estaban hablando aragonés y catalán y que pueden seguir hablándolo o que pueden aprender a hablarlo en cualquier momento. Pero el Partido Popular y el Partido Aragonés, señorías, trabajaron para agrandar, a nuestro modo de ver, de una forma absolutamente irresponsable, una grieta social sobre una base electoralista, que era la base de la vena anticatalanista.

Y el Gobierno del señor Iglesias fue una pena, porque no tuvo la mínima voluntad política de desarrollar esa ley. Así que el Partido Popular y el Partido Aragonés, este Gobierno de la señora Rudi, pues, lo han tenido muy fácil para deshacer lo poco que se ha dado hasta el momento desde el punto de vista de la aprobación de la ley y su desarrollo.

Pero esta reforma que hoy está defendiendo aquí la señora consejera como si fuera la salvación para nuestras lenguas minoritarias, esta reforma es una derogación de facto que pasa por encima de todo lo que haga falta con tal de cargarse lo que tenemos en estos momentos y que, además, está en riesgo de desaparición. Pasan por encima incluso del tercer informe de la Comisión de expertos de evaluación sobre el grado de cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que, por cierto, fue suscrita por el Gobierno de España ya en el año 2001. Y en ese informe, lo que se dice es que existe un riesgo evidente de desprotección de nuestro patrimonio lingüístico en el mismo momento en que se ponga en funcionamiento, en que se entre en vigor esa reforma. Pero ustedes, el Partido Popular, ha mantenido en el cajón durante un año este informe, no lo han dado a conocer. Lo hemos conocido mucho después.

¿Qué pasa? Que hay que hacer caso a la Unión Europea cuando nos piden que nos traguemos todos los recortes económicos, ¡todo! ¿Pero no hay que hacer caso a la Unión Europea cuando nos pide que, oiga, alerta, tienen que proteger su patrimonio? ¿Eso no? Ustedes no respetan, actuando de esta manera, ni la tímida norma estatutaria que tenemos, pero ya veo que las normas europeas tampoco, las recomendaciones europeas, menos. ¿Y tampoco quieren cumplir la Constitución, señora consejera? ¿Esa Constitución que el señor Rajoy dice que no hay que tocarla, que está muy bien como está? Porque allí, en el artículo 3.2, se señala expresamente la obligación de defender las lenguas de las comunidades autónomas.

Señorías, han encontrado un espacio de acción que está basado en la negación de la evidencia. Es la forma más clara que tengo para decirlo. Su propuesta para denominar lengua aragonesa todo aquello que se hable en Aragón y que no sea castellano es, cuando menos, permítanmelo, un insulto a la inteligencia y, desde luego, no tiene el más mínimo soporte filológico.

Ustedes vieron una posible rentabilidad electoral en el anticatalanismo y están dispuestos a utilizar denominaciones acientíficas para los sistemas lingüísticos que se vienen denominando desde la Edad Media «catalán» y «aragonés», y que toda la comunidad científica, además, reconoce como tal. Y van encaminándonos hacia esa uniformidad que es característica de este proceso de involución autonómica en la que nos lleva metidos el Partido Popular. Frente a esa uniformidad que pretende imponer el Partido Popular para todo el Estado, mi grupo parlamentario, señorías, reivindica la existencia de tres lenguas en Aragón, de tres lenguas, con tres realidades diferentes. Ese es un privilegio al que no debemos renunciar y que debemos, precisamente, incentivar.

Y el modelo que plantea mi grupo parlamentario, tal y como están las cosas, es de cooficialidad del castellano y del aragonés en todo Aragón y cooficialidad del catalán y del castellano en aquella zona, incluido el aragonés, en aquella zona en la que ya se utiliza el catalán de manera habitual y cotidiana.

Miren, señorías, en Aragón se fablan dos luengas propias orichinals e istoricas d'Aragón que constituyen un rico erencio e un feito singular drento d'o panorama d'as luengas istoricas d'Europa, configuraderas d'una istoria e cultura propias. L'aragonés e o catalán.

Por ixo, han d'estar especialmén protechitas e fomentatas por l'Alministrazión aragonesa.

A situación en que se troban consella a rapeda adozión de midas que guarenzien a suya protezión e recuperazión.

Ta ra dos luengas son prezisas azions deziditas por parti d'o Guberno d'Aragón ta prestichiar-las, dinificar-las e normalizar-las sozialmén.

Con ixa Lei se quereba dar cumplimiento a ra obligación emanata d'o Estatuto d'Autonomía en o reconoximiento d'o dreito de toz os fabladors a utilizar a suya luenga tanto en a bida particular como en a publica.

Con ixa Lei se quereba aduyar a ra suya conserbazión, recuperazión, promozión, amostranza e difusión.

Ya caleba.

Y si no lo hacen, señorías, si no siguen en la línea que ya nos habíamos marcado antes de que ustedes llegaran a los asientos de la Diputación General de Aragón —concluyo—, marcan la sentencia de muerte para el aragonés. El aragonés está en peligro de muerte, señorías, requiere medidas urgentes de acción positiva, y una lengua no es un objeto que podamos meter en una urna. No nos interesa eso. Necesitamos medidas urgentes para salvar el aragonés, necesita el aragonés una...

El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo, señor presidente.

... necesita una normalización, necesita una voluntad política para que siga viva, para que se hable, para que se escriba, para que se investigue sobre ella, para que se incremente su uso, y la reforma que ustedes están imponiendo, que ustedes están presentando y que nos van a imponer, desde luego, lo va a hacer imposible. Hará imposible la supervivencia del catalán en Aragón, pero hará imposible la supervivencia en todo el mundo del aragonés, porque si no se protege aquí, esta sí que se muere.

Entendemos que su postura va en la línea de un error torpe y destino...

El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Ibeas.

La señora diputada IBEAS VUELTA: ... que no se merece, señorías, ni la ciudadanía aragonesa ni Aragón.

Muitas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.

Pasamos a la siguiente intervención. Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. Enmienda número 2, con texto alternativo. El señor Barrena, por tiempo de diez minutos, puede defenderla.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor presidente.

Ciertamente, planteamos, en primer lugar, al Gobierno que retire el proyecto que ha presentado hoy.

Pedimos que lo retire, en primer lugar, por una cuestión de legitimidad, puesto que, a pesar de lo que ha dicho la señora consejera, el texto que nos han sometido a debate no respeta ni cumple el mandato constitucional ni tampoco el Estatuto. No cumple lo de la Constitución: en el preámbulo se habla de cómo hay que garantizar y proteger los derechos de quienes hablan lenguas distintas del castellano; el artículo 3 obliga, porque ya está en el cuerpo jurídico. Y el artículo 7 de nuestro Estatuto lo que hace es mandatar a estas Cortes que tramiten una ley que tiene que ser para regular el régimen jurídico y los derechos de utilización de los ciudadanos y ciudadanos de Aragón que hablan lenguas distintas del castellano, que, en definitiva, que hablan aragonés y también catalán.

Pero miren, esta ley, igual que la que derogan con ella, la que pretenden derogar no cumple esos mandatos. Esta ley, igual que la otra, no reconoce exactamente la realidad trilingüe de Aragón y, desde luego, no reconoce los derechos de esa parte de la población que, aunque sea minoritaria, tiene su derecho, y que desde este Parlamento debemos proteger, a hablarlo.

Pero no nos quedamos ahí: les pedimos que retiren la ley, pero traemos al debate un texto alternativo. Y miren, lo traemos desde la posición de un grupo minoritario. Ya sabemos cómo funciona el Parlamento y sabemos la fuerza que tenemos. Pero por eso proponemos utilizar esta nueva oportunidad que hay para someter a debate y para que aquí en las Cortes, donde reside la soberanía del pueblo aragonés, que seamos capaces de aprobar una ley.

Y, señorías, en un Parlamento democrático, como creo que es este, lo que se legisla es, cuando menos, para proteger derechos; no es para recortarlos y no es para cercenarlos, como es lo que el proyecto de ley que ustedes traen quiere hacer.

Por eso, esta ley —lo pongo a su consideración— nace como alternativa, nace abierta al debate, nace abierta a la participación, porque creemos que la ciudadanía puede y debe participar, que es otro de los mandatos de nuestro Estatuto, y, sobre todo, señorías, creemos que la ley tiene que hablar de derechos.

Y, por lo tanto, lo que sometemos a debate, si es que tienen ustedes a bien permitir al menos el debate…, que menos que en un Parlamento democrático pedir el debate. Hace un momento uno de los grupos que gobiernan se dirigía a la oposición y decía: «Pero, oiga, es que nos les gusta nada de lo que hace el Gobierno», y la pregunta ha sido: «¿No quieren debatir con la oposición?». Aquí van a tener una oportunidad, si es que lo permiten.

Porque creo que, en el fondo, lo que deberíamos de tratar que saliera de aquí es una ley que haga que las lenguas de Aragón (el castellano, el catalán, el aragonés) dejen de estar en el limbo, las que están en el limbo. Y también creo que tiene que salir una ley que les rescate de la clandestinidad a la que la quieren someter. Porque fíjense que ni en la intervención de la señora consejera ni en todo el texto se menta ni una sola vez la realidad de que en Aragón, además del castellano, está el aragonés y está el catalán.

Creemos que de aquí tiene que salir una ley que reconozca lo que dice la Constitución. *¿Pero cómo les tenemos que estar diciendo a ustedes, constitucionalistas donde los haya, que tienen que cumplir y hacer cumplir la Constitución y el Estatuto? Ya sé que eso les gusta menos, ya sé* que están en fase centralista, pero hay que cumplirla también. Y miren, para cumplirlo, creemos que es mucho mejor que salga una ley de defensa, de fomento y de enseñanza de las lenguas de Aragón, que no una, como ustedes llaman, de protección, de promoción y de, en definitiva, convertir un derecho, como ha dicho la señora consejera, una ley que sea voluntaria. Miren, los derechos no son voluntarios: los derechos se reconocen y se facilita que se cumplan.

A partir de ahí, señorías, insisto, tenemos, esta Cámara tiene otra vez otra oportunidad. Queremos trabajar para que salga adelante una ley de derechos, no una ley pacata, timorata, cobarde, ni una ley acomodaticia, como es lo que ustedes nos plantean, que no resuelva el problema. Ni queremos trabajar en una ley que no establezca derechos. Y, desde luego, lo que sí que queremos es trabajar en algo que aborde seria, rigurosamente y con profundidad el problema y la solución del derecho de los ciudadanos y ciudadanas de Aragón que tienen, además del castellano, otras lenguas.

Y a partir de ahí, creemos que tiene que salir una ley que establezca las medidas necesarias para evitar que en nuestras lenguas propias, especialmente el aragonés, acaben desapareciendo. En esa dirección va nuestro trabajo con esta propuesta de ley, en esa dirección van las enmiendas que seguimos manteniendo, porque creemos que se puede intentar trabajar, y en esa dirección es en lo que pretendo volver a situar el debate. Y permítanme que les recuerde, que me retrotraiga al año 1997, un dictamen que en esta Cámara, tras dos años de trabajo, tras comparecencias de expertos, de filólogos, de universidades, con participación de los grupos, con participación de colectivos, con participación de organizaciones que trabajan en las lenguas de Aragón, se llegó a un acuerdo. Un acuerdo, señorías, que hablaba del derecho al aprendizaje «de» y «en», lo cual quiere decir en los procesos curriculares de la enseñanza.

Fíjense que en el debate de la anterior ley, Izquierda Unida votó en contra, porque seguía siendo una ley que no reconocía derechos, y llegué a decir —está grabado, lo podrían ver— *«¿qué pasará si el próximo Gobierno lo forman quienes niegan* —y reniegan— del catalán?*»*. Pues, ya vemos lo que va a pasar, señorías. Ya vemos lo que pretenden.

¿Por qué desaparece ese acuerdo que teníamos en el dictamen de cooficialidad? Cooficialidad que, siempre se ha dicho, a pesar de esa intoxicadora campaña de la derecha de que lo que estamos pretendiendo es catalanizar Aragón, a pesar de eso, no se trata en absoluto, señorías, de imponer nada, pero sí de garantizar el derecho. Y a partir de ahí, ¿por qué tenemos

que renunciar, por qué renuncian en este caso ustedes, que tienen mayoría, *a lo que eran los mínimos de partida en aquel acuerdo que tuvimos en el año* 1997? ¿Por qué renuncian? ¿Por qué no podremos recuperar las posiciones del dictamen? Aquel dictamen salió por unanimidad. Es verdad que hubo un voto particular del Partido Popular, es verdad. Un voto particular, pero a partir de ahí, en cualquier caso, lo que no me negarán es que de las cuatro organizaciones o formaciones políticas que estábamos de acuerdo en un planteamiento, ahora, en este momento, parece que ya solo quedamos dos. Y dirán: se deja usted uno por el camino. Bueno, creo que tenemos un elemento de discusión todavía, con el tema de la cooficialidad. Pero creemos que se podría resolver. Pero para resolverlo, señorías, tienen que permitir el debate, tienen que permitir el trabajo parlamentario, tienen que favorecer el diálogo. Pero no, ustedes han cogido el camino de la imposición, apoyados en esa mayoría parlamentaria que les da su acuerdo de gobernabilidad. Un acuerdo de gobernabilidad que invocan, que tiene que ser un acuerdo para formar Gobierno de Aragón, y en ese acuerdo, llevan ustedes un ataque directo a una parte de la ciudadanía aragonesa, que es la parte que tiene sus lenguas propias, como son el aragonés y el catalán. No tienen ustedes legitimidad para tratar de imponer eso, ni siquiera para soliviantarse. Podr*ían ustedes, por lo menos, permitir el debate, podrían. Que no se preocupen, que hablamos de debatir, que hablamos de trabajar, que ha*blamos de explorar.

Pero sí que les decimos que reclamamos y que exigimos cumplimiento de lo que es la obligación de esta Cámara. Porque, mire, el Estatuto no le manda al Gobierno, no, no, el Estatuto dice «una ley de las Cortes de Aragón». El Gobierno ha traído una propuesta, y hoy, hay otra aquí, que es la que sometemos a debate. Tenemos otro punto de partida, tenemos camino recorrido, y en lo que no nos van a encontrar nunca es en desandar lo andado. Y, desde luego, nos parece que hay que mirar hacia delante, nos parece que en este caso concreto hay que demostrar voluntad de llegar a un acuerdo y nos parece que estamos a tiempo de hacerlo.

Señorías, retiren su ley, permitan el debate y permítannos trabajar por lo que es un derecho de una parte de la ciudadanía de esta tierra, que son los ciudadanos y ciudadanas que hablan aragonés y que hablan catalán.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.

Pasamos al turno en contra de las enmiendas.

Empezamos por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. La señora Herrero, por tiempo de diez minutos, puede intervenir.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señor presidente.

Señorías, yo creo que estamos ante lo que podríamos denominar como la crónica de una muerte anunciada, y nosotros mismos, en reiteradas ocasiones y en esta tribuna, en la sesión plenaria del 17 de diciembre de 2009, ya dijimos que esto sucedería. Que sucedería porque se aprobó una ley, sí, con el respaldo de la mayoría de los diputados y diputadas de estas Cortes, con treinta y cuatro votos, pero con una fractura social también al respecto y con la consecuente problemática dentro de la sociedad en este sentido y también con los diferentes partidos políticos, con los que se rompió también un consenso y un acuerdo no unánime, pero sí muy mayoritario, alcanzado en estas Cortes algún tiempo atrás.

Cuando se debatió el Estatuto de Autonomía, ustedes saben que este fue uno de los debates importantes que se llevó a cabo. Y en el artículo 7 del Estatuto de Autonomía, con palabras muy medidas y calculadas, se expresa la voluntad de la casi totalidad, porque Chunta Aragonesista se quedó fuera del Estatuto de Autonomía, y hay que decir que en gran medida su desacuerdo con el Estatuto de Autonomía fue provocada por este artículo 7, y, por tanto, entiendo la posición que hoy mantienen aquí. Pero todos los demás partidos políticos estuvieron de acuerdo con ese texto de palabras exquisitamente medidas y calculadas. Ahí sabían, en esas palabras, que es donde se encontraba el acuerdo de todos los partidos, cediendo posiciones de partida, por supuesto, cediendo posiciones de partida. Pero ahí se podía encontrar un lugar común desde el que seguir avanzando y desde el que, posteriormente, aprobar una ley de lenguas.

Nada que ver con la ley que se aprobó, y lo dijimos, la ley que se aprobó en el año 2009, ley, por cierto, que no se ha desarrollado, que no se ha cumplido y que no se ha llevado a cabo ni aplicado, pero en esa ley ya dijimos que no se estaba siendo fiel al artículo 7 del Estatuto de Autonomía. Y muestra de ello es que Chunta Aragonesista estuvo sumamente satisfecha de la labor que había jugado en la tramitación parlamentaria de esa ley, de una ley que nosotros dijimos que era una ley verde, simplemente porque poniendo con colores en aquel borrador, en aquella proposición de ley que llegó del Partido Socialista, poniendo con colores las aportaciones de los diferentes partidos políticos, pues, si quieren les puedo pasar una copia también a color, y verán que prácticamente todas las modificaciones son verdes, porque eran las aportadas por Chunta Aragonesista. Un 80% de las enmiendas que presentó Chunta Aragonesista fueron aceptadas. Y, por tanto, que no añore ahora el Partido Socialista la ley que se aprobó, porque esa no era su ley, ni mucho menos, sino que era una ley que cumplió las condiciones puestas por Chunta Aragonesista para poder tener esos treinta y cuatro votos por los que se aprobó la ley.

Bueno, hoy parece que la ley era suya. No era suya, y ustedes saben perfectamente que no estaban de acuerdo en origen, porque no era su posición de partida con todas esas incorporaciones. Tal es el caso, que se acabó aprobando una ley de lenguas que, legalmente, no reconocía las lenguas como oficiales ni como cooficiales, pero, de facto e implícitamente, *sí. Y Chunta Aragonesista así lo reconoció también. Y ahí está siendo coherente Chunta Aragonesista con su posición hoy,* porque indudablemente sigue manteniendo esa misma línea, con la que nosotros no estamos nada de acuerdo y que, además, les llevó a ellos, entre otras razones, a salirse de esas negociaciones del Estatuto de Autonomía.

Miren, a nosotros, sinceramente, nos parece que este es un asunto pendiente y mal resuelto desde hace mucho años, un asunto pendiente y mal resuelto. *Y ahí*

creo que tenemos responsabilidad, en mayor o menor medida, todos o muchos de los partidos políticos, cada uno desde nuestro lugar. Y nosotros asumimos también nuestra parte proporcional de responsabilidad de no haber resuelto esta cuestión.

Pero, señorías, no nos equivoquemos. Cuando esta cuestión no se ha resuelto antes y no se ha resuelto con más apoyo y con más consenso y con más unanimidad, es porque es un tema complejo, no es un tema fácil de resolver y porque es un tema que suscita gran controversia y polémica y desacuerdos también en la sociedad. Y por eso es por lo que no se ha resuelto antes.

Y ocurre que cuando hablamos de las lenguas, pues, bueno, aquí, siempre en este debate, se han llevado en paralelo dos debates que podrían haberse atajado de forma diferente. Cuando hablamos de la lengua aragonesa del norte de nuestra comunidad autónoma, yo, sinceramente, creo que es una lengua que a mí me da mucha pena, porque es una lengua que está en peligro de extinción, en peligro de extinción, y ahí tenemos responsabilidad también por no haberlo resuelto antes y que ha pagado el pato de otro debate sobre la lengua aragonesa que se habla en la zona este de nuestra comunidad autónoma y que, señorías, se ha visto también aquí por las demás intervenciones que el escollo ha estado en la denominación de esa lengua, en la denominación de esa lengua. Y, entonces, acaba siendo el debate…, el debate se acaba centrando en si catalán sí o catalán no. Y, sinceramente, creo que ese no tiene que ser o no tendría que haber sido el planteamiento.

Señorías, nosotros no somos anticatalanistas, no, no se equivoquen. No somos anticatalanistas. El Partido Aragonés no es anticatalanista, el Partido Aragonés es profundamente aragonesista, que es distinto, que no tiene nada que ver. Y desde ese planteamiento aragonesista es desde donde creemos que este debate se tendría que haber abordado desde un diálogo y desde una discusión a cerca de que haya o no haya una ley —nosotros hemos dicho siempre «sí»—, acerca de que haya una ley que reconozca la realidad plural lingüística de Aragón, y nosotros decimos «sí» a cerca de que haya una ley con la que se proteja, se preserve y se mantenga esta realidad y este patrimonio lingüístico, y nosotros decimos «sí» a cerca de que haya una ley donde se garantice, cosa que de alguna forma se ha hecho, pero que haya una ley donde se garantice que haya una educación y que, por tanto, puedan aprender los niños y niñas, los jóvenes hablantes en esas zonas de utilización histórica predominante de esas lenguas que puedan aprender a escribir correctamente su lengua materna y que se dignifiquen esas lenguas, y que no sean unas lenguas de segunda. Y nosotros decimos y hemos dicho «sí». Y decimos «sí» a una ley en la que se reconozcan los derechos de los hablantes y de los ciudadanos y sus derechos lingüísticos, y decimos «sí».

Y todo eso, señorías, está en este proyecto de ley. Pero cuando el debate solamente la denominación, yo, sinceramente, escuchando algunas de las afirmaciones que se hacen, no entiendo nada, no sé si son aragonesistas o si no es que nosotros no seamos catalanistas. Creo que hay otras personas que no sé qué intereses tienen en apoyar las tesis del catalanismo, sinceramente, no sé por qué, *no lo entiendo.*

Y yo les pregunto a los partidos que hoy aquí y desde hace años están insistiendo en que se llame, se llame «catalán. Y yo les pregunto, ¿y qué piensan ustedes del valenciano? ¿Les parece bien o les parece mal que se llame valenciano? Chunta Aragonesista, en la Comunidad Valenciana, no tiene nada que decir, pero hay otros partidos que sí que dicen en la Comunidad Valenciana, y resulta que dicen que se llame «valenciano». ¿Saben por qué? Porque quieren. ¿Qué problema tienen?

Hago otra pregunta: ¿desde cuándo esta lengua se habla en la zona oriental de Aragón? ¿Desde cuándo? Y, entonces, ¿desde ese cuándo existía lo que hoy llamamos y lo que hoy se llama Cataluña? No existía Cataluña. ¿Existía una lengua que se llamase catalán? No existía una lengua que se llame catalán.

Otra pregunta les hago: ¿qué pasaría si este debate se estuviese llevando a cabo ahora mismo en el Parlamento catalán, si la situación fuera inversa? ¿Ustedes mismos creen que estarían hablando de esto? Y llevados a un extremo, en el tema de la denominación, con una cierta ironía lo digo, pero yendo a ese extremo y con matices históricos y culturales, en todo caso, podríamos estar hablando de que en las comunidades autónomas que formaron parte de la Corona de Aragón, que nosotros sí decimos Corona de Aragón y creo que ustedes también, en todo caso, quizás, esa lengua que tienen compartida se tendría que llamar en todos los sitios «aragonés». Fíjense por dónde, que están ustedes planteando que aquí se llame «catalán» y, a lo mejor, lo que tendría que ser es que se llamase allí o que se hubiese llamado allí «catalán».

Una ley de lenguas, y voy terminando, señor presidente, señorías, una ley de lenguas es algo más que un tema filológico. Yo creo que en una ley de lenguas, indudablemente, hay que tener en cuenta los criterios filológicos, pero no solo. Una ley de lenguas es filología, pero también son aspectos históricos, culturales, sociológicos, patrimoniales de identidad y, señorías, también y, por qué no, también de emoción. Porque existe y porque esto lo vemos en la calle y lo escuchamos.

Yo, señorías, simplemente decir que nos veremos en la ponencia, que con las enmiendas parciales podremos debatir de forma constructiva, como siempre hemos hecho, y que lo que queremos es tener una ley de lenguas que reconozca nuestra realidad lingüística plural, que no fracture, y creemos que este proyecto, de verdad, no fractura la sociedad, que es respetuoso, sensible y tolerante, que no incomoda a nadie y que establece un marco legal de convivencia y de tolerancia lingüística en la que todos pueden sentirse cómodos hablando lo que han aprendido a hablar desde que nacieron.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.

El Grupo Parlamentario del Partido Popular. La señora Ferrando puede también intervenir por tiempo de diez minutos.

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gracias, señor presidente.

Señorías, no puedo comenzar mi intervención sin agradecer a la señora consejera la sensatez demostrada por el departamento durante la elaboración del proyecto de ley. Porque legislar sobre el panorama lingüístico de Aragón sin incurrir en clientelismos partidistas solo puede hacerse desde la sensatez y, por supuesto, desde el rigor.

No es la primera vez que nuestra realidad lingüística es objeto de un debate responsable en esta Cámara, y por supuesto, con lo de responsable, tacho ya de entrada la norma que se aprobó en 2009. Cuando hablo de «responsable» me refiero a las comisiones especiales de estudio celebradas al efecto en estas Cortes entre 1996 y 1998 y que contaron con la comparecencia de insignes autoridades en filología aragonesa del calado de don José María Enguita, María Antonia Martín Zorraquino, María Rosa Fort o Rosa María Castañer, todos ellos ilustres doctores de la Universidad de Zaragoza y cuyas aportaciones fueron demagógicamente obviadas en la elaboración de aquella ley de 2009.

Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, ese es el respeto o debe ser el respeto que procesan a los investigadores de nuestras universidad pública.

La realidad lingüística sobre la que responsablemente hay que legislar no es otra que la que se corresponde con nuestro rico patrimonio cultural, la voluntad de los aragoneses y, por supuesto, con el sentido común.

No voy a insistir en lo que ya se ha dicho aquí respecto de nuestro patrimonio, pero sí que me voy a detener en dos de los grupos de modalidades que se hablan en Aragón. Por una parte, las modalidades vernáculas de la zona oriental que, con innegables afinidades con su lengua vecina, el catalán, gozan, no obstante, de suficientes elementos definitorios para que sus casi cincuenta mil hablantes las llamen voluntariamente «tamaritá», «fragatí», «mequinenzá», «torrentí», «maellá», etcétera. Y todas aquellas que se han mantenido en algunos reductos pirenaicos como herencia de un dialecto, el aragonés, que aunque nunca estuvo unificado, dialecto que provenía del latín, ha pasado con diversas características a casi diez mil hablantes, por más que algunos se emperren en multiplicar esos diez mil hablantes hasta el infinito.

También quiero dejar claro que cuando hablamos de «aragonés», yo diferenciaría muy clarito que «aragonés» no es lo mismo que fabla.

Hablaba de tres maneras de legislar —me he referido al patrimonio lingüístico—, pero realmente a mí lo que más me preocupa es que se cumpla la voluntad de los aragoneses. A finales de los años setenta, como saben ustedes bien, del siglo pasado y con la configuración del Estado de las Autonomías se asiste en nuestro país al resurgimiento —legítimo, por supuesto— de las conciencias nacionales. Es entonces cuando en algunos ambientes culturales se defienden nuestras hablas vernáculas como seña de identidad. Y, paralelamente, en determinados círculos, no culturales, sino políticos, se pretende asimilar al catalán las hablas de la zona oriental, y unificar todas las demás en un «neoaragonés» de ciencia ficción o, mejor, de lingüística ficción, a la que llamaron «fabla», que careciendo de hablantes nativos —y esto está filológicamente demostrado—, jamás tendrá la consideración de lengua, porque es requisito sine qua non para considerar lengua a una variante. Digamos que la fabla es en Aragón lo que sería el esperanto en Europa.

En este contexto, lo sensato es no perder el norte y recordar que los verdaderos destinatarios de una futura regulación lingüística son cuantos aragoneses se han mantenido hasta hoy fieles a unas normas tradicionales de expresión, cuyos particularismos son su seña de identidad y están connotados de claros valores afectivos.

Por lo tanto, señorías, solo los hablantes de nuestras modalidades minoritarias pueden decidir si quieren que otras normalizaciones se interpongan entre su habla materna y el castellano, y salgan a la calle y pregunten, como ya lo hizo en su momento la Universidad de Zaragoza, criterio que, por supuesto, siguen sin tener en cuenta.

Señorías, este grupo parlamentario rechaza la utilización de la lengua como instrumento de confrontación y, por supuesto, rechaza la imposición de un catalán o de una fabla que los aragoneses no reconocen y que arriesgan la supervivencia de un patrimonio que por ser verdaderamente nuestro merece ser usado, protegido y difundido. Tenemos una responsabilidad muy grande, la de aprobar una ley que sirva de cauce a una adecuada política lingüística, pero como legítimos representantes de los aragoneses, tenemos todavía una responsabilidad mayor, que es la de respetar los sentimientos de sus hablantes, que, al fin y al cabo, son los auténticos protagonistas de la planificación que se determine.

Seremos estrictos con el cumplimiento de la Constitución, de nuestro Estatuto de Autonomía y, no lo duden, de cuantas normas internacionales amparen la protección de nuestro legado. Pero, desde luego, no ampararemos jamás ningún proyecto que imponga a los aragoneses sentir lo que no sienten.

Y en cuanto al sentido común, que aquí es el menos común de los sentidos, es precisamente el dictado del sentido común el que nos impide votar a favor de ambas enmiendas. Por lo tanto, vamos a votar «no» a la enmienda de Chunta, porque lo que verdaderamente vulnera las expectativas y los derechos de los aragoneses es reconocer la cooficialidad, junto al castellano, del catalán y del aragonés, que, insisto, ese aragonés no es aragonés, es fabla.

Y, por supuesto, y aunque parece que el señor Barrena ha venido en un tono más suave, vamos a votar no a su texto alternativo, pero quiero felicitarle por su particular sentido de la democracia y de la libertad y que les llevó y les ha vuelto a llevar en esta sala a tachar el texto propuesto por el departamento de provinciano, timorato y alicorto, fundado en complejos de identidad, inferioridad y de rancio anticatalanismo, y ayer, usted pedía respeto en la Comisión de Hacienda. Mire, señor Barrena, lo suyo es de libro. Y en cuanto a la respetuosa motivación, era como para no seguir leyendo el texto alternativo de Izquierda Unido. Solo el respeto, ese término que no forma parte de su acervo lingüístico, nos ha llevado a leer lo que no admite otro calificativo que el de «manifiesto».

Y quiero pensar que sus señorías estaban pensando en una república bananera y no en Aragón cuando pretendían fomentar el empleo —de los suyos, por supuesto— haciéndoles un hueco incluso en las notarías,

y se saltan a la torera la independencia de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, pretendiendo controlar su programación y, además, imponiéndoles las lenguas en la que tienen que programar. Se cargan definitivamente la autonomía universitaria, exigiendo la incorporación de filología aragonesa y de filología catalana al mapa de titulaciones de la Universidad de Zaragoza, cuando la Universidad de Zaragoza no ha constatado hasta el momento ni la más mínima demanda. Condicionan también el acceso al empleo público, el trabajo en hospitales y residencias, ¡ojito!, de titularidad privada, o el acceso a la enseñanza al conocimiento del catalán y/o del aragonés.

Señor Barrena, el conocimiento del aragonés no se puede acreditar mediante un título universitario. ¿Será suficiente el carné de Izquierda Unida de Aragón o el de Chunta para poder optar a esas plazas? ¿No era Chunta y ustedes mismos los que defendían que para impartir determinadas asignaturas había que ser especialistas en ellas? Aclárense, señorías, porque yo con ustedes me pierdo.

En resumen, este grupo parlamentario no aceptará norma alguna que elimine cualquier criterio territorial, que olvide nuestra realidad lingüística o que pisotee, relegando al olvido, el excepcional patrimonio de los aragoneses en beneficio de un catalán que no reconocen o de una fabla con la que no se entienden.

Dijimos —insisto—, decimos y diremos rotundamente «no» a quienes pretendan crear absurdas polémicas que no preocupan ni ocupan a la mayoría de los aragoneses, «no» a quienes se doblegan ante un pancatalanismo que reinventa nuestras fronteras y, desde luego y contundentemente, «no» a quienes después de vaciar las arcas de esta tierra pretenden destinar nuestros presupuestos a doblar películas al catalán, dotar de pinganillos a nuestras instituciones o, con fines demagógicos y partidistas, crear agencias de colocación para sus acólitos.

Señorías, el aragonesismo no se defiende a golpe de carné. Para defender a Aragón, basta con sentirse aragonés.

Muchas gracias. *[Aplausos.]*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]: Señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Sí, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]: Señor presidente, es que no he oído que me decía con la efusividad del Partido Popular, perdone.

El señor PRESIDENDE: No querrá que haga de intérprete, que puede... ¿Ha pedido el uso de la palabra?

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]: Sí, la pido en función del artículo 86 y, entonces, le pido que se lea el documento de Izquierda Unida que ha invocado la señora Ferrando en el que dice que queremos hacer trabajo en notarías, en que para el acceso al hospital haya que tener carné de Izquierda... Pido que lo lea simplemente para asegurar el debate.

El señor PRESIDENTE: Me temo que debería de leerlo usted, y si no lo tiene, pues, evidentemente, no existirá, con lo cual queda resuelto el asunto.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]: No, no, yo si quiere, leo todo el documento.

El señor PRESIDENTE: No, no es necesario *[rumores].* Señor Barrena, yo creo que lo que usted...

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]: Yo creo que deben de retirar esas mentiras que ha dicho, porque son mentiras.

El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, yo creo que el objetivo que pretende ya lo ha conseguido.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]: No, no, lo pretende ella.

El señor PRESIDENTE: Yo creo que no, que el objetivo, que es político y parlamentario, ya lo ha conseguido el señor Barrena. Yo creo que con eso queda claro, señor Barrena.

Pasamos a la siguiente intervención.

Grupo Parlamentario Socialista, cinco minutos. Señora Pérez, tiene la palabra.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor presidente.

Bien, antes de empezar y después de oír a la señora Herrero, llego a pensar que sobramos todos en esta Cámara, porque la señora Herrero se sobra y se basta para hablar por boca del Partido Aragonés, para interpretar al Partido Socialista, para interpretar a cualquier partido, pero se le escapó aconsejar a su compañero de partido, al señor Callizo, cuando en el año 1999 era director general y aprobó una Ley de Patrimonio que reconocía como lenguas propias el aragonés y el catalán, un discurso contrario por lo que me ha parecido escuchar a lo que usted ha defendido en esta Cámara.

Hace casi tres años, estas Cortes tuvieron la oportunidad de posicionarse al respecto en este asunto. Exactamente, el 17 de diciembre de 2009, se aprobaba la Ley de Lenguas de Aragón, una reivindicación histórica de miles de ciudadanos aragoneses, ciudadanos que viven en esta tierra, que veían atónitos como lo que discurría con normalidad en sus municipios era ignorado o, mejor dicho, evitado en su desarrollo legislativo que no ejecutivo. Una ley que desde el consenso, la prudencia, la moderación, la búsqueda del mayor acuerdo posible, la participación en cuanto a las formas —hay que recordar que era un compromiso de este partido desde el año 1999 y que tardó diez años debido a su interés por el consenso y por la complejidad del asunto—, desde el respeto, la voluntariedad, el reconocimiento del derecho a quien quisiera que le fuera reconocida la territorialidad y la no cooficialidad en cuanto al fondo, trataban de normalizar una situación real en una parte importante de nuestro territorio.

Tan solo tres años después, el nuevo Gobierno, capitaneado por el Partido Popular y fruto de aquel esperpento protagonizado por este partido en la tra-

mitación de la ley en una sobreactuación oportunista y partidista que nada tenía que ver con lo que realmente se debatía, y en un ejercicio de hipocresía al que ya nos tiene acostumbrados también en este asunto, elimina de un plumazo todo aquello que el Partido Popular ha estado apoyando en los últimos veinticinco años desde los diferentes gobiernos presididos por el Partido Popular, tanto en el ejecutivo como en el legislativo. Una Ley de Lenguas que trataba de evitar cualquier asunto conflictivo, que trataba de buscar un equilibrio que sin herir sensibilidades fuera capaz de recoger, de plasmar en una ley lo que en la realidad cotidiana se estaba dando con total normalidad, es decir, hacer visible lo cotidiano, seguramente sin complejos, algo que al Partido Popular no le gusta, eso de dar a conocer lo que se hablaba en la intimidad, una ley de uso, de protección y promoción de las lenguas propias de Aragón, pero lo que no podíamos intuir es que el Partido Popular, en una posición demagógica e irresponsable, usara y utilizara este derecho como ariete político de confrontación entre territorios de nuestra propia tierra, de crispación, llevando al extremo de protagonizar una campaña mediática con engaños y manipulaciones, como hemos visto también ahora mismo y esta mañana, que no se ajustaban para nada a la realidad del debate.

Ahí está la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero de 2011 que rechaza un recurso de once ayuntamientos en contra de la Ley de Lenguas, alimentados, cómo no, por sus partidos dentro de esa campaña.

Ustedes, que defienden la libertad, señores del Partido Popular, como eje principal del ejercicio del individuo a elegir, como en el ámbito educativo, ¿cómo pueden al mismo tiempo enarbolarla en algunos ámbitos —repito, como el educativo— por encima de todo y restringirla en otros casos como en este?

Este Gobierno está siendo durísimo con los ciudadanos en cuanto a la pérdida de sus derechos; derechos, unos, adquiridos a lo largo de todo el periodo democrático, como la universalización de la educación en igualdad de oportunidades, hoy gravemente en riesgo, o como una sanidad pública y gratuita, que hoy es una quimera, o como una justicia que pasa de ese mandato constitucional de garantizar la tutela judicial efectiva a una tutela judicial en efectivo, o ese marco de relaciones laborales que garantizaba un empleo estable, una protección y una seguridad, claramente asaltado y eliminado; derechos, otros, como este que hoy debatimos, más reciente, de miles de aragoneses que quieren garantizar el uso de sus lenguas y modalidades lingüísticas propias, fruto de un legado cultural histórico que debe ser conservado y promocionado, y que, con el trámite de hoy, ponen también patas arribas.

Diez años de compromiso electoral, un estricto respeto a la Constitución y el cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía, así como la costumbre, justificaban claramente esa ley. Un compromiso electoral, por cierto, que se cumplía después de haber situado a Aragón como punta de lanza en muchos ámbitos (en la logística, en la diversificación de nuestra economía, en la investigación, en la educación, en la sanidad...). Por el contrario, nos encontramos a un Gobierno que, año y medio después de alcanzarlo, y con la que está cayendo en nuestra tierra..., este aspecto, lamentándolo mucho, se haya convertido en la prioridad del Gobierno de Aragón para dar cumplimiento a ese acuerdo de gobernabilidad, como decía la señora consejera en su presentación, por encima o anteponiéndolo a objetivos como el desarrollo de una educación de calidad y no de caridad, como están haciendo, o al desarrollo de unos servicios públicos de calidad en sanidad o en servicios sociales —qué sarcasmo—, o para conseguir ese principal objetivo que se marcaron ambos partidos, que era la lucha frente a la crisis y la creación de empleo estable y de calidad en todo el territorio...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando señora Pérez.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ... y lo que nos encontramos son más de diecinueve mil quinientos parados desde que gobierna el Partido Popular. O la promoción y defensa de la empresa familiar, cuya situación actual es la más perentoria. Estos entendemos que son asuntos prioritarios que deberían ocupar todo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, y no reabrir una polémica que vuelve a poner de manifiesto posiciones antagónicas y muy polarizadas, de difícil encaje y que, desde luego, ponen más que en evidencia que la actual ley, que intenta respetar sin imponer, reconocer sin ignorar, localizar sin extender, es la más adecuada y acorde a la realidad, y que este debate es absolutamente inoportuno, puesto que lo que los ciudadanos esperan de nosotros son soluciones a su vida diaria, a su situación laboral, a su desarrollo vitad, a la situación de sus servicios públicos; en definitiva, que demos respuesta a los grandísimos problemas a los que nos enfrentamos.

Concluyo, señor presidente. Votaremos a favor de la propuesta de devolución del texto, como plantea Chunta Aragonesista, y en contra del texto alternativo de Izquierda Unida, puesto que, como saben, el asunto de la cooficialidad fue suficientemente debatido y, desde luego, es más que conocida la posición de este partido, contrario a la cooficialidad y partidario de la voluntariedad y del reconocimiento del derecho. Y en esa línea hemos presentado las enmiendas parciales, que serán objeto de debate en la ponencia.

Muchas gracias. *[Aplausos.]*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.

Señorías, vamos a pasar a la votación de las enmiendas a la totalidad.

Vamos a someter a votación la enmienda número 1, de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señorías, comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y tres. A favor, veintisiete. En contra, treinta y cuatro. Queda rechazada la enmienda a la totalidad.**

Y pasamos a votar la enmienda número 2, con texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y tres. A favor, siete. En contra, cincuenta y seis. Queda rechazada.**

Y pasamos al turno de explicación de voto. Señor Barrena, puede intervenir.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Agradecemos el apoyo que ha tenido nuestra propuesta en el Grupo Chunta Aragonesista.

Miren, al final, el debate se ha centrado en dos elementos básicos y fundamentales: uno, la cooficialidad, y otro, la denominación de catalán, aparte luego de algunas cuestiones que dejo para el final con la señora Ferrando.

Miren, la cooficialidad se tiene o no se tiene. No vale, señora Herrero, el «de facto lo es». Mire, *de facto* es una locución latina que significa 'de hecho', pero que siempre se contrapone a la otra locución latina, que es *de iure,* que es 'de derecho'. Y nosotros apostamos por el derecho, no por la voluntariedad.

Sobre el tema del catalán, miren, tienen un serio problema profundamente conservador, rancio y, desde luego, anticuado, y es que asocian idioma, lengua, a territorio, lo cual les impide, evidentemente, ser racionales con el planteamiento. Lo están llevando a esos niveles. Y sobre todo se les olvida esa parte que la ciudadanía de los diferentes territorios reclama y requiere con su planteamiento a su derecho.

Miren, la ley que nos traen aquí ahora ustedes es prácticamente igual que la que quieren derogar; solamente cambian dos cosas: una, que quitan la tutela judicial, y otra, que desaparece, tachan la palabra «catalán». Son esas dos las únicas diferencias que tiene. Y, por lo tanto, nos parece que, haciendo honor a ese elemento que han dicho sobre el debate, deberían haber facilitado que se pudiera debatir. ¿Dónde está esa llamada al consenso que nos han hecho?

Señora Ferrando, yo no sé si usted sabe —creo que no, por lo que ha dicho— que, en estos momentos, el código de normas civiles aragonesas, que está en vigor, ya permite en las notarías, que ya están, que no hay que contratar a nadie... Por cierto, ¿no querrá que le dé yo a usted lecciones de cómo contrata el Partido Popular? Si quiere, se las damos. Pero vamos a seguir de lo que le estábamos hablando. No, no. Sí, sí, sí. Si lo ha dicho usted, no yo... Pero, cuando quiera, hablamos.

El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, vaya terminando.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]: Ya acabo, señor presidente. Mire, en estos momentos, en las notarías, tanto si hay alguien de Izquierda Unida como si no, aunque sea alguien del Partido Popular, puede utilizar el aragonés o el catalán para cosas tan importantes como es un testamento, o como es un pacto sucesorio, o como son unas capitulaciones, ¿entiende? Y entonces por eso planteamos en nuestra ley no colocar a nadie, no, como usted ha dicho, sino simplemente que ahí esté garantizado que esto se pueda hacer en las mejores condiciones.

Y acabo la reflexión. Empezaba la señora Herrero: esto es la crónica de una muerte anunciada. En esa novela, al final, se mata al protagonista. Yo creo que, aquí, los protagonistas son las lenguas aragonesas, el catalán y el aragonés, y espero que en este proceso no acaben muriendo, sino que seamos capaces entre todos —y es el nuevo llamamiento que hacemos— de garantizar no solo su supervivencia, sino el desarrollo de los derechos que tienen quienes las hablan. Y, como hemos acabado de aprobar una ley que obliga a pedir perdón a quien a un profesor o profesora, ahora ya con autoridad, le falta, yo creo que igual hasta deben pedir perdón a los ciudadanos y ciudadanas que hablan esas lenguas, el aragonés y el catalán, porque, desde luego, ustedes lo que están haciendo es cercenarles su derecho. Esto es lo que creo que tendrían que hacer también.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.

Señora Ibeas, puede intervenir.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero agradecer al Grupo Socialista y al Grupo de Izquierda Unida el respaldo a nuestra enmienda para la devolución del texto que ha presentado el Gobierno.

Señorías, hoy es un día realmente triste para Aragón, lo entendemos así en mi grupo. Y todas las risas y las juergas que ustedes se quieran correr aparte, ustedes sabrán, pero ustedes se están cargando nuestro patrimonio.

Señora Herrero, la pregunta no es qué piensa Chunta Aragonesista sobre si el valenciano es o no... No, no: la pregunta es por qué el Partido Aragonés ha cambiado de opinión. Esa es la pregunta para la que no tenemos todavía respuesta. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Han tenido ustedes una reflexión filológica, o más bien ha sido un interés electoralista, que es lo que entiende así mi grupo?

Del Partido Popular habría tanto que decir... Porque antes les molestaba el aragonés, ahora les molesta el catalán. En realidad, lo único que no les sobra es el castellano. Yo no sé qué chapurrea usted, señora Ferrando, no lo sé, pero usted me imagino que sabe que una legua es un sistema que se basa en unas convenciones sociales, que no es algo que nace o que cae así de golpe, que se impone. ¿O usted ha pensado alguna vez que usted habla castellano porque sí, porque era la mejor lengua que se podía hablar? ¿Usted ha pensado alguna vez ha pensado alguna vez que no ha habido una decisión política para que usted o yo estemos aquí hablando en castellano? Eso creo que sería considerar que usted tiene poco conocimiento de la realidad, y me imagino que no es así. Pero usted ha demostrado muy poco respeto ya no solo por las lenguas y por nuestro patrimonio aragonés en este caso: usted ha mostrado muy poco respeto por las personas que hablan..., no aragonés: fabla. Eso, lo que hay. No, no, muy poco respeto. Porque, si el aragonés en estos momentos necesitaría, evidentemente, fijar, consolidar una normalización, el castellano lo ha tenido a lo largo de todos los siglos, como cualquier lengua que en estos momentos haya pervivido, y hace falta voluntad política para impulsar una lengua y hace falta también voluntad política para cargársela. Y ustedes están utilizando sus estrategias no para salvarnos de la quema con la situación tan dura que estamos viviendo, sino para marear aquí la perdiz sobre si vienen o no de salvadores del mundo. Van a salvar a los profesores en las aulas, van a salvar a los hablantes de ese chapu-

rreao que les vamos a dignificar borrándolo del mapa, etcétera, etcétera.

Su compañero Feijóo no tiene tanto problema en Galicia para hablar gallego; su compañera la señora Sánchez Camacho tampoco tiene ningún empacho en hablar en catalán, y mire que es españolista por todos los poros de su piel. Luego ¿qué problema tiene usted? Compañeros suyos están hablando, por ejemplo, en bable en Asturias. ¿Por qué desprecian de esta manera el aragonés? Es algo que no me cabe en la cabeza. Jamás ha habido un gesto en este caso en sus dirigentes para poder tener el más mínimo respeto.

Usted dice que el aragonés es una lingüística-ficción. Permítame que le diga que utilice algún argumento científico porque esto se cae por su propio peso. ¿Usted sabe que en estos momentos hay una buena parte de la comunidad educativa, universitaria, científica que está posicionándose claramente en contra de su propuesta, en contra de la propuesta del Gobierno? ¿Usted sabe que van en contra de las normas de protección de las lenguas minoritarias? O, como son lenguas minoritarias, no valen. Dice: «¡Que salga mucha gente a la calle!». ¿Cuánta gente? ¿Dos millones? ¿Tenemos dos millones de hablantes aquí de castellano en aragonés o qué? No. ¿Los tenemos en castellano? Tampoco. Entonces, si no tenemos hablantes, si se están muriendo, están dejando morir a los pocos que quedan, ¿qué quiere que salga? Como son minoritarias...

El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, vaya terminando.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: ... —sí, concluyo, señor presidente—, no hace falta protegerlo. Pues vamos a ver. Ustedes están poniendo en marcha un mecanismo que va a significar unas consecuencias muy importantes, pero, desde el punto de vista de los derechos de los hablantes de la lengua catalana y de, en este caso, la lengua aragonesa, de verdad que están siendo absolutamente irrespetuosos.

Termino. Quienes vivimos en Aragón, señorías, hayamos nacido aquí o no, tenemos la responsabilidad de trabajar para que no se pierda nuestro patrimonio. Y, desde luego, el aragonés se morirá con todas las propuestas que ustedes están haciendo, que es para machacarlo. ¡Qué error e qué torpeza! L'aragonés no ye aragonés e o catalán no ye catalán.

El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, acabe.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Todo por sus intereses políticos.

El señor PRESIDENTE: El Partido Aragonés. ¿La señora Herrero va a intervenir? Puede hacerlo.

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Señorías, iniciamos la tramitación parlamentaria de una ley que, como he dicho, en ponencia nos veremos; trataremos con suma atención y de forma constructiva todas las enmiendas parciales que se hayan planteado, y nos gustaría poder llegar a acuerdos, pero vemos que así, de entrada, las posturas no son muy proclives por parte de algunos partidos.

Yo, señorías, tengo que decir en nombre de mi partido que, desde luego —además, algunas de las intervenciones parece que se han dedicado a poner en evidencia eso—, nosotros ni obviamos ni renunciamos a los antecedentes parlamentarios y no parlamentarios que hemos tenido, todos, y también de nuestro partido político. Ahí están. Pero también los entendemos, y es más: eso pone en evidencia una cuestión, la complejidad de este asunto. Si no fuese tan complejo, se hubiera resuelto muchos años atrás. Eso le he dicho también en mi anterior intervención, y creo que todos podrán compartir esa idea. Sin más, no tiene más. Pero nuestra postura es la que es. La mantuvimos en el debate del Estatuto de Autonomía y se ha mantenido en el debate de la anterior Ley de lenguas también, y yo creo que es firme y clara; tolerante y transigente también con otras opiniones.

Pero yo, señorías, por situar, porque no me gustaría que de este debate se transmitiera o que se pudieran confundir posiciones de partida, quiero decir que la postura del PAR es la del PAR y no es la de ningún otro partido político. Es la del Partido Aragonés. Y he de decir que, cuando llega este proyecto de ley aquí, a estas Cortes, llega con negociaciones y con reuniones previas, con acuerdos y con cuestiones importantes que hemos tenido que hablar y pactar el Partido Popular y el Partido Aragonés. El Partido Aragonés no comparte al cien por cien la postura que en este tema tiene el Partido Popular, como tampoco a la inversa, cosa que me parece sumamente respetable y legítima. Y nuestra postura se ha plasmado en este proyecto de ley también.

Y les digo..., y termino, señor presidente, muy brevemente, pero que quede clara. La postura del Partido Aragonés es la siguiente: sí a la existencia de una Ley de Lenguas, sí al reconocimiento legal de que existen lenguas aragonesas con sus modalidades lingüísticas, sí —esta es nuestra postura— a una ley que preserve, proteja y que mantenga las lenguas aragonesas, sí al reconocimiento de derechos lingüísticos de los ciudadanos aragoneses, sí a una educación voluntaria...

El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: ... —termino—, de nuestras lenguas aragonesas y sí —y así lo dice el proyecto de ley también— a que hay una lengua aragonesa propia de la zona oriental, con sus diversas modalidades lingüísticas, y una lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica, con sus diversas modalidades lingüísticas. Esta es la postura del PAR. Me gustaría, por favor, que no se trasladase la que no es.

Muchas gracias. *[Aplausos.]*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.

Señora Pérez, puede intervenir.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el escaño]: Sí. Brevemente, señor presidente.

En primer lugar, lamentar que con las decisiones que está tomando el Gobierno de Aragón, el Partido

Popular fundamentalmente —y hoy hemos visto la primera ley—, retrocedemos más de treinta años atrás. Lamentar que el Partido Popular, para dar soluciones a los problemas, tenga que volver la vista atrás y perdamos derechos. Y reconocer algo que ha dicho la señora Herrero. Es cierto, es un asunto, es una situación compleja, complejísima. En eso coincidimos, pero no sé si esta es la mejor manera de resolverla, señora Herrero, con un voto en contra de tres partidos de la oposición, de treinta diputados en esta Cámara, con un voto desfavorable del Consejo Escolar de Aragón, que están representados no solo los partidos políticos, sino el conjunto de la comunidad educativa, científica y universitaria también, voto en contra, y excluyendo a la universidad, esa institución que tanto defendía y enarbolaba la señora Ferrando para justificar su posición, excluyéndola precisamente como miembros de esa academia, como en este momento, y con la actual ley vigente, están. Entendemos que así es como se resuelven, como se atienden las cuestiones técnicas, lingüísticas, científicamente, no convirtiéndolo en una cuestión política, que en definitiva es lo único —creo— que acabamos de hacer en este día.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.

Señora Ferrando, puede intervenir.

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, señora Ibeas, creo que tanto usted como yo compartimos la misma formación, filológica. Luego poner en tela de juicio mi conocimiento acerca del tema creo que sobra. En cualquier caso me ha pedido usted una autoridad al respecto. Yo no sé si le basta con la autoridad que proporcionan la profesora Martín Zorraquino, el doctor Monge, don José María Enguita y tantos otros. En cualquier caso, de lo que se ha tratado aquí hoy he llegado a dos conclusiones muy claras, y es que por lo visto la esencia del aragonesismo radica o bien en *charrar* fabla, o bien en ceder territorio a nuestros vecinos. Y por ceder que no quede *[murmullos],* porque, si ya tienen nuestros bienes, pues ¿qué más da si además les proporcionamos cincuenta y cinco o sesenta localidades más? En definitiva, señora Ibeas, plantéense seriamente si prefieren rendir cuentas ante sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña en el Parlamento Europeo o ante los aragoneses, a los que, por supuesto, tendrán que explicar también que ahora, para poder desenvolverse por el mundo, ya no hace falta el inglés: hace falta la fabla. No se enfaden con nosotros, señora Ibeas, y enfádense más con el Partido Socialista, al que apoyaron en 2009 para que su ley terminara en el cajón de las facturas.

Y, hablando de facturas, señora Pérez, ¿han valorado ustedes el coste de sus propuestas? *[Murmullos.]* Como ha mencionado antes sus enmiendas parciales... Porque yo creo... Le estoy haciendo una pregunta retórica. No, no, el coste de sus propuestas, de las propuestas del PSOE.

El señor PRESIDENTE: Señora Ferrando, vaya acabando.

La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde el escaño]: Les decía que es una pregunta retórica, claro, porque, a ustedes, el coste —cualquier coste, da igual— les deja absolutamente indiferentes, acostumbrados como están a dejar por donde pasan todo un reguero de deudas y facturas sin pagar.

Muchas gracias. *[Aplausos.]*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: debate...

Señor Sada, a ver, tiene la palabra.

El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el escaño]: Señor presidente, simplemente por contestar una pregunta directa que se nos ha hecho.

El señor PRESIDENTE: A ver, conteste la pregunta, señor Sada. Breve.

El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el escaño]: La voy a contestar simplemente —brevísimo—. Señora Ferrando, si lo que le preocupa es el coste de algunas medidas, no se preocupe usted, porque estamos dispuestos a retirar aquellas que tengan un coste adicional importante, pero, desde luego, no aquellas que sean para garantizar simplemente el derecho de los ciudadanos a esta cuestión. Por lo tanto, si quiere que el doblaje se retire, lo retiramos, si ese es su problema, pero, desde luego, ese no es el problema de las lenguas y de la ley de lenguas en Aragón.

Nada más. *[Aplausos.]*

El señor PRESIDENTE: Señor Sada, queda dicho. Pasamos... Señora Ferrando, yo creo que vamos a terminar el debate, que yo creo que hemos debatido... Un momento, señor consejero de Hacienda *[murmullos],* que ahora le daré el uso de la palabra.

Debate y votación de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón por los Grupos Parlamentarios Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida de Aragón. Para la presentación del proyecto tiene la palabra —el señor Soro todavía no...— el señor consejero de Hacienda y Administración Pública por tiempo de diez minutos.

Enmiendas a la totalidad, de devolución, presentadas al proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (SAZ CASADO): Buenos días, presidente.

Señorías, comparezco en esta Cámara para presentar, en nombre del Gobierno, el proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas para este ejercicio siguiente. Intentaré adaptarme a los diez minutos que tengo, que son escasos, pero intentaremos que sean diez minutos exactamente.

La ley de medidas fiscales es una ley eminentemente hacendística. Este año, por ejemplo, si se comprueban los treinta y cinco artículos que contiene la ley de medidas, el proyecto de ley, veintiocho son en materia

tributaria o hacendística, y solamente siete en materia puramente administrativa y unas modificaciones de muy poco calado.

Por lo tanto, desde un punto de vista fiscal, se tienen en cuenta dos prioridades: la primera es la de ayudas fiscales con un sentido social, un punto de vista social, como veremos fundamentalmente en las bonificaciones que afectan renta o impuestos de transmisiones patrimoniales, e igualmente con una segunda vertiente, que es la de focalización en la creación o en el mantenimiento del empleo, dirigido especialmente hacia los autónomos o hacia las pequeñas empresas, y desde un punto administrativo el objetivo es la simplificación y lograr una serie de simplificaciones organizativas, eficiencias organizativas.

Paso directamente a las materias fiscales. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas, la primera modificación que se propone es la de una corrección en el siguiente sentido. La bonificación fiscal que había para el segundo hijo discapacitado en el impuesto sobre la renta de las personas físicas estaba redactada de tal forma que la bonificación solamente se podía aplicar al segundo hijo discapacitado, pero no cuando era al revés; por lo tanto, es una modificación técnica para que el hijo discapacitado, sea el primero o sea el segundo, pueda mantener la misma modificación. Por lo tanto, es corregir ese pequeño absurdo jurídico que simplemente generaba beneficios a favor del segundo hijo discapacitado.

Una segunda deducción en materia del impuesto sobre las rentas físicas que traemos a esta Cámara es la propuesta en materia de *business angels* o de protectores de empresas, ampliando un poco las protecciones del año pasado. Hay dos correcciones. La primera es que la deducción que se introdujo el año pasado del 20%, que lo era exclusivamente a las empresas que eran de I+D, este año se amplía a todas las empresas porque consideramos que, ampliando el abanico, son más las empresas que pueden contribuir a generar empleo, a crecer en el empleo en esta comunidad autónoma. Y la segunda medida que traemos en relación con los *business angels* en concreto es que, el año pasado, el periodo de mantenimiento de las inversiones que tenían que acometer esas empresas de *business angels* era de cinco años, y lo que hemos hecho es rebajarlo a tres años para, de alguna forma, dulcificar, aligerar la posibilidad de que se animen más empresas por este mecanismo a la hora de crear industria, crear empresas y, por tanto, crear empleo. Es una medida de sentido socioeconómico.

Dentro del impuesto sobre la renta de las personas físicas tenemos también una deducción por compra de vivienda rural, que ya existía el año pasado, pero que hemos hecho una matización técnica, porque, tal como estaba redactado, se estaba perjudicando en las declaraciones de renta..., la bonificación estaba dirigida fundamentalmente a las declaraciones de IRPF que fuesen conjuntas, mientras que creemos que debe ser un efecto neutro y que, por lo tanto, no hay que proteger ni la declaración conjunta ni la individual, y hemos hecho la corrección para que se queden en el mismo equilibrio de la bonificación tanto las presentaciones de la declaración de la renta de las personas físicas individuales como conjunta, lo que significa una protección del mundo rural, una vertebración del territorio y pensar en aquellas personas que no necesariamente forman parte de una unidad familiar.

Dentro del impuesto de la renta de las personas físicas traemos a colación una bonificación que ya ha sido anunciada anteriormente, que es la deducción por compra en los libros de texto. Especialmente son dos áreas que hay que resaltar en esta bonificación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y es que el objetivo del Gobierno es beneficiar a aquellas personas con unas rentas más bajas en lo que significa la adquisición del material, de los libros escolares de educación primaria o de educación secundaria, y al respecto se han establecido una limitaciones, unos límites de renta, que rondan hasta doce mil quinientos en individual tope y en veinticinco mil euros en declaración conjunta, por lo que afecta a los dos primeros hijos. La bonificación, en función de esa escala, va a ir desde los cien euros a los 37,5 euros por cada uno de esos hijos. Hay una bonificación adicional vinculada a esta deducción por compra de libros, que va dirigida especialmente a aquellas familias numerosas, y, en este sentido, la ayuda por libros que van a recibir estas personas es cuantitativa, es decir, por cada hijo. En el caso de declaración individual son setenta y cinco euros, y en el caso de declaración conjunta son ciento cincuenta euros. En realidad, la valoración de esta deducción, que es oportuna en este momento, se calcula según nuestras bases que alcanzará a cerca de setenta y cinco mil beneficiados, y, por lo tanto, es una contribución del Gobierno de Aragón a una visión social respecto de su política fiscal.

Continuando con el impuesto sobre la renta, también tenemos otra visión social desde la política fiscal, que es en el caso de que haya cesiones de viviendas para un subarriendo social, es decir, aquellas viviendas que sean aportadas por un dueño al Plan de Vivienda Social tendrán una bonificación en su declaración de renta, en la propiedad, en el 30%, siempre que sea en las condiciones que se establezcan tal como venga el desarrollo posterior por parte del Gobierno. Por lo tanto, creemos que en este momento hay que proteger estos instrumentos que el Gobierno pone sobre la marcha, y respecto a los cuales los incentiva, los fomenta con esta política fiscal con sentido social.

Abandonando el impuesto sobre la renta de las personas físicas, entramos ya en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y son tres o cuatro las que voy a resaltar aquí especialmente. La primera es una corrección también respecto al año pasado que amplía la bonificación, de alguna forma dinamizando la creación de empresas y la creación de empleo, y es que, en la redacción anterior, del año pasado, se establecía una serie de bonificaciones que se mantienen, pero que queremos dejar claro que, para mantener esas bonificaciones, lo que se tiene que hacer es mantenerse la posición del empleo en comparación con el año pasado. Por lo tanto, creemos que es importante. Lo que hay que hacer en estos momentos es proteger el empleo y, por tanto, no bonificar si no hay protección de empleo.

Una segunda medida en transmisiones es importante también porque ha sido reciente. Todos sabemos que ha habido una serie de inundaciones los días 19 y 21 de octubre en Aragón, especialmente en el norte de Aragón, que produjeron determinados daños. En el

caso de que, como consecuencia de esas inundaciones o de esos daños, se haya producido la destrucción de una vivienda habitual y la familia o la persona necesite obviamente, como consecuencia de esas inundaciones, adquirir una nueva vivienda tiene una bonificación del 90% tanto en transmisiones patrimoniales como en actos jurídicos documentados, siempre que... Hay una serie de límites: que la renta no supere los cincuenta mil euros, que el valor de la vivienda no supere los doscientos mil, etcétera... Que haya sido vivienda habitual aquella que se destruyó y que sea vivienda habitual aquella que nuevamente debe adquirir. Por lo tanto, lo que el Gobierno de Aragón hace es de alguna forma, si se ha producido esa situación, por lo menos darle una bonificación del 90% en los dos impuestos que están actuando en ese momento, que son transmisiones y actos jurídicos documentados.

Otra medida que traemos de transmisión y actos, importante en este momento, es la de la dación en pago. Puede darse el caso de que haya familias o haya personas que no puedan atender sus compromisos financieros y, por lo tanto, tengan que acudir a la figura de la dación en pago, es decir, entregar la vivienda a la entidad financiera, que es la que pasa a ser propietario, y podría darse el caso, como ha sucedido o puede estar sucediendo, de que firme un contrato de alquiler para seguir utilizando como arrendatario esa vivienda y, además, incluir una cláusula de opción de compra por si mejora en su condición económica en el futuro para poderla rescatar. En el caso de que eso suceda, en lo que es la configuración de la opción de compra hay una bonificación del cien por cien —por lo tanto, no se va a pagar nada ni en transmisiones ni en actos jurídicos documentados—, y, en el caso de que en el futuro hubiese un mejoramiento de su condición económica y pudiese volver a recomprar esa casa, tampoco hay ninguna..., es decir, la bonificación es del cien por cien en transmisiones y actos jurídicos documentados. La bonificación no afecta a las entidades bancarias en lo que sería la constitución de la figura jurídica de la dación en pago, y, por lo tanto, en esas no hay ninguna bonificación.

Y, al hilo de esta bonificación del Gobierno de Aragón en materia de dación en pago, tiene una extensión, un impacto sobre el impuesto de la renta de las persona físicas, y es que, además, esa persona que se queda como inquilino en lo que hasta ese momento venía siendo su vivienda, además, tiene una bonificación del 10% en la cuota íntegra del tramo autonómico por las rentas que satisfaga como inquilino hasta un máximo..., o sea, el 10% de las cantidades, hasta un máximo de una base de inversión de cuatro mil ochocientos euros. Por lo tanto, el Gobierno contribuye de alguna forma a que, si se produjesen esas circunstancias, por lo menos, no gravar económicamente.

Y ya por lo demás hay una serie de adaptaciones, adaptación de la fiducia. En Aragón tenemos una foralidad y tenemos un Derecho civil especial. Nosotros lo respetamos, y qué menos que adaptar la legislación tributaria a esa figura, a esa peculiaridad del ordenamiento jurídico aragonés.

Por lo demás, en impuestos sobre sucesiones, hay que resaltar el mantenimiento de la bonificación general, que se extiende al 33%, es decir, en este año conseguimos una bonificación de una tercera parte del compromiso que había adquirido este Gobierno en toda la legislatura. Por lo tanto... *[Corte automático del sonido.]* Un minuto y terminaré.

Y en materia de tasas, simplemente, son una serie de actualizaciones básicas de tasas sin nada que resaltar.

Y en materias administrativas, brevemente —lo he dicho al principio—, solo son siete, de los treinta y cinco artículos, en materia administrativa, y son básicamente puntuales, como es la modificación de una técnica legislativa básica o la corrección de determinadas materias, de la normativa en víctimas del terrorismo, con la que todos estamos de acuerdo, o que se puedan hacer subvenciones en materia de promoción de empleo.

Y tres o cuatro medidas más que son hacendísticas, como la gestión de personal, resaltando especialmente alguna medida en gestión de personal que nos había provocado cierta provocación de bolsas de trabajo de funcionarios, que es la de que en el caso de que haya que hacer adscripciones provisionales, aunque se mantiene, por supuesto, la adscripción provisional y se le mantiene la garantía retributiva, si no hay plaza al menos en dos niveles inferiores, se le dará la que esté disponible en ese momento.

Para completar, simplemente dos normas más, que son una de modernización, como es la obligatoriedad de que cada vez que haya un programa de obras públicas en el territorio deberá hacerse un estudio para el cableado electrónico de nuestro territorio —una medida de modernización—, y una última medida de racionalización, como, por ejemplo, es la supresión de la oficina de Madrid.

Concluyo ya. En definitiva, treinta y cinco artículos que están destinados, sin duda ninguna, a tres sensibilidades: la sensibilidad social del Gobierno (inundaciones, daciones en pago, viviendas sociales, vertebraciones del territorio, bonificaciones a aquellos colectivos más perjudicados); en segundo lugar, sensibilidad económica, porque se intenta mantener y contribuir a la creación de empleo a través de *business angels* y determinadas medidas; y, en tercer lugar, la racionalización administrativa y la simplificación. Por tanto, yo creo que en esta ley ponemos en marcha lo que es una vertiente social de la política tributaria del Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

Ahora sí, señor Soro, puede intervenir por tiempo de diez minutos.

El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, señor presidente.

Señorías.

Ayer, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista registró un recurso contra el acuerdo de la mesa de la Comisión de Hacienda por el que se aceptan las enmiendas, por el que se admiten a trámite las enmiendas formuladas al proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas. Basamos este recurso en una enmienda en concreto, la 260, una enmienda del Partido Aragonés que pretende de forma indirecta modificar el proyecto de ley de presupuestos para liberar —dicen ellos— parte de los destinos destinados al Fondo de Contingencia con arreglo a lo que establece la norma-

tiva vigente y, además, se incorpora a esta ley de medidas tributarias una materia que el autor de la iniciativa, el Gobierno, no había previsto. En el recurso están los argumentos jurídicos. No es el momento de exponerme. Sí que quiero exponer muy brevemente cuáles son los efectos jurídicos de la interposición del recurso. Están recogidos en el artículo segundo de la resolución de la Presidencia de las Cortes de 27 de marzo del noventa y seis, sobre tramitación de los recursos contra acuerdos de las mesas de las comisiones o de las Cortes. Este artículo 2 dice que la presentación del recurso suspenderá la tramitación correspondiente hasta que la Mesa de la Cortes decida. Tramitación correspondiente, desde el punto de vista de Chunta Aragonesista, es la tramitación del proyecto de ley, de todo el proyecto de ley, no únicamente de la enmienda.

Hoy mismo se nos ha notificado un acuerdo de la Mesa de las Cortes, que ha tenido lugar también hoy, antes del Pleno, por el que se acuerda suspender la tramitación de esa enmienda, de la enmienda objeto de recurso, pero no del resto de la tramitación del proyecto de ley de medidas financieras, fiscales y administrativas. Expreso desde esta tribuna el desacuerdo del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista con este acuerdo. Defendemos que la suspensión debería haber afectado, con arreglo a lo que dice el artículo 2 de la resolución de Presidencia, a la tramitación del proyecto de ley, y ahora mismo, en este momento, no deberíamos estar tramitando, no deberíamos estar debatiendo esta enmienda a la totalidad.

En todo caso, no conocemos informes jurídicos que hayan basado el acuerdo de la Mesa, y en todo caso vamos a estar a la espera de lo que, por lo que sabemos, mañana la Mesa y Junta de Portavoces decidirán respecto del recurso. En ese momento sí que habrá informes jurídicos, en ese momento podremos defender, por medio de nuestra portavoz, el recurso que hemos presentado, y, evidentemente, según lo que mañana la Mesa y Junta decidan, tomaremos decisiones. Ya hemos anunciado que estamos en absoluto desacuerdo con esa enmienda y con las que aún no conocemos, que han debido de presentarse al amparo de esta enmienda en la ley de presupuestos, y, como digo, tomaremos decisiones una vez que conozcamos esta situación mañana.

En todo caso, hoy lo que se está debatiendo es la enmienda a la totalidad, y no debería ni defenderla porque el señor consejero lo ha hecho por mí. Muchas gracias, señor consejero. Le ha destinado exactamente como un minuto a decir lo que no es tributario de esta ley, porque usted reconoce que todo lo demás no debíamos estar debatiéndolo ahora. Ahora es momento de hablar de lo tributario —si me apura, de las cuestiones de personal—, pero no, evidentemente, de todas las materias que contiene este proyecto de ley. Y hoy además es la vez que más rápido le he oído hablar, hoy, más que estar en la academia Saz, hoy era como un tribunal de oposiciones, y teníamos ahí al opositor cantando el tema rápido, rápido para poder decir cosas y, sobre todo, para dejarse un trozo, un hueco para lo que no es propiamente de esta ley.

¿Cuál es el problema? La ley no son treinta y cinco artículos, que luego sigue. La parte final de la ley (adicionales, transitorias, finales) también forma parte de la ley, exactamente igual que el texto articulado. ¿Cuál es el problema? Que en el articulado, los treinta y cinco artículos, modifican ustedes catorce leyes, catorce. Tres de ellas tributarias, efectivamente —nada que objetar—, pero, además de eso, modifican la Ley del presidente y del Gobierno, la de víctimas del terrorismo, la de función pública, la de hacienda, la de contratos del sector público, la de promoción del empleo, la de medidas urgentes en política de vivienda protegida, la del juego, la de espectáculos públicos, la de medidas tributarias del año 2003 y la del Banco de Sangre y Tejidos. Todas estas leyes las modifican ustedes en el texto articulado, leyes que son absolutamente inconexas, heterogéneas entre sí, que no tienen un motivo para que se tramiten conjuntamente.

Como digo, la ley luego sigue. Hay disposiciones adicionales. Afectan esas adicionales a seis materias: al Instituto Aragonés de Estadística, a infraestructuras para redes de comunicaciones electrónicas en proyectos nuevos de obras públicas lineales, a los casinos de juego, a la planificación de máquinas de juego, al Instituto Aragonés de Enseñanzas Artísticas Superiores y a los centros de atención primaria.

La ley sigue. Llegamos a las transitorias, y otros cuatro sectores afectados por la ley. Hay una primera sobre beneficios fiscales, pero luego también normas sobre vivienda protegida, publicidad, promoción y patrocinio de las actividades de juego y apuestas, autorización y explotación de las máquinas de juego.

La ley sigue. Llegamos a las derogatorias, y se afectan seis leyes, algunas ya modificadas con anterioridad: la de ordenación y participación en la gestión del agua, tasas y precios públicos, la del presidente y del Gobierno, la del juego, la de medidas fiscales que aprobaron ustedes hace unos meses para el 2012 y la de enseñanzas artísticas superiores.

La final primera sigue también afectando a seis textos legales, que acuerda, que encarga el Gobierno refundir: la de contratos del sector público, patrimonio de Aragón —esta es nueva—, regulación y fomento de la actividad industrial —también es nueva—, salud de Aragón, ordenación y participación en la gestión del agua y la del Consejo de la Protección de la Naturaleza. Aquí aparecen cosas nuevas que ni habíamos visto en el articulado ni en las disposiciones adicionales antes de llegar a las finales. Y aún quedan tres finales: una normal, en la que se regula la entrada en vigor; otra que sí que es una materia de tributos, e incluso ya aprovechan para establecer una norma sobre cajas de ahorros.

Esto, señor consejero, no debe hacerse así. No es inconstitucional, y lo sabemos. Sabemos que el Tribunal Constitucional ya ha dicho muy recientemente, además, que esto no es inconstitucional, que se puede hacer —lo ha dicho con discusión, con votos particulares, como bien sabe—, pero el propio Tribunal Constitucional considera que esto es discutible, que no es una técnica legislativa ajustada ni aceptable. Y esto por unos motivos que son evidentes. En primer lugar —hoy se ha demostrado— porque nos están hurtando la posibilidad de debatir sobre todas estas cuestiones de una forma reglamentaria, tranquilamente, en el Pleno, en las comisiones, en la ponencia, y hablar de las cosas. Al final, el problema es que el Gobierno se convierte en Cortes, y lo que el Gobierno trae las Cortes no tienen forma de digerirlo ni de debatirlo ni de apro-

barlo. Y ese es un problema desde un punto de vista de división de poderes, y es que se nos hurta, como digo, la posibilidad de debatir todas esas materias. Por eso es una forma de legislar que no debería hacerse. Lo hicieron el año pasado. Después de muchos años conseguimos que, en esta comunidad autónoma, el Gobierno anterior dejara de hacerlo —que también lo hacía—, dejara de hacerlo, y ustedes han vuelto a las andadas. Se genera una inseguridad jurídica tremenda e incertidumbre sobre cuál es la legislación vigente. El BOA no vale para nada, señor consejero, de esta manera. No sirve de nada consultar leyes en el *Boletín Oficial de Aragón,* porque se han podido modificar en cualquier ley de cualquier manera. Efectivamente, esto es así —usted lo sabe—; otra cosa es que recurramos a colecciones jurídicas de pago, pero, evidentemente, no hay una publicación oficial, salvo en los casos en los que haya textos refundidos.

Todo esto, señor consejero, degrada la capacidad legislativa de estas Cortes; hurta, como digo, el debate a la Cámara, y no hay posibilidad de que haya un debate adecuado. Y —repito— se ha demostrado: pasará la tramitación, como digo, de la ley de medidas fiscales y administrativas, y no se habrá hablado sobre todas las cuestiones de que he estado hablando. Se hablará de tributos, se hablará de otras cuestiones, pero de esto, desde luego, señor consejero, sabe positivamente que no hemos hablado.

Y fíjese la cantidad de cosas que modifican ustedes, la cantidad de cosas que modifican, y hay una que no la tocan —qué curioso—. La Ley de estabilidad presupuestaria de Aragón, la que aprobaron en verano PP y PAR, esa no se toca en esta ley. Por eso mismo, señor consejero, como esa usted no la toca —aunque menean todo el ordenamiento jurídico, esa no la tocan—, por eso mismo, los grupo parlamentario, y menos los que apoyan al Gobierno, no pueden hacer una enmienda para añadir una modificación legal que no había previsto quien ejerce la iniciativa legislativa, que en este caso es el Gobierno. Y esto no lo digo yo, que lo estoy diciendo, pero no es que lo diga yo, sino que lo dice el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice que lo que se ha hecho con la enmienda 260, del Partido Aragonés, no se puede hacer; que el ámbito de debate y de discusión en las Cortes es el que marca, en este caso, quien ejerce la iniciativa legislativa, el Gobierno de Aragón. Si querían modificar la ley de estabilidad presupuestaria, podrían haber remitido o un proyecto de ley el Gobierno o una proposición de ley el Grupo del Partido Aragonés, haberlo debatido, haberlo aprobado, y a partir de ese momento no habría habido ningún problema, efectivamente, en tramitar la ley de acompañamiento o la ley de presupuestos.

En todo caso, como digo, desde el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista estamos a la espera de lo que mañana se decida en la Mesa y Junta de Portavoces con respecto a la admisión a trámite de la enmienda y del recurso presentado por este grupo, y hoy conoceremos, porque aún no conocemos, las enmiendas que posiblemente se hayan presentado a la ley de presupuestos haciendo esa ficción jurídica, como si una enmienda a una ley produjera efectos jurídicos en otro proyecto de ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.

Siguiente grupo parlamentario. Ha presentado la enmienda número 2 Izquierda Unida de Aragón. El señor Barrena, también por tiempo de diez minutos, puede intervenir.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor presidente.

Señorías.

Cuando redactamos la propuesta de devolución de esta ley, teníamos una serie de razones. Hoy tenemos todavía alguna más después de haber oído al señor Saz cómo la ha presentado y cómo la ha defendido.

Nos habíamos situado en plantear la devolución porque creemos que esta ley, como todas las que está trayendo el Gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés a esta Cámara en materia de impuestos, en materia de empleo, en materia económica, en materia de gasto social, todas, todas, absolutamente todas, aceptan sin discusión —yo diría que, además, con aplauso— lo que son las lógicas impuestas por Europa, por la troika europea, que, como saben ustedes, es el Banco Central, es el Fondo Monetario Internacional y es la Comisión Europea. Ninguno de esos entes ha tenido un contraste legítimo para que los ciudadanos y ciudadanas les hayan elegido, les hayan votado, pero son los que están marcando política, y los ciudadanos y ciudadanas que sí que han sido elegidos yo creo que para desarrollar unos programas electorales diferentes de lo que están haciendo son los que luego al final lo aplican.

Pero ya hoy ha rizado usted el rizo, porque al final ha llegado a decir que esta ley lo que reforzaba era la vertiente social de sus políticas. Pero, vamos a ver, ¿qué entienden ustedes por lo social? Porque pensamos que lo social es lo que tiene que ver con la sociedad en su conjunto, con la ciudadanía en su conjunto, pensamos que tiene que ver con la protección del interés general, pensamos que es social preocuparse de los más desfavorecidos, de los que están cayendo en la exclusión, de los que no encuentran trabajo, de los que se les agotan las prestaciones por subsidio y por desempleo... Pensamos.

Y, precisamente, si de verdad en la ley que hoy vamos a abrir el proceso resulta que viéramos, primero, que es una ley de medidas tributarias, que tiene muy poquito... Ya se lo ha dicho el anterior portavoz, no voy a dedicarme más, pero de medidas tributarias tiene muy poquito; de utilizar la capacidad del cajón de sastre que es una ley de acompañamiento para modificar todas las leyes que ustedes consideran, de eso tiene bastante. Pero de la parte tributaria que tiene que ver con lo que soportaría la capacidad recaudatoria del Gobierno de Aragón para hacer las políticas sociales, de eso tiene muy poco. ¿Qué ocurre? Que los presupuestos, de políticas sociales, no tienen nada tampoco, entre otras cosas porque el gasto social en estos presupuestos todavía se reduce con relación al año anterior en quinientos cuarenta y siete millones de euros. Por eso, ustedes no contemplan esa capacidad recaudatoria que tienen para buscar lo que sería el reequilibrio.

Porque ustedes, además, llegan incluso a decirlo casi así como, encima, tratando de convencernos de que es que, en tiempos de crisis, esto de los impuestos..., que no, que no se pueden subir impuestos, por-

que tiene mala prensa, porque las empresas no pueden pagar impuestos, porque la gente tiene que tener impuestos en el bolsillo para poder consumir... —toda esa serie de cosas que nos cuentan—. Pero la salida de la crisis desde la vertiente social no se puede dar sin impuestos. Imposible. Porque, al final, la no recaudación de impuestos nos está llevando, como creo que se está viendo, a incrementar cada vez más la desprotección social, la pérdida de calidad en los servicios públicos y, en definitiva, agravar la situación de quienes más necesitarían que, en estos momentos, la sociedad se preocupara de ellos.

¿Qué ocurre? Que es que, para ustedes, el concepto que asocian a impuestos es pagar, no es el de inversión social. Por lo tanto, como no es el de inversión social, no venga usted aquí a decir que es que esta es la vertiente social de la parte de la política recaudatoria, porque no lo es. Porque, si fuera social, ustedes incrementarían la recaudación a las rentas más altas por la vía del tramo autonómico del IRPF. Si fuera social, ustedes, en lugar de rebajar el impuesto de sucesiones más de lo que ya estaba, al menos lo mantendrían. Pero no, lo rebajan. Si de verdad tuviera una vertiente social, utilizarían la capacidad recaudatoria que les dan el Estatuto y la Constitución para, con criterios de progresividad, hacer que quien más tiene, quien más patrimonio tiene, quien más renta tiene contribuyera más. Si eso lo hicieran, yo le aceptaría que esta es la vertiente social. Pero, como no lo hacen... Oiga, estampitas para la galería..., ya vale. Reconozcan lo que son. Antes nos decían: «No tienen ustedes valor». Ténganlo. Digan: «Mire, no queremos recaudarles más ni a los bancos...». Gracias a esa maravillosa decisión del Gobierno del señor Rajoy de —eso ya es el súmmum— crear un gravamen a cero. Eso pasará a los anales de la economía en las facultades, seguro. Pero, en definitiva, señor consejero, digan claramente qué es lo que quieren hacer, pero no lo disfracen.

Habla usted de la dación en pago. Yo no le discuto que lo que ustedes han planteado de la dación en pago para algún caso sirva. Pero ¿sabe usted cuántos desahucios diarios hay en Aragón, no? Hoy mismo, por ejemplo, sabe que en los juzgados —no sé si se habrán producido ya— había dos ejecuciones. Con eso no lo resuelven. Entonces, dejen de dar la imagen de que se han preocupado del problema de la dación en pago. No se han preocupado. Si siguen sin atreverse a imponerles a los bancos nada...

Dice usted: «En lo que tiene que ver con las tasas, no hay nada que resaltar». Hombre, ¿y por qué suben la tasa del canon de saneamiento un 10%? Pero ¿cómo que no hay nada que resaltar? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Tendrá algo que ver con los problemas que está habiendo con la gestión del Plan de depuración de aguas? ¿Tendrá algo que ver con eso? ¿O será porque esto lo han encontrado..., y sí que les preocupa ese afán recaudatorio que va a toda la ciudadanía, mientras no están dispuestos a recuperar, por ejemplo, el impuesto sobre las grandes superficies comerciales? ¿Y le parece a usted social eso? ¿El de los tendidos aéreos está? Había unos cuantos más.

El de las propuestas que les hace constructivas la oposición, esa oposición que siempre nos dice la señora Herrero que no nos gusta nada de lo que hace el Gobierno... A ver si les gusta algo. ¿Más capacidad de recaudar gravando a las rentas más altas, que es otra de las propuestas que hay para tener más dinero para gasto social? Podría ser, si quiere usted, una idea que estamos haciendo.

Mire, le han añadido ustedes otro tema más con lo que ha ocurrido en los últimos días, y es que es una ley que para la oposición nos han cambiado las reglas de juego. No digo el Gobierno, pero, como creo que también estará pactado, igual que casi todo, entre Partido Aragonés y Partido Popular, al final son cómplices. Y es por qué se puede plantear una propuesta de modificar una ley por la vía de la ley de medidas que, desde el punto de vista formal —vamos a ver también qué pasa con todo esto—, no debería poder hacer ningún grupo, puesto que esto es una cuestión que debería venir del Gobierno. Entonces ya nos lo explicarán. Y lo que nos explicarán, según cómo acabe esto, es por qué unos pueden hacer trampa y otros no. Y no me coja la palabra como que yo quiera hacer trampas, que no. Que no, que no... Que es que lo que no quiero es que haga trampas nadie, y mucho menos los grupos parlamentarios en esta Cámara. Y eso es lo que hay que evitar, y eso es lo que hay que conseguir.

La otra cuestión que de su intervención nos lleva a pedir con más vehemencia la retirada, y son las disfunciones que se pueden producir, que las vemos, entre la parte de ingresos que aparece en el presupuesto que votaremos antes que esta ley de medidas —sígame—, la parte de ingresos del presupuesto que votaremos antes que esta ley de medidas no están soportados con la capacidad que le va a dar luego después la ley de medidas. Por lo tanto, es incluso errónea. Esta ley de medidas, si se aprueba tal y como ustedes la traen, ¿sabe lo que va a significar, señor consejero? Que el presupuesto que después se apruebe, a partir de marzo, ya no va a valer. Y, por lo tanto, están haciendo otra doble trampa. Porque no van a recaudar lo que dicen que van a recaudar, y eso les va a servir —es verdad que puede que sea ese el objetivo— para luego después aplicar más recortes porque no salen las cuentas. Pues, miren, las cuentas no les van a salir, pero están a tiempo de que les salgan. Estudien las enmiendas que les estamos presentando, las enmiendas de los otros grupos de la oposición, que seguro que habrá buenas ideas para resolver el problema de los ciudadanos y para incrementar la capacidad de hacer políticas sociales, que es lo que creo que, si usted es verdad que lo ha dicho, que quiere que esto tenga una vertiente social, dótensela, porque en estos momentos, desde luego, no la tiene.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.

Turno en contra. El Grupo Parlamentario del Partido Popular. El señor Garasa, por tiempo de diez minutos, puede intervenir.

El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, señor presidente.

Señorías.

En nombre y representación de mi grupo parlamentario señalaré el contenido de nuestra posición en contra a la enmienda de totalidad al proyecto de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón para el 2013, presentada por los Grupos

Parlamentarios Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, así como al mismo tiempo fijar la posición política del Grupo Parlamentario Popular en relación con las medidas fiscales y medidas administrativas y otras normas que se modifican en el mismo, dando apoyo al Gobierno de Aragón, vista también la postura del resto de los grupos, y una vez leídas las enmiendas presentadas.

El Grupo Parlamentario Popular y este diputado que les habla en su nombre defienden este turno en contra de lo manifestado a la enmienda a la totalidad y efectuado al proyecto de ley por Chunta Aragonesista y el señor Soro e Izquierda Unida por el señor Barrena.

Respecto de las intervenciones que hemos escuchado hasta ahora, acusando del uso incorrecto o de trampas de esta ley con alguna enmienda concreta, decirles, señorías, que los informes jurídicos se acatan tanto cuando son favorables a nuestras posiciones como cuando no lo son. Señor Soro, parece que le preocupa más a usted un aspecto formal que la decisión de librar unos fondos para los aragoneses que se encuentran en situación vulnerable —y que usted, por cierto, tanto reclama—. No acabo de entenderlo —o tal vez sí que lo entienda—. Señor Soro, se lo digo con todo el respeto, porque he tenido ocasión, al ser públicas, de leer las enmiendas que su grupo ha realizado, y, en las que en las mismas (solo como ejemplo, la 194, la 269, la 272, la 274), la motivación de su texto —y lo pongo entre comillas— dice igual que el año anterior: «La modificación de numerosas leyes de contenido altamente heterogéneo mediante las leyes de medidas fiscales y administrativas constituye una técnica legislativa discutible que origina una evidente incertidumbre sobre la normativa vigente, lo que representa un riesgo para la seguridad jurídica, garantizada por el artículo 9.3 de la Constitución, y además hurta el debate parlamentario específico y suficiente...». Y etcétera, etcétera. Y, por todo lo anterior, piden la supresión de determinados artículos, como ya hicieron el año pasado, señor Soro.

Señor Soro, por otra parte, no nos extraña su enmienda a la totalidad, que usted tenía que mantener, tal vez muy a su pesar, puesto que en la misma ley para el 2012 usted admitió, porque era irrebatible, la constitucionalidad y legalidad de este tipo de leyes. A pesar de ser legal, y hoy día casi ha dicho lo mismo, esta mañana, dijo que se le hurtaba a las Cortes la posibilidad de debate, que desde el punto de vista político era rechazable, que crea inseguridad jurídica, que era una falta de respeto democrático... Y estuvo desgranando en la anterior ley, durante dos minutos y medio, según su medición, las leyes que se modificaban. Y esto es así porque usted quiere que así sea. El debate es abierto; otra cosa es el poco o mucho tiempo de exposición. Pero, señor Soro, aquí no se ha debatido nada sobre la misma, y eso que este Parlamento para esto está. Lo que sí usted dejó claro es que, aun cuando aquí dentro está el centro de la vida política aragonesa, como siempre dice con razón la presidenta del Gobierno de Aragón, usted dijo en aquel momento que, para la siguiente ley de medidas, que precisamente es esta, aun sin saber su contenido, ya avanzó su enmienda a la totalidad. Por eso —repito— no nos ha extrañado su postura, y seguro que este año nos dirá lo mismo para el año siguiente, 2014. ¿Usted, señor Soro, nos dice lo que es democracia parlamentaria? Es decir, ¿que, si no se hace lo que usted dice en forma y fondo, ya no hay democracia en las Cortes de Aragón? ¿Qué nos pasaría si ustedes gobernaran esta comunidad? Pues difícil respuesta, que no entro ni siquiera a considerar.

Señor Soro y señor Barrena, este proyecto de ley ahonda en la máxima seguridad y garantía jurídica, como no puede ser de otra manera. Lo hemos repetido varias veces. Todas las leyes son con carácter de permanencia, pero eso no obsta para que en un momento determinando se adecuen a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, y atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Y esto en su parte lo indica el artículo 3.1 del Código Civil en cuanto a la aplicación de las normas jurídicas —y usted, señor Soro, lo sabe mejor que yo—. Sin embargo, la ley de presupuestos, por otro lado, posee un contenido mínimo, necesario, indisponible, constituido por la previsión anual de la totalidad de los gastos e ingresos del sector público y la consignación del importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado, y para el periodo de un año en concreto. Esa es una de las diferencias con esta ley.

No voy a entrar jurídicamente a rebatir a mayor abundamiento sus enmiendas a la totalidad por la numerosa doctrina que ustedes conocen del Tribunal Constitucional desde 1993 a 2011, que avala estas leyes de medidas, ya que estas recogen todas aquellas materias que quedan excluidas y son paralelas a las leyes de los presupuestos anuales respectivos. La singularidad de las leyes de medidas fiscales y administrativas es que no tiene un objetivo único y singular, y ya lo dijimos: su singularidad radica en constituir un cuerpo heterogéneo de disposiciones que son aprobación y tramitación conjunta y tienen conexión jurídico-instrumental con unos presupuestos también heterogéneos.

Expuesto lo anterior, y habiendo dejado claro que la ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el Gobierno de Aragón, a la que los Grupos Parlamentarios Chunta Aragonesista e Izquierda Unida han presentado enmienda a la totalidad, por mucha controversia que cree, es consecuente con su espíritu de total transparencia y no infringe ley alguna ni hurta a grupo parlamentario alguno sus posibles comentarios o propuestas sobre la misma, como en cualquier ley ordinaria —y así lo han demostrado todos los grupos parlamentarios con sus enmiendas a esta ley, incluidos los propios de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida—, por ello, señores Soro y Barrena, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la enmienda a la totalidad presentada hoy aquí por sus grupos parlamentarios.

Dicho lo anterior, de forma ya muy breve, indicamos lo que la misma recoge. Esta nueva ley está presidida por la austeridad presupuestaria en un marco temporal especialmente castigado por la crisis económico-financiera que afecta a los ciudadanos, entidades privadas y a las administraciones públicas. En esta ley se hace una prudente extensión de beneficios fiscales a los aragoneses y se desarrollan especialidades tributarias aragonesas. Todo ello presidido por el equilibrio entre la suficiencia financiera de la Hacienda pública y el reparto equitativo de la carga tributaria.

Las medidas que la ley recoge se agrupan en medidas de carácter social, de corte empresarial y, ob-

viamente, las que se derivan de una correcta técnica tributaria, como ya ha explicado el señor consejero.

Así, tenemos una deducción en el IRPF autonómico por adquisición de libros de textos en función del nivel de renta, número de hijos y situaciones familiares difíciles. Se introducen dos deducciones en el IRPF, una en cuanto al tema de la vivienda y la dación en pago, y otra cuando se entreguen vivienda para arrendar a ciudadanos menos favorecidos. Lo mismo en el ITP para todo lo relativo a las daciones en pago en caso de insolvencias, como se estaba demandando. También quedan recogidas las aportaciones de los *business angels* a emprendedores, las herencias destinadas para crear empresas y el reparto de la carga tributaria en el sector del juego en Aragón. Se regula la fiducia sucesoria aragonesa, permitiendo el pago del impuesto con cargo al caudal relicto, que antes no estaba. En ITP y actos jurídicos documentados, entre otros, se tiene en cada caso muy en cuenta a los afectados por las recientes inundaciones del mes de octubre pasado. Y en el impuestos sobre sucesiones y donaciones se va aumentando la exención como parte del programa de investidura de nuestra presidenta.

En cuanto a las tasas se incrementan en un 3,4% y hay modificaciones técnicas en las mismas, y solo se crean dos nuevas tasas: una sobre ocupaciones de bienes de dominio público aeronáutico y otra sobre determinaciones analíticas muy trascendentes en nuestra sanidad aragonesa.

En cuanto a la Ley de medidas administrativas, se proponen modificaciones legislativas a tenor de la sentencia del Constitucional 136/2011, que avala las leyes de acompañamiento a los presupuestos. Aun cuando las medidas administrativas tienen un contenido heterogéneo, persiguen regular cuestiones organizativas y procedimentales, así como las legislativas puntuales por necesidades que se han detectado derivadas de la difícil coyuntura económica actual de la sociedad. Cabe reconocer la importancia en la mejora del procedimiento de la elaboración de los proyectos de ley, y se autoriza al Gobierno de Aragón a elevar decretos legislativos dentro de lo establecido en la ley. Se modifican, entre otras, las medidas a favor de las víctimas del terrorismo, se introducen variaciones en la Ley de la función pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y también en materia de subvenciones y en materia de política de vivienda protegida. Igual en empleo, actividad del juego y adecuación de horarios a los centros de salud en atención primaria.

Estimamos, señorías, que todo lo expuesto en este proyecto de ley da coherencia legislativa al texto de las leyes escuetamente citadas, conectadas con la de presupuestos por su vocación de ser complemento y compartir con ella una unidad de propósito, aun cuando con procedimiento de presentación diferente, adecuándolas a las singularidades y realidades actuales que defiende el Gobierno de Aragón, sin disfrazar la coyuntura nacional y regional, sino más bien al contrario, buscando la eficiencia máxima en su gestión y abundando en un posterior mejor desarrollo efectivo de la ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 2013.

Gracias, señor presidente. *[Aplausos.]*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.

Turno de fijación de posiciones de los demás grupos parlamentarios. El señor Ruspira puede intervenir por tiempo de cinco minutos.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gracias, señor presidente.

Subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo parlamentario, del Partido Aragonés, ante las dos enmiendas a la totalidad de devolución del partido Chunta Aragonesista y del partido Izquierda Unida, como es lógico, al proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Y me van a permitir en esta intervención de poco más de cinco minutos intentar sintetizar los argumentos que se han presentado por uno y otro partido para intentar transmitir la necesidad de votar a favor de estas enmiendas, cosa que el Partido Aragonés no va a realizar. Y empiezo por el final.

Lo vamos a presentar en siete argumentos.

El primero, de Chunta. Aunque ya pone la tirita por delante y considere constitucional, como viene haciendo referencia la sentencia 136/2011, indica que no resulta conveniente ni ajustada a una técnica legislativa adecuada. Esto no deja de ser un juicio de valor que no compartimos desde el Partido Aragonés, y además es muy sencillo entender que en esta vida hay tantas cosas que no nos gustan y que tenemos que adaptarnos a la realidad.

Un segundo argumento: que modifica, la modificación de catorce leyes vigentes, en muchos casos sin el más mínimo contenido o repercusión en el ámbito fiscal o económico. Mire, señor Soro, me he revisado todas las leyes, y repercusión en el ámbito económico aparece prácticamente en todas. Y sería muy largo explicárselas una a una, como usted suele hacer, y nombra todas las leyes.

Un tercer argumento, que es el efecto descodificador, que genera incertidumbre y riesgo para la seguridad jurídica. Si en el siglo XXI, con la capacidad de información y con el avance de las nuevas tecnologías, tenemos que tener miedo al efecto descodificador, creo que tenemos un grave problema —y usted, señor Soro, tiene formación jurídica al respecto.

Un cuarto argumento, que sería la sustracción del conocimiento del asunto a la comisión especializada correspondiente. Mire, el que le habla, humilde ingeniero, no sabe de nada, y, al no saber de nada, se asesora de todo. Y, mire, la herramienta de gestión en trabajo y de trabajo en equipo, que seguro que ustedes hacen en su grupo parlamentario, permite la posibilidad de trabajar en esta ley aunque tenga diferentes grados de referencia sectorial. Por eso, con la asesoría adecuada y con la colaboración de sus compañeros, y con su propia capacidad, no creo que sea muy complicado trabajar en el proyecto de ley, este que nos ocupa.

Una quinta, que sería la de reformas legislativas relevantes y de gran heterogeneidad. Esta la comparte con Izquierda Unida, que habla de colar de rondón —término curioso; un jugador muy bueno venezolano— cuestiones de calado y muy importantes. Miren, de Rondón no. La transparencia es absoluta, y se lo ha explicado el señor Garasa con la brillantez con la que suele hacerlo desde esta tribuna.

Una sexta indicación, que es la de hurtar el adecuado debate parlamentario e impedir un análisis suficientemente especializado de leyes que tienen un contenido muy diverso. E Izquierda Unida comparte, porque dice: busca estorbar —con be de Barcelona— el trabajo del control parlamentario. La verdad es que aquí no se estorba nada. El Parlamento es transparente. Se trabaja, se crea una ponencia, se acude al Pleno, se presentan enmiendas. Y, mire usted, doscientas ochenta y cuatro enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios. Si esto es estorbar, que venga Dios y lo vea, aunque ya saben que lo de Dios, a algunos partidos, no les gusta mucho.

Y se ha añadido una séptima sugerencia por parte de Izquierda Unida en este debate, un argumento adicional, que es el del gasto social versus capacidad recaudatoria. No toca en la ley de medidas fiscales y administrativas, señor Barrena. Eso es la ley de presupuestos. La capacidad presupuestaria está en la parte de ingresos, y eso se define en el proyecto de ley —tendremos que trabajarlo en ponencia la semana que viene—, y lo que es el gasto social... Hemos hablado tanto al respecto. Y crea usted que, de verdad, el gasto social es un referente para el Partido Aragonés, prioritario en el diseño del presupuesto para el 2012, 13 y siguientes.

Y me queda un poquito menos de dos minutos. Se ha hablado mucho, largo y tendido, desde esta tribuna y con anterioridad en los medios de comunicación, de una famosa enmienda que va a pasar a la historia de los trámites parlamentarios en estas Cortes de Aragón, que es la famosa ya enmienda 260, del Partido Aragonés, que, junto con el recurso motivado que se ha presentado por parte de Chunta Aragonesista, ha ocupado casi el 40% del tiempo de la intervención del señor Soro.

Las enmiendas del Partido Aragonés buscan en todo momento reforzar la protección social y paliar situaciones de extrema necesidad. Esa es la prioridad número uno que tenemos encima de la mesa en estos momentos. De allí, la creación de un fondo de inclusión social y ayudas familiares urgentes a través de nuestras enmiendas.

Les voy a dejar una cosa meridianamente clara: todo lo que hace el Partido Aragonés es con el absoluto respeto a la legalidad, en todo momento, absoluto respeto a la legalidad. Y para eso están los servicios jurídicos de esta casa para que, cuando nos equivocamos, nos corrijan. Pero hasta ese momento hay que tener el respeto por todos los grupos parlamentarios.

En el debate que se ha producido, le agradezco su tono agradable y correcto, señor Soro, hoy desde esta tribuna, pero es que han tenido ruedas de prensa e intervenciones al respecto un poco complicadas, afirmando fraude de ley por parte del Partido Aragonés, amenazando con no participar —por cierto, me he llevado una sorpresa viéndolo hoy aquí en la tribuna, porque esto es trámite parlamentario del proyecto de ley que nos ocupa—, hablan de ilegalidad, de tramposos —exactamente igual que mencionaba el señor Barrena—... No se preocupe, señor Barrena, no voy a acudir al artículo 85, como hicieron ustedes cuando hablé de sandeces en la comisión de ayer, respondiendo a ambos como un auténtico dúo dinámico perfectamente acompasado. «Sandeces» es sinónimo de «despropósitos». Por supuesto, evidentemente, dijeron que no iban a participar en semejante tropelía y que, además, no consideraban las Cortes..., que tenían que considerarse como un cortijo. Mire usted... *[Corte automático del sonido.]* ... al Partido Aragonés no nos van a encontrar en ningún caso en este tipo de debates. El refranero español es muy amplio. No lo utilizaré para evitar problemas, pero hay momentos en los que conviene no entrar en colisión, ni siquiera tener en consideración.

Y, por último, dos apuntes para dejar un tono agradable a esta intervención. El primero, agradecer públicamente a Chunta Aragonesista la campaña publicitaria gratuita que nos ha hecho durante estos últimos días, porque el Partido Aragonés ha estado en el candelero —que no candelabro— permanentemente. Y, por último, ya que le gusta a usted el cine, respecto a una película maravillosa de Quentin Tarantino a la que hizo usted mención en una rueda de prensa, permítame, señor presidente, quince segundos para devolverle la referencia cinematográfica. A mí, Chunta Aragonesista me recuerda una película de otro gran director, que es Steven Spielberg. Me estoy refiriendo a la película *ET.* ¿Se acuerdan cuando señalaba con el dedo y decía: «Mi casa», buscando su país en una lejana galaxia? El problema es que ustedes se quedan mirando al dedo. El dedo, para que entiendan la metáfora, es la enmienda 260; el país es el fondo social de inclusión social, ese que hay que buscar, por el que hay que trabajar. Y, evidentemente, esa es la realidad, y entendemos que tiene usted que tener respeto...

El señor PRESIDENTE: Acabe ya.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: ... a todos los grupos parlamentarios.

Señor Soro, señorías. Muchas gracias. *[Aplausos.]*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, la diputada señora Fernández tiene cinco minutos también para intervenir.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías.

Voy a empezar hablando de herencias, esta palabra que les gusta tanto a los miembros del Partido Popular. Y, además, en este momento es absolutamente oportuna porque estamos hablando de la ley de medidas fiscales. La herencia que dejó el anterior Gobierno en la tramitación de las leyes de medidas fiscales fue bastante positiva. Nada que ver con lo que está ocurriendo desde que el Partido Popular está en el Gobierno, tanto el año pasado como este, que nos trae a esta Cámara una ley de medidas fiscales y administrativas que modifican todo lo posible (este año, catorce leyes; el año pasado creo que eran cincuenta y pico). Esa herencia, señor Saz, no la ha sabido recoger bien, la está dilapidando usted. Y, por mucho que digan que técnicamente es correcta esta tramitación... Evidentemente: si fuera ilegal, estaríamos hablando de otra cosa. Pero por supuesto que se hurta el debate. Porque el plazo, el tiempo que hemos tenido los diputados para estudiar todas las medidas que contiene este texto

no es el mismo plazo y el mismo tiempo que se tiene cuando hay una ponencia, cuando está el portavoz o la portavoz correspondiente de esa materia y puede estudiar con mucha más reflexión las modificaciones de las leyes.

Por lo tanto, ya ese aspecto nos parece negativo. Supone un menoscabo al debate parlamentario, ya lo creo que sí, porque, dentro de todas esas leyes que se modifican en este texto, el señor Saz ha pasado por encima la modificación de la Ley de ordenación de la función pública, y nosotros hemos visto cuestiones muy graves en esa modificación de la Ley de función pública, señor consejero, muy graves. El objetivo que ustedes tienen con la modificación de esta ley es tener mayor discrecionalidad...

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: ... el objetivo de esta modificación es tener mayor discrecionalidad en la función pública, que el Gobierno pueda hacer y deshacer en materia de empleo público. ¿Y por qué, además, es muy grave? Porque estamos esperando desde hace más de un año una ley que desarrolle el Estatuto Básico del Empleo Público. Y, en lugar de que el Gobierno nos traiga ese proyecto de ley de desarrollo del Estatuto, lo que hace es modificar la Ley de ordenación de la función pública, con lo cual ya no confiamos en que el Gobierno vaya a traer esa modificación.

Y el resto de los cambios legislativos, donde nosotros enmendamos, evidentemente, lo que ustedes, en alguna cuestión..., para nosotros supone una privatización de servicios y eliminación de organismos útiles para la sociedad. Eso, en cuanto a las modificaciones en materia legislativa.

Y, en relación con la materia fiscal propiamente, evidentemente, lo que vemos ahí en este texto es que su Gobierno no tiene un modelo claro de cómo atajar la crisis, no lo tiene. No tienen en cuenta la marcha de la economía. Este año estamos peor que el año pasado. Y ustedes han cogido el texto del año pasado y prácticamente lo han calcado. No hay ninguna novedad en relación con nuevos impuestos, en relación con recuperar impuestos que ya suprimieron, con hacer que las rentas más altas paguen más. No hay ninguna modificación en eso. Por lo tanto, ustedes no tienen ningún modelo económico. Pero ¿no tienen ustedes los datos actuales, que no son los del año pasado, de desempleados, de gente que lo está pasando muy mal? ¿No tiene usted, señor Saz, los datos de las mermas en la recaudación de este año —el otro día tuvimos un debate, y luego volveremos—, más de cien millones de euros menos? Con esos datos, ¿no puede usted hacer un proyecto de ley de medidas distinto a este? Evidentemente sí, tenía que haber hecho un proyecto de ley de medidas distinto, diciendo dónde tenemos que recaudar precisamente para poder dar los servicios a los que los ciudadanos tienen derecho. Pues no han hecho eso.

Por lo tanto, nos parece un proyecto de ley malo, pésimo, y, aunque no hemos presentado una enmienda a la totalidad, nosotros hemos presentado enmiendas... *[Corte automático de sonido.]* ... parciales. Sí que por los motivos que le he explicado vamos a apoyar la devolución al Gobierno de este texto que han presentado Chunta Aragonesista e Izquierda Unida.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.

Vamos a pasar a la votación de las enmiendas.

Ocupen sus escaños.

Empezamos con la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

Señorías, comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y tres. A favor, veintiocho. En contra, treinta y cinco. Queda rechazada la enmienda número 1.**

Y votamos la número 2, de Izquierda Unida de Aragón.

Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro. A favor, veintiocho. En contra, treinta y seis. Queda rechazada también la enmienda número 2.**

Y pasamos a un espero que breve turno de explicación de voto.

Señor Barrena, puede intervenir. ¿No va a intervenir? Muchas gracias, señor Barrena.

Señor Soro, puede hacerlo.

El señor diputado SORO DOMINGO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Y gracias, señor Barrena, también.

En primer lugar, gracias a los dos grupos que han apoyado la enmienda a la totalidad de Chunta Aragonesista.

Por supuesto —no lo había dicho—, hemos apoyado también, evidentemente, la de Izquierda Unida.

Señor Garasa, claro que anuncié hace unos meses que haríamos la enmienda a la totalidad, y hoy lo vuelvo a anunciar. Si el año que viene vuelven a hacer ustedes lo mismo, nosotros también haremos lo mismo.

Por cierto, ha hablado usted de un informe jurídico. ¿Qué informe jurídico? Si tiene alguno, *démelo*, porque nosotros aún no hemos visto ningún informe jurídico respecto de nada de lo que hemos estado hablando hoy, ni de la admisión de las enmiendas ni del recurso que nosotros hemos presentado. No entienden ustedes nada, señor Garasa. Es un problema... Vamos a ver, no es que sea ilegal porque lo diga yo: es porque lo dice el Tribunal Constitucional, porque lo dice el Reglamento de estas Cortes y porque lo dice la Ley de estabilidad presupuestaria de Aragón —me refiero a la enmienda—. No porque lo digamos nosotros: porque lo dice el ordenamiento jurídico. Y no es una cuestión meramente formal, señor Garasa. Se me ponen los pelos de punta cada vez que dicen esto de que es una cuestión formal. No es una cuestión formal. De lo que estamos hablando es de democracia, de parlamentarismo, estamos hablando de que lo distingue a una dictadura, en la que también hay leyes y hay cortes y hay plebiscitos, de una democracia son las formas, es respetar unas formas, sobre todo, que protejan, señor Garasa, a la minoría. Porque no todo vale, no todo vale.

Señor Ruspira, sigue usted nervioso —se lo dije el otro día en comisión—, sigue usted nervioso. Me empieza a dar la impresión de que no está usted cómodo

con esta enmienda. Yo creo que la 260 a usted no le termina de gustar.

Yo creo que siempre soy educado. Hoy voy a volver a ser educado y voy a reiterar que su enmienda es un fraude de ley, que es una ilegalidad, que son tramposos por presentarla, que es una tropelía y que tratan a estas Cortes como un cortijo. Lo vuelvo a decir. No digo una cosa en la sala de prensa y otra en el Pleno —usted ya me va conociendo—: digo siempre lo mismo, y lo digo siempre con educación. Como le digo, lo suscribo. Y podría decir muchas más cosas. Veo que le gustó el símil, porque es muy bueno, sinceramente, de Quentin Tarantino y del solucionador. Ustedes montan primer el zancocho, hacen el proyecto de ley que hacen, que ustedes también lo hacen, y después llegan a las entidades y dicen: *«T*ranquilos, que estamos nosotros*»*. Y dicen lo que decía Lobo en la película, que no lo voy a repetir en este momento.

Ha intentado usted un símil con *ET* —no le ha salido muy bien—, pero es muy apropiado. Mire, le voy a coger el guante y le voy a decir que el PAR sí que es ET, *sí que es ET porque llegan ustedes a las Cortes, extienden el dedo y dicen: «M*i casa*»,* porque se creen que estas Cortes son su casa y la tratan como si fuera su casa, cuando estas Cortes son la casa de todos y, sobre todo —ya sé que esto no les gusta—, de los que de verdad somos oposición y representamos también al pueblo aragonés.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
Señor Ruspira, puede intervenir.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Aprovecharé la intervenci*ón que tuve el 20 de febrero de* 2012 para explicar que las medidas administrativas de la Ley de medidas fiscales y administrativas buscan tres objetivos: el primero, optimizar los recursos económicos, tanto en el sector privado como público, y dinamizar la economía; dos, simplificar los tr*á*mites administrativos evitando obstáculos y suprimiendo trabas; y tres, mejorar aspectos organizativos de nuestras administraciones públicas en Aragón, especialmente el Gobierno de Aragón. Si esas medidas administrativas no están claras, tenemos un problema.

Y la razón más importante de aprovechar la ley de acompañamiento, la ley que nos ocupa, de la forma que lo hacemos es porque la situación económica, laboral y empresarial en estos momentos es sencillamente excepcional. Y, ante ello, esta ley de medidas tiene que ser también excepcional.

Mire, señor Soro, ya se lo dije ayer en la comisión: yo no estoy nervioso. No sé si habrá usted probado el sancocho dominicano —yo he tenido más de una ocasión de poder hacerlo; lo que no creo es que lo pueda compartir con usted—. Y simplemente le voy a decir una cosa: esta casa es la de todos los aragoneses, no la del Partido Aragonés, y solamente insinuarlo en un error político de bulto por parte de su partido. Simplemente quiero que quede así de claro en el acta de sesiones porque están llevando una estrategia que, por supuesto, a nosotros nos beneficiará —y se lo demostraré con el tiempo— y a ustedes probablemente les perjudique notablemente.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
¿La señora Fernández? ¿No va a intervenir?
El señor Garasa, brevemente.

El señor diputado GARASA MORENO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Técnicamente, el proceso seguido por esta ley está fuera de toda cuestión, les guste a ustedes o no. Lo hemos dicho por activa y por pasiva: esta es una ley ordinaria, y como tal debe ser debatida. Señor Soro, a usted tal vez le hubiera gustado traer aquí las catorce leyes que dice usted que se modifican, que es cierto, y así haber tenido además la oportunidad de haber hablado una detrás de otra con los medios de comunicación, como acostumbran siempre que se quieren quejar de algo. Pero todo esto lo puede hacer perfectamente aquí en el Parlamento si quisiera. Este es el lugar adecuado, aun cuando no trascienda mediáticamente tanto su posición a su electorado. Ustedes —estimo— ven perder así catorce grandes, largos impactos, por decirlo en términos de márquetin comercial. Y, señor Soro, no se preocupe usted por la actualización de las leyes, ya que al final de esta ley de medidas aparecerá un código de actualización de todas las habidas.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Garasa.

Siguiente punto del orden del día: comparecencia del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, a solicitud de veintidós diputados del Grupo Parlamentario Socialista, para informar sobre la prestación del servicio de teleasistencia en Aragón.

Tiene la palabra la señora Broto. Si prefiere hacerlo desde el escaño... Sale a la tribuna. Tiene diez minutos para su intervención. Gracias, señora Broto. Puede comenzar.

Comparecencia del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia para informar sobre la prestación del servicio de teleasistencia en Aragón.

La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, ¿cuál su política en relación con la teleasistencia? ¿Qué va a hacer? ¿Pueden estar tranquilas las dieciséis mil personas que en este momento son usuarias de la teleasistencia en Aragón? No hacen falta muchos prolegómenos para hablar de este tema. Usted sabe que la teleasistencia es un servicio fundamental para las personas mayores, para personas discapacitadas que están en su domicilio, y que es un recurso que les permite vivir en su medio, no salir de él. Es mucho más que un botón: supone la teleasistencia darles seguridad, un vínculo con la realidad para ellos y para sus familias, una tranquilidad.

La experiencia que pueden contar los usuarios, los trabajadores de la teleasistencia, es una experiencia de un servicio absolutamente positivo. Por eso, en este momento queremos que nos explique qué va a hacer, cuál va a ser la postura de su Gobierno para esas dieciséis mil personas que, en virtud del acuerdo con la Federación de Municipios y con el dinero del Imserso

y el porcentaje de, en su caso, la Diputación Provincial de Huesca, de Teruel, de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, el Ayuntamiento de Teruel y Disminuidos Físicos de Aragón, podían realizar este servicio gracias a que el Imserso aportaba una cantidad ya muy reducida en el presupuesto de 2012, pero que este año, en 2013, ha desaparecido, no existe. Los treinta millones que había en el 2012 han desaparecido, y no existe esa partida presupuestaria.

Si en todo el territorio es fundamental este servicio, en Aragón usted conoce los datos, los conoce por nuestro propio Instituto Aragonés de Estadística: un 110% de población envejecida frente a un 87,2% en todo el territorio del Estado. Por eso, lo que le quiero preguntar, señor consejero, es qué va hacer para que este servicio pueda seguir existiendo, pese a que Aragón no va a contar con esos 2,5 millones que hasta ahora teníamos por ese presupuesto del Estado, por ese presupuesto del Imserso?

Le pregunto que qué opina; que cómo valora el servicio de la teleasistencia; que qué gestiones llevó a cabo para lograr mantener en el presupuesto esa cantidad; qué información les transmitieron usted y la presidenta Rudi a la ministra Mato, al presidente Rajoy para lograr mantener esta partida, que era fundamental. Le pregunto qué cara vio en la gente cuando acudió al Año Europeo del Envejecimiento Activo la ministra Mato aquí, en Zaragoza, cuando no recibió a los trabajadores sociales y a la Marea Naranja, que le hubieran explicado muy bien la situación que tenemos en Aragón —estoy segura de que usted también se lo explicó—. Pero qué caras vio en la gente cuando les dijo la ministra Mato... Porque es que a mí me ha impresionado mucho esta frase: «Queremos avanzar en la seguridad de vuestra situación económica para que podáis ir afrontando con confianza esta etapa de la vida». La verdad es que a mí me dio la impresión de que lo que se les pedía a las personas mayores es un mayor esfuerzo, un esfuerzo más a todos los que han hecho. Usted sabe que se les está pidiendo mucho, se les está exigiendo mucho, y a mí me parece una falta de respeto y una falta de humanidad decirles a esas personas mayores que todavía se tienen que esforzar más. Es, una vez más, que la crisis recae sobre los más débiles y los más vulnerables.

Por eso, lo que le preguntamos es, teniendo en cuenta que en el catálogo de servicios sociales de Aragón, un catálogo que desarrolla la ley, donde se plantean, como usted sabe, unos servicios sociales generales, unas prestaciones económicas y unas prestaciones tecnológicas donde se plantea el servicio de teleasistencia, lo que le preguntamos es cómo va a aplicar ese catálogo, qué es lo que va a hacer, si van a cumplir con la responsabilidad de dar respuesta a estas personas y, sobre todo, si van a estar tranquilas, cuál es su comprimo, ¿qué reuniones ha mantenido y con qué instituciones ha mantenido reuniones para poder resolver este problema, a qué acuerdos han llegado.

Sobre todo le pregunto, señor consejero, si es capaz de dar servicios a las familias y a las personas, porque yo creo que estamos un poco cansados todos de oír hablar de rescates, pero no oír hablar de personas y de familias, que son a las que les tenemos que dar respuesta y a las que tenemos que rescatar. Porque, señor consejero, si un Gobierno no es capaz de cuidar a las personas, es incapaz de progresar.

Además le decimos, señor consejero —usted lo sabe muy bien—, que ustedes no han aplicado la Ley de dependencia —la han paralizado—, pero es que además le decimos que no todos los servicios sociales son la aplicación de la Ley de dependencia. Como nos tememos que lo que ustedes quieren hacer es poner en marcha la dependencia para que las personas reciban el servicio de la teleasistencia, pero eso supondría que muchas personas que están recibiendo en este momento ese servicio, dependientes moderados o no —pero los dependientes moderados ustedes ya los han sacado del sistema—... Por eso le preguntamos cuántas personas están recibiendo en este momento el servicio de la teleasistencia y no son personas dependientes.

La verdad es que, cuando usted presentó los presupuestos de su departamento, sentimos, como en todos, una gran preocupación, porque lo primero que dijo nada más empezar es que su presupuesto estaba condicionado por la crisis económica, que debía cumplir la Ley de estabilidad y el techo del gasto. Eso era lo primordial, lo fundamental en un presupuesto de Sanidad y Servicios Sociales. Y como un gran avance —lo citaba usted—, hablaba de que se iba a contar con un millón de euros para la atención a domicilio de las personas dependientes, en cuyas prestaciones estaría la dependencia. Pero, ¿cuántas personas se van a quedar fuera? Porque, desde luego, usted sabe que las cuentas son muy claras: con ese millón de euros, usted no puede hacer frente a ese porcentaje necesario para poder seguir atendiendo a esas dieciséis mil personas.

Por eso, lo que le planteamos es si usted es consciente de que, desde luego, los servicios sociales, en virtud de nuestro Estatuto de Autonomía, son una competencia exclusiva del Gobierno de Aragón, si tiene claro que tenemos una Ley de Servicios Sociales que tenemos que cumplir, una ley que nos ha convertido afortunadamente en receptores de unos derechos y si usted tiene claro que todos los dependientes son usuarios de los servicios sociales, es así, pero no todos los usuarios son dependientes.

Por lo tanto, consejero, yo creo que las preguntas son muy claras, con las preguntas, lo que pretendemos es que nos responda a cuál va a ser su compromiso, su compromiso presupuestario con las instituciones que en este momento está llevando a cabo este servicio y, sobre todo, con las personas y sus familias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.

Señor consejero, puede intervenir para contestar por tiempo de diez minutos.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, señor presidente.

¿Ya está instalada, señora Broto?

Bueno, señora Broto, una vez más, gracias por el tono de su intervención, pero no le voy a decir lo que voy a hacer, le voy a decir lo que estoy haciendo o lo que estamos haciendo, mejor dicho, en esta materia, y no desde hace unos días, sino desde hace ya unos meses, como tendré oportunidad de comentarle.

Usted ha definido muy bien qué se entiende por teleasistencia, creo que era necesario hacerlo, lo ha hecho usted y no lo voy hacer yo, solo recalco la importancia que tiene en personas mayores y, sobre todo, en personas mayores ubicadas en centros alejados de los centros administrativos o de los centros de servicios; quizá sea la cuestión más relevante de esta materia, de este servicio, que hay que considerarlo como un servicio general de naturaleza complementaria en tanto en cuanto, en Aragón, hasta la fecha, no se ha vinculado a la dependencia.

La teleasistencia se ha regulado y financiado, como usted bien ha comentado, en el marco de un convenio suscrito en el año 1993 entre el Imserso y la Federación Española de Municipios y Provincias que tuvo una adhesión progresiva de diferentes entidades, de diferentes corporaciones locales, y en el caso concreto de Aragón, fueron las tres diputaciones provinciales y los ayuntamientos de Zaragoza y de Teruel. Efectivamente, como usted ha comentado no hay dotación para el año 2013 por parte del Imserso para esta materia, pero eso, como luego le comentaré, no va a ser óbice para que no se dé una solución a este asunto.

En definitiva, las entidades que han gestionado la teleasistencia en Aragón han sido las que he comentado, que, por cierto, han utilizado una fórmula de gestión, la gestión indirecta, que ustedes, cuando gobiernan, la llaman así, y cuando lo hacemos nosotros, lo llaman privatización; por cierto, también, utilizando criterios dispares en cuanto al copago o la gestión de un mismo servicio para ciudadanos de diferentes provincias, pero, en todo caso, todos aragoneses.

En definitiva, la teleasistencia está situada en el ámbito de los servicios sociales generales de naturaleza complementaria, financiándose íntegramente a través de los citados convenios suscritos por el Imserso, la Federación Española de Municipios y Provincias y las corporaciones locales que se adhirieron, sin ninguna intervención en ningún momento del Gobierno de Aragón. Como he comentado, esta prestación del servicio de teleasistencia se hacía con total independencia de que los ciudadanos tuvieran o no reconocido el derecho de dependencia.

Voy a explicar la coordinación, el proceso que está siguiendo la teleasistencia en el marco de la Ley de dependencia. Como usted bien sabe, la Ley de dependencia del año 2006 plantea una serie de servicios dirigidos a prestar servicio —valga la redundancia— a las personas dependientes, que van desde la residencia, pasando por centros de día, por la ayuda a domicilio, por la teleasistencia y, por último, por la prestación económica del entorno familiar como fórmula excepcional que se debe de aplicar cuando no es posible articular ninguno de los servicios anteriores, pero, en todo caso, como comento, con carácter excepcional.

La situación de Aragón al respecto la he comentado en muchas ocasiones. Solamente dos pinceladas: es 65% de los dependientes reciben prestaciones económicas en el entorno familiar cuando es una cuestión totalmente excepcional y solamente el 35% reciben un servicio, y en ningún caso han recibido en el ámbito de la dependencia, dentro del marco de la Ley de dependencia, servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia, entre otras cosas —y esto lo quiero comentar—, porque su Gobierno, en los años que dirigió el ámbito de Servicios Sociales, no tuvo a bien desarrollar normativamente la puesta en marcha del servicio de teleasistencia y de ayuda a domicilio en el marco de la dependencia.

Nosotros, por el contrario, por Orden de 16 de mayo del 2012, de esta consejería, pusimos en marcha el procedimiento para la elaboración de una disposición para regular el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia en el marco de la dependencia. Mediante Resolución de 16 de julio de este mismo año de la Dirección General de Bienestar Social y Dependencia, se sometió a información pública el proyecto de orden para desarrollar el servicio de teleasistencia y de ayuda a domicilio, que tiene fundamentalmente dos objetivos: uno, armonizar y homogeneizar unos mínimos básicos tanto en el acceso al servicio como en la gestión del mismo y, en segundo lugar, configurar estos servicios como prestación esencial dirigida a personas en situación de dependencia, completando de esta manera —y lo digo porque le preocupaba— el catálogo de servicios del sistema de la dependencia en nuestra comunidad autónoma.

Otra cuestión que voy a comentar es qué paso estamos dando para la puesta en marcha del sistema o del servicio de teleasistencia vinculado a la dependencia. Los criterios para ordenar este servicio y para incrementar este servicio de teleasistencia en el marco de la dependencia se elevaron a propuesta de acuerdo en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, como tiene que ser, y de ese acuerdo, le voy a comentar lo más importante, los aspectos más importantes: la puesta en marcha del servicio de teleasistencia en el ámbito de la dependencia como servicio esencial, dentro del catálogo de servicios sociales, se realizará de forma coordinada entre el IASS y las entidades locales competentes.

Son entidades locales competentes las comarcas, los ayuntamientos con más de veinte mil habitantes y los ayuntamientos y mancomunidades de la delimitación comarcal de Zaragoza titulares de servicios sociales.

En tercer lugar, el IASS dictará, en su caso, resolución del programa individual de atención, con la concesión del servicio de teleasistencia, la aportación del usuario y la compatibilidad de este servicio con otros servicios. El IASS propondrá a las entidades locales que gestionan en estos momentos el servicio de teleasistencia de naturaleza complementaria, que son las entidades que he comentado al principio, un acuerdo de colaboración. En este contexto, un aspecto también importante es que las diputaciones provinciales que estrictamente no tienen competencias en esta materia, aunque las han asumido, continuarán gestionando el servicio en tanto en cuanto no renuncien al mismo o hasta que las entidades locales titulares de la competencia requieran para sí la gestión del mismo.

Por lo que respecta a los costes y financiación de los servicios de teleasistencia en el ámbito de la dependencia, hay dos costes de referencia: de treinta euros al mes para la teleasistencia fija y cuarenta y cinco para la teleasistencia móvil. La financiación, como usted bien sabe, correrá por cuenta del IASS y del usuario en función de la capacidad económica del mismo, con unos límites que van desde el 0% cuando la capacidad

económica esté por debajo el IPREM, del 50% cuando el IPREM esté entre 1 y 1,5 y del 90% cuando la capacidad económica sea superior a 1,5 del IPREM.

Respecto al calendario de puesta en marcha del servicio de teleasistencia, la aprobación de la orden es inminente, espero que en los próximos días se apruebe ya. En estos momentos, estamos negociando con las entidades locales que están gestionando la teleasistencia fuera del ámbito de la dependencia para alcanzar un acuerdo de colaboración.

En breves fechas, una vez que tengamos todos los datos encima de la mesa —luego comentaré en qué punto estamos—, propondremos el convenio de colaboración a estas entidades; una vez que se publique el presupuesto de 2013, se firmará el convenio correspondiente con cada una de ellas, estando previsto el inicio de la puesta en marcha de la teleasistencia en el ámbito de la dependencia para, aproximadamente, abril de 2013.

Respecto a las reuniones, ha sido público, ha salido en los medios de comunicación, hemos mantenido reuniones con las tres diputaciones provinciales y con los ayuntamientos de Zaragoza y de Teruel para, fundamentalmente, analizar tres cuestiones: las competencias de cada entidad, las características de los usuarios en términos de si son dependientes o no son dependientes por una parte, los aspectos económicos para saber exactamente cuáles son las necesidades y una cuestión también importante, que creo que hay que señalar, la necesaria armonización de un servicio que hasta la fecha se venía articulando de una forma totalmente dispar.

Lo que sí que le puedo decir, para terminar, y me gustaría que le quedara claro, aunque si no le queda claro, luego lo volveré a repetir, es que, por nuestra parte, vamos a garantizar totalmente con el presupuesto de mi departamento o con otras partidas presupuestarias la financiación de la teleasistencia tanto para dependientes, que es nuestra estricta competencia, como para las personas no dependientes que en estos momentos están utilizando el servicio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

Señora Broto, tiene cinco minutos.

La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gracias.

Señor consejero, me ha dejado preocupada, porque yo le he preguntado por su voluntad política: ¿qué es lo que piensa?, ¿qué es lo que va a hacer? Y la verdad es que me ha explicado aquí un acuerdo, una propuesta de acuerdo del Consejo Interterritorial que me aclara bastante poco, porque después de lo que me ha dicho, qué puedo decirles yo a las instituciones que están en este momento prestando ese servicio; si me preguntan, ¿qué les puedo decir? Y qué les podemos decir a las personas que están en este momento usando el servicio de teleasistencia.

Al final, ha dicho que no se preocuparan, pero con qué dinero y cómo, en los últimos segundos, pero todo lo demás ha sido explicarme ese acuerdo. Hombre, se lo podría haber pedido…, además, lo tenemos, porque se ha presentado en el Consejo Interterritorial, y podemos estar de acuerdo. Bien es verdad que también se habla de que en esos precios se ha tenido —usted sabe que se dice así— poco en cuenta la diversidad de ese territorio, porque no es lo mismo plantear unos precios para Zaragoza capital que para el medio rural. Pero mire, es que les gusta tanto a ustedes hablarnos de que van a armonizar, que van a trabajar, que esto es como regalarle un libro de cocina a uno que está muerto de hambre. ¡Que no es eso! Lo que tienen que hacer es plantear cómo, con qué dinero y con qué presupuesto y si a ustedes les preocupa esto. Si les preocupa, aplicar la Ley de Servicios Sociales, que es un derecho de la ciudadanía y que es un servicio subjetivo, y que esa ley se desarrolla en un catálogo que es un instrumento que materializa esos derechos, y que, además, se plantea muy claramente que no cabrá excluir a nadie de las prestaciones garantizadas por falta de recursos económicos, que hay que buscarlos y que con ese millón de euros que plantean no es posible, y díganos cómo van a dar esa respuesta y van a mantener ese servicio.

Porque, claro, usted me decía: «Es que el Gobierno anterior no puso en marcha la teleasistencia y el servicio de ayuda a domicilio». Mire, de aplicación de la Ley de dependencia, yo, en su lugar, me callaría. Me callaría porque, fíjese: seiscientas personas al mes que se incluían en las prestaciones de la dependencia en el Gobierno anterior. Usted, con sus datos, no busco otros, los suyos, los que usted me dio el 23 de octubre: desde mayo, ni una sola persona más ha recibido ninguna prestación.

Pero es que ustedes hablan tanto de los servicios, de que no quieren las prestaciones con cuidadores en su domicilio, que quieren prestación económica vinculada a los servicios. Pues mire, desde el 1 de noviembre hasta el 1 de diciembre, ciento veinticinco personas menos de prestación de los servicios, pero es que desde junio, mil personas menos. Toda la gestión de la Ley de dependencia, toda, desde el 1 de noviembre hasta el 1 de diciembre, son cinco personas más en centros de día. Esa es toda la gestión. Pues, fíjese qué gestión, además de que no me ha aclarado qué va a suceder con las personas que no son dependientes y que en este momento son usuarios de la teleasistencia. Porque mire, en el 2004, nueve mil novecientas sesenta y seis personas usuarias; en el 2010, dieciséis mil novecientos sesenta y cuatro. Ese servicio se estaba dando, y ahora, qué me va a decir, que ese servicio se lo damos a las entidades locales, a los ayuntamientos, a las comarcas…, con qué dinero, y eso es lo que le estoy preguntando, señor consejero.

Porque es que ustedes hablan mucho de esas prestaciones, pero es que no son capaces, y fíjese, ahora dicen que van a regular esto, y me parece bien, pero fíjese lo que ha dicho: «Una vez que tengamos este acuerdo aprobado, empezaremos a hacer las resoluciones, los PIA y propondremos qué teleasistencia tendrán esas personas usuarias». Pero fíjese, si lo que ya tenían organizado, armonizado o, como dicen ustedes, «estructurado», no han sido capaces de hacerlo, imagínese, con esto, que van a tener que empezar desde el principio.

Señor consejero, de verdad, sean responsables y, sobre todo, dígales a estas familias, a estas personas que están utilizando este servicio tan necesario, que va a apostar por él.

Muchas gracias. *[Aplausos.]*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.

Señor consejero, puede responder en un tiempo de cinco minutos.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.

Señora Broto, ¿qué les tiene que decir a esas familias? Se lo vuelvo a decir, además, sabía que se lo iba a tener que decir otra vez: le he dicho al final de mi primera intervención —se lo digo para que se lo diga a las familias a las que usted se refiere— que garantizaremos la financiación de la teleasistencia tanto para dependientes como para no dependientes, a sabiendas de que la competencia de este Gobierno, de la comunidad autónoma en esta materia es exclusivamente para dependientes, que quede claro. Eso es lo que usted les tiene que decir a las familias y, por favor, no les diga una cosa distinta a esto.

Y esto mismo, esto mismo es lo que les he dicho —se lo pueden decir sus correligionarios, bueno, algunos serán correligionarios, pero otros, a lo mejor, no—, a los miembros de su partido con los que hemos hablado de esta cuestión; han recibido este mismo mensaje al respecto.

Le voy a dar una información que me ha pedido. ¿Sabe lo que me dijeron en el ministerio cuando preguntamos por los treinta millones que no estaban en el presupuesto? ¿Sabe lo que me dijeron? No me hizo falta preguntárselo a la presidenta, aunque ella también lo sabía. Esta cantidad y otras muchas no se han podido incorporar a los presupuestos como consecuencia de que el Gobierno de la Nación tiene que abonar mil millones de euros de cuotas de Seguridad Social que ustedes dejaron de pagar correspondientes a los cuidadores de dependientes *[aplausos].* Esa es la forma en la que ustedes entienden la gestión y es la forma en que ustedes entienden la dependencia: mil millones de euros que dejaron de pagar, que consta en el presupuesto del ministerio y que se tienen que dedicar a partidas adeudadas por ustedes. No hay partidas para el Imserso en esta materia ni para muchas otras que serían muy necesarias.

Le he comentado que estamos ya haciendo…, y me duele de verdad, se lo digo sinceramente, que ponga en duda nuestra voluntad cuando le he demostrado claramente que antes de que se planteara el problema ya teníamos voluntad por solucionar un problema, y ahí están las pruebas que he dado respecto a la puesta en marcha de la normativa de teleasistencia ya en el mes de julio, mucho antes de saber cuál iba a ser el presupuesto de la nación, del Estado para el año que viene, y prueba de esa voluntad creo que también es el paso que hemos dado hacia adelante, sin esperar a que nos lo pidieran, reuniéndonos con las tres diputaciones y con los dos ayuntamientos. Al respecto, les señalo que no todo han sido facilidades; curiosamente, cuando los necesitados, en teoría, eran las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones, ha habido alguna entidad, en concreto, el Ayuntamiento de Zaragoza que no ha puesto facilidades para una reunión que era muy importante, que era muy necesaria, de la que esperaban mucho los ciudadanos, a los que usted se refiere, pero que, por lo visto, no era tan imperiosa para el ayuntamiento o, por lo menos, ponían como excusas cuestiones que perfectamente se podían solucionar relacionadas con protocolo, ni más ni menos. Que sepa que nosotros, de protocolo, como se dice vulgarmente, pasamos. Mi directora general se ha reunido con técnicos de segundo nivel y no nos ha pasado nada, porque prima el interés por solucionar los problemas, y, si no, pregúntele al alcalde de Barbastro, presidente de la diputación, o a los representantes del Ayuntamiento de Zaragoza que han estado con nosotros en este tema.

¿Qué estamos haciendo? Se lo he comentado antes: antes de saber cuánto tenemos que poner, que lo vamos a poner, tenemos que saber cuál es el ámbito competencial de unos y de otros en términos numéricos; de los dieciséis mil trescientos teleasistidos, cuántos son dependientes y cuántos no. Nosotros vamos asumir sí o sí los dependientes y, seguramente, muchos de los no dependientes, pero tenemos que saber cuáles son y cuántos son. Y una cosa, por comarcas, porque esta cuestión se va a tener que articular seguramente a través también de entidades comarcales, a las que vamos a hacer un llamamiento para participar en esta cuestión, tema que ya hemos debatido y en el que están de acuerdo los representantes, los máximos representantes de las entidades locales con las que hemos hablado.

Una vez que conozcamos este mapa, veremos cuáles son las necesidades económicas, pero le garantizo que sean cuales sean —más o menos, las tenemos calculadas—, habrá partida económica para esto, porque esto es prioritario también para nosotros, fundamentalmente por lo que he dicho al principio: afecta a personas mayores, afecta a personas, a lo mejor, no tan mayores, pero discapacitadas, pero, fundamentalmente, personas que viven en lugares alejados de los centros de servicios o los centros administrativos que requieren este servicio para tener un contacto con los prestadores de servicios en situaciones en las que *[corte automático de sonido]* ... por diferentes motivos o su salud por diferentes motivos. De eso, que no le quepa la menor duda.

El señor PRESIDENTE: Termine, señor consejero.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): En todo caso, nosotros vamos a seguir con los pasos que hemos empezado, vamos a intentar incorporar la teleasistencia y la ayuda a domicilio a la dependencia, cumpliendo con nuestro deber como gestores de los servicios sociales en estos momentos, cuestión que, por cierto, ustedes dejaron de lado durante los siete o los ocho años que gestionaron esta materia y, sobre todo, desde el 2006, año en el que ya tenían que haber puesto en marcha estas cuestiones dentro de la Ley de dependencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

Izquierda Unida de Aragón. La señora Luquin tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, por aclarar: la supresión de la aportación estatal amenaza con recortar la teleasistencia; ha sido el Ministerio de Igualdad, Sanidad y Servicios Sociales quien ha suprimido el Programa de Teleasistencia, porque escuchándole a usted, parece que quiere poner solución a un problema que venga heredado. Aquí existía un programa, que era el Programa de Teleasistencia que ustedes, desde Madrid, han decidido suprimir, y ahora viene usted aquí a decir que no nos preocupemos que ya está hablando usted con las entidades locales y que ya está usted hablando con las diputaciones para garantizar un servicio que ya existía. Es que yo creo que hay que dejar las cosas claras, porque ustedes, desde Madrid, la señora Mato ha suprimido el Programa de Teleasistencia negando la aportación económica que había.

Esa es la realidad, y en estos momentos hay más de dieciséis mil personas, dieciséis mil usuarios en esta comunidad autónoma que no saben si van a tener un programa que ya tenían, que funcionaba y que funcionaba bien. Ustedes hacen problemas donde no los hay y lo he dicho muchísimas veces, que tienen muchísimas cosas para solucionar para ir creando problemas donde no los tienen. Ustedes tienen una máxima, una máxima que es «ser fuerte con los débiles y muy débiles con los fuertes», y este es un caso más, un caso más de los que con más se puede hacer más y con menos se hace menos, porque con menos dinero ha supuesto que ustedes suprimen un servicio, en estos momentos, un servicio que no está garantizado.

¿Usted asume como consejero que va a garantizar a esas más de dieciséis mil personas que van a seguir teniendo el Programa de Teleasistencia tal y como lo tenían hasta hace unos meses? ¿Lo asume aquí? Porque el problema se lo lanza a usted su ministra, que viene aquí y no dice absolutamente nada, y ahora, usted le lanza la pelota a las entidades locales y a las diputaciones, entidades locales que van asfixiadas económicamente gracias también a su colaboración y a su gestión.

En estos momentos, estamos hablando de personas mayores que no son las que tienen grandes dependencias ni los más severos que, precisamente, son los que menos necesitan este servicio de teleasistencia, porque para utilizarlo se necesita cierto grado de validez y usted es plenamente consciente, que es a esas personas a las que usted les debería de garantizar ese programa, a esas personas.

En estos momentos, estamos hablando —se lo he dicho varias veces ya— de que ustedes están penalizando, penalizan a los crónicos, pero penalizan a la vejez de una manera absolutamente escandalosa, escandalosa, con el repago sanitario, con la no revalorización de las pensiones… Hoy hemos sabido que hay que pagar el transporte no urgente sanitario. ¡Eso es lo que ustedes están haciendo con las personas mayores!, y a eso se le llama «ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes».

Me gustaría, de verdad se lo digo, que esta vehemencia la utilizaran para meterle mano —y perdóname la expresión— a otros determinados sectores y a otra gente. Porque están asumiendo con unos sacrificios personas que no han generado la crisis y se les está exigiendo cada vez más y más, a niveles insostenibles, y esta es una muestra más o una vuelta de tuerca más, ¡absolutamente inasumible!

Por lo tanto, su compromiso no puede ser solo político, sino también ético, moral y responsable de garantizar que esas personas, esas más de dieciséis mil personas de esta comunidad autónoma, personas mayores, con un programa que funcionaba, que funcionaba bien, usted las va a garantizar. Porque lo que no pueden hacer es organizar el problema y venir aquí como vienen ustedes, tranquilos, y decir que ya están buscando esa solución. Si es que no había problema, es que el programa existía, es que ustedes han decidido suprimir desde Madrid la partida presupuestaria del Programa de Teleasistencia.

¿El problema va a ser ahora de las entidades locales o de las diputaciones? ¡Si no pueden asumir el coste! A eso se le llama ser irresponsables por la gestión y, si no, tendrán que venir a decir aquí que, efectivamente, con los recortes se está empeorando la calidad de la asistencia, se están recortando y suprimiendo programas, porque esta es una realidad y que donde ustedes decían que iban hacer más con menos es absolutamente falso, porque es un desmantelamiento más de los servicios sociales. Me quedan veinte segundos, pero, si quiere, podríamos seguir hablando de la Ley de dependencia, que también tiene un largo recorrido.

Por lo tanto, compromiso absoluto por parte de su departamento y, desde luego, de usted, como máximo responsable, que esas personas que tenían ese programa de asistencia y que ustedes, desde Madrid, lo han suprimido, lo va a garantizar, porque, si no, usted lo que estará haciendo es echar la responsabilidad a otras entidades que no tenían problemas hasta que ustedes han decidido hacer un problema donde no lo había.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.

Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, la señora Ibeas tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor presidente.

Señor Oliván, usted debería empezar a pensar en dar alguna buena noticia de vez en cuando a la ciudadanía aragonesa, porque la verdad es que son muy, muy poco de fiar, y usted tampoco, como consejero, ya sabe que se lo hemos dicho en alguna ocasión, porque no hay más que hacer un recorrido de lo que ustedes han estado defendiendo y de lo que en estos momentos estamos viviendo aquí en Aragón y, sobre todo, las personas más vulnerables.

Mire, le voy a recordar una fecha, en enero del año 2012, el Partido Popular estaba apostando por promover un mayor uso de la teleasistencia, también estaba promoviendo un mayor uso del servicio de la atención domiciliaria para personas mayores dependientes que querían permanecer en sus casas, pero hablaban concretamente de la teleasistencia, y estaban preparando entonces o perfilando ya la ponencia del decimoséptimo congreso nacional que tenía el Partido Popular. Se hablaba allí de mejorar la financiación, se hablaba de una mejora, mejor dicho, de un reparto eficiente de la carga entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, y ustedes encontraron unos meses después la

respuesta, el Partido Popular encontró la respuesta: fuera la partida de los presupuestos generales del Estado para la teleasistencia; eso sí, buenos titulares a principio de año de cómo querían ir resolviendo los problemas que realmente preocupan a tantas personas.

Esa es su forma, es la forma de su partido que tienen de afrontar en este caso los compromisos que usted tiene ya asumidos desde hace un año y medio: fuera la partida del Imserso, y la respuesta es que desde Aragón se pague, y ya nos pondremos en este caso de acuerdo con las Administraciones aragonesas, con las entidades locales…, las estamos ahogando un poco, les estamos dando cada vez menos dinero, para Zaragoza, ¡va!, como no vive gente..., un millón ochocientos mil euros menos para hacer frente a programas, entre otros, de teleasistencia. ¡Ya sobrevivirán, ya se encargarán, ya pagarán más los ciudadanos y ciudadanas! ¿Así lo resuelve usted? ¿Esa es su forma de plantearlo? Porque si desde Madrid ya no llega, si ustedes ni tan siquiera, en la bilateral, han tenido la más mínima preocupación por que llegara el dinero que le tiene que llegar, si ni siquiera se ha reunido la Comisión Mixta de acuerdos económicos y financieros para que se pudiera garantizar en la Ley de presupuestos una partida suficiente para que Aragón haga frente en este caso también a la prestación de unos servicios sanitarios educativos, sociales, etcétera, de calidad, ¿quiere usted que nosotros le creamos ahora con lo que nos viene a decir aquí, si pasado mañana saldrá otra cosa?

Aún más, aún más, yo le voy a preguntar directamente: ¿usted a quién representa cuando acude a los consejos interterritoriales? Porque, desde luego, a Chunta Aragonesista le gustaría muchísimo que usted defendiera con el mismo ardor con el que le he visto yo aquí defender los planteamientos del Partido Popular del señor Rajoy, pues, que defendiera los intereses generales de Aragón, ¡es lo mínimo! Claro, para que usted venga a contarnos cómo nos tenemos que tragar todos los recortes y las consecuencias de los recortes de su partido a nivel estatal, pues, mire usted, para esto, hacen falta realmente pocos consejeros.

Se supone que usted debería tener ya una fotografía, usted debería conocer ese mapa con el número de personas que necesitan el servicio de teleasistencia, personas dependientes, pero personas no dependientes, porque hay muchas personas no dependientes a quien este servicio les viene efectivamente muy bien, porque cumple una función importantísima desde el punto de vista social, de apoyo psicológico, de apoyo físico real, sin el cual no podrían llevar una vida medianamente digna. ¿Qué ha hecho usted durante un año y medio? Ahora se nos pone a hacer un mapa, buscar a ver los datos. ¿No le ha preocupado este tema desde que usted ocupó el cargo de consejero? Es una pena, porque usted ahora no nos trae más que vaguedades: «se podrá hacer», «lo asumiré»… No, no, oiga, mire, es que estamos en estos momentos en pleno proceso de debate de los presupuestos. ¿En qué partida? Díganos a mi grupo parlamentario, a todos los grupos aquí, en la Cámara, en qué partida concreta, porque yo, un millón de euros lo leo, pero ¿en qué partida está el resto? Hombre, «ya veremos, de la partida de comarcas», dijo hace unas semanas. No, que yo sepa, las partidas que van a comarcas, en ese caso, no tienen carácter finalista. ¿De dónde va a sacar usted ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? No estamos ahora en fechas, señor Oliván, de que usted diga «ya se resolverán todos o casi todos, dependientes, no dependientes…». ¡No! ¿Cuántas personas, cuántos servicios garantizados? ¿Dónde está el dinero y cuál es realmente la apuesta por la que usted está en estos momentos aquí hablando como consejero de las políticas sociales del Gobierno de Aragón? Porque, si no, no le podremos ni creer ni atender la próxima vez que hable, no venimos aquí a debatir sobre la nada, pedimos información al Gobierno, y el Gobierno tiene la obligación de responder, y usted, concretamente, el primero en estos ámbitos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.

Señor Peribáñez, cinco minutos.

El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, señor presidente.

Gracias, señor consejero, por su explicación.

Un servicio, el de teleasistencia, imprescindible, muy importante y que viene definido en la Ley 5 del 2009, del 30 de junio, de los Servicios Sociales de Aragón. Un servicio que, sin lugar a dudas, tiene como objetivo la inmediatez en situaciones de emergencia, de seguridad y de soledad, e, indudablemente, también hace una apuesta importantísima a la tranquilidad psicológica de las personas que pueden acceder a él.

Se regula —usted lo ha comentado— o, por lo menos, se estaba regulando desde el Imserso y la FEMP a través de determinados convenios y se han ido adhiriendo poco a poco las Administraciones locales, efectivamente. Un convenio donde no entraba el Gobierno de Aragón y donde los intervinientes iban asumiendo obligaciones para el desarrollo normalizado del programa. Un servicio dirigido a personas mayores y a personas con discapacidad durante gran parte del día solas. Yo me alegro de esa frase tan contundente que ha dicho usted: «Se garantizará el servicio a aquellas personas en situación de dependencia y de no dependencia». Por lo tanto, a partir de aquí, a usted, como consejero, le toca la decisión, el buscar los caminos que posibiliten y faciliten este servicio y, por tanto, las partidas económicas correspondientes.

Ha dicho usted que se va a articular —he oído «articular»— este servicio, como no puede ser de otra manera, a través de las entidades locales, diputaciones provinciales, comarcas y ayuntamientos, y en el mismo se indica, a través de la Orden de 16 de mayo, a la que usted ha hecho referencia, la modalidad del servicio y la aportación del usuario.

Un servicio que se presta a través de los acuerdos de colaboración y donde constan esas partidas de los convenios, donde se hace referencia a los créditos y que, en buena lógica, debe de ir en función de que quien menos tiene menos pague y de que el que más tiene más pague.

Yo creo que en la forma de utilizar la gestión, debemos armonizar, como usted bien ha dicho —a mí me gusta esa palabra si luego la podemos hacer realidad—, la gestión con las distintas Administraciones. Yo creo que tenemos un objetivo, que es garantizar como mínimo la calidad del servicio, la calidad de esta pres-

tación necesaria. Indudablemente, la supresión de esa partida económica por parte del Gobierno central nos ha creado una preocupación y una inquietud, y a pesar de la partida económica que usted ha hecho constar en el presupuesto, a pesar de lo que nos ha dicho aquí esta mañana, yo no tengo duda que, efectivamente, así va a ser y que va a significar un complemento de las partidas de los usuarios para este servicio.

Le leía a usted también que debería actualizarse o modificarse en función de las circunstancias que lo requieran, que no puede ser de otra manera. Indudablemente, es una cuestión elemental que hay que mantener especialmente en el mundo rural, y si hay que priorizar, priorícese a los dependientes.

Yo creo que el objetivo es este, y ya se ha hablado del número de usuarios, que no van a ser a partir de este momento, en Aragón, menos, porque vamos avanzando en edad y Aragón es una comunidad autónoma donde el porcentaje de edad mayor es importante, por lo que debemos tener el objetivo de cubrir el servicio, y yo creo que también hay que poner en valor las reuniones que usted ha tenido con los responsables de las diputaciones provinciales y con los de algunos ayuntamientos, y espero que lo pueda tener con el Ayuntamiento de Zaragoza, porque creo que es la referencia, y aunque ya está mucho mejor, vamos a ver si es posible esto.

Pero en esta situaciones, a uno le viene a la cabeza qué pasaría si no tuviéramos autonomía en Aragón, algo que parece ser que es demonizado por algunos, afortunadamente no demasiados, diciendo poco más o menos que es el «coco» de las Administraciones, y qué bien nos va a venir este modelo territorial que nos hemos dado en Aragón, que son las comarcas, para poder prestar el servicio de proximidad.

En definitiva, yo creo que tenemos que apostar por un servicio que ha funcionado bien y que no tiene por qué funcionar peor, debemos de exigirnos a nosotros mismos el cuidado a nuestros mayores, que no dejan de ser nuestras familias y, por tanto, yo creo que estamos en la obligación de armonizar y estructurar el servicio a través de las Administraciones locales, y contamos con una herramienta imprescindible en Aragón, que son las comarcas y que, ahora mismo, son un referente en la prestación de los servicios y especialmente en los servicios sociales.

Y bueno, ponernos a su disposición como grupo parlamentario para que consiga su objetivo, no solo por que lo consiga, sino que el objetivo estará perfectamente justificado en la ayuda, en el apoyo a los aragoneses.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Susín tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, presidente.

Señorías.

Como ha descrito el consejero en su comparecencia, la teleasistencia, hasta ahora, se ha configurado como un servicio social general de naturaleza complementaria y no vinculado a la dependencia. Ha estado regulado y financiado como se ha dicho aquí en el seno de un convenio marco entre el Imserso y la Federación Española de Municipios, al que se han ido adhiriendo, a través de diversos convenios específicos en nuestra comunidad autónoma, las tres diputaciones provinciales y los ayuntamientos de Teruel y Zaragoza. Hasta el momento actual, este servicio se había financiado íntegramente a través de los citados convenios de colaboración, en los que nunca, hasta ahora, había intervenido el Gobierno de Aragón.

Ha sido este Gobierno quien ha iniciado el procedimiento para la elaboración de una disposición general para regular el servicio de ayuda a domicilio y la financiación de este servicio, tema —se lo ha recordado la señora Broto al señor consejero y se lo recuerdo yo ahora— que ustedes no hicieron y tenían pendiente desde el año 2006. En el mes de julio, se sometió a información pública el proyecto de la orden de desarrollo del servicio de ayuda a domicilio y del servicio de teleasistencia, que tiene como objetivo armonizar y unificar los criterios mínimos de acceso y de gestión de los servicios de teleasistencia, tal y como venían reclamando desde hacía tiempo las corporaciones locales.

Además, se pone en marcha el servicio en su modalidad de prestación esencial, dirigida a las personas en situación de dependencia, para completar con ello el catálogo de servicios del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia, algo, señora Broto, que no se había planteado hasta ahora y cuyo coste asumirá el usuario en función del baremo establecido y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales cuando dicho usuario tenga este programa establecido en su programa individual de atención. Así que de verdad, señora Broto, yo no sé de qué estamos hablando. Me parece que el señor consejero y yo hemos estado en una comparecencia y el señor Peribáñez y los demás portavoces han estado en otra. Yo creo que ha quedado claro que el servicio de teleasistencia está garantizado, señora Broto, para los dependientes y para los no dependientes.

Yo entiendo que usted ya tenía el discurso preparado y le ha descolocado un poco el tema, pero, mire, le voy a decir una cosa, señora Broto: lecciones, las justas, ¿eh? Por su parte, lecciones, las justas. Habla usted de que ingresaban seiscientos dependientes en el sistema. ¿Me quiere explicar —y me canso de repetirlo— cómo pensaban pagarlo? Porque en el mes de junio, ¿la intervención de esta comunidad autónoma suspendió los pagos de la dependencia porque no había crédito? ¿Me quiere explicar cómo pensaban pagarlo? Haga el favor, señora Broto, de que se le llene la boca menos con grandes palabras y de ser más consecuente con las realidades. De todas formas, señora Broto, al ciudadano, ahora mismo, le da igual quién pague el servicio, lo que le interesa es que el servicio se mantenga y eso es lo que vamos a hacer, porque el servicio está garantizado.

Decía usted: «Saquen el dinero de donde sea». ¿Me quieren decir de dónde pensaban sacarlo ustedes, o de dónde lo sacaban? Porque, evidentemente, si quieren, se lo vuelvo a recordar: cuatrocientos millones de facturas en el cajón, la dependencia sin presupuestar, etcétera, etcétera. De todas formas, no voy a seguir insistiendo. Y ha hablado el consejero también de mil millones de euros pendientes de pago en la Seguridad Social.

Señora Luquin, puedo compartir la preocupación o comparto la preocupación que tiene usted con la disminución de la pérdida de nivel adquisitivo de los mayores y de los pensionista, pero sabe cuál es el problema, que no hay recursos, que los recursos son insuficientes, y supongo que usted estará de acuerdo conmigo en que estas decisiones son difíciles para todos, que cuando se toman es porque no queda otro remedio.

Y señora Ibeas, el mapa de teleasistencia, sí, está costando hacerlo, pero ¿sabe cuándo pudo reunirse la directora general del IASS con el Ayuntamiento de Zaragoza, para saber cuántos eran los usuarios del servicio de teleasistencia del Ayuntamiento de Zaragoza? Ayer, ayer pudo reunirse, porque el señor Belloch debía estar más ocupado en los asuntos de la villa y corte que la posibilidad de reunirse con el consejero de Sanidad para explicarle cuántos eran los usuarios del servicio de dependencia del Ayuntamiento de Zaragoza. Como son ustedes socios o colaboran en las políticas del Ayuntamiento de Zaragoza, le animo a que invite al señor Belloch a preocuparse por los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos.

Nada más, y muchas gracias. *[Aplausos.]*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.

Señor consejero, puede terminar el debate de la comparecencia en un tiempo de cinco minutos, y le agradeceré que sea estricto.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, señor presidente.

Señora Luquin, y también señora Ibeas, me da la impresión —lo ha comentado con respecto a la señora Broto mi compañera Carmen Susín—, me da la impresión de que el discurso lo tenían preparado, porque no tiene nada que ver lo que ustedes han dicho en relación con lo que yo he comentado, por lo menos esa es mi impresión. No obstante, les voy a comentar alguna cuestión en relación con algunas apreciaciones que han realizado.

Creo que he dejado claro cuál ha sido el motivo por el que la partida de treinta millones para teleasistencia del presupuesto del ministerio no aparecía este año y otras muchas partidas con las que al ministerio le hubiera gustado dotar para temas tan importantes como la teleasistencia. Creo que he dejado claro cuál es su motivo, y también lo ha comentado la portavoz del Partido Popular. Esos mil millones ahí están, es una realidad, y ahí están.

Aprovecho para hablar de realidades y de palabras. Yo creo que ya vale de demagogia con estos asuntos. He dicho dos veces que se garantizaba el servicio de teleasistencia para dependientes y no dependientes; si eso no es el compromiso de este consejero, pues, ustedes dirán, pero yo creo que más compromiso que ese no se puede hacer ni se puede decir y menos de una manera tan explícita. Creo que lo importante son las realidades, no las palabras, y la realidad está ahí, todo el trabajo hecho desde el verano en el desarrollo de la normativa y todo el trabajo hecho, no lanzando la pelota, sino lanzando un guante, en relación con las diputaciones provinciales y con los ayuntamientos.

Le recuerdo, señora Luquin, que nosotros tenemos competencias, un deber en materia de teleasistencia para dependientes y, no obstante esto, hemos lanzado un guante para complementar, cuando sepamos los datos, aquellas cantidades que recibían las diputaciones y los ayuntamientos del Imserso y que, por desgracia, no van a poder recibir, pero que van a seguir manteniendo estas entidades en sus presupuestos, por lo menos, es lo que a mí me han dicho.

Señora Ibeas, usted, una vez más, confunde los intereses de su partido con los de Aragón. Yo defiendo allí donde voy (en Madrid, en Zaragoza, en Teruel, en Huesca, hasta en Bruselas, que he estado, que es lo más lejos que he estado) los intereses de Aragón, no los de la CHA, no los de su partido. Si no coinciden los suyos con los míos, pues, lo siento. Yo creo que tengo que defender los de los aragoneses, que es para lo que me han nombrado consejero de estas materias.

Respecto al mapa o la fotografía que usted ha comentado, es imposible que lo pueda hacer, primero, antes de conocer el problema, porque el problema se conoció cuando se constató que no iba a haber partida en los presupuestos y, en segundo lugar, una vez que tengamos los datos de las entidades que han venido prestando el servicio de teleasistencia en esta comunidad autónoma y, en concreto, los datos del Ayuntamiento de Zaragoza; ayer fue la primera reunión y, a fecha de hoy, todavía no tengo los datos, ni económicos ni numéricos, en relación con los teleasistidos, ni siquiera en cuanto a las características de estos en términos de dependencia.

A tal respecto, le comentaré que no ha sido por nuestra culpa. Han sido tres las llamadas y varios correos electrónicos que hemos mandado al ayuntamiento para mantener urgentemente y con suficiente antelación una reunión, y que sepa que como respuesta hemos tenido insultos e improperios, pero a mí, en este juego, no me van a encontrar. Yo soy una persona de trabajo y creo que sé hacia dónde va, más en una materia como esta, que requiere tener clara la estrategia.

Señor Peribáñez, le agradezco y comparto de verdad la preocupación por la armonización muy importante en este tema, pero también en el ámbito en general de los servicios sociales, y le quiero comentar que respecto a esto, en las reuniones en las que hemos hablado de teleasistencia, hemos aprovechado para hablar de una problemática de esta comunidad autónoma que va más allá de los que estábamos allí, porque involucra también a las comarcas con las que tenemos que hablar, que es una coordinación, una armonización estrecha en todo lo que es la prestación de servicios sociales. No puede ser que estemos duplicando, no puede ser que estemos solapando en una época en la que los recursos son escasos y tenemos que aplicarlos de una manera eficiente, y eso exige sentarnos, ver qué estamos haciendo cada uno, ver cuáles son nuestras competencias y actuar de manera coordinada, y ese va a ser el trabajo que vamos hacer en estos próximos meses no solamente en teleasistencia, sino en todo el ámbito de los servicios sociales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

Señorías, se suspende la sesión *[a las quince horas y nueve minutos]*, que se reanudará a las cuatro y cuarto.

El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. No les voy a echar una bronca, voy a decir «se reanuda la sesión» *[a las dieciséis horas y quince minutos].* Así que pasamos al siguiente punto del orden del día: debate y votación de la moción número 78, dimanante de la interpelación número 74, sobre política de planificación educativa del Gobierno de Aragón. Presenta el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

El señor Briz tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

Moción núm. 78/12, dimanante de la interpelación núm. 74/12, relativa a la política de planificación educativa del Gobierno de Aragón.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Bueno, pues la moción dimanante de la interpelación número 74/12, relativa a planificación educativa, trata de plantear algunas propuestas que mejorarían, sin duda, esa planificación educativa, que creemos, como dijimos en la interpelación, que, por parte del Gobierno de Aragón, es errónea y errática durante este curso 2012-2013, e intuimos que va a ser mucho peor para el 2013-2014.

Nosotros creemos que esta planificación lo que está motivando es un desmantelamiento del Estado del bienestar y que está atacando a la línea de flotación de la enseñanza pública, sobre todo la rural, falta de calidad, de equidad, donde, seguramente, las escuelas unitarias sufrirán en estos próximos meses un impulso negativo, seguramente.

Por lo tanto, pensamos que la planificación no va a mejorar ni la tasa de abandono del 26,5% ni los resultados negativos que hay de fracaso, que rondan más del 30%, ni, seguramente, mejorará la empleabilidad, y, por otra parte, la reducción presupuestaria que se plantea para este año 2013 no va a mejorar esta planificación educativa.

Por lo tanto, ante una drástica reducción presupuestaria, de programas, etcétera, incluso el propio Gobierno central no está ayudando mucho, porque hay, por supuesto, un recorte también importante en los fondos que deberían llegar a las comunidades autónomas, como es el Fondo de cooperación territorial, que el ministro Wert no está —digamos— impulsando, sino que más bien se dedica más a negociar la asignatura de Religión con los obispos que a tratar de mejorar la calidad de la enseñanza pública en el resto de las comunidades.

Por todo esto, planteamos varias propuestas que paso a desarrollar.

En primer lugar, implantar en los centros educativos aragoneses el programa de refuerzo de orientación y apoyo, que ha tenido unos buenos resultados a lo largo de su andadura desde el año 2005, que es importante, y no ha salido todavía en estos momentos para alumnos de primero y segundo de la ESO y para alumnos de final del ciclo de primaria. Es un programa eficiente, que ha tenido una acogida muy interesante y unos buenos resultados en Aragón, y, por lo tanto, unos resultados académicos que van en aumento con este programa y que evita la exclusión social. Por lo tanto, pedimos que se lleve a cabo este programa con fondos propios si no hay disponibilidad del Fondo de cooperación territorial pendiente de aprobación del Consejo de Ministros. Creemos que es un programa importante, y que se financie con fondos propios.

Otra propuesta que hacemos es mantener las ratios. Aunque somos muy insistentes y hemos hecho esta propuesta muchas veces, sabemos que va a venir un porvenir mucho más aciago y va a haber un aumento de las ratios, y decimos que se mantenga no lo que dice la LOE, que está en visos de desaparición, que hablaba de veinticinco en primaria y treinta en secundaria, sino que planteamos que se mantengan las ratios de la Orden de 21 de marzo del 2000, que eran, para primaria, veintidós y, para secundaria, veintisiete, porque creemos y sabemos casi seguro que las ratios para el curso que viene 2013-2014 serán treinta para primaria y treinta y cinco y treinta y seis para bachillerato.

Bien, otra propuesta que hacemos que nos parece importante en estos momentos es sobre los profesores interinos, que están sufriendo sacrificios constantes, ha habido una reducción importante este curso en el que estamos (más de mil horarios, como se ha dicho), y el futuro posiblemente sea menos halagüeño, si cabe, porque puede ocurrir que haya más de dos mil profesores interinos que dejen de trabajar en esta comunidad autónoma, teniendo en cuenta, además, que el Tribunal de Justicia de Aragón planteó que la oferta de empleo público tenía que acomodarse a esta oferta de contratados e interinos en la educación, cosa que ha quedado pendiente y que el Gobierno de Aragón no contesta, no dice qué va a ocurrir con la oferta de empleo público, que también afecta a estos profesores interinos. Por lo tanto, pedimos que se pague ese salario del verano que se aprobó en la mesa sectorial que se planteó en julio de este año. Por lo tanto, creemos que la disposición adicional vigesimocuarta del texto articulado del proyecto de presupuestos debería anularse para que esto se pudiese llevar a cabo y se pudiera realizar, porque esto va en contra, incluso, por supuesto, de la negociación colectiva.

Y para finalizar, un tema que nos produce a Chunta Aragonesista, y yo creo que a la ciudadanía aragonesa, un escarnio cada vez mayor, que es el problema fundamental que se está provocando en las escuelas infantiles, que muchas de ellas van a sufrir las consecuencias de este drástico recorte presupuestario, del 75% en los últimos presupuestos, y que ya ha sido el 40% en este año en el que estamos, en este curso en el que estamos, y que corre peligro el que estas escuelas infantiles se puedan mantener si no se suben las cuotas a los padres o no se hacen cargo los ayuntamientos. Han entregado catorce mil firmas en estas Cortes los padres de Huesca, hay una plataforma de alcaldes, la LOCE no mejora la situación, y proponemos el aumento de las partidas presupuestarias proporcionalmente al número de escuelas infantiles existentes para firmar los convenios que financian al profesorado de escuelas infantiles.

En todo caso, señorías, esperemos que apoyen estas propuestas. Y, como decía un sacerdote del siglo XIX, «la educación es un seguro para la vida y un pasaporte para la eternidad»: este era Jaime Balmes, que no se le puede sospechar de ser una persona de izquierdas.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.

Se ha presentado una enmienda a esta moción por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Señor Barrena, puede defenderla por tiempo de cinco minutos.

El señor diputada BARRENA SALCES: Gracias, señor presidente.

Señorías, la enmienda que presenta Izquierda Unida va en relación con el punto tercero, y me permitirán que empiece refiriéndonos al resto de puntos de la moción que ha defendido el señor Briz en nombre de Chunta Aragonesista.

Anticipando el apoyo de Izquierda Unida a esta moción, esperamos la receptividad de la enmienda que planteamos, porque creemos que va en línea con lo que se propone en la moción y, sobre todo, para insistir y reiterar una vez más la necesidad que tiene el Gobierno de Aragón de cambiar lo que es el objeto de esta moción, que, en definitiva, es la política de planificación educativa que está siguiendo, desde nuestro punto de vista, absolutamente errónea y equivocada, pero es claro que nuestro punto de vista coincide con el de esa cantidad de miles, miles y miles —decía yo esta mañana— en relación con quienes están pensando que las políticas que se están llevando lo que hacen es impedir el desarrollo efectivo de lo que sería el servicio público educativo, y, desde luego, están expresando y manifestando claramente su desacuerdo con las políticas que se están llevando.

Ciertamente, esta mañana me ha sorprendido ver cómo la portavoz del Partido Popular, yo creo que por primera vez en esta tribuna, ha reconocido que el Gobierno de Aragón, el Gobierno de la señora Rudi, el Gobierno PP-PAR, ha incrementado las ratios (son palabras textuales que ha empleado esta mañana en la tribuna la portavoz del Partido Popular). Es verdad que ha dicho que como consecuencia de lo mal que lo hicieron los anteriores responsables: les recuerdo que alguna responsabilidad tendrá su actual socio de Gobierno, que, evidentemente, era también socio de Gobierno anteriormente.

Pero, ciertamente, las políticas que están llevando están desmantelando lo que tiene que ver con el servicio público educativo y están dificultando claramente la posibilidad de que la ciudadanía acceda a ese derecho constitucional que es el acceso a la educación.

En ese sentido, está claro: el punto primero de la moción, que, insisto, apoyamos, habla clarísimamente de recuperar un programa que ha sido fundamental, que ha demostrado su eficacia y que, en definitiva, vuelve a preocuparse de la ciudadanía, del alumnado en este caso, que requiere programas de refuerzo de orientación y de apoyo. Por lo tanto, ciertamente, sabemos que ese programa viene desde el ministerio del señor Wert, pero, ciertamente, creemos que el Gobierno de Aragón debe tratar de recuperarlo, y, si no, lo que debe hacer es arbitrar mecanismos para poderlo plantear aquí.

De las ratios nos han oído hablar en multitud de ocasiones. Insistimos, reiteramos que no es absolutamente de recibo lo que están planteando con cómo y de qué manera, por la política de recortes, están llegando a incrementar las ratios. Sé que siempre nos juegan con la estadística, sé que siempre juegan con la parte de Aragón que tiene que ver con el medio rural, pero lo cierto y evidente es que en muchas de las zonas de escolarización del área metropolitana y de las áreas urbanas están incrementando las ratios hasta niveles que, desde luego, dejan en entredicho su teórico compromiso con el servicio público educativo.

El punto tercero, que es al que presentamos la enmienda, viene a hablar de recuperar, de reparar, de acabar con lo que es una injusticia. Es una injusticia que afecta al profesorado interino, que se supone que, como cualquier otro trabajador o trabajadora, si ha trabajado, tiene derecho a su retribución en las vacaciones de verano. Nuestra enmienda cambia el término «retribución» por «prórroga de contrato», porque nos parece que el Gobierno de Aragón no debería caer en lo que caen muchos de los empresarios y muchas de la empresas privadas, y es, al final, derivar los gastos de la reglamentaria vacación y del derecho a la vacación que tiene cualquier trabajador o trabajadora para que vaya a su cargo, y por eso se les despide, con intención de ahorrarse el verano. Nosotros creemos que, además de percibir el salario, tienen que percibir también, mediante la prórroga de contrato, lo que son las cotizaciones sociales, para, en definitiva, continuar desarrollando lo que sería su cotización a efectos de pensiones.

Y la última es evidente: muchas de las enmiendas que hemos presentado van en la dirección de incrementar las partidas presupuestarias para la sección 18, concretamente para el servicio público educativo.

Por lo tanto, anuncio el voto favorable de Izquierda Unida a esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.

Intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes.

Empezamos por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. La señora Herrero tiene cinco minutos para intervenir.

La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, señor presidente.

Muy brevemente, para decir que el voto de este grupo parlamentario será contrario a esta moción en sus cuatro puntos, aunque plantea cuatro cuestiones que..., bueno, pues que tienen que ver todas con la educación, pero que están claramente diferenciadas.

En cuanto al primer punto, que habla del programa de refuerzo, orientación y apoyo, decir que, bueno, creo que ustedes y nosotros entendemos el aragonesismo de una forma diferente. Ya en más de una ocasión han hecho alguna iniciativa de este tipo en la que dicen que, cuando no llegan fondos del Gobierno central, que lo pague el Gobierno de Aragón. Esa no es nuestra manera de entender el aragonesismo, desde luego. A nosotros, lo que nos parecería lógico es que

ustedes dijeran que Madrid lo pague y que vengan los fondos del Gobierno central, no que, si no vienen del Gobierno central, lo pague Aragón. Y, en esa línea, ahí es, desde luego, lo que nosotros hemos trasladado a la consejera en varias ocasiones a este respecto, y lo que decimos es que este programa, que nos parece importante, tiene que seguir teniendo los fondos que han venido del Gobierno central; cuando menos, los mismos que han venido. Y, bueno, me alegra saber que esos fondos sí que van a estar y que ya se han desbloqueado y que van a llegar. Por tanto, pues innecesaria, y nos alegramos de que siga viniendo ese dinero.

Otra cosa muy diferente es que quizás tendríamos que entrar a un debate más de fondo de si es lógico que, teniendo las competencias en educación transferidas, el Gobierno de España siga llevando a cabo esta política de ir firmando convenios y acuerdos puntualmente con determinadas cuestiones educativas en vez de transferir el dinero a la comunidad autónoma para que nosotros, dentro de la materia de educación, lo podamos repartir como consideremos, y lo hemos dicho también en alguna ocasión, y no estaríamos al albur de que se firme o no se firme ese convenio, de que lleguen o no lleguen esos fondos, sino que tendría que venir todo ese dinero con independencia de la voluntad del momento o de la firma de acuerdos o convenios con el ministerio.

En cuanto a las ratios a las que hace referencia, bueno, pues los partidos que están en la oposición hoy son unos, ayer eran casi los mismos pero no los mismos, y siguen hablando de esta orden de la que entonces hablaban otros también, de la orden del 2000 en cuanto a las ratios.

Nosotros llevamos muchos años diciendo lo mismo: las ratios, cuanto más bajas sean, dentro de unos límites, por supuesto, pues mejor. Pero, a veces, la realidad y los recursos hacen que no sea tan fácil cumplir eso, y, de hecho, cumplir, no se ha cumplir nunca esa orden del año 2000. Lo que siempre hemos dicho y seguimos diciendo es, desde luego, que se cumpla la legislación vigente, y esta legislación, además, en cuanto a las ratios, no ha sido modificada en los últimos veinte años, por tanto sigue siendo la misma, y, aun así, yo creo que en Aragón se hace un esfuerzo por mantener en la medida de lo posible esas ratios, que sabe que en un porcentaje se pueden rebasar por determinadas circunstancias. En general, salvo excepciones, esto se cumple y se hace de manera acorde con la ley.

En cuanto al salario de los profesores interinos, me remito a la enmienda que mi compañero Peribáñez defenderá después en una proposición presentada al Partido Socialista, donde lo que planteamos es que, en este sentido, en cuanto haya una disponibilidad presupuestaria que lo permita, se restituya el acuerdo que se firmó en esa mesa sectorial, y, mientras que eso no suceda así, que se estudien fórmulas para flexibilizar la respuesta a las decisiones que están tomando en ese sentido.

De todas maneras, esto nos tendría que llevar también a hacer una reflexión acerca de la figura del interino y acerca del porcentaje de interinos que tenemos y que hemos tenido en nuestra comunidad autónoma en estos años, porque, probablemente, el porcentaje sea demasiado elevado, y ahí asumo también la parte que nos corresponda de responsabilidad, pero creo que quizás no habríamos llegado a este punto si no tuviésemos tampoco ese porcentaje de interinos y esa concepción del profesor interino, que al final ha acabado cubriendo unas plazas que quizás no tendrían que ser de interinos, o, si son de interinos, entonces son de interinos con el concepto de profesor interino.

En cualquier caso, lamentamos esta medida que ha habido que tomar por las circunstancias económicas tan graves que estamos pasando, y esperamos solucionarla y cambiarla y modificarla en cuanto sea posible.

Y en cuanto a las partidas presupuestarias sobre las escuelas infantiles, bueno, pues nosotros, como sabe, hemos hecho una enmienda, y, desde luego, para nosotros, el tema de las escuelas infantiles es muy importante, y allá donde estemos y podamos vamos a seguir haciendo todo lo posible para que se mantengan las escuelas infantiles en todos los municipios donde hasta ahora han estado funcionando. Y es más: incluso, si se pudiese seguir aumentando, pues también, porque creemos que es un servicio importante para las familias y para los niños.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.

El Grupo Parlamentario Socialista. La señora Vera tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, también, señor Briz, anunciarle que el Grupo Parlamentario Socialista votaremos a favor de su moción, porque, sin duda alguna, a través de ella se plantean soluciones a alguno de los despropósitos que en materia educativa está cometiendo el Gobierno.

Señorías, en año y medio de Gobierno de Aragón, de este equipo de Gobierno de Aragón, y en menos tiempo el Gobierno central, están destruyendo de manera sistemática el sistema educativo del que nos habíamos dotado, un sistema educativo basado en la calidad y en la equidad, un sistema que garantizaba la educación para todos, basado en la igualdad de oportunidades, reforzando la situaciones más débiles, tanto territoriales como personales, desde el compromiso por lo público y con la participación de la comunidad educativa. Un modelo radicalmente distinto del que se está planteando en este momento, del que el Partido Popular está llevando a cabo en nuestra educación, en el que la igualdad de oportunidades no existe y la educación para todos es también totalmente inexistente, un modelo basado en la ideología, excusándose en la crisis.

«La educación está en crisis», así lo afirmaba la consejera en la interpelación de la que dimana esta moción. Pero la educación, señorías, está en crisis por la crisis educativa que está generando este Gobierno, puesto que este Gobierno recorta en programas que garantizan la equidad del sistema, generando inseguridad, y ejemplo de ello es el programa de refuerzo y orientación y apoyo, un programa que ofrece recursos para contribuir a la igualdad y garantizar la atención a los colectivos más vulnerables con el objetivo del acceso a una educación de calidad para todos. Y parece ser que este último objetivo, el de una educación de calidad para todos, es lo que molesta, puesto que es

lo que permanentemente se quiere eliminar, como se desprende de todas y cada una de las acciones que están desarrollando en educación, bien cuando lo hacen o bien también cuando lo deshacen. Desde luego, el Partido Socialista hemos enmendado los PROA, que, como saben, el Gobierno —vuelvo a repetir— planteaba eliminar.

Señorías, los socialistas entendemos un modelo educativo —les decía— que tiene que estar, fundamentalmente, basado en la equidad y en la calidad desde la igualdad de oportunidades territoriales y personales, y desarrollamos un modelo donde el profesorado ha ocupado un lugar preferente, todo lo contrario a lo que en este momento se está llevando a cabo.

Decía la consejera en la interpelación que necesitaba la complicidad y la motivación de los profesores. Y yo pregunto: ¿cómo se va a hacer esto, cómo están haciendo esto? ¿Ahorrando —que dijo— con sus salarios, con recortes de más de mil profesores, con la eliminación de horas para atender la diversidad y las compensatorias, con aulas de las que miembros actuales del Gobierno hablaban de hacinadas y que han superado en este curso? Medidas estas, entre otras, que no voy a reiterar ni a profundizar y que nos están llevando a una realidad que ya vivimos, pero hace más de treinta años, cuando también —creo recordar— se hablaba de autoridad.

Sin duda, la eliminación del profesorado es lo que va a llevar a las aulas a un hacinamiento, donde se perderá en convivencia, en participación y calidad pedagógica, puesto que los profesores, con una mayor carga lectiva y más alumnos por aula, no tendrán la misma capacidad de implicación. Hablamos del modelo educativo que está llevando a cabo el Gobierno, con políticas excluyentes y no respetando los acuerdos de los órganos colegiados de decisión y de debate, como ha ocurrido con los profesores interinos y su contratación en verano, una cuestión sobre la que mi partido ha presentado una enmienda para corregir esta situación en los presupuestos, y también será protagonista horas más tarde de una iniciativa que se debatirá con posterioridad, como digo, en este Pleno.

Por tanto, no voy a abundar en lo injusto de la medida con los profesores y para el buen funcionamiento del sistema educativo, puesto que, sin duda alguna, esta participación la dejan reducida a la nada con la vulneración de los acuerdos que en ella se adoptan, y, además, haciéndolo de tapadillo.

Y por finalizar, porque veo que no me queda tiempo, si hablamos de vulneración, también tenemos que hablar de la vulneración que se ha cometido respecto a los convenios para la financiación del profesorado en las escuelas infantiles con los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma, una vulneración que, sin duda alguna, nos va a hacer que se incremente la desigualdad de oportunidades, y, concretamente y más, en el medio rural, que precisamente es lo que debíamos evitar y hacer absolutamente lo contrario. ¿Porque alguien duda de que el encarecimiento de este servicio público vaya a ser inasumible? Lo va a ser, y, por lo tanto, va a conllevar, lamentablemente, como digo, el cierre de las escuelas infantiles en el medio rural.

Es, por lo tanto, intolerable, y apoyaremos su iniciativa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vera.

El Grupo Parlamentario Popular. El señor Celma puede intervenir por tiempo de cinco minutos.

El señor diputado CELMA ESCUIN: Señor presidente. Señorías.

Hablamos, señor Briz, gracias a su moción, una vez más, de cuatro temas puntuales que afectan a la educación, y, como suele ocurrir en los temas que afectan a la educación, señor Briz, los grupos de la oposición deciden mezclar absolutamente todos estos temas, que son relevantes y cruciales para el sistema educativo aragonés, con los temas que afectan al fondo de nuestro sistema educativo, a la calidad, a los fundamentos de nuestro sistema educativo. Y yo estoy dispuesto a demostrarles que no hay relación ni vinculación de una cosa con la otra.

Después entraré de forma concreta a justificar nuestra posición, que ya le adelanto que es contraria, sobre su moción.

Pero, para hablar de los fundamentos reales de nuestro sistema educativo, permítanme la licencia, señores de la oposición, de que les haga un examen, un examen sorpresa; sé que no es buena hora, acaban de terminar de comer, quizá no están muy espabilados, pero les voy a hacer un examen sorpresa *[rumores],* examen sobre los fundamentos... —no se pongan nerviosos, no pasa nada, no creo que esto les afecte—, un examen sobre los fundamentos sobre nuestro sistema educativo.

El nombre del tema podría ser: «la LOGSE», «la LOE»..., igual me da, el que ustedes quieran; el apellido sería: «Partido Socialista», y el grupo, que suele aparecer en los exámenes (en el encabezamiento pone «grupo A», «B»), yo diría en este caso: «Grupo Socialista».

Y ahora, las preguntas del examen, anoten.

Pregunta: ¿cuántos jóvenes no terminan en España la ESO?, ¿cuántos? Uno de cada tres. *[Rumores.]*

Pregunta: ¿cuál es la tasa de abandono escolar en España? Veintiocho por ciento.

Pregunta: ¿cuántas universidades españolas están entre las doscientas universidades mejores del mundo? Ninguna. *[Rumores.]*

Pregunta: ¿cuántos jóvenes dejan sus estudios porque no les gusta estudiar? El 78%, señora Almunia, el 78%. *[Rumores.]*

Pregunta: ¿en qué puesto se encuentra España en desarrollo educativo...?

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

El señor diputado CELMA ESCUIN: El veintiséis, por debajo... *[Rumores.]* Señor presidente...

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

Señor Celma, continúe, continúe.

El señor diputado CELMA ESCUIN: Le repito la pregunta: ¿en qué puesto se encuentra España en desarrollo educativo? El veintiséis, por debajo de casi todos los países de la Unión Europea, según el informe de la Unesco.

Pregunta: ¿en qué puesto se encuentra España en lectura, matemáticas y ciencias de la Unión Europea?, ¿en qué puesto se encuentra? El tercero por la cola, antepenúltimos, solo por encima de Rumanía y Malta.

Y el tema que responde a estas preguntas, que deberían habérselo estudiado bien, el tema que responde a estas preguntas se llama LOGSE, se llama LOE, leyes, en todo caso, aprobadas por el Partido Socialista, en la mayoría de los casos apoyadas por los grupos de la izquierda. Y el resultado de este examen es suspenso, suspenso o muy deficiente. *[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]*

Pero, de estos temas, de estas preguntas, a ustedes no les gusta hablar, ni a ustedes ni a ningún grupo de la oposición. De los temas fundamentales de la educación, a ustedes no les gusta hablar... *[rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista],* porque son ustedes los causantes, leyes socialistas y desarrollos legislativos socialistas... *[Rumores.]*

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor...

El señor diputado CELMA ESCUIN: Estos son los causantes...

El señor PRESIDENTE: Señor Celma...

El señor diputado CELMA ESCUIN: ... de los problemas más graves que tiene el sistema educativo español.

Y los deberes... *[rumores]*, los deberes no están para mejorar estos resultados... *[rumores]* —señor Ibáñez, que usted es de Calanda, demuestre que sabe escuchar, como yo—, los deberes para mejorar los resultados de este examen no están, insisto, no están para mejorar las condiciones materiales de nuestro sistema educativo. ¿Sabe por qué? *[Rumores.]* ¡No, no!, yo le voy a decir la realidad; hay que tomar medidas, pero le digo la realidad a día de hoy de nuestra situación en material académico, le digo: España, y, por tanto, también Aragón, en estos momentos está por encima, incluso, de países como Italia, Francia o Portugal. Por lo tanto, esto demuestra que la interrelación que ustedes buscan no es real, porque el fracaso que en muchos casos se da de nuestro sistema educativo es por culpa de la legislación que ha puesto en marcha en nuestro país el Partido Socialista, en muchos casos apoyados por los grupos de la izquierda. *[Rumores.]*

Y le voy a explicar ahora los matices muy brevemente. Yo creo que si el señor presidente es generoso conmigo...

El señor PRESIDENTE: Señor Celma, dese prisa.

El señor diputado CELMA ESCUIN: No, pero es que no me han... *[rumores],* no me han dejado hablar. Se ponen nerviosos los señores de la oposición cuando les leemos... *[Rumores.]*

El señor PRESIDENTE: Celma, que se le está acabando el tiempo.

El señor diputado CELMA ESCUIN: ... las verdades del barquero. ¡Qué nerviosos se ponen cuando les decimos las verdades del barquero!, ¡qué nerviosos se ponen! A esto, no saben responder.

Yo les diré una cosa: primero, en cuanto a las ratios, rápidamente, que es exactamente lo que ha dicho la portavoz de educación de mi grupo parlamentario, nos ajustamos, incluso por debajo de la media, nos ajustamos a lo que marca la Ley Orgánica de educación del 2006, también aprobada por el Partido Socialista.

Respecto al salario... *[rumores]*, escuche, respecto al salario... Déjenme, hombre, que soy nuevo en esto y llevo un año, déjenme hablar tranquilamente. *[Risas y rumores.]*

El señor PRESIDENTE: Señor Celma, ¿quiere terminar, por favor?

El señor diputado CELMA ESCUIN: Voto en contra, voto en contra.

En la explicación de voto, si es necesario, le daré más motivos por lo cuales no compensa votar esta moción.

Muchas gracias.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.

El grupo parlamentario proponente, el señor Briz, puede fijar su posición respecto a la enmienda.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Bueno, después de oír los argumentos del señor Celma, voy a tratar de centrarme, porque he propuesto yo la moción, ¿eh?, que quede claro, Chunta Aragonesista. *[Risas.]* Es que parecía que no, porque, como no me ha escuchado todo el mundo, a lo mejor pensaban que era el Partido Socialista el que la había propuesto... La ha propuesto Chunta Aragonesista. Que quede claro eso como axioma inicial.

Dicho esto, vamos a admitir la enmienda de Izquierda Unida porque creemos que es un texto que complementa, que —digamos— añade algunos matices que pueden ser interesantes para complementar la propuesta, que coincide con la que nosotros hacemos. Por tanto, no habría problema de incluir el texto de la enmienda presentada por Izquierda Unida.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.

Vamos, en consecuencia, a someter a votación la moción con la incorporación de la enmienda en los términos que ha explicado el proponente.

Señorías, comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, veintisiete; en contra, treinta y seis. Queda rechazada la moción.**

Y pasamos al turno de explicación de voto.

Señor Barrena, puede intervenir.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Gracias a Chunta Aragonesista por aceptar nuestra enmienda.

Y lamentar que esto no haya salido y, de paso, lamentar la actitud con la que los grupos del Gobierno se han aproximado a este debate, de una manera —

yo diría— un tanto recurrente, porque, como no tienen otro argumento que decir, pues entonces recurren a la fórmula magistral, que es lo que les gusta, de medir los conocimientos.

Yo le voy a hacer otra pregunta, señor Celma, apunte bien, por favor *[risas]*: ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? *[Risas.]* Porque yo creo que, si es capaz de descifrar esto, igual empezaré a pensar que a lo mejor ustedes tienen alguna idea de lo que están hablando más allá de demostrar una vez más lo que ustedes consideran que es la educación, que es una herramienta más para desarrollar su ideario, profundamente ultraconservador, profundamente —yo diría— regresivo, y que en el fondo, al final, a lo que lo fían siempre es a ese binomio resultado/orden..., bueno, en definitiva, proteger lo que son los valores que ustedes defienden, que creo que son muy particulares, no son generales, no son en absoluto pensando en la globalidad de la ciudadanía, y sí que están siempre a su servicio.

Negar que los elementos que plantea el Grupo Chunta Aragonesista en su moción tienen que ver con la calidad del servicio educativo de la manera que ustedes lo han hecho demuestra clarísimamente lo poco que les importa el servicio educativo. Saben que los de «su» categoría y clase parece que no van a tener problemas, pero, evidentemente, están ustedes trabajando para profundizar en la brecha social, para abrir clarísimamente la sociedad en el despropósito que supone establecer el baremo que ustedes plantean.

Por lo tanto, señores del Partido Popular y del Partido Aragonés, cómplice necesario, que sepan que seguirán encontrando resistencia al planteamiento que ustedes hacen con la educación y seguirán encontrándose una defensa cerrada de la educación pública, en la cual coincidimos con toda la ciudadanía, que creo que es lo que ustedes...

El señor PRESIDENTE: Termine, señor Barrena.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]: ... tendrán que empezar a reconocer.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Briz, puede intervenir.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Lamento, lamento que estas propuestas, que yo creo que, además, me da la... Lo agradezco, por supuesto, al Partido Socialista y a Izquierda Unida que nos hayan votado. Que yo creo que cuando escuchas a la portavoz, la señora Herrero, del Partido Aragonés es que no hay ningún argumento en contra, incluso dicen que van a enmendar para favorecer todo esto que estamos proponiendo, y, sin embargo, luego se vota en contra. Eso es algo que no se entiende desde el punto de vista lógico; por tanto, no entendemos el porqué. Es un lástima, porque son cosas fundamentales para el sistema educativo.

Pero, señor Celma, mire, voy a ponerme en el mismo nivel que usted. Usted se ha permitido, con una cierta soberbia, ponernos exámenes a la oposición, y a usted, por la edad que tiene, me va a permitir que le llame «profesor ayudante» *[risas]*, y, como profesor ayudante que es, usted me tendrá que decir, cuando SE suspende el examen, que lo hemos suspendido, según ha dicho, cuál es la terapia, las propuestas educativas para aprobar esto. Porque no me diga usted como uno que estuvo también de profesor, joven como usted, que decía: «mire, yo, si aprueban los alumnos todos los exámenes del curso pero suspenden el final, los suspendo». Pues, mire, díganos usted cómo.

Se lo voy a decir yo: ustedes dicen que esto no funciona, que ha tenido la culpa la herencia —esto de la herencia es un tema recurrente, manido, absolutamente repetitivo, como el ajo—, y, sin embargo, ustedes dicen: para arreglar esto, como suspenden el examen, voy a quitar los programas, voy a poner más alumnos en clase, voy a reducir los profesores y voy a tener menos inversión... Explíquemelo, porque, eso, ¿sabe lo que es decirles?: miren ustedes, han suspendido todos el examen, pero no vengan a clase en toda la semana. Eso están haciendo ustedes.

Así que, señor ayudante *[risas]*, con todos mis respetos, cuando vuelva a poner el examen, diga también cómo aprobamos el examen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.

Señora Herrero, puede intervenir.

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Pues no iba a intervenir porque yo creía que había explicado convenientemente por qué íbamos a votar en contra de la moción, pero siento una gran frustración al ver que, al menos el señor Briz, proponente de esta moción, no sabe por qué he dicho que no. Simplemente, señor presidente, perdóneme, pero es que se lo tengo que repetir, porque no me he explicado nada bien. *[Rumores.]*

O sea, dice que votamos en contra pero que no hemos dicho que no. Mire, se lo repito.

Punto uno: no, no porque entendemos el aragonesismo de otra manera y porque decimos no que lo pague el Gobierno de Aragón, sino que lo pague el Gobierno central.

Segundo punto: dice que no he dicho que no..., sí, le digo «no», le he dicho «no», no a que se mantengan las ratios de la orden del año 2000, porque no se han mantenido tampoco hasta ahora, porque lo que decimos es que se cumpla la ley, tal como se ha cumplido hasta ahora. O sea, no.

Punto tres: le digo «no», no porque dice que se abone el salario a los profesores interinos según el acuerdo pasado, y yo le digo «no». Me remito a la enmienda que defenderá el señor Peribáñez después y en la que decimos que, en cuanto sea posible porque los presupuestos lo permitan, se restituya el acuerdo, que no es lo mismo que dice usted, y, es más, que busquen fórmulas flexibles para dar respuesta a las diferentes situaciones de una forma más adaptable.

Y punto cuatro: es que le he dicho «no», no, porque dice «aumentar las partidas presupuestarias en el proyecto de ley de presupuestos de forma proporcional al número de escuelas infantiles»... No. Nosotros ya hemos presentado una enmienda; por tanto, esperamos contar con su apoyo; por tanto, ya estará aumentada, y no proporcionalmente, sino en la medida de lo

posible, y buscaremos fórmulas también para dar esa respuesta.

O sea, yo no sé... ¿Es necesario, señor Briz, que lo vuelva a explicar o...?

El señor PRESIDENTE: Termine, termine ya, señora Herrero.

La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el escaño]: Vale.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.

Señora Vera, puede intervenir.

La señora diputada VERA LAINEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Bueno, pues yo también le preguntaría, señor Celma: ¿vamos a mejorar los datos sobre los que ha basado su intervención con más horas en Religión? ¿Así los vamos a mejorar?

Yo creo que lo único que vamos a conseguir con el planteamiento que están realizando ustedes, con todas las medidas que están poniendo en marcha, es hacer ni más ni menos que más grande la brecha entre ricos y pobres. Es lo único.

Y le diría otra cosa más, porque usted y yo hemos sido educados, seguramente, con leyes socialistas, ¿verdad?, y me gustaría que aprobase hoy el examen y que, verdaderamente, hoy contestase, como lo ha hecho la señora Herrero, contestase al examen de los cuatro puntos de la iniciativa, porque yo creo que no se ha posicionado absolutamente en ninguno de los cuatro puntos de la iniciativa *[aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista],* y, por tanto, me gustaría que nos hablase del programa de refuerzo, de orientación y apoyo, de si se van a mantener las ratios, de si se va a abonar el salario a los interinos y de si se van a aumentar y, por lo tanto, se van a mantener las escuelas infantiles en todo nuestro territorio.

Gracias.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vera.

Señor Celma, puede intervenir.

El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el escaño]: Señor presidente. Señorías.

Señora Vera, creo que ha quedado bastante evidente que, entre otras cosas, no he podido responder a cada uno de los puntos de su moción porque no me han dejado hablar... *[rumores]* —no, de la moción, sí, perdone, gracias, señor Ibáñez—, a la moción, porque me han entretenido faltando al silencio desde el Grupo Parlamentario Socialista *[rumores],* porque entiendo que se pongan nerviosos cuando se ponen los datos sobre el papel y los resultados de sus políticas educativas.

El problema de fondo que yo intentaba analizar es que, siendo relevantes las cuestiones que usted plantea en su moción, no tiene ningún sentido que lo unan a los resultados académicos, a la calidad de la enseñanza, porque en ningún caso se altera.

La izquierda, en este caso, en el sistema educativo, como le ocurre en materia de educación, como le ocurre en materia económica, suele apuntar al blanco equivocado, y, por lo tanto, es difícil que nos planteen alternativas en materia educativa. *[Rumores.]*

Yo, simplemente, al señor Barrena le pediría que procure no estigmatizar a los diputados de este grupo parlamentario y tampoco al grupo parlamentario en general.

Y al señor Briz le diré que no me preocupa que en estos momentos sea profesor ayudante, porque mi abuelo decía que aprendo rápido, así que en seguida llegaré a su altura.

Muchas gracias.

[Rumores.] [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: debate y votación de la moción número 79, dimanante de la interpelación número 85, que va a presentar la diputada señora Fernández por tiempo de cinco minutos.

Moción núm. 79/12, dimanante de la interpelación núm. 85/12, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de recaudación de impuestos.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías.

Presentamos una moción que tiene que ver con la interpelación que en el anterior Pleno le hicimos al consejero de Hacienda en relación con los tributos, fundamentalmente con la recaudación que había habido en esta comunidad autónoma. Y, con los datos que conseguimos del señor Saz, la verdad es que lo tenemos complicado, porque los datos nuestros eran que, en el primer semestre de este año, la comunidad autónoma había bajado la recaudación en doscientos treinta millones; el señor Saz respondió que no era esa la cifra, me dijo que eran noventa millones; posteriormente, lo que dijo es que eran noventa y cinco más treinta y seis, que yo los he sumado y, como sí que se sumar, me salen ciento treinta y un millones. Sean estos o sean los que yo dije, son ciento treinta y un millones en el primer semestre. Señorías, ¿qué pasará a final de año?, ¿sumamos otros ciento treinta y un millones? Pues ya nos dan doscientos sesenta y dos, la pérdida de recaudación de esta comunidad autónoma.

Y yo le planteaba al señor Saz —le decía— que en la moción, que es la que ahora estamos debatiendo, le daríamos alternativas, y por eso el Grupo Socialista presenta estas dos propuestas en su punto uno y en su punto dos. Porque, claro, nosotros preguntamos: con estos datos que acabo de dar, ¿qué podemos hacer?, ¿qué hay que hacer? Y aquí sí que hay dos opciones, por mucho que digan que no hay alternativas, hay dos opciones: una, la del PP, recortar; segunda, la nuestra, recuperar ingresos, recuperar ingresos *[Rumores.]* Y ese es el primer punto de nuestra moción, ahí está el primer punto de nuestra moción, cómo recuperamos ingresos.

Planteamos claramente recuperar impuestos que han sido eliminados, y nos referimos al medioambiental de transporte por cable.

Planteamos que se creen impuestos nuevos. Nosotros planteamos uno, lo hemos hecho en las enmiendas, lo hemos hecho como proposición de ley, y nos estamos refiriendo al impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, impuesto propio de la comunidad autónoma que grava la obtención y tenencia de fondos reembolsables de clientes por parte de las entidades. Claro, nosotros creíamos que esto, posiblemente, podría salir. Serían alrededor de cuarenta y cinco millones de euros lo que podríamos recaudar. Ya lo tienen otras comunidades autónomas. Pero, claro, ha llegado el señor Rajoy y ha dicho «no puede ser», y, de repente, ha lanzado un órdago a las comunidades autónomas diciendo: «ya pongo yo el impuesto, para que las comunidades autónomas no puedan recaudar». A cero, y, así, ni uno ni otro; pero a los bancos que no se les toque. Con lo cual esta alternativa que presentábamos, que es absolutamente seria, que es absolutamente coherente con lo que estamos diciendo, que el Tribunal Constitucional ha dicho que sí, que está de acuerdo con que las comunidades autónomas puedan recaudar este impuesto, pues al Partido Popular parece ser que no le interesa que las comunidades autónomas tengamos más recaudación para poder cumplir con nuestras competencias, que, fundamentalmente, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, son las que tienen que ver con el Estado del bienestar.

Y otra parte más que metemos en ese punto cinco, que introducimos en ese punto cinco, es que se grave, en la parte que nos corresponde, lógicamente, en el tramo autonómico de los impuestos cedidos, a quienes más tienen, a quienes mayores rentas tienen, cosa que tampoco hace el Gobierno de Aragón, porque ahí tenemos la Ley de medidas, donde, realmente, no cambia absolutamente, para subir a las rentas más altas, ninguno de los impuestos donde puede hacerlo. Por lo tanto, como digo, es otra alternativa.

El segundo punto: reforzar el control sobre el fraude fiscal en Aragón, que revertiría en una mayor recaudación. En más de una ocasión hemos comentado cifras en relación con lo que se podría recaudar si se controlara a los defraudadores. Aquí también hay una alternativa distinta, para que luego digan que no hay... *[corte automático del sonido]* ... amnistiar a los defraudadores.

Por lo tanto, pedimos a sus señorías que nos apoyen estas dos cuestiones dentro de la moción que presentamos. Creemos que es necesario recaudar más impuestos, porque, si el Partido Popular sigue haciendo las políticas que está haciendo, cada día lo que se incrementa es el paro, el mayor número de parados.

Y al señor Celma...

El señor PRESIDENTE: Termine, señora Fernández.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Sí, termino.

Me gustaría decirle al señor Celma, que no se encuentra, que apunte cuántos parados tenemos más desde que el Partido Popular está en el Gobierno: un millón de parados. Como no lo puede apuntar, bueno, pues luego lo podrá escuchar.

Gracias.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Se ha presentado una enmienda a esta moción del Grupo Chunta Aragonesista. El señor Soro puede defenderla por tiempo de cinco minutos.

El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, señor presidente.

Señora Fernández, estamos completamente de acuerdo con el planteamiento de la iniciativa, sobre todo con lo que plantea en el primer párrafo, la necesidad de hacer frente a la caída estrepitosa de ingresos. Todos estamos de acuerdo —casi todos— en que ese es el principal problema, y por eso no vale con las políticas de austeridad, de contracción, no basta solo con recortar el gasto, con todo lo que implica en el recorte de derechos sociales: es necesario actuar en los ingresos, es necesario buscar las fórmulas para incrementar los ingresos, fundamentalmente los ingresos tributarios. Así que vamos a apoyar, como le digo, la iniciativa.

Tenemos cierta reserva, porque entendemos que no es al Gobierno de Aragón a quien tenemos que instar para que se incremente la recaudación fiscal, son estas Cortes quienes tienen que acordar la recaudación, el principio de legalidad tributaria que establece el artículo 133 de la Constitución. Los tributos se crean por ley; por lo tanto, deberían ser estas Cortes quienes creen esos tributos, y ahí estamos ahora tramitando ese instrumento que es la Ley de medidas fiscales y administrativas. Es ahí, entendemos desde el Grupo Chunta Aragonesista, donde deberíamos establecer las medidas tributarias.

Nosotros y ustedes hemos hecho nuestras propuestas, efectivamente, para incrementar el IRPF, el patrimonio, para impulsar la fiscalidad medioambiental, para, en nuestro caso, recuperar y mantener el impuesto de sucesiones, incrementar el impuesto sobre el juego y establecer de una vez por todas el impuesto sobre depósitos en entidades financieras, cosa que ya a estas alturas no podremos. En definitiva, como le digo, apoyamos totalmente el planteamiento del punto primero de su iniciativa.

Y también el segundo: la clave es el fraude. Si no hubiera en el Estado español el nivel de fraude que hay, si estuviéramos en unos niveles europeos, quizá no haría falta ni si quiera impulsar las políticas tributarias. Es más importante luchar contra el fraude que desarrollar políticas tributarias, pero, desgraciadamente, no se hace así.

Como le digo, vamos a votar a favor de su iniciativa.

Hemos hecho una enmienda sobre una cuestión que nos parece muy importante, que es la necesidad de que en Aragón se cree la Agencia Tributaria de Aragón. Le anuncio que apoyaremos la iniciativa acepte o no esta enmienda, pero pensamos que es importante crear la Agencia Tributaria de Aragón, no solo por desarrollar las previsiones del Estatuto de Autonomía de Aragón, que también, sino también porque estamos convencidos de que esta agencia sería un instrumento esencial en Aragón para mejorar los principios de eficacia, de eficiencia, de transparencia y, sobre todo, de lucha contra el fraude fiscal. Así que le propongo que acepte esta enmienda, y, en todo caso, como le digo, le anuncio que le apoyaremos.

Estamos completamente de acuerdo, el fraude es uno de los mayores problemas que tenemos. Los defraudadores nos han defraudado dos veces, si me permite decirlo de esta manera: primero, cuando nos han robado dinero al no aportar sus impuestos y, ahora, cuando vemos el pobre resultado que ha tenido la amnistía fiscal que, para los defraudadores, había hecho el Partido Popular.

Así que, como le digo, apoyaremos la iniciativa. Es necesario avanzar en un sistema tributario progresivo, equitativo y justo, y es necesario luchar contra quienes nos roban el dinero de todos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.

Grupos parlamentarios no enmendantes, empezando por Izquierda Unida de Aragón. El señor Barrena puede intervenir.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor presidente.

Señorías, nosotros vamos a votar también a favor de esta moción, pero vamos a explicar por qué lo hacemos.

Saben —nos han oído desde esta tribuna en multitud de ocasiones— que venimos reclamando reiterada e insistentemente que se cumpla ese principio constitucional de que lo que es el gasto público se sostenga mediante un sistema tributario, un sistema fiscal en el que se aplique el criterio de la progresividad fiscal, y eso lo hemos defendido siempre, en todo momento, porque nos parece —creemos— que lo de la contribución fiscal progresiva no es una cuestión coyuntural, como en estos momentos, con la moción que defiende el Partido Socialista, se puede entender, ni tampoco es una cuestión de solidaridad, como a veces se dice (tiene que aportar solidaridad quien más gana), sino que creemos que es una cuestión de justicia redistributiva, y, por lo tanto, no puede ser coyuntural.

La verdad es que nos habría gustado que en esta moción se hubieran ahorrado el encabezamiento, porque saben que nosotros, que vamos a votar a favor de incrementar la recaudación fiscal en nuestra comunidad autónoma recuperando los impuestos eliminados anteriormente, nos hemos opuesto a la eliminación de impuestos que se ha hecho no solo este año, se ha hecho en años anteriores también. Por lo tanto, lo que yo saludo es el cambio de posición del Partido Socialista, que se ha dado cuenta de que no se pueden eliminar impuestos porque la coyuntura económica lo permita. Porque, claro, ahora, por la coyuntura económica, como dice en el encabezamiento de su moción, por la caída constante de ingresos, por eso dicen que hay que adoptar medidas de recaudar más. Y eso, ¿qué quiere decir entonces, señorías?, ¿que, cuando ya no se produzca esa caída de ingresos, esto ya no será necesario? Ese es el debate que nosotros queremos situar: qué modelo fiscal tenemos, si es un modelo fiscal justo, si es un modelo fiscal redistributivo o si es un modelo fiscal que tiene que ver con la coyuntura económica que vivimos. Y por eso, señorías, porque siempre lo hemos dicho, siempre, en todo momento, hemos defendido que bajar impuestos no es de izquierdas y que subir impuestos puede no ser de izquierdas: si se suben con progresividad, sí; si se suben los indirectos, desde luego, no, está claro.

Y a partir ahí, señorías, fíjense si nosotros vemos que también, además de incrementar la recaudación fiscal con las medidas que aquí se ponen, que, evidentemente, estamos de acuerdo con ellas porque hemos defendido esas medidas en muchas ocasiones, no se puede incrementar también la recaudación eliminando bonificaciones fiscales que se hacen y se hicieron, no se puede hacer también volviendo a gravar lo que es el patrimonio, no se puede recuperar también haciendo que algunos de los —digamos— elementos de subvención que se plantean sobre la cesta impositiva se replanteen.

Pero, bueno, en el fondo estamos de acuerdo, es verdad. Nosotros hemos pedido recaudar más, hemos pedido que se pudiera crear un impuesto sobre los depósitos bancarios, hemos pedido que se grave más el tramo autonómico para las rentas más altas, y, evidentemente, todo eso lo hemos pedido para financiar políticas sociales y creación de empleo. Y, ciertamente, también hemos estado absolutamente de acuerdo no en controlar el fraude fiscal, sino en perseguirlo, en erradicarlo, porque, claro, controlarlo para luego decirle «te permito blanquear lo que has defraudado», tampoco nos parece adecuado.

En definitiva, señorías, creemos que, con los impuestos, hay que hacer un debate serio, hay que hacer un debate riguroso, hay que huir del debate de titulares y, sobre todo, hay que dejarse de medias verdades, como hemos visto esta mañana cuando el propio consejero de Hacienda hablaba de la parte social de la política impositiva y recaudatoria del Gobierno de Aragón, que, evidentemente, no tiene nada de social.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, el señor Ruspira puede intervenir.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías.

Salgo a esta tribuna para marcar la posición ante la moción número 79/12, dimanante de la interpelación relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de recaudación de impuestos, presentada por el Partido Socialista.

Esta moción tiene dos puntos muy claros de analizar. Creo que es un debate manido, es un debate sobre el que hemos hablado largo y tendido.

Respecto al primer punto, señora Fernández, usted sabe perfectamente que el acuerdo para la gobernabilidad suscrito al inicio de esta legislatura entre el Partido Popular y el Partido Aragonés es meridianamente claro: tienen que ser causas de fuerza mayor para implicar un incremento de la presión fiscal en la Comunidad Autónoma de Aragón sobre los aragoneses y aragonesas, sobre las empresas aragonesas en nuestra comunidad autónoma. Y, en ese sentido, no quiero entrar en el debate de impuesto por impuesto a los que usted hace mención en el primer punto; sabe que lo hemos debatido largamente desde esta tribuna, y, desde luego, el Partido Aragonés no es partidario, salvo que fuesen causas de fuerza mayor y que la realidad fuese muy tozuda, de incrementar la presión fiscal a nuestros conciudadanos en nuestra comunidad autónoma.

No obstante, un par de matices respecto a la referencia que hace usted sobre los impuestos medioambientales: ya se les ha dicho desde esta tribuna que la repercusión presupuestaria no llegaría al millón de euros. O respecto al tema del impuesto sobre depósitos de entidades bancarias, tendremos oportunidad en la última proposición no de ley de este Pleno de estas Cortes —bueno, no exactamente el último punto del orden del día, pero sí en la jornada de hoy jueves— de hablar sobre el respecto, con lo cual me mantengo, y como, además, lo voy a poder llevar yo personalmente ese tema gracias a la labor de mi grupo parlamentario, podremos hablar del tema al respecto.

Por lo tanto, la votación al respecto del punto primero sería en contra.

No obstante, en el segundo punto sí que tengo que añadirle que, sobre el tema del control sobre el fraude fiscal, creo que también hemos hablado, creo que se está haciendo un buen trabajo, creo que ha habido resultados positivos, creo que ha habido una recaudación adicional al respecto. Y comparto al cien por cien con usted la necesidad de reforzar, creo que es un verbo muy acertado; además, se lo agradezco, porque reforzar no implica comenzar una labor, sino, sencillamente, subrayar el trabajo que se está realizando e, impulsando adicionalmente esa labor, intentar buscar un resultado adicional que permita la posibilidad de trabajar sobre aquellos que no están haciendo las cosas bien, que no pagan sus impuestos, y de esa manera podemos obtener recursos adicionales. Por lo tanto, lo que quiero transmitirle con eso, señora Fernández, es que el Partido Aragonés, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, está totalmente de acuerdo con el segundo punto de su iniciativa.

Y como el Partido Chunta Aragonesista ha presentado su enmienda al respecto, me voy a permitir, ya que la ha expuesto, dar la opinión desde el Partido Aragonés en lo que respecta a la enmienda, independientemente de que usted tiene que marcar la posición a la misma.

Mire, la enmienda presentada, que es la de remitir a la mayor brevedad un proyecto de ley de creación de la Agencia Tributaria de Aragón, es una iniciativa que fue presentada ya ante la Comisión de Hacienda, que fue debatida el 27 de abril de este año, y que, ante la necesidad de la creación de la Agencia Tributaria de Aragón, el Partido Aragonés presentó una enmienda en esa Comisión de Hacienda que no fue aceptada —absolutamente lícito— por parte del Grupo Chunta Aragonesista, enmienda que decía que las Cortes instaran al Gobierno de Aragón a que, «en un plazo máximo de seis meses, encargar informe externo que analice la posible puesta en marcha de la Agencia Tributaria de Aragón y que evalúe tanto la mejora de eficacia y eficiencia en el servicio así como el ahorro de costes que dicha decisión reportaría a nuestra comunidad autónoma. Los resultados de este informe, una vez concluido, serán presentados ante la Comisión de Hacienda y Administración Pública».

El Partido Aragonés se mantiene en la necesidad de este informe, y se lo digo claramente desde esta tribuna, porque la enmienda presentada por Chunta Aragonesista pretende incorporar al final del punto segundo su enmienda; por lo tanto, si la incorporación fuese al punto segundo, al que le digo que tiene usted el apoyo por parte del Partido Aragonés, si aceptase esta enmienda, nos supondría la necesidad de tener que votar en contra de ambos puntos.

Creo que es importante mencionarlo con anterioridad a la votación al respecto, para explicarlo. No obstante, siempre tengo el turno de votación y de explicación del voto para aclararlo con más antelación, pero creo que era importante decirlo en este momento, para que quede meridianamente claro que reforzar la lucha contra el fraude fiscal, compartimos al cien por cien este planteamiento; la creación inmediata de la Agencia Tributaria, si no es con el estudio previo que ya marcamos en su día, el 27 de abril de este año, creemos que sería un error por parte de quien tiene que tomar esa decisión, que no deja de ser el ejecutivo, y es el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, habiendo dejado clara la posición ante el primer punto y el segundo punto por parte del Partido Aragonés, ahí lo dejo, y esperamos su respuesta ante la enmienda para marcar la posición definitiva.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.

El Grupo Parlamentario Popular. El señor Solana puede intervenir.

El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Gracias, señor presidente.

Esta moción que plantea el Grupo Socialista tiene dos puntos, como ya se ha comentado.

En cuanto al primer punto, compartimos la preocupación que tiene el Grupo Socialista por el mantenimiento de las políticas sociales y de las de creación de empleo, pero entendemos que el medio que plantean, que es conseguirlo mediante el incremento general de impuestos recuperando algunos derogados, creando otros e incrementando la imposición de las rentas más altas, creemos que no es el momento para esta vía, no es el momento más adecuado.

Desarrollar las prácticas sociales y de empleo debe resultar una acción conjunta, global, equilibrada sobre los ingresos y el gasto, que es lo que está haciendo el Gobierno actual. Introducir medidas o más propuestas no crea más que distorsiones en el diseño actual, que debería ser totalmente replanteado, además de no tener clara la repercusión en los ingresos.

Hablando más concretamente de las propuestas que hacen, si con recuperar los impuestos derogados se refieren ustedes al de transporte por cable, por ejemplo, que grava el daño medioambiental en las pistas de esquí, debemos señalar que la recaudación anual ronda alrededor del millón de euros. Simplemente con al recuperación del impuesto de patrimonio, que ustedes derogaron en 2008 y recuperaron en 2011, simplemente con eso ya se han recaudado treinta millones de euros. La proporción es importante.

En cuanto al impuesto sobre los depósitos bancarios, muy recientemente (ayer mismo), el ministro de Hacienda explicó que, en el ejercicio de sus competencias, se han adelantado a las tasas autonómicas en esta materia para fijar desde la Administración central la suya propia. Al introducir el impuesto sobre depósitos con tasa cero a través de los presupuestos generales del Estado, y a partir de enero del año que viene, las autonomías no van a poder cobrar el mismo concepto;

por lo tanto, no tenemos ya capacidad de regular este impuesto, puesto que, de lo contrario, si entráramos a regularlo, se produciría una duplicidad fiscal contraria a la ley. Además, no se descarta, porque se dijo así, públicamente, no se descarta que se pueda crear una tasa positiva en este impuesto en función de las circunstancias. Pero hay argumentos básicos contrarios a que se pueda aplicar: por ejemplo, no se debe parcelar el mercado, puede influir negativamente la concesión de créditos de las entidades financieras, hay que saber el criterio de la Unión Europea en cuanto a este impuesto y puede repercutir indirectamente en los ciudadanos a través de otros costes en sus servicios bancarios.

En cuanto a lo que proponen ustedes sobre el incremento de la renta de las rentas más altas, le tengo que decir que también creemos que gravar exclusivamente estas rentas tendría un componente más político que presupuestario. Simplemente, en Aragón, le tengo que decir, señora Fernández, que las personas que declaran en el IRPF entre ciento cincuenta mil y seiscientos mil euros suponen un 0,32% de la población y equivalen a un 1,62% de la recaudación del IRPF en Aragón; las que declaran más de seiscientos mil euros suponen un 0,02% de la población y un 0,18% del total de la recaudación por IRPF en Aragón.

Por ejemplo, para decirle más datos concretamente, que declaren más de un millón de euros en el IRPF en Aragón, hay siete personas. Si ustedes creen que incrementándoles los impuestos a estas siete personas se van a solucionar los problemas de los presupuestos de Aragón, nosotros no estamos de acuerdo.

En Aragón no se paga en céntimo sanitario, en Aragón no se ha subido el tramo que nos permite la ley del IRPF y tampoco pagamos un euro por receta, y vamos a hacer y el Gobierno está haciendo muchísimos esfuerzos para que esto se mantenga así.

Compartimos la necesidad, en cuanto al segundo punto, de que se incremente la lucha contra el fraude, y, de hecho, se hizo un plan especial de lucha contra el fraude que supuso una recaudación de más de seis millones de euros. Esta es la línea que nosotros creemos conveniente.

En cuanto a la moción y la enmienda que ha presentado el Grupo Chunta, coincidimos con el señor Ruspira en que, si se une al punto dos, no podemos aprobarla, y si el punto dos se queda tal como está, nosotros apoyaríamos el punto dos, pero el punto primero no podemos apoyarlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solana.

Por el grupo parlamentario proponente, la señora Fernández puede fijar su posición respecto a la enmienda.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el escaño]: Sí, señor presidente.

Nosotros vamos a aceptar la enmienda de Chunta Aragonesista, pero le propongo al señor Soro que, en lugar de ir añadido al punto dos, como proponen, fuera un punto tres que dijera «remitir», en lugar de «remitiendo», como lo han planteado ellos: «remitir a la mayor brevedad un proyecto de ley de creación de la Agencia Tributaria de Aragón». Con lo cual, si lo acepta Chunta Aragonesista, la moción tendría tres puntos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Señor Soro, ¿está de acuerdo?

El señor diputado SORO DOMINGO [desde el escaño]: Estamos de acuerdo, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Someteríamos, en consecuencia, a votación, entiendo que por separado, cada uno de los tres puntos.

Empezamos a votar el primer apartado, el primer punto de la moción. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cinco; a favor, veintinueve; en contra, treinta y seis. Queda rechazado el primer punto.**

Pasamos a votar el segundo, que es el que no se ha incorporado nuevo, que es el tercero. Se somete a votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, sesenta y cuatro. Queda aprobado por unanimidad.**

Y votamos, a continuación, el nuevo apartado tercero. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, veintinueve; en contra, treinta y cinco. Queda rechazado el apartado tercero.**

Pasamos a un breve —espero— turno de explicación de voto.

¿Señor Barrena? No va a intervenir.

¿Señor Soro? No va a intervenir.

¿Señor Ruspira? ¿Va a intervenir, señor Ruspira?

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el escaño]: Muy brevemente, señor presidente, se lo prometo.

Para agradecer tanto al Grupo Socialista como al Grupo Chunta Aragonesista que la enmienda, en lugar de ser incorporada en el punto segundo, se incorporara en el tercer punto, y así, de esa forma, poder permitir la posibilidad de reflejar lo transmitido desde la tribuna, y entendiendo que la Agencia Tributaria de Aragón necesita un informe previo para la realización y toma de decisión al respecto de traer un proyecto de ley a estas Cortes, que, desde luego, el Partido Aragonés comparte, pero con el estudio previo.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.

Señora Fernández, puede intervenir.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el escaño]: Sí, gracias, señor presidente.

Para agradecer a todos los grupos el apoyo a uno de los puntos de la moción y agradecer a Izquierda Unida y a Chunta Aragonesista el apoyo al resto de los temas.

Y lamentar que no haya salido el punto uno, en relación con la mayor recaudación de impuestos fundamentalmente para aquellos que más tienen, porque el señor Ruspira decía que, para incrementar la presión fiscal para ellos, tendría que haber causas de fuerza mayor, y nosotros consideramos que estamos en un momento de emergencia social, lo dicen todos los datos. Si en este momento no consideramos que, realmente, hay que subir determinados impuestos, que es lo que hemos planteado, no todos, hemos planteado que los más ricos paguen más, evidentemente, pues no sé cuándo va a ser el momento, porque, como digo, estamos en una situación de emergencia social.

En cuanto a la intervención del portavoz del Partido Popular, bueno, pues no está de acuerdo con... Siempre utilizan este argumento, ¿no?: hay tan poco ricos en Aragón que para qué nos vamos a molestar en cobrarles... Bueno, pues ese 0,32%, ¿por qué no lo vuelve al revés? ¡Si realmente van a molestar a muy pocos si les cobramos!, porque son pocos. Aunque se recaude poco, les van a molestar a muy pocos, con lo cual nosotros creemos que esto hay que ir haciéndolo.

Como, evidentemente, estamos en desacuerdo con lo que ha hecho el Gobierno de España para que las comunidades autónomas no podamos recaudar el impuesto a las entidades bancarias. Ha sido muy descarado que, precisamente cuando el Tribunal Constitucional ha dicho que este impuesto podría ser recaudado por las comunidades autónomas, el señor Rajoy haya hecho lo que ha hecho. Luego tendremos un debate sobre este asunto.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.

Señor Solana, puede intervenir.

El señor diputado SOLANA SORRIBAS [desde el escaño]: Muchas gracias.

Si los ricos, señora Fernández, los ricos ya pagan más. A mí me hace mucha gracia cuando se habla de progresividad fiscal. Progresividad fiscal, en España, hay hace treinta años: los más ricos pagan más y los que no tienen tanto pagan mucho menos; en España hay personas que en el IRPF pagan el 0% y hay gente que paga más del 50%. Eso es progresividad..., no sé a qué le llaman ustedes progresividad, ¿a confiscar todo lo que uno gane?

También parece usted que está diciendo que, como son pocos hay que fastidiarles. No, queremos recaudar más para hacer labor social *[rumores]*, no por fastidiar a unas personas que pueden tener más o menos, que ya están pagando lo que por ley les corresponde.

En cuanto a lo que también están comentando de beneficiar a la banca, le tengo que recordar una cosa muy sencilla: el último indulto de un banquero en este país lo firmó un presidente en funciones que se llamaba José María Rodríguez Zapatero. *[Rumores.]*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solana.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: debate y votación de la proposición no de ley número 240, relativa a la consolidación de un sistema ferroviario público y social, presentado por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

El señor Aso tiene la palabra por tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 240/12, sobre la consolidación de un sistema ferroviario público y social.

El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, presidente.

Bueno, tener que escuchar aquí cuestiones relacionadas con indultos, a uno le sonrojan, la verdad, por no decir que siente vergüenza.

En el tema que nos ocupa, nuestro grupo parlamentario ha presentado una iniciativa relacionada con la posibilidad de la realización de recortes relacionados con el ferrocarril convencional que, fundamentalmente, pueden afectar a nuestras líneas de tren regional.

Bueno es hacernos una composición de lugar en el sentido de que esta serie de medidas probablemente no serían necesarias si aquel sueño de José María Aznar de conectar todas las capitales de provincia con Madrid por AVE no se hubiera realizado de tal modo que muchos de los trenes Talgo convencionales, que funcionaban y hacían un servicio más que importante en muchísimas comarcas aragonesas, no se hubieran suprimido, y, por tanto, aquel sueño de conectar todas las capitales de provincia con Madrid ha ocasionado una desvertebración importante del territorio, que a duras penas se ha mantenido con trenes regionales, y ahora estamos en una situación en la que se plantea recortar esos mismos trenes regionales que prestan servicio en Aragón.

Señorías, ¿por qué sucede esta cuestión? Pues, meramente, por una cuestión económica, porque da igual la extensión que pueda tener Aragón, da igual la población que pueda tener Aragón en relación con otras comunidades autónomas, dan igual las medidas llevadas a cabo, como las que he citado de eliminación de servicios en nuestra comunidad autónoma, y da igual que todos los partidos en la zona respaldemos el mantenimiento de los servicios ferroviarios.

Cierto es, y se me podrá decir, que el problema viene de Europa, pero Europa no es una entelequia, es una cuestión que se construye entre los diferentes partidos que están en Europa, y, desde luego, la socialdemocracia europea y la derecha europea tienen gran coincidencia en toda esta serie de desarrollos y medidas que tengan que ver con la liberalización de sectores y con aplicar criterios de eficiencia económica. Por tanto, nosotros, desde aquí, ya le pedimos a los dos grupos mayoritarios en la Cámara, la socialdemocracia y la derecha europea, el Partido Popular europeo, que empiecen a pensar en otros criterios de cara a la sostenibilidad de los servicios que se prestan en el territorio.

Por eso, Europa, señorías, limita subvenciones al ferrocarril, a servicios deficitarios, solo permite aquellos relacionados con razones de eficiencia energética, social, económica o medioambiental; define qué servicios deben considerarse de interés público que deben ser garantizados; también pueden ser considerados de interés público aquellos de transporte ferroviario usados de forma habitual en trayectos de ida y vuelta, al menos, cinco días a la semana, e igualmente, y esta es una cuestión central, aquellos servicios que discurran por una comunidad autónoma (que puede ser la aragonesa) y la comunidad lo considere de interés. Por tanto, en esa cuestión, que, desde luego, obligaría a que pagáramos nosotros, los aragoneses entendemos que también tenemos una posibilidad importante para mantener nuestros servicios ferroviarios.

Igualmente, se señala en la normativa actual que, de manera prevalente, se garantiza como servicio público y compensación económica los cercanías de Zaragoza. Y aquí sí me gustaría hacer una mención especial a alguna propuesta que se ha traído a esta Cámara, una recientemente del grupo aragonés, del PAR, en relación con que los cercanías pudieran llegar hasta la misma ciudad de Huesca, que a nosotros nos

parece una cuestión también interesante, habida cuenta las importantes comunicaciones diarias que hay por el trabajo entre la ciudad de Zaragoza y la ciudad de Huesca.

También la normativa actual, que en su día aprobó el Partido Socialista y que está ejecutando a día de hoy el Partido Popular, establece reorganizar el servicio público sobre la base de criterios, como he dicho, de rentabilidad económica; nada de rentabilidad social, nada de vertebrar el territorio y mucho de privatización de aquellas líneas rentables, que, desde luego, al final es de lo que se trata: que la socialización de pérdidas y de la privatización de las ganancias.

Señorías, la iniciativa que presenta nuestro grupo parlamentario plantea en esencia, a grandes rasgos, tres cuestiones: una, que se consolide el sistema ferroviario público con carácter vertebrador, que se planifiquen servicios de manera eficiente y que pongan en valor un plan comercial, de tal modo que los horarios y los servicios que se prestan en la comunidad autónoma estén acordes con las necesidades de la población; también solicitamos incluir una red de cercanías como Zaragoza, que se considere de interés general y obligación de servicio público. Ya digo, entendemos que esa cuestión, dado que así lo hemos decidido también en estas Cortes, pueda llegar hasta la ciudad de Huesca, y que todas y cada una de las líneas de Aragón sean declaradas de interés público, que no se cierre ni una sola de las líneas, de las escasas líneas que hoy tenemos en nuestro territorio.

Finalizo ya recordando que el déficit de todos los trenes regionales y de cercanías que tiene el Estado —por este dato, se me llamó demagógico, pero creo que es importante que se conozca— es, aproximadamente, una cuarta parte de lo que ha gastado el Gobierno de España en la ocupación de Afganistán, una cuarta parte de lo que le supone el gasto anual al reino de España. Por tanto, entendemos que es una cuestión perfectamente asumible, que podemos mantenerlos y que, además, es imprescindible, al menos, en la comunidad autónoma que se mantengan los escasos servicios que hoy tenemos.

Señorías, entendemos, nuestro grupo entiende que no podemos perder más trenes, y, desde luego, en este caso, con mayor razón aún.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.

Se han presentado varias enmiendas a esta iniciativa.

Por parte de Chunta Aragonesista, dos enmiendas. Las va a defender el señor Briz por tiempo de cinco minutos.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señor Aso, Chunta Aragonesista va a votar esta proposición no de ley sobre el tren o el ferrocarril convencional. De hecho, espero y deseo que tenga más suerte que la que tuvimos nosotros cuando la planteamos en el mes de octubre en la Comisión de Obras Públicas.

Lógicamente, en un territorio como Aragón, que lo hemos dicho muchas veces, con una singularidad importante, con una dispersión geográfica, pues el transporte ferroviario es parte de esa vertebración, sobre todo en el medio rural. Por tanto, estamos absolutamente de acuerdo en la consolidación de un sistema ferroviario público y social, como dicen ustedes, que vertebre el territorio, sin duda.

Pero nos tememos que, como bien usted ha explicado, por indicaciones de Europa y también por la propia política del Gobierno central, donde, en su análisis del impacto normativo de ese decreto, que una de nuestras enmiendas recoge (ese Decreto Ley 20/2012, de 20 de julio), hablaba de dinamizar el mercado de transporte de viajeros por ferrocarril mediante la liberalización, que la ministra se encarga de decir últimamente en los periódicos que no es una privatización, sino «una liberalización de los servicios de transporte ferroviario y de pasajeros, de manera que contribuya a la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria [el mantra, el austericidio; recuerden ustedes, austericidio, quédense con esa palabra] y se permita un mejor desenvolvimiento de los sectores productivos, así como una gestión más eficiente de los servicios de transporte». ¿Qué significa esto? Pues significa que hay una amenaza seria sobre el transporte ferroviario en general, y en Aragón en particular. Y el Pitvi tampoco lo arregla demasiado, porque habla, precisamente, también de esto, ese famoso Plan de infraestructura de transporte y vivienda, donde, como bien usted ha dicho, menos de trescientos trenes, si son deficitarios, etcétera, bueno, todo lo que dice al respecto, y que, lógicamente, vuelve a hablar de que sean viables, de racionalización, etcétera.

Por lo tanto, nuestras enmiendas, y voy a ser lo más breve posible, van, una de ellas, sobre el punto tercero. Sobre el punto 2, también estamos de acuerdo en las cercanías, por supuesto, Chunta Aragonesista ha sido siempre pionera y defensora de este transporte de cercanías. Y en el punto 3 incluimos, desde un punto de vista formal, en la enmienda que ponga lo que dice el Pitvi, para que sea con el mayor rigor posible: obligaciones de servicio público, tal como indica el Plan de infraestructuras, transporte y vivienda 2012-2024 en el punto 4.1, sobre programas de regulación, control y supervisión. Por lo tanto, estamos de acuerdo en el planteamiento, pero afinamos, si cabe, con la cita del propio Pitvi y cómo denomina al servicio público.

Y después, sí que es cierto que en la otra enmienda tenemos una gran preocupación, porque ese Real Decreto 22/2012, de 20 de julio, sí que puede llevar a cabo una serie de desmantelamientos y supresiones de líneas ferroviarias que, lógicamente, pueden afectar de forma muy clara a Aragón, y por eso decimos que no se supriman líneas de ferrocarril convencional en beneficio de un servicio ferroviario liberalizado donde solamente se vea la parte económica. Porque, como bien saben ustedes, señorías, en la prensa, en los últimos días, ha salido que hay una empresa pública, Consultora Ineco, que está haciendo un estudio para ajustar la actual oferta de servicio ferroviario, y aquí dicen que hay trenes que atraviesan Aragón, como Teruel-Valencia o Zaragoza-Lérida, donde hay una ocupación de menos del 10%, y eso, con el Pitvi en la mano y con el real decreto que acabo de citar, posiblemente significaría una supresión si no se denomina o se cataloga como servicio de interés público o, como

dice en la enmienda que presentamos, una obligación de servicio público.

Por lo tanto, por todas estas razones que estoy planteando, hemos propuesto esta enmienda, para evitar que eso suceda en Aragón en la medida de lo posible, tratando de que se cataloguen como obligaciones de servicio público.

Creemos que hay una amenaza importante, que no pueden ser solamente criterios economicistas, sino que el criterio social en el ferrocarril tiene que estar presente.

Por lo tanto, señor Aso, si nos acepta las enmiendas, por supuesto, con más motivo, le vamos a votar a favor de esta proposición no de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.

El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés también ha presentado una enmienda. El señor Blasco la puede defender.

El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, sobre el tren convencional, no es la primera ni será la última vez que hablemos, tanto en este Pleno como en las comisiones correspondientes.

Y, realmente, hay que admitir que, para algunas zonas de Aragón, es un tema importante, y digo lo de algunas zonas de Aragón porque hoy, como mínimo, se puede poner en duda si realmente el ferrocarril, tal y como está en estos momentos, puede considerarse que vertebra el territorio. Desde luego, desde nuestro punto de vista, y tras muchos años en los que han ido desapareciendo los servicios ferroviarios que hoy difícilmente pueden ser recuperados, creemos que hablar del tren convencional como un elemento vertebrador es difícil y complicado.

Creemos que han cambiado los usos de los ciudadanos, creemos que en estos momentos existen otras fórmulas de viajar que son mucho más eficaces en algunas zonas —insisto— de la geografía de Aragón, pero también es verdad que eso no es óbice para que, desde nuestro punto de vista, haya que seguir trabajando por mejorar lo que todavía subsiste, por hacerlo más eficaz, por aportar una modernización, una adecuación de los medios que permita que los trenes que todavía funcionan y que se están utilizando a través de unas frecuencias correctas, con unos horarios adecuados, den un servicio que permitan que no desaparezcan.

Pero partiendo también de un principio, que en estos momentos no es un tema —entendemos nosotros— que se esté debatiendo en esta proposición no de ley, pero sí que partimos de la base de que, desde nuestro punto de vista, lo que importa es que los trenes funcionen, y luego habrá que estudiar cuáles son las fórmulas de gestión que mejor hagan que no se pierdan y se siga apostando por este sistema de transporte.

Por eso hemos presentado una enmienda a la proposición no de ley de Izquierda Unida, en cuyo primer punto pedimos que se tengan en cuenta las cuestiones metodológicas —hablándolo así—, pero, al final del todo, las peculiaridades territoriales de Aragón a la hora de que, de ese estudio que ha hecho Ineco, se puedan desprender. Desde luego, no nos parece que sea lo mismo hacer un estudio para una comunidad autónoma uniprovincial y poblada que para una comunidad autónoma amplia y despoblaba, como es Aragón. No conocemos en profundidad los resultados de ese estudio, pero, desde luego, nos parecería injusto que ahí fuese café para todos, y, por lo tanto, por eso decimos que «se tengan en cuenta las peculiaridades territoriales de Aragón para establecer la correspondiente declaración de obligación de servicio público en los servicios ferroviarios de pasajeros», y lo demás es, como ustedes dicen, «asegurando en ello la suficiente inversión pública, así como una adecuada planificación de servicios y frecuencias».

En el punto segundo, estamos de acuerdo con lo que ustedes plantean, esa inclusión de la red de cercanías entre los servicios ferroviarios de interés general y declarar de obligación de servicio público, eso ya lo hemos votado en alguna otra comisión y estamos de acuerdo en que no solo se mantenga, sino que se potencie. En estos momentos, la apertura de la estación de Goya está haciendo que el cercanías sea cada vez un sistema de transporte más utilizado.

Y no podemos estar de acuerdo con su punto tercero, ya que tampoco nos parece que sea fácil asegurar o garantizar que todas y cada una de las líneas de ferrocarril, como ustedes piden en su proposición no de ley, sean declaradas de interés público.

Por eso, nosotros le pediremos votación separada de los puntos, y, en cualquier caso, el punto segundo lo votaríamos a favor y estaríamos a expensas de lo que ustedes decidieran hacer en el punto primero en relación con la enmienda que hemos presentado.

Nada más.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.

Pasamos a continuación al turno de intervención de los grupos no enmendantes, empezando por el Grupo Parlamentario Socialista. El señor Ibáñez puede intervenir por tiempo de cinco minutos.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor presidente.

Señorías.

Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con esta proposición no de ley de Izquierda Unida, que ya le adelanto, señor Aso, que votaremos a favor.

Y, dicho esto, le quería decir también que no lo pongan más difícil: ustedes, siempre que sale el tema del ferrocarril, sacan el tema del AVE, que ya le adelanto que, por lo menos desde nuestro punto de vista, el AVE no es el problema, señor Aso, ni el PSOE es el problema, aunque ustedes también siempre intentan aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para intentar darnos un sopapo a los del PSOE.

En cualquier caso, ya verá usted y se dará cuenta de que no es exactamente lo mismo, porque, con la misma directiva europea, con el Gobierno anterior de Aragón y de España, lo que había era en unos convenios con Renfe, que usted conoce, que se pagaban puntualmente y que permitían dar un servicio a los aragoneses. Y usted sabe que, con este tema, llevo insistiendo desde el inicio de la legislatura, desde que ustedes están en estas Cortes también, hemos presen-

tado varias iniciativas, varias preguntas, en los debates de presupuestos (en las comparecencias del consejero en la Comisión de Economía a presentar presupuestos, sabe que siempre sacamos el tema del convenio con Renfe), y, bueno, ahora ya nos hemos enterado de cuál es la razón de por qué en los presupuestos de este año, los presupuestos del año 2013, el Gobierno de Aragón ha consignado cuatrocientos mil euros para solucionar este problema, cuando ustedes saben que anteriormente había unos convenios en los que, para dar esos mismos servicios, la cuantía era muchísimo mayor.

El consejero y, como siempre, este Gobierno nos han dicho que ellos son capaces de hacer más con menos, nosotros les decimos que eso es de todo punto imposible. Y el consejero había dicho que había conseguido que, sin pagar un euro, los trenes hicieran el mismo recorrido y Aragón no tenía que pagar nada. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es lo que dice la prensa estos días, que es que el Gobierno sacará a concesión los trenes de cercanías y de media distancia. ¿Cuál es el problema desde nuestro punto de vista, señorías? Pues que, si se habla de líneas ineficientes y de falta de rentabilidad, con esos criterios, Aragón se puede dar por perjudicado —vamos a decirlo así—, si exceptuamos el corredor del Ebro y la ciudad de Zaragoza. Porque no se trata de fastidiar a nadie, como decía antes un portavoz del Grupo Popular en cuanto que paguen más los que más tienen: eso, si hablamos en el terreno personal, de la renta personal, pero es que no ser solidario siendo aragonés o siendo del territorio de Aragón y de la provincia de Teruel, como soy yo, y ya digo, mayoritariamente de todo el territorio aragonés... Es que somos pobres, somos un territorio pobre, muy grande, despoblado, envejecido, y somos un territorio que necesita de la solidaridad del resto, y no ser solidario siendo aragonés ya no es una cuestión ideológica, es una cuestión de mera inteligencia que deberíamos tener todos bastante clara.

El ministerio habla de que hay cincuenta y dos servicios de media distancia que tienen una ocupación por debajo del 15%..., pues en Aragón va a ser imposible que tengan más. Habla de que hay unas estaciones de que sube un viajero o ninguno y que en otras no se cuantas solamente suben tres..., pues en Aragón será difícil que suban y bajen más viajeros, pero eso no quiere decir que ese transporte no tenga justificación y no tenga una rentabilidad social fundamental.

Y el ejemplo clarísimo lo vemos cuando habla del déficit que generan esas líneas a Renfe: estamos hablando, según datos del ministerio, de 34,1 millones de euros de déficit de esas líneas, pero, a su vez, señorías, el resultado del ejercicio de la empresa es que tiene un beneficio de 206,12 millones de euros. Por eso, algunos defendemos y seguiremos defendiendo que hay cosas que se deben hacer con empresas públicas, que tiene que ser el Estado el que esté detrás para poder reordenar, para poder redistribuir y para que aquellas líneas que explotan en Barcelona, en Madrid, en las grandes áreas metropolitanas de este país, pues que, con eso, se paguen los servicios de las zonas más despobladas del territorio.

Insisto: cualquier responsable público aragonés que no tenga claros estos conceptos, valdría más que dejara de ser representante del pueblo aragonés y se dedicara a otra cuestión, porque Aragón no tiene solución desde el punto de vista liberal de la rentabilidad y la eficiencia. Ténganlo todos ustedes muy claro, señorías.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.

El Grupo Parlamentario Popular. Señor Galve, puede intervenir por tiempo de cinco minutos.

El señor diputado GALVE JUAN: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes.

Una vez más volvemos a hablar en este hemiciclo del ferrocarril convencional. Yo estoy seguro de que todos en esta sala somos conscientes de la importancia del transporte ferroviario, si bien, claro está, es necesario —yo creo— efectuar un análisis para determinar cuáles son lo medios más adecuados para la prestación de los servicios, debiendo apostar por el ferrocarril cuando se cumplen unas condiciones que lo hagan eficiente.

Miren, les voy a dar una serie de datos.

El coste medio del déficit de explotación se encuentra entre los veintiséis euros de la línea Zaragoza-Lérida o los setenta y tres de la Mora-Zaragoza, con un coste medio total de los servicios subvencionados de cuarenta y dos euros por viajero.

Así pues, tanto por poca ocupación como por los elevados costes por viajero, parece claro que deben replantearse las ayudas al transporte ferroviario de pasajeros de media distancia, de forma que los servicios ferroviarios de media distancia deben orientarse —entendemos— a cubrir la movilidad entre ciudades que generen unos mínimos de demanda y que se encuentren suficientemente alejadas entre sí.

Lo que sí es evidente, y eso es cierto, es que debe exigirse una adecuada planificación, una inversión suficiente y un plan comercial que favorezca el uso del ferrocarril como modo de transporte, si bien la verdadera vertebración del territorio, señorías, y eso a nadie se le escapa, se obtiene siempre y en última instancia a través de la red viaria, que es la que da acceso a los setecientos treinta y un municipios de Aragón.

El 2 de julio del 2010, el Gobierno central aprobó un acuerdo que fijaba las bases para la declaración de servicio público de líneas de transporte ferroviario de viajeros que se consideren de interés general por razones sociales, por razones medioambientales, así como, claro está, sus compensaciones por el coste de dichos servicios. Asimismo, se establece que se garantizarán, mediante obligaciones de servicio público y compensación económica, los servicios de cercanías no transferidos a las comunidades autónomas, entre los que se incluye la red de cercanías de Zaragoza.

Ya se ha hablado aquí del estudio de Ineco, que, como todos ustedes saben, es una consultora dependiente del Ministerio de Fomento. Pues bien, el consejero de Obras Públicas ya ha mostrado su desacuerdo con la metodología utilizada para elaborar el informe que analiza los servicios ferroviarios susceptibles de ser declarados como obligación de servicio público, así como establecer los criterios y su aplicación, ya que dicha metodología no puede resolver el expediente de qué líneas en Aragón, en nuestra comunidad autónoma, deben seguir siendo de obligación de servicio público o cuáles no. Así, el consejero, aparte de demos-

trar que no está de acuerdo con esa metodología, ha enviado al Ministerio de Fomento una serie de cuestiones que él cree que son muy importantes para nuestra tierra, como, por ejemplo: que la unidad de análisis no debe ser la relación ferroviaria, sino los tramos de cada servicio ferroviario; que se incluyan aquellos servicios que permiten una reducción de tiempo de viaje respecto al bus, como en las líneas Zaragoza-Huesca, Zaragoza-Monzón-Binéfar, Zaragoza-Caspe; que se utilicen datos actualizados que incluyan el efecto de ocupación de la estación de Goya; que los factores de ocupación dependen de que los horarios y frecuencias estén adaptados a la demanda; que la reordenación de horarios debe ser previa a la identificación de los servicios ferroviarios que deban ser considerados como obligación de servicio público y los que no lo deban ser.

Actualmente, el Gobierno de Aragón trabaja en un protocolo de colaboración a tres bandas para conseguir un ferrocarril de calidad.

Señorías, la apuesta del Gobierno de Aragón por el ferrocarril está clara, y creo haber demostrado en mi intervención que se está trabajando intensamente en el tema.

Lo que está claro es que, con estas recomendaciones y con esta presión que se está ejerciendo sobre el estudio que está haciendo el Ineco, el Gobierno de Aragón sigue insistiendo en el tema y está preocupado por el tema del ferrocarril.

Por ello, señorías, le pedimos, señor Aso, que acepte las enmiendas del Partido Aragonés, ya que nos parece más razonable la proposición no de ley, demostrando así la concienciación y el trabajo realizado por el Gobierno de Aragón por el ferrocarril.

Muchas gracias, presidente.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galve.

El grupo parlamentario proponente. Señor Aso, puede fijar su posición respecto a las enmiendas.

El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: Sí, señor presidente.

En primer lugar, aceptaríamos las enmiendas 1 y 2 de Chunta Aragonesista, lo cual entendemos que mejora el texto de las propuestas que presenta nuestro grupo. Por tanto, aceptaríamos las enmiendas de Chunta Aragonesista.

Y en el caso concreto de la enmienda del Partido Aragonés, hemos llegado a un acuerdo de transacción. Procedo a leerla, sería: «Instar al Gobierno...» y «que tenga en cuenta las peculiaridades territoriales y poblacionales de Aragón para impulsar la correspondiente declaración de obligación de servicio público en los servicios ferroviarios de pasajeros de Aragón, asegurando en ello la suficiente inversión pública, así como una adecuada planificación de servicios y frecuencias».

Ese sería el primer punto de esta proposición no de ley, que tendría cuatro con la incorporación de Chunta.

El señor PRESIDENTE: Señor Aso, ¿tendría cuatro puntos la iniciativa?

El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: Sí.

El señor PRESIDENTE: ?Y el señor Blasco ha pedido la votación separada de los cuatro puntos, en todo caso?

El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: Sí, no habría inconveniente.

El señor PRESIDENTE: ¿Estamos de acuerdo?

Pues vamos a someter a votación cada uno de los cuatro apartados.

Empezamos con el primero, señorías. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y tres; a favor, cincuenta y siete; tres en contra. Ha sido aceptado... ¿Volvemos a votar? Pues comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, sesenta y cuatro. Queda aprobado por unanimidad.**

El apartado segundo, punto segundo. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, sesenta y cuatro. Queda aprobado también por unanimidad.**

El punto tercero. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y tres; a favor, veintiocho; en contra, treinta y cinco. Queda rechazado el punto tercero.**

Y pasamos a votar el cuarto. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y tres; a favor, veintiocho; en contra, treinta y cinco. Queda rechazado.**

Y pasamos al turno de explicación de voto.

Señor Aso, puede intervenir.

El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: Sí, gracias, señor presidente.

En primer lugar, agradecer al Grupo Socialista y a Chunta Aragonesista el apoyo a la propuesta de Izquierda Unida, y al Partido Popular y al Partido Aragonés, de los dos primeros puntos.

Dos matices. Uno en relación con la intervención del señor Ibáñez: la Ley 2/2010 no es más que del señor Zapatero, porque no.... Y en segundo lugar, decirle que ha centrado bien el debate, y creo que es, en esencia, lo que sucede: la empresa pública, donde gana dinero, debería reinvertirlo donde pierde, pero es que el objeto central es la privatización de lo que gana dinero, y, por tanto, lo que pierde lo van a desmantelar, queda más o menos claro, y lo que gana dinero lo pretenden privatizar para hacer caja. Por tanto, ese es el problema central que nos estamos encontrando.

Nosotros, lamentar que no haya salido el punto en el que hace referencia a garantizar la totalidad de la líneas de trenes convencionales en Aragón, porque entendemos que es necesario y porque, además, nos deja muy preocupados, porque entendemos que el Gobierno, más allá de trasladar alguna propuesta, como se nos ha indicado aquí, da por perdida esta cuestión y rechaza encabezar la lucha por el mantenimiento del servicio ferroviario: primero, porque no ha puesto dinero en sus presupuestos para poderlo declarar motu proprio y poder prestar el servicio poniéndole el dinero, y, en segundo lugar, porque parece evidente por la votación que no están por la labor de apoyar todas y

cada una —y dan, de hecho, por perdida alguna— de las líneas que hoy se prestan en Aragón.

Nada más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señor Briz, puede intervenir.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Agradecer a Izquierda Unida que haya aceptado nuestras enmiendas, y también el voto del Partido Socialista e Izquierda Unida a esas enmiendas.

Y, por supuesto, lamentar, como ha dicho el señor Aso, que se haya perdido una oportunidad de defender los intereses de Aragón otra vez, porque, lógicamente, a partir del día 1 de enero, las cosas en el ferrocarril aragonés quizás ya no sean igual que eran.

Por lo tanto, yo creo que ha habido una cierta frivolidad en el tema, y, seguramente, algunas líneas férreas que pueden ser importantes para Aragón estén en riesgo en este momento. Y como parece ser que aquí lo único que importa es el negocio, la utilidad, el déficit público y lo que diga Madrid, pues ustedes están en la línea de coherencia de siempre.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.

Señor Blasco, puede intervenir.

El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el escaño]: Sí, señor presidente.

Muy brevemente.

Si no me equivoco, lo que hemos aprobado es defender las características del tren en Aragón manteniendo las peculiaridades del territorio y, en segundo lugar, defender el cercanías. Es decir, no creemos que en estos momentos podamos decir que lo que hemos aprobado pone en riesgo nada, sino más bien al contrario: lo que demuestra es la voluntad de esta Cámara por apostar claramente por un sistema de transporte que hay que actualizar, y, desde luego, esperamos que en los próximos años mejore sensiblemente. Yo creo que eso hemos aprobado. Y, desde luego, lo que hace precisamente es poner en menor riesgo la desaparición de este medio de transporte.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.

Señor Ibáñez.

El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Muy brevemente.

El Grupo Parlamentario Socialista ha votado a favor porque lo tenemos clarísimo.

Y quiero decir que, señor Galve y señores del PP, vamos a leer con tranquilidad lo que ha dicho usted desde la tribuna, porque como, además, tenemos alguna iniciativa que hemos presentado en este tema, seguiremos debatiendo, pero creemos que no ha acabado de entender lo que yo he intentado explicar también desde la tribuna.

O sea, que son deficitarias y algo habrá que hacer... Pues lo que habrá que hacer es, ese déficit, enjugarlo, encubrirlo desde donde se gana dinero, porque, si estamos hablando de un país y de ordenar el territorio y de que las cosas se hagan, al menos, como nosotros entendemos... Claro, es que es la diferencia fundamental entre ustedes y nosotros: ustedes siguen empeñados en echar la culpa a la crisis y a la herencia y a todas las cosas que quieran, pero, al final, es un problema ideológico.

Las soluciones, en Aragón, nunca van a venir de la mano del liberalismo ni de la liberalización de sectores: las soluciones a los problemas de Aragón van a venir siempre de la solidaridad. Si no, como he dicho antes, será totalmente imposible.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.

Señor Galve, puede intervenir.

El señor diputado GALVE JUAN [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Brevemente.

Señor Aso, reiterar que el Gobierno no da por perdida la cuestión, como usted ha dicho.

Señor Ibáñez, en ningún momento he nombrado yo la herencia recibida hoy, o sea, que no creo que me tenga que decir nada de eso.

Y reiterar que el Gobierno de Aragón sigue apostando por el ferrocarril de nuestra tierra.

Muchas gracias.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galve.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: debate y votación de la proposición no de ley número 366, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

El portavoz, el señor Boné, por tiempo de ocho minutos, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 366/12, sobre medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

El señor diputado BONÉ PUEYO: Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente.

Señorías.

Tengo la posibilidad y el honor de intervenir en nombre de mi grupo para presentar una proposición no de ley que nos parece muy importante para los intereses de Aragón, para los intereses presentes y para los intereses de futuro.

Como ustedes saben, señorías, el Gobierno central ha remitido a las Cortes Generales un anteproyecto de ley, concretamente el anteproyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que modifica siete tributos a la generación eléctrica y al consumo de determinadas fuentes de energía. El Gobierno central plantea este proyecto de ley argumentando que es necesario que, con los ingresos, se puedan cubrir los costes del sistema eléctrico y, por lo tanto, resolver un problema pendiente que tenemos en este país, que es el déficit de tarifa o la deuda energética. Saben ustedes que en estos momentos se calcula que la deuda energética puede estar alrededor de veinticuatro mil millones de euros, y, por lo tanto, al final, de lo que se

trataría es de que no existiese esa diferencia entre lo que pagan los consumidores por la energía eléctrica y su coste real.

Nosotros, desde el Partido Aragonés, compartimos este principio, esta filosofía, y creemos que es necesario crear un marco regulatorio que vaya, poco a poco, resolviendo este problema que tenemos en nuestro país. Pero este marco regulatorio, señoras y señores diputados, entendemos que debe resolverse más bien desde una reforma estructural, como dice nuestro consejero de Industria, el señor Aliaga, y lo ha dicho recientemente, precisamente, en una conferencia que tuvo la oportunidad de dar en Madrid estos días; entendemos que, primero, habría que modificar el marco regulatorio, es decir, la reforma estructural necesaria del mercado eléctrico, y, en su caso, después, modificarse el régimen fiscal, alcanzar, si es posible, ese pacto de Estado en materia energética que permita resolver la deficiencia que tenemos en relación con el déficit de tarifa. Así es como entendemos desde el Partido Aragonés que debería abordarse, y no al revés, como se está abordando en estos momentos.

¿Y por qué? Pues porque esto tiene, por lo menos para Aragón, y ahora lo explicaré, por lo menos a sus señorías que estén interesados en oírme, explicaré que esto tiene graves consecuencias para la economía aragonesa, y explicaré que, además, tiene graves consecuencias en la pérdida de puestos de trabajo en Aragón.

Les voy a dar cuatro razones, solo cuatro razones; estoy seguro de que el señor Aliaga les podría dar muchas más.

Miren, la primera razón...

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

Un momentito, señor Boné, a ver si conseguimos que le atiendan. Ahora puede continuar.

El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, señor presidente.

Como decía Horacio Guarany, la atención se la tiene que ganar uno, pero uno tiene sus limitaciones si no se la consigue ganar. Lógicamente, donde no llega la capacidad de uno para ganarse la atención, empiezan las reglas de educación para permitir que quien quiera atender pueda atender... *[Rumores.]* Sí, efectivamente. Pero, bueno, muchas gracias, no obstante, señor presidente.

Digo que les voy a dar cuatro razones sobre las graves consecuencias que esta Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética puede tener en Aragón y, de hecho, va a tener.

Miren, la primera es que supone un freno a la industria actual de generación eléctrica. ¿Por qué? Porque nosotros somos una comunidad autónoma eminentemente energética, producimos el 6,5% de la energía de todo el país y exportamos más de la mitad de la energía que producimos. Es decir, para nosotros, el sistema energético es un sistema, potencialmente, muy importante, porque es un elemento de competitividad de nuestra economía. Somos exportadores de energía, y lo somos y producimos energía porque tenemos los recursos, pienso que los estamos utilizando de manera eficiente, y espero que en el futuro sea todavía más eficiente, y, además, tenemos algún rasgo diferencial en relación con otros territorios, y es que contamos con una alta participación en energías renovables.

Miren, la segunda razón es que, con esta Ley de medidas fiscales, vamos a dificultar todavía más el crecimiento energético de Aragón. ¿Por qué? Pues porque, al tipo impositivo general que ya tienen en estos momentos tanto la generación de energía como el consumo de energía, le vamos a añadir o ya le hemos añadido la suspensión de algunas primas importantes para algunos subsistemas que en nuestra comunidad autónoma son determinantes.

Tercera razón importante, y, si cabe par mí la más importante. Miren, yo le llamaría a esto el «efecto dominó». ¿Por qué el efecto dominó? Porque en nuestra tierra, en Aragón, treinta y siete empresas punteras de Aragón decidieron ya hace tiempo utilizar la cogeneración como herramienta de competitividad, es decir, bajar sus costes de producción para ser más competitivos en sus productos, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. El sector industrial aragonés tomó esta decisión hace mucho tiempo. Saben ustedes que en esta Ley de medidas fiscales también se modifica la fiscalidad de la cogeneración, es decir, no se prima, sino que se penaliza. ¿Y qué vamos a conseguir con eso?, ¿qué vamos a conseguir con esas treinta y siete empresas que tienen instalados quinientos cincuenta y seis kilovatios y que están generando más de cien puestos de trabajo con el tema de cogeneración? Pues ganaremos algo que a mí me parece gravísimo, y es que, empresas que gracias a esto eran competitivas, conseguiremos que dejen de ser competitivas, y cuando dejen de ser competitivas Saica, General Motors y otras empresas que son competitivas gracias a la cogeneración, al dejar de ser competitivas, tendrán más dificultades para vender sus productos, y cuando tengan dificultades para vender sus productos, tendrán que hacer regulaciones de empleo y tendrán que reducir la producción y tendrán que acabar echando gente a la calle. Por eso yo le llamo a esto el «impacto dominó».

Señorías, ¿saben ustedes cuál puede ser el impacto negativo en las empresas aragonesas que utilizan la cogeneración? Pues hemos estimado que unos sesenta millones de euros al año. Penalicen ustedes a las empresas más competitivas que tenemos con sesenta millones de euros al año y verán qué ocurre con la competitividad de estas empresas. Por eso yo le llamo el «efecto dominó». En definitiva, dejarán de ser competitivas.

Y, finalmente, el sector del carbón, tan conocido por todas sus señorías, sale enormemente perjudicado, porque, al impuesto de producción de energía eléctrica con carbón, se van a añadir en este caso las medidas fiscales, que le van a distancias todavía más de lo que supone la obtención de energía a través del gas.

Por lo tanto, estas son las razones por las que hemos presentado esta proposición no de ley y estas son las razones por las cuales los senadores del Partido Aragonés en Madrid se han abstenido en el veto a la ley de estas medidas fiscales.

En resumen, señorías, solicitamos que la nueva fiscalidad no penalice la competitividad del carbón, que se mantenga en igualdad el carbón frente a la generación de energía eléctrica con gas y que se modifique

el nuevo esquema general sobre la cogeneración. Y lo pedimos, precisamente, para que la industria aragonesa no pierda competitividad y lo pedimos para que, al final, no se pierdan puestos de trabajo y, en un sector estratégico como este, contribuyamos a generar empleo. Por eso pedimos su voto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.

Se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. El diputado señor Romero la va a defender por tiempo de cinco minutos.

El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida hubiera preferido que el Gobierno del Estado no pusiera sobre la mesa esta ley. Lo hubiera preferido, al igual que decía el portavoz del Partido Aragonés, entre otras cuestiones, porque es construir la casa por el tejado, y pensamos que lo primero que había que hacer en este país es poner sobre la mesa un nuevo modelo energético en el ámbito del Estado que permitiera una correcta dinamización de la energía, donde se buscase el equilibrio entre las diferentes fuentes que pueden producir la energía. Como no lo ha hecho el Estado ni tiene intención de hacerlo, a salto de mata va regulando, entre otras cuestiones para poder recaudar algo más, entre otras cuestiones para poder compensar esa deuda, esa tarifa que en estos momentos hay sobre la mesa, de déficit sobre la electricidad que se produce.

Pero nos preocupa que, en la exposición de motivos de esta Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, se argumente la necesidad de buscar soluciones en el uso eficiente y respetuoso con el medio ambiente y la sostenibilidad, que es una ley que va a ir en línea con los principios básicos que rigen la política fiscal energética y ambiental de la Unión Europea, que, además, pretende servir como estímulo para mejorar nuestros niveles de eficacia energética, cuando la triste realidad es el recaudar mayor cantidad económica para compensar el déficit tarifario.

Dicho esto, a Izquierda Unida le hubiera gustado que esta ley hubiera recogido dos cuestiones principales: la primera, que los ingresos que se obtengan de estas medidas fueran destinados a reinversión en nuevas tecnologías, fueran destinados a reinversión en el uso eficiente de la energía, fueran destinados a tecnologías que permitieran una combustión más limpia, para que las empresas pudiesen actualizarse y, por lo tanto, echar menos emisiones a la atmósfera, y la segunda, que también estos ingresos sirvieran para reinvertirse en aquellas zonas y territorios donde se generan las afecciones ambientales y, de alguna forma, contribuyesen también a dinamizar y diversificar la economía en esos territorios.

Como eso no es así, el Grupo de Izquierda Unida va a apoyar la iniciativa presentada por el Partido Aragonés, y a partir de ahí ha planteado una enmienda, compartiendo las cuatro razones que ha planteado el portavoz del Partido Aragonés: compartiendo que esta ley de medidas sería un freno para la generación eléctrica en Aragón, uno de los sectores estratégicos más importantes de la comunidad; compartiendo también que las industrias que tienen cogeneración, que hace que ese sistema les permita ser más competitivas, quedarían perjudicadas, evidentemente, con la puesta en marcha de esta ley, y sabiendo que el sector del carbón ya en estos momentos esta muy tocado, ya tiene muchísimas dificultades, y que, de las pocas centrales térmicas de carbón que quedan en Aragón (que, como bien saben, solamente hay dos), en una el cierre va a ser inminente, que es la de Escucha, y la otra es la de Andorra, que requiere de nuevas inversiones multimillonarias para adaptarse a los objetivos que marca la Unión Europea, y seguir incorporando nuevos tipos impositivos, nuevos impuestos, evidentemente, va a hacer más difícil que puedan adaptarse en el futuro, y, por lo tanto, corremos el riesgo de ser perjudicados desde el punto de vista del empleo.

Dicho esto, hemos planteado nuestra enmienda en la dirección de sustituir el punto uno por el siguiente texto: «Ante la incertidumbre del sector del carbón en Europa y especialmente en España, se realicen las gestiones oportunas con el fin de que el proyecto de ley de las medidas fiscales para la sostenibilidad energética no penalice la competitividad del carbón en el mercado eléctrico hasta que se despeje su futuro». El futuro del carbón, como bien saben, ahora mismo es incierto, la Unión Europea tiene unos límites en el año 2018, el Estado miembro España mantiene también esos límites, y, a partir ahí, seguirlo penalizando solamente contribuye a que termine de subsistir antes de la fecha prevista. Y, en ese sentido, lo que pedimos es que se paralice esa penalización al sector del carbón y, a partir de ahí, cuando se despeje su futuro, vuelva a entrar en el engranaje de las penalizaciones por la Ley de medidas fiscales ambientales.

Esa es la enmienda que presentamos, y esperamos que podamos llegar a un acuerdo con el grupo proponente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.

Pasamos a la intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes, empezando por Chunta Aragonesista. El señor Soro puede intervenir por tiempo de cinco minutos.

El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, señor presidente.

Señor Boné, todo esto que nos cuenta hoy usted aquí, que estamos de acuerdo en una gran parte, ¿se lo ha contado usted a la señora Burró, al señor Fuster o a la señora Santos? Porque está muy bien que nos lo cuente aquí, está muy bien, estamos más o menos de acuerdo, pero se lo podía haber contado a ellos tres.

Usted sabe —supongo que lo sabe— que el día 10, en el Senado, ya se aprobó el proyecto de ley, ya está aprobado el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, y el día 20, según las noticias que tengo, el día 20 el Congreso de los Diputados lo aprobará definitivamente. Entonces aquí estamos haciendo..., voy a usar una expresión que no es despectiva que decía el otro día el señor Ruspira en comisión: estamos haciendo una sandez, entre todos, ¿eh?, porque estamos haciendo algo que ya no tiene ninguna virtualidad.

Lo que me extraña es que venga aquí a decirnos lo que nos dice: que el Gobierno de Aragón le diga al

Gobierno de su nación que hagan no sé qué, cuando una ley ya está a punto de aprobarse.

Y, claro, yo, que soy un poco inocente, me voy al *Diario de Sesiones* del Senado, cojo las enmiendas que se han presentado, busco las de los senadores del Partido Aragonés (que pueden presentar enmiendas los diputados, no solo los grupos parlamentarios), las busco, no las encuentro y digo: «bueno, serán las del Partido Popular»; miro las enmiendas del Grupo Popular del Senado, veo veintiséis enmiendas, ninguna habla de lo que usted dice aquí, ninguna. Sí que hay una enmienda, por cierto, que supongo que la habrán votado sus senadores, en la que el impuesto se exige al tipo del 7%, se eleva del 6% al 7%, en el Senado, por una enmienda del Partido Popular, una enmienda del grupo en el que están los senadores del Partido Aragonés, y, como digo, ninguna de las enmiendas tiene nada que ver con lo que usted nos viene a decir hoy aquí.

Entonces, ¿yo estoy de acuerdo con lo que dice usted? Sí, sí, pero, mire, llegamos tarde, y para que salga después «en las Cortes, a instancia del PAR se han opuesto...», habría sido mejor que se hiciera donde había que hacerlo, como le digo, que es en el Senado.

En todo caso, echamos en falta también alguna cuestión en la proposición no de ley, no vemos que haya una apuesta por las energías sostenibles, que está bien lo que plantean del carbón por la situación que tenemos en Aragón y, sobre todo, en las cuencas mineras, la cogeneración... ¿Y dónde están las energías sostenibles? Es que el problema es que el Partido Popular está desarrollando una política pronuclear y antienergías renovables, y es ahí donde echamos en falta que hubiera también aquí ese guiño o ese gesto.

Como le digo, no vamos a poder apoyar esta iniciativa un poco por coherencia, porque, claro, habríamos entendido esta proposición no de ley si supiéramos que los senadores del Partido Aragonés allí, en el Senado, se habían partido la cara defendiendo esta cuestión. No ha sido así. ¿Sabe cuántas veces han intervenido en el Senado la señora Burró, el señor Fuster y la señora Santos? Si contamos la vez que juraron o prometieron el cargo, una, esa, ninguna más. Entonces, es muy difícil que defiendan esta cuestión que afecta tanto a Aragón. ¿Sabe cuántas ha intervenido el señor Yuste en el Congreso, fíjese, un solo diputado (ustedes, tres senadores)? Pues ha intervenido ciento setenta veces (el siguiente de los diputados aragoneses, veintinueve; el señor Yuste, ciento setenta) y ha presentado mil doscientas sesenta y cinco iniciativas, la mitad de las que han presentado entre los trece diputados aragoneses. Ahí sí que se puede defender, señor Boné, ese es el problema, que no se trata solo de que hagamos aquí un brindis al sol, de que hagamos una declaración política que ya no tiene ninguna eficacia, cuando quienes debían haberlo defendido en primer lugar —entendemos— en el Senado eran los senadores, la senadora y el senador del Partido Aragonés.

Por cierto, el Grupo Parlamentario de Izquierda Plural sí que presentó enmiendas en el Congreso: presentó una de texto alternativo, que les aconsejo que lean, y muchas enmiendas parciales. O sea, que le aseguro que, por nuestra parte, sí que hicimos el trabajo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.

Señor Becerril, por el Grupo Parlamentario Socialista, puede intervenir.

El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Sí, señor, presidente.

Buenas tardes, señorías.

El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta proposición no de ley en los dos puntos que luego matizaré, no sin antes decir que, ya en la propia Comisión de Hacienda, nuestro propio grupo preguntó al señor consejero qué pensaba el señor consejero sobre todo aquello relativo a las medidas fiscales para la sostenibilidad energética, y el señor consejero en aquel momento nos dijo que no le gustaba. Prácticamente, es lo que hoy alegan y dice en la proposición no de ley el Grupo Aragonés. Y decía que no le gustaba porque el carbón tenía en los impuestos especiales una exención que ahora desaparece, cosa que sí que es cierta, por la enmienda que introduce Izquierda Unida, en la cual dice que no penalice la competitividad del carbón (esto es lo que dice el Partido Aragonés), pero que se mantenga la igualdad de condiciones de la generación eléctrica con el gas respecto a la sostenibilidad medioambiental. El señor consejero decía que no le gustaba y que los impuestos especiales al carbón tenían una excepción y ahora desaparecía. Bueno, ha habido una modificación que pienso que luego, a posteriori, los dos grupos me imagino que matizarán. Tampoco le gustaba al señor consejero la tasa al gas y la tasa a la cogeneración que ha explicado el Partido Aragonés.

Decir que, tras varios meses de enfrentamientos entre los propios ministerios del propio Gobierno de España, tanto el de Hacienda como el de Industria, el Gobierno por fin interviene en lo que es el mercado energético, se aprueba una serie de impuestos que, como muy bien ha explicado el señor Boné, pretenden recaudar tres mil millones de euros y taponar el déficit tarifario, que valoran en los últimos diez años en veinticuatro mil millones de euros.

Déficit tarifario que también hay que decir de dónde proviene, y proviene de los costes que reconocen las empresas menos las tarifas que pagan la mayor parte de los veinticinco millones de usuarios.

En enero tendremos, pues, un impuesto que será de un 6% o un 7% (un 7% ha confirmado el señor Soro) para todas aquellas empresas productoras de electricidad, un canon de un 22% a las centrales hidroeléctricas, impuestos a la producción y el almacenamiento de residuos nucleares, fin de las exenciones fiscales a los combustibles fósiles (al carbón) y un impuesto de 2,79 céntimos por metro cúbico de gas natural. Y todo esto deberíamos unirle unirlo, vía decretos que hace el Ministerio de Industria, tanto a los costes reconocidos a las empresas eléctricas como a la moratoria a la extensión de la nueva capacidad de las energías renovables, que muchas veces hemos debatido.

Pero tiene razón el componente de Izquierda Unida: aquí se habla de la defensa medioambiental, pero para nada se habla, en ningún artículo se habla de la dependencia de los combustibles fósiles, de la intensidad energética o de la emisión de gases de efecto invernadero.

¿Y qué va a suceder? Pues lo que va a suceder es que se va a producir una tasa de 2,79 céntimos por

metro cúbico de gas que penalizará la competitividad de las empresas, y que el camino adecuado es que los costes asociados se reduzcan; se deberá apoyar a la I+D+i, y esto perjudicará, como todos ustedes saben, a un adecuado *mix* energético; perjudicará a una industria productiva y consumidora para recuperar la producción y exportación; elevará el gravamen a la venta de electricidad de un 6% a 7%, nos han confirmado que un 7%, y eso provocará pérdida de puestos directos e indirectos, se penalizará, como ustedes han dicho, al carbón, no habrá inversiones, y todo ello acabará con ese modelo productivo que creemos que tenemos todos los aragoneses, que está basado principalmente en las energías renovables y en la energía eléctrica.

Finalmente, y para concluir, decir que nuestro grupo votará los dos puntos de la proposición no de ley. No obstante, decir que nos hubiera gustado, al igual que dice el componente o miembro de Izquierda Unida, que no se penalice la competitividad del carbón en el mercado eléctrico, y estamos totalmente de acuerdo —esperemos que el Grupo Popular también lo esté— en que se modifique el esquema fiscal que establece el proyecto de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, con el objeto de que se garantice la viabilidad de las instalaciones existentes y permita retomar la senda del crecimiento de este tipo de tecnologías energéticas eficientes, que contribuyen a mejorar la competitividad... *[corte automático de sonido]* ... productivos y consolidar la industria aragonesa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Becerril.

El Grupo Parlamentario Popular. La señora Arciniega puede intervenir, también por tiempo de cinco minutos.

La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, señor presidente.

Hoy, señorías, voy a centrar la defensa de la posición del Partido Popular respecto a esta proposición no de ley que presenta el Partido Aragonés y que han defendido, al menos, dos grupos de la oposición entre tres ideas: en primer lugar, en el déficit tarifario; en segundo lugar, en la necesidad de un nuevo modelo para un sistema energético nacional que todos ustedes han demandado, y, en tercer lugar, en la coherencia de respaldar la política de un Gobierno con el que compartimos algo más que una siglas.

Comenzaré por el déficit tarifario. El déficit tarifario es un problema existente de forma desigual desde el año 2000: entre 2000 y 2004, supuso mil quinientos millones de euros —esto no es mucho—; desde 2004 hasta hoy, ha supuesto veinticuatro mil millones de euros. Si se paran a pensar en esta cifra, querría decir que podríamos comprar todas las casas que hay en Huesca y algunas más, poniendo un precio medio de medio millón de euros; es una cantidad bastante elevada.

No se trata solamente de resolver el déficit acumulado, también se trata de corregir una factura que en años sucesivos iría aumentando estas cifras. Está claro que este problema, si no se soluciona, crece y se agrava. Por eso, una vez más he de recordarles que el Gobierno actúa de manera responsable atajando un problema que ya dura demasiado y que, por las complejidades del sector, no tiene fácil solución (llevamos —les recuerdo— desde el año 2000 con este problema). Lo que está claro es que la solución pasa por aumentar los ingresos y disminuir los costes.

No entiendo cómo algunos partidos de la izquierda no están contentos con esta proposición de ley, que lo que hace es gravar a aquellos que van a vender más, gravar a aquellas empresas que tienen mayores ingresos. Y cuando hablaba —creo que era el señor Barrena de recuperar ingresos... o la señora Fernández, perdón, es una manera de recuperar ingresos; además, es una opción equitativa, en la que el ajuste lo van a soportar todos los agentes que operan en el sistema, y, además, también ese futuro verde que reclaman desde algunos de sus partidos, está reflejado en esta ley, porque esta es una manera de avanzar hacia una política energética todavía por desarrollar.

El segundo punto que quiero profundizar es el modelo de sistema energético. Les voy a decir que, en el año 2011, la producción de energía eléctrica estuvo repartida de la siguiente manera: nuclear, 21%; ciclo combinado, 19%; eólica, 16%. No pueden decir que se penalizan las energía renovables cuando la energía eólica representa el 16%. Carbón, el sector en el cual una de las provincias de nuestra comunidad está involucrada y que durante estos meses hemos estado defendiendo todos los grupos de manera conjunta, no pueden decir que estamos en contra de este sector. Y no pueden pensar que el Partido Popular tomaría medidas en contra de este Gobierno —señor Ibáñez, está usted de acuerdo, ¿verdad que sí?—, después de las horas y de los ratos que hemos pasado para defender el sector del carbón. *[Rumores.]*

Entonces, quiero decirles que la apuesta del Partido Popular por un modelo sostenido económica y ambientalmente está reflejada. También es un modelo equilibrado, en el cual tienen cabida todas las energías, y quiero decirles que todas las energías tienen cabida, las energías renovables y las no renovables, y aquí nadie se ha manifestado ni antirrenovable ni pronuclear. Entonces, no pongan etiquetas donde no las hay, porque nadie se ha manifestado de esta manera.

Es un sistema total y absolutamente equilibrado, y es un sistema nacional, en el cual las exportaciones e importaciones desde nuestra comunidad no sé si es precisamente el punto en el que más hay que incidir, porque se genera la energía eléctrica y se consume en el mismo momento en el que se genera, da lo mismo dónde se produzca. Y además, las renovables tienen preferencia sobre las demás para entrar en el sistema, con lo cual no se penaliza para nada en absoluto a las renovables.

Con esto, quiero terminar, y solamente recordarles que, entre el 2004 y el 2010, la tarifa eléctrica de consumo industrial creció en un 90%, entre el 2004 y el 2010, y la tarifa de uso doméstico creció en un 60%. Nadie puede decir que nuestras medidas no sean competitivas y no estén en la línea de la defensa de la industria aragonesa y nacional.

Muchas gracias.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Arciniega.

Por el grupo parlamentario proponente, el señor Boné puede fijar su posición respecto a la enmienda.

El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

Estudiada la única enmienda que se ha presentado por parte de Izquierda Unida, seríamos partidarios, si el proponente de la enmienda lo tiene a bien, de incorporar en el principio del primer punto una de las partes que ellos plantean en su enmienda. Por lo tanto, la proposición no de ley quedaría redactada así: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno de la nación para que, ante la incertidumbre del sector del carbón [en el punto 1] en Europa y especialmente en España...». Repito: «ante la incertidumbre del sector del carbón en Europa y especialmente en España [esto sería lo que incorporaríamos], se realicen las gestiones oportunas con el fin de que el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética no penalice la competitividad del carbón en el mercado eléctrico y se mantenga en igualdad de condiciones que la generación de electricidad con gas, desde el respeto a la sostenibilidad medioambiental, social y económica».

El segundo punto no lo leo porque no tiene ninguna modificación.

Por lo tanto, si aceptan esta transacción, la incorporaríamos y propondríamos este texto a votación... Pues así será.

El señor PRESIDENTE: ¿Estamos de acuerdo en que se someta a votación en los términos que ha explicado el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés? *[La diputada señora ARCINIEGA ARROYO, del G.P. Popular, se manifiesta desde su escaño en términos que resultan ininteligibles.]* ¿Votación separada?

La señora diputada ARCINIEGA ARROYO [desde el escaño]: Gracias, señor, presidente.

Sí, solicito la votación separada de los dos puntos.

El señor PRESIDENTE: ¿De los dos puntos?

La señora diputada ARCINIEGA ARROYO [desde el escaño]: Sí, por favor.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

La señora diputada ARCINIEGA ARROYO [desde el escaño]: Gracias.

El señor PRESIDENTE: Empezamos con la...

El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: Aceptamos. *[Risas.]*

La señora diputada ARCINIEGA ARROYO [desde el escaño]: Gracias.

El señor PRESIDENTE: Venga.

Comienza la votación del primer punto, comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, sesenta; tres abstenciones. Queda aprobado el primer punto.**

Y votamos el segundo punto. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y tres; a favor, treinta y tres; abstenciones treinta. Queda aprobado el segundo punto.**

Pasamos a turno de explicación de voto.

Señor Romero, puede intervenir.

El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el escaño]: En primer lugar, para agradecer al partido proponente, el Partido Aragonés, que haya aceptado parcialmente la enmienda que hemos presentado. Evidentemente, si se hubiera aceptado de forma completa, hubiera reforzado el papel que, en este caso, la producción de energía a través de carbón tiene en la comunidad de Aragón.

No obstante, decir dos cosas. Una: seguimos pensando que lo importante en el Estado es poner en marcha un nuevo plan energético a nivel estatal y que ese plan tiene que ir acorde con la estrategia europea 2020 de las energías. A partir de ahí, creemos que seguir gravando ciertos impuestos sin control puede ocasionar problemas al sector energético de la comunidad de Aragón, y por eso hemos apoyado los dos puntos: el de la cogeneración, porque es cierto que las empresas, para ser más competitivas, necesitan del apoyo de la cogeneración, y, en ese sentido, hay empresas importantes en Aragón que, con el apoyo de la cogeneración, son competitivas, y, según la manera en que se grave con estos impuestos, pueden tener dificultades.

Y sobre el carbón, creo que hay algo que tenemos que dejar claro, señora Arciniega: no pueden presumir de que ustedes defienden el carbón, no pueden presumir porque, para presumir, hay que ir a los hechos, y los hechos están en los presupuestos y están en las normativas, y lo que está haciendo el Gobierno de España no es otra cosa que aceptar lo que impone Europa y, además, acelerar ese cierre. Por lo tanto, lo que pedimos en la moción y en la interpretación que le da el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida es que la central térmica de Andorra, única que seguirá funcionando en el ejercicio 2013 con carbón, a partir de ahí, va a tener, hasta el año 2018, que hacer un esfuerzo de inversión importante. Y a partir de ahí, creemos que ya hay suficientes impuestos que se están gravando sobre esa central, también la comunidad de Aragón tiene un impuesto directo sobre emisiones, con el que recauda cerca de seis millones de euros, y pensamos que, a lo mejor, es el momento de que, con respecto al carbón, en base a las inversiones que tienen que hacer, que son beneficiosas para un territorio de la comunidad de Aragón, se paralice en estos momentos esa penalización.

En ese contexto lo hemos hecho...

El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, señor Romero.

El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el escaño]: ... —termino, señor presidente—, siendo conscientes de que es importante que haya unas medidas fiscales medioambientales, siendo conscientes de que es necesario que aquella industria que hace emisiones a la atmósfera tiene que aportar y tiene que contribuir. Pero, en el momento en que está el carbón, es necesa-

ria una moratoria o que no se penalice hasta que se despeje su futuro.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
¿Señor Soro? No va a intervenir.
Señor Boné, puede hacerlo.

El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: Sí, muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero pedirle disculpas al señor Soro porque, si hablo dirigiéndome a él, no se me oirá. Disculpe usted.

Empezaré por el señor Soro porque creo que su intervención es una intervención digna de ser tenida en cuenta. Decía usted, señor Soro, esta mañana decía que usted no insulta a nadie. Pues, mire, le voy a decir una cosa: cuando usted llama a mi grupo «ilegales», «tramposos», nos acusa de hacer tropelías y de «cortijeros» o «cortijanos» —elija usted el término que quiera—, yo me siento insultado. Primera cuestión.

Segunda cuestión: decía usted aquí que «yo soy una persona inocente». Usted, inocente, no es, yo no creo que sea inocente; lo que es usted es una persona desinformada, y, atento, podría decir ignorante..., no digo ignorante, digo desinformada. Porque, mire usted, para que se informe —le informo hoy, otro día no le informaré—*[risas]*: primero, no fue el día 10, fue el día 4 el día que se debatió el tema de la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética en la comisión. ¿Le suena a usted...? Perdone, en la comisión, infórmese. ¿Le suena a usted un tal señor Fuster, que es senador? Pues, mire, se abstuvo; en la comisión, se abstuvo. Hoy se vota en el Pleno, señor Soro; hoy todavía no se ha votado, se vota en el Pleno. ¿Y sabe usted qué van a hacer los senadores del PAR? Se van a abstener.

Mire, hay una cosa que ya se ha votado en el Pleno: se han votado las enmiendas de veto a la ley. ¿Y sabe usted qué han hecho los senadores del PAR? Se han abstenido, señor Soro, se han abstenido.

De todos modos, quiero agradecerle su voto, porque, cuando en mi partido vemos que coincidimos con usted en algún voto, nos entra una quemazón que nos cuesta tres días llegar a la conclusión de que no nos hemos equivocado. Por lo tanto, gracias por su voto.

Gracias, por supuesto, a Izquierda Unida, que ha presentado una enmienda que hemos aceptado, señor Romero, en los términos que hemos considerado que enriquecía nuestra proposición no de ley, y a los votos del Partido Socialista y el Partido Popular en la parte que han votado que sí.

Y desde luego, lo que se ha votado hoy es que no se penalice más al carbón de lo que ya está penalizado y que no se disminuya la competitividad a las empresas penalizando la cogeneración, y eso creo que ha tenido un amplio respaldo de esta Cámara, y yo quiero agradecer los votos que lo han propiciado.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
Señor Becerril, puede intervenir.

El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ [desde el escaño]: Sí, gracias, señor presidente.

Yo creo que todos de esta Cámara pienso que debemos estar contentos por lo que se ha votado hoy, porque pienso y pensamos que es necesario que no se penalice la competitividad del carbón; que hay que dar mayor viabilidad a las instalaciones tecnológicas energéticas, que tanto hemos defendido todos; que no se puede subir más la luz a todas aquellas familias a las que a lo largo del 2012 se les ha subido, aproximadamente, un 20%, y que está claro que los impuestos a la generación de energía no deben recaer principalmente en los consumidores ni en la industria, para, de esta forma, poder generar empleo y, lo que hemos hablado siempre todos, desarrollar la economía de Aragón, que hace muchísima falta en estos momentos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Becerril.
Señora Arciniega, puede intervenir.

La señora diputada ARCINIEGA ARROYO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Quiero decir que el Partido Popular no grava los impuestos sin control, tienen control.

Y, señor Becerril, no recaen en los consumidores. Yo no sé si se ha leído el texto de la ley, pero el gravamen es sobre la producción de energía eléctrica, no es sobre el consumo de energía eléctrica, sino sobre la producción. Una parte se soporta por las empresas y otra parte la va a soportar, en el primer año, la Administración y los consumidores en un porcentaje menor, y, en el segundo, los porcentajes todavía disminuyen más hacia la Administración y recaen más hacia las empresas.

Y, señor Romero, yo no sé por qué parece que le sepa mal que estemos de acuerdo en que el carbón es un sector estratégico en Aragón y que estemos de acuerdo en que hay que respaldarlo en la medida en que sea compatible con el resto de las tecnologías. Y, desde luego, yo creo que, si profundizan un poco más, el carbón y la cogeneración difícilmente son compatibles, porque lo uno es, normalmente, con otros combustibles que tienen unas características muy diferentes, y el carbón, no. No se puede pedir «A» y «A complementario»; no se puede defender «A» y «A complementario»; hay que llegar a un equilibrio y hay que llegar a un sistema razonable, y es en lo que está trabajando el Partido Popular.

Y quiero decir que, en esto, me parece, incluso, de mal gusto que me tenga que decir este tipo de cosas cuando sabe que hemos hecho un esfuerzo para que salgan proposiciones de manera conjunta y de manera consensuada por todos los grupos, y sabe que yo me he esforzado todo lo que he podido y más para arrimar posturas. Entonces, que diga estas cosas, realmente... Pero bueno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Arciniega.

Siguiente punto del orden del día: proposición no de ley número 383, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

La señora Ibeas puede presentar la proposición por tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 383/12, sobre la integración, a todos los efectos, del Hospital de Jaca en el Servicio Aragonés de Salud.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, traemos nuevamente a este Pleno una iniciativa con el fin de instar al Gobierno de Aragón para que termine con la situación de inestabilidad e incertidumbre en relación con el futuro del Hospital de Jaca integrándolo a todos los efectos en el Servicio Aragonés de Salud durante el ejercicio 2013.

Como saben sus señorías, tras numerosos problemas, tras numerosas deficiencias de carácter asistencial, el Hospital de Jaca entró a formar parte del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución como Hospital de Alta Resolución del Pirineo desde el 2006, a raíz de un convenio entre el Gobierno de Aragón, entre diversos ayuntamientos y la mutua de accidentes de Aragón.

Señorías, el 12 de febrero del año 2007 el Consorcio llegó a un acuerdo con el comité de empresa del Hospital de Jaca, que fue refrendado el día 19 de marzo, por el que, entre otras cuestiones, la plantilla del centro se iba a equiparar en condiciones laborales y en condiciones retributivas al personal estatutario del Salud; sin embargo, el 6 de febrero del año 2008, representantes del Casar (del Consorcio) comunicaron su negativa.

Los conflictos no se resolvieron durante todo ese tiempo, y, con el nuevo Gobierno que llegó en esta octava legislatura, el 1 de agosto del año 2011, el señor Oliván, el consejero responsable de sanidad del Gobierno de Aragón, declaró que se encargaría un estudio económico sobre las consecuencias de la incorporación en el servicio público del Salud del Hospital de Jaca. En aquellos momentos estaba realizando unas declaraciones a raíz de una reunión que se había promovido en Jaca como consecuencia de la falta de facultativos que había también, de un cierto malestar, que la plantilla había determinado derivaciones de distintas prestaciones sanitarias a otros hospitales, como el Hospital San Jorge de Huesca.

El día 29 de septiembre de ese mismo año, del año 2011, mi grupo parlamentario defendió en esta Cámara, en el Pleno de las Cortes, una proposición no de ley, la 28/11, sobre la integración del Hospital de Jaca en el Servicio Aragonés de Salud. El Grupo Popular presentó una enmienda con el fin de que se pudieran realizar los estudios oportunos en el plazo máximo de un año, a efectos de analizar la posible integración del hospital en el Servicio Aragonés de Salud. Mi grupo parlamentario entendió que no era momento de asumir ningún informe, entre otras cuestiones porque el propio Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular no habían necesitado ningún informe hasta el momento para reclamar durante varios años, y aquí también, en estas Cortes, pero asimismo en la propia ciudad de Jaca, la integración a todos los efectos del Hospital de Jaca en la red en la red pública del Salud. Sin embargo, la señora Orós, portavoz del Grupo Popular, sí que tuvo a bien concluir su intervención señalando lo siguiente, y permítame, señora Orós, que la voy a citar: «Lo dicho: en mucho menos de un año, porque el señor consejero ya está trabajando en este tema, tendrán ustedes el estudio y la solución al problema del Hospital de Jaca», y hubo aplausos, señala la transcripción, en los escaños del Grupo Popular.

Bueno, no , no hubo nunca un informe, no nos ha llegado un informe. «Mucho menos de un año» entiendo que es menos de once meses, menos de diez, menos de nueve, menos de ocho..., «mucho menos de un año» debe de ser eso; sin embargo, no ha sido así. No ha sido así, y desde mi grupo parlamentario hemos realizado un seguimiento exhaustivo de este informe durante todo este período, porque creíamos que era lo que teníamos que hacer.

Mediante solicitudes de información al amparo del artículo 12, mediante preguntas para formulación escrita, lo cierto es que hemos ido conociendo cuáles eran las declaraciones que realizaba el Gobierno.

Supimos, a raíz de la pregunta 392/11, que el Gobierno de Aragón, concretamente el señor consejero, había realizado un encargo al gerente del Consorcio, al señor Font Celaya, para la realización de ese informe. Curiosamente, el Consorcio es parte directamente interesada; no sé si es que no existe personal suficientemente preparado en el Servicio Aragonés de Salud para poder realizar ese informe, que le tienen que encargar al Consorcio que haga un informe sobre si conviene o no conviene, en este caso a las arcas públicas, que el hospital se integre o no se integre en la red pública. La verdad es que, lo cojamos por donde lo cojamos, es difícil de entender. Pero, bueno, el 14 de noviembre tuvimos conocimiento, por lo tanto, de que el informe se le había encargado a la parte interesada.

En la respuesta a una solicitud de información, la 121/11, de mi grupo parlamentario, también tuvimos estas respuestas: se nos señalaba que no nos podían entregar una copia del informe porque el informe no estaba completado, porque estaba pendiente el cierre del año 2011 y se quería contar con el gasto real, que iba a ser tomado como base comparativa a efectos coste/beneficio para la posible integración.

Señorías, el 28 de marzo del año 2012, a otra pregunta parlamentaria, la 558/12, de mi grupo parlamentario, tuvimos una respuesta el día 13 de abril donde se nos dijo que había dado un plazo de un año el Gobierno. Bueno, lo que les estábamos preguntando es si lo tenían o no lo tenían, qué pasaba con ese informe..., no pudimos saber nada más.

Y el 21 de agosto del año 2012 se nos señaló, en respuesta a la pregunta 1371/12, que el informe estaba en proceso de finalización. Bueno.

Tres meses después, el 28 de noviembre del año 2012, el consejero aseguraba en un viaje por el Alto Aragón, en Barbastro concretamente, que la decisión de integrar el Hospital de Jaca en el Salud era una posibilidad nada desdeñable, y los medios de comunicación del Alto Aragón recogieron la posibilidad de que el Salud absorbiera la responsabilidad asistencial del Hospital de Jaca y del resto, incluso, de los centros que forman parte del Consorcio.

Pero, pocos días después, el gerente del Consorcio, reunido con el comité de empresa del Hospital de Jaca, el señor Font, dejó bastante preocupación en la plantilla, porque se daba a entender que podría haber

recortes, recortes, incluso, también de puestos de trabajo.

Entre medio, señorías, y llegamos hasta el día de hoy, la verdad es que han seguido los problemas o la falta de especialistas, ha habido perjuicios indudables a la ciudadanía que deber ser atendida en este hospital (le recuerdo que estamos hablando de un hospital que cubre las zonas básicas de salud de Berdún, Biescas, Valle de Tena, Broto, Hecho, Jaca y Sabiñánigo, además de la población que, por ser una zona turística, evidentemente, suele ser muy numerosa en determinados momentos del año).

Así que creemos que ya no merece la pena que demos más vueltas al asunto, creemos que toda la recogida de firmas que ha habido, las movilizaciones..., realmente ponían de manifiesto esta necesidad de integración. No tenemos ninguna garantía hasta el momento de que en estos momentos pueda funcionar mejor en el Casar, en el Consorcio, que en el Salud, y, por supuesto, que no deberíamos perder ni un minuto más —entendemos desde mi grupo parlamentario—.

Incluso atendiendo a la propuesta y a la buena voluntad que pudiera manifestar la portavoz del Grupo Popular, pues, mire, nos sentimos, ciertamente, engañados, creemos que no ha habido seriedad... *[corte automático del sonido]* ..., creemos que no saben mantener la palabra y que, en cualquier caso, no hay ninguna excusa para que mi grupo no vuelva a reclamar algo que nos parece que es necesario para el buen funcionamiento del centro. Así que solicito el respaldo de todas sus señorías.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.

A esta proposición, se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Aragonés.

Señor Ruspira, tiene cinco minutos para su defensa.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Buenas tardes, señorías.

Subo de nuevo a la tribuna para un tema en el que lo primero que tengo que decir es agradecerle al partido de Chunta Aragonesista y, en este caso, a su portavoz en este tema, Nieves Ibeas, el traer esta proposición no de ley a estas Cortes, porque yo no me voy a retrotraer al 2006, me voy a circunscribir exclusivamente dentro de esta octava legislatura, y, como usted sabe, el 29 de septiembre del año pasado, del 2011, estuvimos debatiendo sobre este tema a una iniciativa presentada por ustedes, a la que usted ha hecho mención al respecto.

Y, mire, en ese sentido, vuelve a traer, y le digo que se lo agradezco, la integración del Hospital de Jaca —además, habla del Hospital de Jaca, no de todo aquello que está bajo el paraguas del Casar, porque un altoaragonés prefiere hablar específicamente del Hospital de Jaca en este tema— en el Servicio Aragonés de Salud a todos los efectos. Y me voy a autocitar, si me permite el verbo, porque, en el debate que se produjo el 29 de septiembre, yo apelaba a su inteligencia, señora Ibeas, yo apelaba a su inteligencia, y creo que en un par de ocasiones, porque el Partido Popular, como usted ha dicho, le presentó una enmienda que rezaba textualmente «realizar los estudios oportunos en el plazo máximo de un año a efectos de analizar la posible integración del Hospital de Jaca al Servicio Aragonés de Salud», y, cuando yo apelaba a su inteligencia es porque le estaba transmitiendo un mensaje muy claro en cuanto a que creía conveniente que, ante una apuesta y una decisión tan clara desde el Gobierno de Aragón sobre un tema que está sobre la mesa desde el año 2006, que está sobre la mesa durante toda la legislatura pasada, que no es un tema de fácil solución, veía un planteamiento sano, sincero y transparente desde el Gobierno de Aragón de esta legislatura, y desde el Departamento de Sanidad, en cuanto a la enmienda que había presentado el Partido Popular al respecto. Y por eso yo apelaba a su inteligencia, para que aceptase esa enmienda, para que, una vez aprobada, porque se hubiera aprobado por unanimidad, por unanimidad, transcurrido el año, hubiéramos tenido el estudio encima de la mesa o la comparecencia a petición propia del consejero o, por supuesto, la comparecencia a petición de Chunta Aragonesista que hubiera usted solicitado, o bien en el Pleno o en la Comisión de Sanidad, para recibir el informe correspondiente que nos está ocupando el tema en estos momentos.

Mire, yo, en esta ocasión, no voy a apelar a su inteligencia, pero no porque no entienda que la tiene, todo lo contrario, sino porque, como ya lo hizo una vez, no quiero tropezar en la piedra dos veces, y, en este momento, lo que ha hecho el Partido Aragonés es presentar una enmienda, y, como en la última intervención, en la justificación de voto, dije textualmente —y, cuando digo «textualmente», no hay nada más que acudir a la documentación—, dirigiéndome al consejero de Salud, que tomase la enmienda, aunque no hubiese sido aprobada, como un compromiso personal y moral y que, antes de un año, intentase transmitir ese trabajo a las Cortes de Aragón, porque creía —servidor— que sería un acierto y un mensaje claro a este Parlamento al respecto —y esto fue intervención, en la justificación de voto, literal, y, permítame, no es prepotencia la autocita—, está claro que, en este momento, lo que está haciendo el Partido Aragonés es presentar —y en este caso ya es el Partido Aragonés— una enmienda en la que lo que solicitamos de manera muy clara es que el Gobierno de Aragón presente, «en el plazo máximo de un mes, el resultado del estudio elaborado a efectos de analizar la posible integración del Hospital de Jaca al Servicio Aragonés de Salud».

Entendemos que este es un tema que ya no puede dar mucho más de sí, que el plazo de un año desde el 29 de septiembre está cubierto y que es momento ya de tomar las decisiones oportunas, independientemente de la que se tenga que tomar, con estudios sobre la mesa. Y, por eso, la enmienda que le presenta el Partido Aragonés es muy sencilla, es una segunda oportunidad —si me permite la expresión— que le brinda en este caso no el Partido Popular, como fue el 29 de septiembre del año pasado, sino el Partido Aragonés en esta ocasión, para que, si acepta esta enmienda, ya que no lo hizo el 29 de septiembre, tendrá de nuevo la unanimidad para poder conseguir que este planteamiento se haga y se transmita ante la Comisión de Sanidad o ante el Pleno por parte del consejero de Sanidad, que hoy nos acompaña, con respecto a la decisión que se adopte, y digo «con respecto a la de-

cisión que se adopte», pero sobre el estudio objetivo, necesario, adecuado, porque, además, tendremos los antecedentes del ejercicio 2011 y, dentro de un mes, los antecedentes ya, porque serán antecedentes dentro de un mes, del ejercicio 2012.

Señora Ibeas, si me permite el término, la pelota está en su tejado. Honestamente, y se lo digo con absoluta educación, creo que el 29 de septiembre no acertó en su decisión con la enmienda del Partido Popular; esta es una modesta opinión que me imagino que no compartirá. Veamos cuál es la decisión con respecto a la enmienda del Partido Aragonés, y el tiempo nos dirá si acierta o no acierta.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ruspira.

Es el turno en estos momentos de los grupos no enmendantes.

Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida por un tiempo de cinco minutos.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, señora presidenta.

Brevemente, para decir que vamos a apoyar la proposición no de ley que trae al Pleno Chunta Aragonesista, en la que es claro y yo creo que es el momento ya de tener que definir y decidir, y en la que lo que se intenta y se solicita es que se termine con una situación de inestabilidad y de incertidumbre en relación con el futuro del Hospital de Jaca integrándolo a todos los efectos al Servicio Aragonés de Salud, porque lo que es una realidad es que quien está sufriendo los perjuicios en estos momentos son los usuarios del Hospital de Jaca.

Lo que pasa es que venir y subir aquí, y más después de haber escuchado al señor Ruspira, me da la sensación, y permítanme la ironía, de que es el Día de la Marmota, porque me puedo volver a retrotraer al 29 de septiembre, volveré a escuchar al señor Ruspira y apelará a la inteligencia de la señora Nieves Ibeas sin ánimo de ofenderla. Y no sé yo qué garantías tenemos de que, esta vez sí, en un mes pueda estar el estudio, ese estudio que va a ser un estudio absolutamente completo, porque ya lleva un año el Gobierno de Aragón haciendo un estudio. Que hay que decir que el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, tenía absolutamente clara, absolutamente clara, la necesidad de la integración del Hospital de Jaca en el Servicio Aragonés de Salud, y que ha llegado al Gobierno y no solo le han entrado todas las dudas del mundo, sino que necesita todos los estudios del mundo. Porque la pregunta sería: ¿qué ha pasado en el Partido Popular para que en la pasada legislatura tuviera clara su posición sobre la integración del Hospital de Jaca en el Servicio Aragonés de Salud y ahora necesite estudio tras estudio? Se lo digo yo: que están en el Gobierno, y lo que les valía en la oposición... Que a nosotros nos sigue valiendo, porque es verdad que la realidad del Hospital de Jaca es la que es, las reivindicaciones de los ciudadanos son las que son, la falta de personal, de especialistas, los múltiples problemas que ha habido ustedes los conocen plenamente, siguen existiendo exactamente igual en estos momentos. Por lo tanto, lo único que ha cambiado es que no es que ustedes hayan cambiado de bancada, pero sí de color de asientos aquí, lo que indica que están en el Gobierno. Por lo tanto, falta de seriedad y falta de credibilidad.

Pero, señor Ruspira, no sé lo que hará Chunta Aragonesista, pero la última noticia que tengo, y ha sido publicada en todos los medios, es que dice que el estudio de viabilidad de integración del Hospital de Jaca en el Salud que encargó el Gobierno de Aragón hace más de un año, allá por septiembre, todavía no está terminado. Pero aún falta otro informe por parte del Salud, así lo anunció ayer el gerente del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución, Javier Font, al comité de empresa del hospital, y que tendrá que esperar, al menos, otros siete meses más para saber si verá cumplida o no la principal demanda histórica del centro sanitario jaqués, que es su integración.

Por lo tanto, como digo, entre el Día de la Marmota que estoy viviendo en estos momentos con esa regresión, usted, que solicita una enmienda para que en un mes esté el estudio, pero, viendo la falta de credibilidad y la falta de compromiso por parte del Gobierno, realmente, yo creo que, en estos momentos, lo que ya toca a esta Cámara es posicionarse claramente, porque quienes están sufriendo en estos momentos el deterioro, quienes están sufriendo la problemática, son los usuarios del Hospital de Jaca.

Por lo tanto, señora Ibeas, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista contará con nuestro apoyo, y ojalá no tengamos que volver a sufrir otro Día de la Marmota, como digo, porque estemos pendientes de otro estudio, otro estudio más, para saber si es importante o es necesaria más información, si se quiere integrar o no integrar el Hospital de Jaca en el Servicio Aragonés de Salud.

Si no se va hacer, que se diga y que se sea valiente y que no se esté dilatando en el tiempo una decisión que, por razones que en estos momentos se le escapan a este grupo parlamentario, no se quiere adoptar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.

Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario Socialista. El señor Alonso, por tiempo de cinco minutos, puede intervenir.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, presidente.

En esta iniciativa, Chunta nos propone la integración del centro de Jaca a todos los efectos en el SAS para acabar con una sensación —dice ella— de inestabilidad y de incertidumbre; el PAR propone ganar un plazo de un mes más para ver los resultados del estudio elaborado, y el Partido Popular, que no sabía qué hacer entonces, intentó ganar tiempo usando el viejo truco de hacer un estudio, pero yo creo que ahora, cuando ya van a llegar al ecuador de su mandato, creo que ahora sí que saben ya lo que van hacer con el Casar.

Yo lamento que el PAR y Chunta, a lo mejor, no lo ven como lo vemos nosotros, pero ¿qué ha hecho el Gobierno PP-PAR en este año y medio de gestión respecto al Casar? Ha ido recortando servicios de forma pausada, no todos a la vez, poco a poco, ya que piensan que se nota menos; no pagando a proveedores ni a empresas que prestan servicios a los cuatro centros del Casar, hay algunos profesionales de servicios sa-

nitarios que prestan servicios al Casar que llevan desde enero del 2012 sin cobrar (no nombraré a nadie porque los que tienen las facturas encima de la mesa lo saben); recortando servicios complementarios (horarios, desde limpiezas a horarios de visitas), frecuenciación de las visitas, malísima utilización de las camas, incrementos de listas de esperas en algunas especialidades; han ido deteriorando la imagen del Consorcio con declaraciones negativas respecto a la gestión, a la situación económica, al déficit de gestión, usando de forma torticera datos económicos; no reconocen que la causa de los números rojos del Casar es la mala gestión de los gerentes de Huesca y Barbastro (que es la misma persona) y del sector III (el del Clínico), y la nula coordinación de los hospitales de referencia (del Clínico respecto a Tarazona y Ejea, de Barbastro respecto a Fraga y del San Jorge respecto a Jaca), que no se coordinan, no se complementan, y por eso no les salen los números, que deberían salirles más presentables, y, en sexto y último lugar, mezclan datos de gestión de los años en donde se ponía que se estaban construyendo y se estaban poniendo en marcha estos centros del Consorcio con este último año y medio, que ya es de gestión pura y dura de responsabilidad del Partido Popular.

Señora Ibeas, no creemos que la incertidumbre y la inestabilidad que usted dice que hay en el hospital la generen la no funcionarización o el no hacer laborales fijos del SAS a unos cuantos trabajadores: yo creo que la inestabilidad y la incertidumbre la están generando el Partido Popular con su forma de proceder, generando unas expectativas en campaña electoral, que a los pocos días de ganar el Partido Popular se presentó el señor consejero, el señor gerente, en La Jacetania y no pudo cumplir o no quiere cumplir lo que en campaña electoral prometieron, y, luego, intentando ganar tiempo con este estudio, que durará más de un mes, que es lo que pretende el Partido Aragonés.

Hubo una intervención en estas Cortes del anterior responsable socialista del Departamento de Sanidad en la que se describía la situación del Hospital de Jaca, en la que queda reflejada la foto fija del Hospital de Jaca en aquellas fechas anteriores a la creación del Consorcio. En aquella intervención, en aquella foto fija del Hospital de Jaca, se veía el escaso personal asignado, la cartera de servicios escasa e inestable que tenía Jaca; en cuanto a la situación obsoleta de las infraestructuras, se hablaba también; se hablaba de la pésima utilización de camas; se hablaba también de las ratios pésimas de ese Hospital de Jaca, de los índices de ocupación, de la frecuentación, de los tiempos medios de las estancias de los enfermos en el hospital, de la complejidad de las patologías que podía atender...

Fue sobre la base de esa foto fija tan mala cuando el Gobierno PSOE-PAR, señor Ruspira, cuando ese Gobierno PSOE-PAR decidió actuar y metió muchos dineros en UCI, en consultas, en urgencias, en adecuaciones de plantas y habitaciones en Jaca; aumentó la plantilla, sobre todo, de médicos y de enfermería, y, lo más importante, señor Ruspira, a los treinta mil habitantes de La Jacetania y Alto Gállego les metió noventa mil habitantes de Cinco Villas, Tarazona, Borja y Fraga para que, con cien mil, Jaca tuviera suficiente masa crítica para poder dar calidad y seguridad en los actos médicos a los pacientes. Si no, ¿de qué, con treinta mil habitantes, va a poder usted llevar un camión de resonancias a Jaca? Lo podrá llevar si contrata para cien mil, pero no para treinta mil. O sea, que, gracias a esos noventa mil que añadió el Gobierno PSOE-PAR, es cuando la cosa empezó a funcionar.

Por lo tanto, yo, del estudio, no espero mucho, lo encarga un consejero que tiene fama o que se ha distinguido por: introducir recortes; cerrar puntos de atención continuada; quitar médicos en centros de salud rurales en los pueblos más pequeños; centralizar en Zaragoza lavanderías, laboratorios de análisis, *catering*..., y que parece ser que no se le ocurre otra cosa que no pensar en los pueblos que están situados a más de una hora del hospital, que también necesitan, señor Oliván, atención buena y, sobre todo, a tiempo, porque estamos a más de una hora de un hospital de referencia. Eso, respecto a quien encarga el estudio.

¿Y quién lo va a hacer? Pues ustedes lo han dicho: el gerente del SAS, el de Barbastro, el de Huesca y el del Clínico. Esos cuatro profesionales, de cuya categoría profesional yo no dudo, pero, para este tema, no son buenos compañeros aliados del Casar ni son buenos aliados de la descentralización sanitaria hacia los pueblos. ¿Por qué? Porque les saldrán las cuentas mucho mejor atendiendo en tres hospitales (de Barbastro, Huesca y Clínico) que atendiendo en los cuatro centros además del Casar; cumplirán mejor los contratos programa del sector sanitario al que pertenezcan (del Clínico, en esa área 3, o de Barbastro y Huesca, que ahora son dos sectores en uno), los cumplirán mejor atendiendo en tres sitios que en siete. Por lo tanto, no son unos buenos compañeros de viaje para discutir de tú a tú si nos interesa la descentralización sanitaria, que se ha conseguido para ciento veinte mil habitantes, o se pone en jaque. Ese es el problema.

Por lo tanto, el estudio no está hecho —diríamos— por un ente neutral que nos permita a todos decir, de tú a tú, qué es lo que queremos para esas zonas en las que vivimos a más de una hora de una capital de provincia.

Y termino...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: El Gobierno PSOE-PAR apostó por descentralizar la atención sanitaria, por ordenar el territorio, que tanto le preocupa al PAR, en cuanto a los temas sanitarios, por evitar desplazamientos incómodos, por evitar ausencias laborales de hijos y nietos para traer a los viejos, a los abuelos, a los hospitales, porque ya se les atiende en menos de un cuarto de hora. Por lo tanto, se evitaron muchas cosas.

Y creemos que esa situación sanitaria en esas cuatro subregiones (que así las titula el documento de ordenación del territorio), en esas cuatro subregiones, era mejorable, pero era buena. No hacemos un acto de autoafirmación: creemos que era buena, se mejoró, se pasó de cero a un notable en Tarazona, Fraga y...

El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, acabe ya, por favor.

El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... y Cinco Villas, y se pasó de un suspenso, como se ha dicho antes, a un notable en Jaca.

Por lo tanto, ahí está lo que hemos hecho. No pongamos en riesgo lo que se ha conseguido, y seamos neutrales para todo el territorio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.

Señora Orós, del Grupo Parlamentario Popular, puede intervenir. Cinco minutos, por favor.

La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, señor presidente.

Debatimos la proposición no de ley 383/12, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, sobre la integración a todos los efectos del Hospital de Jaca al Servicio Aragonés de Salud.

Señorías, creo que todos los grupos compartimos un objetivo común, que es que los ciudadanos y usuarios del Hospital de Jaca, como del resto de los hospitales que forman parte del Consorcio, tengan la mejor atención posible en términos de calidad y de servicios.

Señor Alonso, el consejero de Sanidad de estos momentos se caracteriza, sobre todo, por haber mejorado, y mucho, la gestión y la eficacia de la sanidad pública aragonesa. Y con respecto al Casar, señor Alonso, las luces y las sombras del mismo serán, en todo caso, cinco contra uno, cinco contra uno.

De todas maneras, quiero decirles que ya no es tiempo de recordar, de volver a comentar las dificultades, los problemas y las ineficiencias del pasado, sino de seguir avanzando.

La señora Ibeas ya ha hecho una valoración de todo el proceso parlamentario que ha llevado este asunto, que viene ya de lejos. Mire, señora Ibeas, el departamento tiene la hoja de ruta marcada y trazada con respecto al Hospital de Jaca, pero también con respecto al resto del Casar. Comenzó ya en el mes de septiembre, en el mes de agosto del año pasado, cuando, nada más tomar posesión de su cargo el consejero, se reunió con el Ayuntamiento de Jaca y con la dirección del mismo y, posteriormente, con el resto de implicados, tanto profesionales como agentes. Esta hoja de ruta ha continuado con muchas más reuniones y con un estudio al detalle de todos los centros hospitalarios del Casar, en el que se ha analizado la viabilidad económica, asistencial y laboral, así como una comparativa 2011-2012. Este estudio finaliza en próximas fechas, y, tras esto, en la hoja de ruta, lo que se sigue diciendo es que, cuando finalice, será el departamento, con criterios objetivos, el que contemple todas las variables y tome la decisión que sea mejor para los cuatro centros del Casar, planteando si se integran o no a todos los efectos en el Salud, y si son salvables y factibles algunos aspectos jurídicos de compleja resolución.

Ya le dije en su momento a Chunta Aragonesista que no marca la hoja de ruta del departamento, y lo que se tenga que decidir se decidirá cuando sea oportuno. Pero, además de esto, debo recordarle que el encargo al Casar de elaborar este estudio fue, exclusivamente, planteado por el consejero al Consorcio como un documento de trabajo interno. ¿Y por qué como un documento de trabajo interno y no como una encomienda de estas Cortes para que se presentara este informe? Pues porque, por su inflexible posición, no consideró aceptable una enmienda que presentó mi grupo, y que han recordado varios de los aquí portavoces, para que estas Cortes hicieran una encomienda al departamento para realizar el mismo. Por lo que, en este sentido, la verdad es que se ha dedicado a hacer una cronología de cuándo estará el estudio, en qué versará, cuándo estará el estudio..., cuando usted no permitió que estas Cortes hicieran una encomienda y se planteó una situación mucha más inflexible, y fue por la voluntad y el compromiso y la buena voluntad del departamento por lo que se está haciendo y se ha hecho este estudio, y no por lo que usted pueda comentar.

Y mire que el señor Ruspira se lo recomendó que aceptara nuestra enmienda, porque en este momento sí que tendrían las Cortes de Aragón esa encomienda encima de la mesa, y el departamento, también.

Y el informe no se ha hecho público porque aún está en un estado de análisis. El consejero y su equipo, como no puede ser de otra manera, son los que lo están analizando, y ni usted ni yo debemos hacerlo. Ni eso ni la decisión de que el Casar se integre en el Salud o no, ya que no es su grupo el que marca los tiempos, aunque sé perfectamente que les encantaría.

Un recordatorio importante y con carácter general: jurídicamente, es imposible que el personal laboral pase a estatutario sin hacer la correspondiente oposición, y esto pasa aquí y en toda España.

En definitiva, creemos que todos los potenciales usuarios que son atendidos no solo en el Hospital de Jaca, sino en el de Tarazona, en el de Ejea y en el de Fraga, deben tener el mismo derecho que el resto de los ciudadanos a que sus centros hospitalarios funcionen con normalidad y calidad, y eso es lo importante, eso es lo importante y en eso se está trabajando.

Ha habido una serie de problemas coyunturales que se han ido solucionando a lo largo de este año y medio; hay problemas estructurales, que con el análisis y la decisión futura del departamento, estoy segura de que se solucionarán.

Por todo lo expuesto, no vamos a apoyar su iniciativa, porque, como le he comentado, la hoja de ruta sobre el futuro del Casar está trazada, y ustedes no marcan ni cuándo ni cómo ni si se integra o no se integra al Salud.

Y termino.

Con respecto a la enmienda del Partido Aragonés, si se plantearan seriamente el aceptarla, nos gustaría pedirles un receso, porque creemos que sería mejorable en dos sentidos: en el primero, deberíamos repensar el plazo de un mes, porque enero es inhábil, y la verdad es que no coincidiría con plazos, deberíamos repensarlo, y también porque querríamos incluir no solamente el Hospital de Jaca, sino todo el Casar, ya que el estudio se ha realizado con todo el Casar, y no solo con el Hospital de Jaca.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.

Por el grupo parlamentario proponente, la señora Ibeas puede fijar su posición respecto a la enmienda.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

No, no aceptamos la enmienda de Grupo Aragonés. Agradecemos que la hayan presentado, pero no estamos realmente como para perder el tiempo con una nueva edición del Día de la Marmota, como ya se ha dicho anteriormente.

Y, sinceramente, las cosas ya están muy claras, y lo que sí que vemos con mucha preocupación es que los dos partidos que están gobernando no lo tienen tan claro, porque aquí ya no sé ni qué pasa.

Desde luego, no va a haber ninguna posibilidad de transacción, porque no se acepta ninguna enmienda, y, por lo tanto, la sometemos a votación tal cual.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.

Pues vamos a someter a votación la proposición no de ley en sus términos.

Señorías, comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta y dos; a favor, siete; en contra, treinta y tres; veintidós abstenciones. Queda rechazada.**

Pasamos al turno de explicación de voto.

Brevemente, señora Luquin, si va a intervenir.

La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Sí, brevemente.

No pensaba intervenir, pero, escuchando a la señora Orós, resulta que el Gobierno no tiene el informe en tiempo y en plazo porque a una enmienda del Partido Popular que le hizo a Chunta Aragonesista le dijo que no, y, si le hubieran dicho que sí, es que tendrían el informe. Eso es de una falta de seriedad y una falta de credibilidad y de responsabilidad absolutas. Si no tienen otro argumento... Desde luego, yo creo que aquí tendrían que posicionarse claramente: no solo llevan un año haciendo un informe, sino que el 28 de noviembre ha anunciado el gerente del Consorcio que necesita siete meses más porque tienen que hacer otro tipo de informe. Esa es la realidad, y ustedes aquí lo podrán ahora... No faltaría ahora más que el problema de que no esté el informe es de la oposición porque no le aceptan enmiendas al Partido Popular; sería lo no visto, sinceramente.

Lamentar profundamente que no haya salido, porque me temo que, efectivamente, tendremos más Días de la Marmota con este tema, y, al final, los únicos que van a seguir siendo perjudicados son los usuarios del Hospital de Jaca.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.

Señora Ibeas, puede intervenir.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Quiero agradecer los votos a favor, en este caso, de los grupos que han respaldado la iniciativa de Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y... El Grupo Socialista se ha abstenido, hubiera estado mejor que hubieran votado a favor, porque las cosas están como para tomárselo con bastante más claridad.

Vamos a ver, señor Ruspira, mire, yo apelo a su inteligencia para que usted no apele a la mía, porque, si hay algo que no se debe permitir en la vida, y tampoco en política, es la falta de palabra. Eso, yo creo que es un elemento que debemos tenerlo todos bien claro, porque, cuando uno se equivoca, pues se disculpa; cuando uno no puede llegar adonde pensaba haber llegado, pues lo explica; pero lo que no se puede hacer es decir y desdecirse y, encima, echar la culpa al que está haciendo las propuestas. Así que esa falta de palabra y, sobre todo, esa diferencia de opiniones que tienen los dos grupos que gobiernan...

¡Usted está en el Gobierno!, usted está en el Gobierno. ¿Qué ha hecho el Partido Aragonés, en este caso, para que se haya producido o no se haya producido la integración? Eso, una parte. Pero ¿qué es lo que ha hecho el Grupo Aragonés, qué es lo que ha hecho el Grupo Popular para que se haya recibido el informe que mi grupo ha solicitado en varias ocasiones, y también por artículo 12? Espero que no pretendan tampoco eliminarnos ese derecho, porque al final les va a sobrar todo.

Eso genera una falta de confianza, y, por lo tanto, miren, se ponen ustedes de acuerdo, deciden cuándo traen o no traen el informe, cuándo hacen o no hacen las cosas, y ya está. Porque ustedes están gobernando, señor Ruspira, lo mismo que el Partido Popular. Porque, si no, esto va a parecer la casa de tócame Roque: ya no sé si miente el consejero porque dice primero que lo va a traer en una fecha y luego no lo trae, ahora dice que le hace falta otro semestre, o si usted es el que miente porque, con un mes más, lo que quiere es sacar la cabecica, un poco así, del tiesto... No sabemos muy bien.

Señora Orós, vamos a ver, ustedes no ha cumplido su palabra; usted, tampoco. De todo lo que dijo usted y lo que ha dicho hoy, algunas cosas van en la misma línea, pero es absolutamente incoherente. Usted me está acusando a mí, está acusando a mi grupo parlamentario de que no se ha traído un informe, de que ha incumplido el consejero su compromiso porque no aceptamos una enmienda que usted nos planteó. Pero, vamos a ver, vuelvo a decir lo que dijo usted: «el consejero ya está trabajando en este tema, tendrán ustedes el estudio y la solución al problema del Hospital de Jaca». Mentira, señora Orós, mentira. Explíquenos por qué eso no ha llegado; eso es lo primero que tendrían que empezar a hacer, pero no empiece a echar la culpa a la oposición.

Y usted me ha vuelto a repetir algo que dijo en su momento, que me dijo: «usted, hoy por hoy, no tiene la potestad de plantearle los plazos al Gobierno que actualmente ostenta el Partido Popular». ¡Ni falta que hace!, no soy del Partido Popular, pero tengo todo el derecho, mi grupo tiene todo el derecho del mundo a plantear iniciativas. ¿O qué hacía usted en la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza?, ¿se dedicaba a limarse las uñas? No, me imagino que haría iniciativas, como hacemos aquí, eso es lo que estoy planteando. ¿Son así las cosas o no? Porque ustedes están queriendo una oposición que no haga nada...

El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, vaya terminando.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: ... y venimos aquí y nos sacamos el libreto, nos ponemos a ver el ordenador y no hacemos nada, y ustedes estarán encantados de la vida; pero la vida es

bastante más complicada en política de lo que usted plantea.

«La solución es sencilla» dijo el Partido Popular, 2008. No está el señor Torres, no sé si es que no está para no oírlo o tenía alguna cosa que hacer, pero el señor Torres dio una rueda de prensa en el 2008 diciendo que se exigía desde el Partido Popular la integración a todos los efectos del Hospital de Jaca. ¿Qué tenía que decir?, ¿tenía que marcarle la hoja de ruta al Partido Socialista?, ¿tenía que marcarle la hoja de ruta?...

El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, acabe, por favor.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Sí, señor presidente, porque esto es un poco como de risa.

El compromiso del Partido Popular con el Hospital de Jaca, que también reclamaba el Partido Popular, y decía, se materializaban en el programa —y acabo— de gobierno del año 2003 y del año 2007: «Si gobernamos, integraremos el Hospital de Jaca en el Salud». Y ahora no ha podido ser, señorías, porque quien marca la política del Gobierno de Aragón es Chunta Aragonesista. Y, fíjese, un tripartito, y no nos habíamos enterado... *[Corte automático del sonido.]*

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Ruspira va a intervenir? Sí.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el escaño]: Sí, señor presidente.

Y en este caso no empezaré diciendo «brevemente» *[rumores]*...

El señor PRESIDENTE: Ya se lo diré yo cuando llegue el momento.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el escaño]: Efectivamente, no me cabe ni la más mínima duda, señor presidente.

Vamos a ver, ¡justificación de voto al respecto... A ver, faltar a la palabra, yo creo que no he faltado a la palabra en ningún caso, y releeré su justificación de voto, señora Ibeas, porque creo que hay alguna cosa que me he perdido. *[La diputada señora IBEAS VUELTA, del G.P. Chunta Aragonesista, se manifiesta desde su escaño en términos que resultan ininteligibles.]* No, no, yo la releeré sin ningún problema.

Primer punto: no es lo mismo estar en el Gobierno que en la oposición, lo mencioné cuando lo hablamos el 29 de septiembre. De hecho, la votación del Partido Socialista lo demuestra. Y además, se lo agradezco, porque es de una honradez política importante, y lo digo abiertamente, para que quede constancia. No le había entendido muy bien su discurso, pero, a la hora de votar, lo he entendido perfectamente, y creo que lo hemos entendido todos, los sesenta y siete menos los ausentes.

Segundo: el Día de la Marmota. El Día de la Marmota se rompe si el 29 de septiembre del año pasado se hubiera aceptado la enmienda del Partido Popular, porque, vamos a ver, en la sesión plenaria en la que nos encontramos, en estos momentos son iniciativas de impulso (el control viene mañana, ahora estamos en iniciativas de impulso), y el impulso el 29 de septiembre pasado se hubiera hecho si se hubiera aceptado la enmienda del Partido Popular. Pero es que hoy hemos vuelto a tropezar en la misma piedra por segunda vez, ¡qué le vamos a hacer!, la vida es como es, ya saben ustedes el refrán.

En estos momentos, si se hubiera aceptado la enmienda del Partido Aragonés en este caso, en esta iniciativa de impulso hubiéramos tenido un plazo de un mes, y, a mí, que el mes de enero sea hábil o inhábil, a mí me preocupa muy poco, porque cobro todos los meses, lo cual implica que tengo que trabajar todos los meses, exactamente igual que todos los representantes que están en el ejecutivo, lo mismo que el legislativo. Y tanto que hablamos algunos de separar el ejecutivo del legislativo, cuando hablamos de gobernar y de apoyar al Gobierno, por supuesto, no se preocupen, que lo verán cuando aprobemos la ley de medidas o la ley de presupuestos.

Pero en esta sesión de impulso, que es la que nos ocupaba, lo que quería el Partido Aragonés era meridianamente claro: es que, ante una decisión muy difícil de tomar, lo mismo que la tiene el señor Oliván como consejero en esta legislatura, como lo tuvo la señora Noeno en la pasada, en una decisión muy difícil, los señores del Partido Popular se tiraron a la piscina adecuadamente, y lo digo en el buen sentido de la palabra, en septiembre del año pasado, y lo que quería el Partido Aragonés era rematar una decisión, independientemente de cuál fuera, para tomar una decisión definitiva respecto al Hospital de Jaca y al Casar en su conjunto.

Era así de fácil de entender. No lo han querido entender. *El Día de la Marmota* es una excelente película, grandes actores y actrices, pero me da la sensación de que, en este caso, el error lo han cometido los partidos de la oposición.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.

Señor Alonso, puede intervenir.

El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el escaño]: Señor Ruspira, intentaré aclarar el sentido de nuestro voto, porque ni usted ni yo hemos nacido en la octava legislatura, porque ya estábamos en la séptima legislatura y, además, estábamos bastante más juntos. Por lo tanto, no me culee, señor Ruspira. *[Risas.]* El PSOE... *[Risas.] [Pausa.]* Perdón, perdón por la expresión...

El señor PRESIDENTE: Siga, siga, señor Alonso. *[Risas y rumores.]* Puede continuar, señor Alonso.

El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el escaño]: Les he dicho en la tribuna que nosotros vimos una foto que nos decía que Jaca suspendía y que Cinco Villas, Tarazona y Bajo Cinca eran un cero, y el equipo PSOE-PAR puso a funcionar el Casar, acercó los servicios sanitarios a ciento veinte mil aragoneses, con un modelo sostenible —esto es lo importante—, económicamente sostenible, y que, si se sabía gestionar, podía seguir adelante y no creaba ningún agujero en la sanidad aragonesa, copiado en muchos sitios

del Estado español; se ganaba en accesibilidad, en calidad, en comodidad y en mejora de atención.

Por lo tanto, nosotros hemos visto que el paciente que está en el centro del sistema sanitario había ganado en proximidad y en colaboración tanto en atención primaria como en especializada; se disponía de servicios de diagnóstico, de radiología, de rehabilitación; tanto los profesionales como la atención primaria... —sí, señor Ruspira, lo tenían a mano, en el mismo centro tienen esos centros, y, si no lo tenían en el mismo centro, tenían el camión fuera para las TAC, para las resonancias, etcétera—, y también, por último, se garantizaba una descentralización de determinadas especialidades que les evitaba largos viajes, menores listas de espera, etcétera.

Por lo tanto, eso es lo que les dejamos de herencia al actual Gobierno PP-PAR, no para hinchar pecho, pero bastante presentable la cosa. Ahora la pelota la tienen ustedes: si siguen recortando, si siguen incumpliendo periodicidades de turnos, de no pagar o pagar mal, etcétera, el sistema se irá deteriorando. Y, por eso, actúen; lo que le pedimos nosotros es que actúen.

Nosotros nos teníamos que abstener porque estamos de acuerdo con el modelo que pusimos en marcha y que dio buenos resultados.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.

Señora Orós, puede intervenir.

La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el escaño]: Mire, señora Ibeas, y, esto, muy en serio: a lo que no me dedico yo en estas Cortes es a colocarme los collares, me dedico a trabajar. Y si usted se hubiera dedicado a trabajar igual, sabría, porque se ha hecho público que, en el primer semestre de este año... *[rumores]* —yo no me limo las uñas, otras se colocarán collares, yo no me limo las uñas—, en el primer semestre de este año, el señor consejero va a tomar una decisión sobre el Casar, y lo ha dicho, además, públicamente, con lo cual no digo nada extraño. Quiero decir que, si usted hiciera su trabajo completo y no se dedicara solamente a los titulares o a leer algunas de las intervenciones, sabría que, públicamente, el señor consejero ha dicho que va a tomar la decisión en el primer semestre del año. Queda ya poquito, queda ya poquito.

Y, señora Luquin, con respecto a su intervención, se ha debido de dormir en la mía; lo digo por lo del Día de la Marmota, porque creo que no me ha escuchado. Y, en la misma línea que decía el señor Ruspira, lo que yo intentaba explicarle es que, si la señora Ibeas hubiera aceptado nuestra enmienda, el estudio que se ha realizado no sería un estudio interno, sino una encomienda de estas Cortes en su conjunto para que se hiciera con carácter de impulso y desde todos los grupos parlamentarios. Es lo único que he intentado explicarle: al final, el estudio se ha hecho por una decisión del consejero de pedir ese estudio al Casar, que, si hubiéramos aprobado todos esa iniciativa, que los puntos 2 y 3 se aprobaron por unanimidad, posiblemente, la encomienda hubiera tenido la forma —y como hablábamos siempre— y la separación del Parlamento para que el señor consejero hubiera presentado como una encomienda de estas Cortes el citado informe, y eso era lo que intentaba explicar. Usted puede entenderlo como quiera o dormir la siesta como el Día de la Marmota.

Muchas gracias.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: debate y votación de la proposición no de ley número 401, relativa a la contratación y las percepciones salariales del profesorado interino.

La diputada señora Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene ocho minutos para exponerla.

Proposición no de ley núm. 401/12, sobre la contratación y las percepciones salariales del profesorado interino.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor presidente.

La iniciativa que paso a defender es una clara evidencia o puede ser un paradigma de ese doble leguaje del cinismo político o de la impostura a la que nos tiene acostumbrados el Partido Popular.

Pasamos de las musas al teatro, como le gustaba decir a un insigne dirigente del Partido Popular, parlamentario autonómico en otros tiempos, pasamos de las musas al teatro: pasamos, precisamente, del discurso, de las palabras, que se las lleva el viento, de ese discurso de apoyo fingido al profesorado, de exigir ese reconocimiento social, como nos han hecho hoy, una sobreactuación en ese sentido, para ver realmente la frialdad o la realidad de las acciones que este Gobierno está teniendo.

Mire, esta iniciativa tiene unas cuantas evidencias: en primer lugar, que es una muestra clara de que estamos ante un Gobierno que no es de fiar, como primer axioma; en segundo lugar, que es evidente que hacen todo lo contrario a lo que dicen o a lo que se comprometen a cumplir, y en tercer lugar, y algo que me parece grave y peligroso, que, por primera vez en muchísimos años, nos encontramos ante un Gobierno que actúa con una impunidad absoluta, cuyas decisiones dejan ante una inseguridad y una indefensión clarísimas y propias de otra época, y que no respetan ni aquellas líneas rojas que nos hemos dado a lo largo del período democrático, fundamentalmente en lo que son las relaciones laborales.

Y presentamos, precisamente, esta iniciativa hoy para que recapaciten y rectifiquen por el bien de la sociedad y del marco de relaciones y por el bien de la educación. Y esta iniciativa es tan importante en el fondo como en la forma.

El profesorado, desde luego —lo hemos dicho—, es el elemento fundamental, y, desde que se asumieron las competencias en Aragón, una de las prioridades entre el Gobierno de Aragón y las organizaciones sindicales ha sido la consolidación de las plantillas de profesorado en la red de centros públicos, como consecuencia, evidentemente, de la ampliación de la población escolar, del crecimiento de la población escolar. Por eso, desde el año 1999 hasta el 2011, se han ido aprobando en las respectivas mesas sectoriales de educación

ofertas de empleo, año tras año, para los diferentes cuerpos docentes. Mesas sectoriales de educación como marco legal para la negociación colectiva entre la Administración educativa y las organizaciones sindicales en el sector de la enseñanza pública; acuerdos que se han alcanzado de gran relevancia para la educación aragonesa, y, como no puede ser de otra manera, desde posiciones distintas, pero pensando en el bien común, desde el respeto, la negociación; mesas sectoriales que han estado presididas siempre por la voluntad de alcanzar acuerdos y el compromiso del cumplimiento de lo acordado, pauta —entendemos— básica y elemental de respeto y lealtad; temas cruciales y de mejoras en las condiciones laborales, pero, sobre todo, temas que han mejorado sustancialmente nuestro sistema educativo.

Por ello, la contratación más allá de la finalización del curso escolar, más allá del 30 de junio, para aquellos interinos que cumplieran un mínimo de días trabajados no se debe considerar como un privilegio, sino como una necesidad para el buen funcionamiento de los centros, al igual que la contratación desde el primer día de curso, desde el primer día de septiembre.

Y esto se hace todavía más necesario después de la decisión tomada por este Gobierno de trasladar las pruebas extraordinarias para este curso, para los alumnos de educación secundaria, del mes de junio al mes de septiembre. Si al profesor que a lo largo del curso se ha responsabilizado de unos alumnos impartiendo docencia y evaluando a esos alumnos no se le permite la realización de esas pruebas extraordinarias en septiembre, como ha sido el caso de este año, se vulnera el principio fundamental de igual de oportunidades y se quiebra el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por eso, gran parte de los acuerdos alcanzados en la mesa sectorial de educación se han producido en relación con la contratación y la permanencia del profesorado interino, y así también lo debió creer este Gobierno y debió asumir como buena y como herramienta e instrumento necesarios la mesa sectorial, y un día de julio, el 18 de julio del presente año, acordaron con las organizaciones sindicales, en una mesa sectorial, que, para todos aquellos interinos que hubiesen trabajado ininterrumpidamente en vacante de curso completo o como sustitución, que excedieran de doscientos cuarenta y dos días de su contrato de trabajo y llegaran hasta el 30 de junio, continuaría su contratación durante el verano. Bien, pues por sorpresa, ha sido a escondidas, a hurtadillas, en un acto —y lo digo con seriedad, porque me parece serio— de cobardía institucional, burlando el marco de la negociación colectiva que es la mesa de negociación, se han enterado, leyendo el proyecto de ley de presupuestos, de que, unilateralmente, este Gobierno ha decidido eliminar ese acuerdo, una agresión, desde nuestro punto de vista, en toda regla a la esencia y a los principios de la negociación colectiva.

Por eso me parece tan importante esta iniciativa, tanto el fondo, en la defensa de un derecho que tenían reconocido y la necesidad de mejorar el sistema de la contratación del profesorado interino durante esos meses, como las formas que ha utilizado este Gobierno y que nos parecen tremenda y gravemente peligrosas, porque inicien un camino sin retorno.

Presentamos, pues, esta iniciativa porque entendemos que estamos a tiempo y que está dentro de nuestra responsabilidad, como grupo de oposición, presionar al Gobierno para que rectifique en un acto, el nuestro, de legitimar a aquellos que representan a los trabajadores, de legitimar aquellos órganos que están elegidos para alcanzar acuerdos, precisamente en un acto de desautorización que ustedes han hecho de los representantes y de las organizaciones sindicales y de todos cuantos se sientan en esa mesa sectorial.

Estamos a tiempo, mañana hay una nueva mesa de negociación entre el Gobierno y los sindicatos para abordar exclusivamente este tema y pedir explicaciones; el Gobierno está a tiempo de rectificar. Y estamos a tiempo porque estamos, precisamente, en el procedimiento, en la tramitación de las enmiendas a ese presupuesto, a este presupuesto 2013, que les adelanto que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado ya dos iniciativas derogando la disposición adicional vigesimocuarta y, además, incorporando una nueva adicional reforzando y protegiendo la situación de los interinos. Y, como digo, estamos a tiempo.

Les pido, señores que apoyan al Gobierno, señorías del Partido Popular y del Partido Aragonés, que aprueben esta proposición no de ley. Ya que ustedes han querido reconocer públicamente la labor del profesorado y los han declarado autoridad, la mejor manera de partir de cero, como punto de partida, es apoyar esta iniciativa, es reconocer el trabajo hecho por los representantes del profesorado y, evidentemente, por el profesorado interino, que se lo merece.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.

Se ha presentado una enmienda. Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor Peribáñez, tiene cinco minutos para defenderla.

El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, señor presidente.

Debatimos en este punto del orden del día el tema referente a las contrataciones y percepciones salariales del profesor interino.

Mire, señora Pérez, en su exposición de motivos hace referencia a distintas cuestiones en las que, en unas más que en otras, podemos estar de acuerdo: que el profesorado es un elemento fundamental y garantista del sistema educativo, está claro, pero la garantía del sistema educativo la dan los resultados; por lo tanto, los alumnos también deben ser fundamentales y garantistas de este sistema.

Yo creo que es bastante sencillo de entender que las características organizativas, la implantación de programas, las medidas de apoyo, las sustituciones, las bajas por enfermedad, los refuerzos, indudablemente, conllevan la necesidad de la contratación del profesorado interino; también entendemos, como no puede ser de otra manera, que la mesa sectorial de educación es el marco para la negociación colectiva entre la Administración y las organizaciones sindicales. Y usted lo ha dicho y yo creo que es ese el objetivo de la mesa, la voluntad de alcanzar acuerdos y el compromiso de cumplir lo acordado.

Indudablemente, si al final se consigue el objetivo, pues supone estabilidad laboral y también una mejora

en la atención al alumnado y en el funcionamiento del centro, aunque es más cierto que la mejora del alumnado y, sobre todo, en el funcionamiento del centro se da más en aquellos profesores titulares que en los interinos que van rotando. También es algo lógico.

Y, bueno, pues la disposición adicional vigesimocuarta, que es objeto de esta iniciativa, la que hace referencia a la comisión sectorial, pues, bueno, efectivamente, le da un giro en el sentido de que los nombramiento del personal funcionario se extenderán desde la fecha de su inicio hasta que se reincorpore el titular o el que ocupe provisionalmente la plaza, y, en todo caso, como máximo, hasta el 30 de junio, fecha en que finaliza cada curso escolar, devengando las correspondientes pagas extraordinarias y vacaciones, con lo cual nos vamos al Estatuto de los Trabajadores o al Estatuto Básico del Empleado Público. En cualquier caso, yo creo que también es así de sencillo de entender que la relación laboral de un interino no es indefinida y, por lo tanto, alcanza como máximo a ese curso académico.

Y es cierto que el acuerdo de 18 de julio, el de la mesa sectorial, está más allá, supera los límites del Estatuto de los Trabajadores o del Estatuto Básico del Empleado Público; pero esto ya se conocía el 18 de julio, por lo tanto eso no es excusa. De ahí el acuerdo de la mesa sectorial: si hubiera sido menor, no hubiera venido a la mesa sectorial o, por lo menos, no se hubiera alcanzado el acuerdo en esa mesa sectorial.

Sin embargo, lo que no se conocía ni se preveía es la situación sobrevenida de la fijación posterior de límite del gasto en aplicación de la Ley 5/2012, de 17 de junio, de estabilidad presupuestaria de Aragón, que también creo que hay que tenerlo en cuenta. Y esto es a lo que se refiere, como he dicho anteriormente, la disposición vigesimocuarta.

Y este es el motivo, indudablemente, de la enmienda del Partido Aragonés: reconocer el acuerdo de esa mesa sectorial y, además, siendo conscientes y conocedores, me imagino que como todas sus señorías, de la situación económica que estamos atravesando, indudablemente, cuando la situación económica lo permite, y no estamos hablando de borrar, sino de esperar a que la disposición presupuestaria lo permita, que se restituya ese acuerdo y que, en tanto, que se estudien las fórmulas que permitan flexibilizar la situación adoptada y que minimicen, indudablemente, los efectos que la misma pueda ocasionar.

Espero que el grupo proponente pueda entender esta enmienda, porque creo sinceramente que es lógica, y así contará con el apoyo de este grupo parlamentario.

Todos tenemos un mismo objetivo, que es la mejora constante de nuestro servicio público, eso sí, y esta es una situación, siendo conscientes y teniendo en cuenta las circunstancias económicas en las que nos encontramos. Y estas circunstancias actuales son tremendamente excepcionales.

Reconociendo ese trabajo del personal interino, reconociendo el acuerdo de la mesa sectorial, entendemos que esta enmienda, de alguna manera, daría no con la solución, sino que entenderíamos que es el texto adecuado en este momento para darle continuidad... *[Corte automático del sonido.]*

Bueno, muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.

Intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes.

Por parte de Izquierda Unida de Aragón, el señor Barrena puede intervenir.

El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, señor presidente.

Señorías.

El tema sobre el cual versa esta proposición no de ley tiene que ver con muchas de las cuestiones que han salido ya hoy a esta tribuna, que vienen saliendo otros días, que tiene que ver con la situación absolutamente inaceptable de recortes y de —digamos— ningunear lo que son los derechos, en este caso concreto, del profesorado interino, que entendemos que bajo ningún concepto puede permitirse, aunque sabemos que, amparándose en esa mayoría absoluta de la gozan los dos partidos que gobiernan, pues al final lo harán.

Estamos hablando, señorías, de profesorado del sistema educativo público, profesorado que ejerce su función ya en una serie de condiciones, exactamente igual que el profesorado que no es interino, de dificultad de desempeño de su función, agravada por las decisiones que el Gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés toman, decisiones que van por empeorar las condiciones en las que se presta el trabajo, empeoramiento que tiene que ver con el recorte de recursos para que los centros puedan organizar sus propias actividades, dificultades que tienen que ver con la eliminación-supresión de programas que, además de apoyar al alumnado, servían también de apoyo al profesorado, como tiene que ver con la formación o como tiene que ver con las posibilidades de apoyos y desdobles en el aula.

Será una vuelta más, y se castiga un poco más al profesorado interino que ya ha sufrido la congelación salarial, que ya ha sufrido la pérdida de la paga extraordinaria de este año, que ya sufre la precariedad de la circunstancia en la cual desarrolla su trabajo, que ha visto cómo, por decisiones tomadas por el Gobierno PP-PAR, ha aumentado la cantidad de profesorado interino que trabaja a tiempo parcial y que, además, está condenado a desplazarse para poder cumplir lo que son los precarios contratos que les llegan, pues todavía tiene que soportar, según el Gobierno, la ruptura unilateral de un acuerdo negociado legítimamente en una mesa sectorial, es decir, en un órgano de negociación, con lo cual, además de romper unilateralmente ese acuerdo y empeorar clarísimamente las condiciones del profesorado interino, se le condena incluso, al que acredita un trabajo ininterrumpido de al menos doscientos cuarenta y dos días al año (prácticamente, un curso escolar), a que pierda el contrato en los meses de verano. Con lo cual, en definitiva, lo que se viene a decirle es que, mire usted, las vacaciones se las paga usted porque el Gobierno de Aragón tiene que seguir metiendo la tijera en todo lo que pueda, y, lógicamente, en eso, piensa que también puede.

Por lo tanto, la iniciativa es muy simple, y es una iniciativa que, evidentemente, vamos a apoyar, porque, en el fondo, lo que viene a decir es que este Gobierno no siga perdiendo legitimidad, que este Gobierno no siga perdiendo seriedad, que este Gobierno empiece

a hacerse valer y que este Gobierno empiece a demostrar que es lo suficientemente responsable como para cumplir lo que está firmado y acordado.

Eso es lo que dice esta iniciativa, es absolutamente legítimo plantearlo, y, evidentemente, desde la posición que tenemos los grupos parlamentarios de representar a la ciudadanía, ciertamente, creemos que de aquí no puede salir un voto en contra de una cosa que estaba, en definitiva, acordada, aprobada, firmada, y que, en definitiva, no hay ningún elemento que lo sostenga para retirarlo. Por lo tanto, señorías, el voto de Izquierda Unida va a ser a favor de esta iniciativa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.

Chunta Aragonesista. El señor Briz puede intervenir por tiempo de cinco minutos.

El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señora Pérez, evidentemente, vamos a estar a favor de esta propuesta.

Y como hoy hay un ambiente cinéfilo, voy a remitirme al ambiente cinéfilo: esto es como las películas históricas, Ben-Hur se sabe cómo acaba; pues esto se va a saber cómo acaba, porque, evidentemente, no va a tener mejor suerte que la que hemos tenido nosotros esta mañana ante la propuesta. Ya lo dice la consejera: el problema son doce millones.

Y voy a volver con el cine: como decían en Casablanca —no sé si fue así la escena, dicen a veces que hay dudas—, «tócala otra vez, Sam»... Pues eso: ¿la tocamos otra vez, Sam? Porque esto de la educación es tocarla sin parar, y que se me entienda bien la expresión.

Pero no acaba aquí, yo quiero ser entre irónico, sardónico, sarcástico, histriónico y absolutamente decepcionante. Fíjense bien lo que estamos haciendo, señorías: esta mañana, con una cierta solemnidad, hemos aprobado una ley..., bueno, han aprobado, perdón, una ley de autoridad del profesorado, donde el profesorado se ponía en el centro del escenario, con oropeles, y ahora, en las catacumbas del castillo, dejamos a los interinos sin dinero para el verano. ¿Qué respeto van a tener los alumnos y las alumnas a profesores que no cobran en verano?, ¿qué respeto van a tener? Dirán: «Pero estos, ¿quiénes son, si no les pagan ni el verano? ¡Cómo lo harán!, ¡cómo lo harán!». De eso estamos hablando, señorías, de que el respeto a la profesión se empieza desde arriba hasta abajo, y dignificando. ¿Ustedes imaginan que los jueces no cobren en verano?, ¿se imaginan? O los médicos, inténtenlo con los médicos, a ver qué pasa, y no quiero ser demagógico, porque ustedes en seguida dicen esa palabra.

Pero, bueno, en definitiva, lo que quiere decir es más sacrificios. Porque, además, aquí hay otro problema —me sabe mal que no esté la consejera, pero, como está la portavoz de educación, aprovecho—, aquí hay un problema fundamental, y es la precarización del empleo en educación, ese es el problema. Además de falta de buenas condiciones de trabajo, precariedad. ¿Por qué? Pero ¿cómo puede ser que, en un sistema educativo moderno, competitivo, de calidad y no sé cuántas cosas más, haya profesorado interino en unos porcentajes como está en este momento? Y luego, en la oferta de empleo público, no tienen lo que hay que tener legalmente, legalmente —entiéndanme—, para ofertar las plazas que les dicen los tribunales de justicia. Ese es el problema: que no sacan las plantillas orgánicas que hay que sacar a las oposiciones, ni saben qué perfil quieren tampoco, y, al final, los interinos, de verdad, tienen una situación de precariedad absoluta.

Y no solamente eso, dicen: ahora, ustedes, fíjense, como el déficit presupuestario y la estabilidad presupuestaria..., ese mantra, que lo van a cambiar, y me levantaré ese día en el escaño y aplaudiré; lo van a cambiar, tarde o temprano; en cuanto pasen las elecciones del 2013 en Alemania, veremos. Cuando eso ocurra, entonces tendrán ustedes que reconocer que el déficit público no lo puede condicionar todo, y que la educación esté condicionada por esto, doce millones de euros, lo que les vamos a pagar a las empresas del Plan Red. En definitiva, se prefiere eso que pagar al profesorado para una enseñanza de calidad.

Pero, además, les voy a decir otra cosa, fíjense: lo hacen de una manera —que el señor Peribáñez ha intentado explicarlo aquí—, por la puerta de atrás, la ley de acompañamiento, no sé qué..., el clásico siempre de la transparencia del Partido Popular. Miren ustedes, yo, lo que creo, sinceramente, es que lo que habría que hacer es pedir disculpas a los sindicatos, porque no han respetado las negociaciones de la mesa sectorial, pedir disculpas a los profesores interinos y abolir, derogar definitivamente esa adicional vigésima de la ley de acompañamiento. Eso y paguen, eso es lo que habría que hacer. Y, por tanto, respeten la negociación colectiva.

¿Saben lo que decía un griego, Chilón de Lacedemonia? Decía lo siguiente, señorías: «Mucho dinero y poca educación es la peor combinación».

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.

El Grupo Parlamentario Popular. Señor Peris, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

El señor diputado PERIS MILLÁN: Gracias, señor presidente.

«Respecto a las medidas que afectan a los trabajadores del sector público que verán reducidas sus retribuciones, reconocemos que, sin duda, se trata de una medida dura y que supone un enorme sacrificio, pero actuamos con responsabilidad política». ¿Sabe quién dijo esto, señora Pérez?, ¿sabe quién lo dijo? Pues lo dijo nada menos que el señor Griñán, ilustre presidente de la Junta de Andalucía, cuando anunció la eliminación de la paga de junio de los funcionarios y, además, la reducción del salario de un 5% a un 10% mensualmente. *[Rumores.]* ¿De qué estamos hablando?

Pero es que no nos quedamos ahí: de momento, donde sí que parece que van a eliminar la paga extra de junio y diciembre en el 2013 es en Andalucía, y ahí gobierna el Partido Socialista *[rumores]* y, que yo recuerde, con los compañeros de Izquierda Unida, que le están apoyando cada día. Ahí sí que son recortes, si le sumamos, además, el aumento del tramo autonómico del IRPF, el céntimo sanitario..., y así podríamos seguir diciendo más y más cosas. *[Rumores.]*

Señora Pérez, hemos vuelto una vez más a asistir a lo que podríamos denominar mentiras de destrucción masiva. Llevaban todo el día..., mire, es que son las ocho menos cuarto, llevamos todo el día escuchando lo mismo: que acabamos con la sanidad, que acabamos con la educación, que acabamos con todo. Mire, ¿sabe lo que decía mi abuelo cuando era pequeño...? *[El diputado señor FRANCO SANGIL, del G.P. Socialista, se manifiesta desde su escaño en los siguientes términos: «¿También tu abuelo?».] [Rumores]* ... —sí—: si te gastas lo que tienes, te arriesgas a no tenerlo cuando lo necesitas. Y ustedes se gastaron lo que tenían y lo que no tenían, y así estamos actualmente. *[Rumores.]*

Señor Briz, le recuerdo que quienes trabajen menos de doscientos cuarenta y dos días ya tienen reconocido en el Estatuto que cobrarán, debido a la legislación vigente, los días que les corresponda con los días trabajados, así que la medida afecta exclusivamente a los que trabajen más de doscientos cuarenta y dos días naturales, que, a partir de este momento, pasan a cumplir lo dispuesto en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, que fija un período de vacaciones retribuidas de treinta días naturales por año. Es decir, a un profesor interino que trabaje de septiembre hasta junio, que son más de trescientos días naturales, le corresponderá cobrar el 83% de la nómina del mes de julio y, además, lo correspondiente a la paga extraordinaria. Por lo tanto, creo que una vez más queda desmentido que el profesorado no vaya a cobrar el verano.

Por supuesto, tendrá igualmente derecho a la prestación por desempleo hasta que tenga formalizado un nuevo contrato.

Señora Pérez, está claro que firmamos un acuerdo en la mesa sectorial para pagar el verano a los interinos, pero estará también conmigo en que ese acuerdo sobrepasa los límites del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto Básico del Empleado Público, favoreciendo a interinos docentes al abonarles dos meses de vacaciones frente al resto de funcionarios de carrera, que tienen derecho a treinta días naturales, y estamos haciendo diferenciación entre el profesorado fijo y el interino.

Se rasgan las vestiduras con esta medida, pero no veo que hagan lo mismo en alguna comunidad en la que gobiernan ustedes, como es en Asturias, que les recuerdo que en la Resolución del 4 de septiembre de 2012 se indica que los profesores interinos terminan su contrato el 30 de junio, y ahí, por supuesto, otra vez están gobernados con el apoyo de Izquierda Unida. ¡Es que siempre estamos en lo mismo!

Dice usted que la extensión de los contratos de interinidad hasta el 31 de agosto de cada año favorecen la organización y el funcionamiento de los centros. ¿Me quiere usted decir que los docentes están en un centro hasta el 31 de agosto?, ¿me quiere decir usted eso? ¿Me quiere usted decir que un profesor está hasta el 31 de agosto en un centro? *[La diputada señora PÉREZ ESTEBAN, del G.P. Socialista, se manifiesta desde su escaño en términos que resultan ininteligibles.]* Vale, bueno, pues lo tiene por escrito en la proposición no de ley que ha presentado, lo pone usted por escrito..., bueno, que va mejor para la organización de los centros... Yo creo que no va a mejor para la organización de los centros, porque, además, los profesores interinos cada año están en un centro diferente, por eso son interinos.

Ustedes se creen que han nacido para decidir en exclusividad en educación, por eso les parece tan mal que en Aragón, donde gobernamos nosotros, se contraten cuatrocientos cuarenta y cinco profesores menos y en Andalucía les parece muy bien que se contraten cinco mil profesores menos. Los aragoneses han decidido que gobernemos nosotros, en coalición con el Partido Aragonés, les pese lo que les pese, y en las diferentes citas electorales, mientras el Partido Socialista (o sea, ustedes) sigue perdiendo votos, el Partido Popular (nosotros) seguimos aumentando cada vez el apoyo popular.

Y para terminar, señor presidente, señores del Partido Socialista, por políticas como las suyas, el país está como está, y por una oposición como la que están haciendo... *[el diputado señor FRANCO SANGIL, del G.P. Socialista, se manifiesta desde su escaño en los siguientes términos: «Y ustedes lo iban a salvar»],* su partido está como está. Les aconsejo que reflexionen y recapaciten.

Muchas gracias.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peris.

La señora Pérez puede fijar su posición respecto a la enmienda.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el escaño]: Sí, presidente.

No voy a aceptar la enmienda del Partido Aragonés porque entiendo que la propuesta que hace el Partido Socialista es muy simple y lo que le pedimos al Gobierno es que rectifique.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.

Vamos a somete a votación la proposición no de ley en los términos como estaba expuesta.

Señorías, estén atentos. Comienza la votación. Finaliza la votación. **Votos emitidos, sesenta; a favor, veintisiete; en contra, treinta y tres. Queda rechazada la proposición.**

Y pasamos al turno de explicación de voto. No contabilizaré el tiempo si me prometen que no lo van a sobrepasar.

Señor Barrena, tiene la palabra.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Ha sido una muestra más de cómo entiende las cosas el Gobierno de Aragón. Y además, cuando, para justificar esta aberración que es incumplir unilateralmente un acuerdo legítimo, con lo cual se pone en duda la seriedad de un Gobierno porque no es capaz ni de cumplir no digo ya su programa electoral, que no lo cumple, pero tampoco los acuerdos firmados, pues, evidentemente, creo que nos llevan al desgobierno en el cual estamos cayendo, están cayendo ustedes, desgraciadamente para todos los demás.

A mí me gustaría, siguiendo la tónica del señor Celma, señor Peris, que me contestara una pregunta: oiga, los mandatos imperativos del Gobierno del señor Rajoy para recortar el gasto, para no contratar, para no

hacer oposiciones, ¿solo llegan hasta Despeñaperros, o llegan hasta Tarifa? Díganoslo, por saber un poco aquí de qué estamos hablando, porque, desde luego, ya nos gustaría que hubiera sitios en los cuales la mano larga, esa que mece la cuna del recorte, no llegara, pero saben ustedes que es mentira. Por lo tanto, están haciendo un ejercicio de cinismo cada vez que utilizan el argumento de lo que se hace en otros sitios. Oiga, respeten la autonomía de los sitios y verán cómo se pueden hacer otras cosas. *[El diputado señor FRANCO SANGIL, del G.P. Socialista, se manifiesta desde su escaño en términos que resultan ininteligibles.]* Respeten.

Bueno, es que ¿para qué vamos a hablar de Valencia, oiga, si me da vergüenza...?

El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, vaya terminando.

El señor diputado BARRENA SALCES [desde el escaño]: Entonces, que hablen ellos si se atreven, ¿no?, que hablen ellos si se atreven.

Así que dejen ya ese latiguillo y miren a ver si nos platean alguna vez una intervención ahí que no empiece con palabras de no sé quién, con una cosa que dijo no sé cuanto, con algo que han buscado en la hemeroteca... ¿O es que no saben...?

El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, no dialogue de una manera como lo está haciendo.

El señor diputado BARRENA SALCES: Ya está, ya está, señor presidente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.

Señor Briz, ¿va a intervenir? No lo va a hacer.

Señor Peribáñez, ¿tampoco lo va a hacer? ¿Sí lo va a hacer? *[Risas.]*

El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el escaño]: Un minuto.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: A ver si cuela.

El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el escaño]: Gracias.

Pues, bueno, lamentar que no hayan aceptado la enmienda que ha presentado el Partido Aragonés. Creo que era, en el momento en que nos encontramos, muy realista.

Y, por lo tanto, bueno, pues yo espero que, si mañana se tiene la mesa de negociación, espero que se llegue a un acuerdo y que salgan contentos los profesores, que salgan contentas las organizaciones sindicales, porque, si salen contentos ellos, el Gobierno estará contento. Ahora, es muy posible que, si no se llega a ningún acuerdo, ninguna de las dos partes esté contenta.

Yo no conozco a ningún Gobierno que no intente —no digo que lo consiga—, que no intente hacer todo lo posible para mejorar todo, lo que ha encontrado y lo que se proponga. Y no estamos hablando..., como dice el señor Barrena, vamos a saber de qué estamos hablando, y es que, cuando se tiene la obligación de gestionar y te encuentras en la situación en que estamos, y digo estamos, todos, no es cuestión de que el Partido Popular y el PAR gobiernen en Aragón y el PSOE, en Andalucía, es que no hay más cera que la que arde, es que no hay más cera que la que arde.

Y la enmienda que ha presentado el Partido Aragonés es que, a la vista de la situación, que en julio no se conocía y ahora sí, en el momento en que se restituya esta situación de posibilidad presupuestaria, que se restituya ese acuerdo. Y hasta que llegue ese momento —sea un poco educado, señor Barrena *[risas]*—, hasta que llegue ese momento, que se lleven a cabo fórmulas que traten de minimizar este efecto. Esa es la enmienda que presentaba el Partido Aragonés. Entendemos que es una enmienda realista y acorde a la situación en la que nos encontramos, y es una lástima que no se haya tenido en cuenta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.

Señora Pérez, puede intervenir.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el escaño]: Gracias, presidente.

Agradecer, en primer lugar, a Izquierda Unida y a Chunta Aragonesista su apoyo.

Señor Peribáñez, decía usted: «yo no conozco a ningún Gobierno que no lo intente». Yo tampoco lo conocía, se lo aseguro que no lo conocía, pero tengo enfrente a uno que lo está haciendo, que está evitando absolutamente tomar decisiones para resolver los problemas de las personas. Y en Madrid hay otro, y, si no, acabamos con una iniciativa con la que vamos a ver cómo pueden generarse más ingresos y que este Gobierno está boicoteando. Claro que hay posibilidades.

Miren, díganles ustedes, señor Peris, díganles a los dos mil profesores interinos afectados que les han hurtado, les han quitado dos meses de vacaciones, que estaba, señora Susín, aprobado por una mesa de negociación, con actas que yo entiendo que le dará alguna legitimidad y alguna validez, ¿verdad?, díganles que les han quitado dos meses de cobrar, pero que no tengan ningún problema, que los Reyes les van a traer la chapa de autoridad, que, con eso, ya se van a sentir satisfechos, sin ninguna duda. Díganselo, si vuelven a trabajar en algún día, porque, visto lo visto, ya veremos.

Nos preocupa muchísimo, de verdad lo digo, que se convierta en costumbre una actitud que este Gobierno está haciendo, que es el incumplimiento de los acuerdos, incumplimiento de acuerdos sea quien sea con quien se hagan, sean sindicatos, sean ayuntamientos, sea, incluso, en estas Cortes, que se aprueban cosas y luego se incumplen. Nos preocupa muchísimo. ¿Ustedes son conscientes del daño que se hace a una institución como el Gobierno de Aragón, que ustedes dirigen? ¿Ustedes son conscientes de la imagen, de la falta de fiabilidad y de confianza que producen sus tomas de decisiones y sus posiciones políticas? ¿Quieren contribuir, en unos momentos de zozobra y de cuestionamiento institucional, quieren contribuir ustedes a eso? Les hago una pregunta abiertamente. Nos preocupa muchísimo esa actitud. Por supuesto, este grupo, por convicción y por rigor, no puede aceptar bajo ningún concepto esta actitud. Yo creo que esto es muy serio,

muy serio: gobernar es responsabilizarse de las situaciones, del contexto concreto y de sus decisiones.

Y, señor Peris —y concluyo, presidente—, no voy a hablar de ficción; hemos estado hablando de películas..., ojalá fuera un sueño o una pesadilla. ¿Recuerdan eso de «que caiga España, que ya la salvaremos nosotros»?, ¿recuerdan eso?, declaraciones del señor Montoro cuando era portavoz de economía en la oposición, y ahora es el ministro de Economía y Hacienda. *[Rumores.]* El caso es que, efectivamente, que caiga España; lo que no sabía es que ustedes la van a hacer caer más.

Y me lo pone fácil, señor Peris, tengo aquí una batería de iniciativas en Andalucía en materia educativa —me lo pone fácil porque como sabemos ya que es costumbre también referirse a Andalucía...—: Andalucía no ha incumplido ningún acuerdo; en Andalucía no se ha subido ni un solo alumno en las aulas, lo que ha permitido no echar a la calle a más de tres mil profesores interinos; en Andalucía no hay ni un solo hospital gestionado por empresas privadas; en Andalucía, las familias andaluzas *[rumores]* siguen siendo atendidas por su Administración, por su Gobierno, que les protege, y siguen siendo gratuitos los libros para sus hijos y para sus hijas. Le recomiendo, desde la humildad, le recomiendo que no tomen como referencia a Andalucía, porque les aseguro que llevarán las de perder.

Muchas gracias.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.

Señor Peris, puede intervenir.

El señor diputado PERIS MILLÁN [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.

Hombre, señora Pérez, que nos ponga Andalucía de ejemplo... ¿Qué podíamos esperar si su portavoz en el Congreso de los Diputados pone a Asturias también como ejemplo, y ya he comentado lo que están haciendo con educación?

Mire, dieciocho hospitales de gestión público-privada en Andalucía... *[Varios diputados del G.P. Socialista se manifiestan desde sus escaños en los siguientes términos: «¡Mentira, mentira!».]* ¿Qué no hay ninguno? Dieciocho, ¡dieciocho! *[Varios diputados del G.P. Socialista se manifiestan desde sus escaños en los siguientes términos: «¡Que no, que no!».]* Mire, señora Pérez...

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.

Señor Peris, continúe.

El señor diputado PERIS MILLÁN [desde el escaño]: Señora Pérez, ¿sabe lo qué pasa? Que la lectura tiene que ser lectura comprensiva, y, si usted lee pero no comprende lo que está leyendo, luego viene aquí y nos dice que no hay ningún hospital con gestión privada, y, claro, le pasa lo que le pasa.

Mire, dice que, aquí, dos mil profesores. Le hemos dado las cifras, y, el otro día, el director general de Personal se lo dijo, cuatrocientos cuarenta y cinco, y la consejera se lo ha dicho..., vamos, estamos cansados de repetirlo: cuatrocientos cuarenta y cinco. Mientras que en Andalucía son cinco mil. Que, por decir dos mil profesores todos los días, no se van a convertir en dos mil profesores que no se han contratado este año, que, por repetir cien veces una mentira, no se va a convertir en realidad, aunque sé que les gustaría, aunque sé que les gustaría. *[Rumores.] [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]*

Mire, señor Barrena, dice que es un desgobierno. No, antes sí que había un desgobierno, antes había un desgobierno, cuando nos encontramos todas las facturas sin pagar y nos encontramos la situación que habían dejado. Ahora es cuando se está gobernando, y gobernar es tomar decisiones, a veces duras, pero hay que tomarlas, y para eso nos han elegido, pero, sobre todo, para sacar a Aragón de la crisis, y lo vamos a hacer.

Muchas gracias.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peris.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: debate y votación de la proposición no de ley número 404, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Sada, por tiempo de ocho minutos, tiene el uso de la palabra.

Proposición no de ley núm. 404/12, sobre la decisión de impedir la existencia de un impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito.

El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor presidente.

Durante el día de hoy hemos estado hablando de muchas cuestiones, de, como decíamos antes, del don, de lo importante de dar importancia por el don. Esta iniciativa no va del don, sino, como decía Quevedo, del din, no hay don sin din; no voy a terminar como terminaba Quevedo, pero sí que voy a decir «no sé qué en latín», ¿no?, es lo que decía. Esta es la del din.

Mire, podría centrar mi intervención en una defensa de la necesidad de este impuesto como contraposición a las políticas regresivas, tanto en la fiscalidad como en la parte económica, de profundo carácter antisocial, del Gobierno del señor Rajoy; podría defender este impuesto, la imposición de este impuesto, por lo que supone también de defender a las entidades financieras aragonesas y, sobre todo, a aquellas que están en el medio rural implantadas de forma amplia; podría decir también, para remarcar las diferencias ideológicas y marcar las prioridades de cada uno, que el mismo día que, mediante fraude de ley, se intentaba frenar la aplicación y la posibilidad autonómica de crearlo, se pegó ese mismo día un tijeretazo salvaje a las pensiones de más de dos puntos, a la vez que se ayudaba a los bancos; podría decir que es otra vuelta de tuerca en el pertinaz y contundente incumplimiento del programa electoral del Partido Popular; pero no voy a insistir en estas cuestiones.

Me parece que es un tema tan grave por sí mismo lo que está pasando con ese impuesto que voy a intentar explicar e intentar convencerles a todos los miembros de esta Cámara de lo que los ciudadanos aragoneses se juegan y pueden perder, ciudadanos que están sufriendo por la situación económica y, sobre todo, por

las medidas que está tomando este Gobierno. Pero también pierde, además de los ciudadanos, nuestra capacidad de autogobierno, nuestra capacidad de decidir, sobre todo, en materia fiscal, ya que tanto hablan ustedes de la corresponsabilidad fiscal: ahí está nuestro artículo 105 del Estatuto de Autonomía.

Situación grave en el fondo pero también en las formas, como se demuestra con al enmienda que ustedes han planteado en el Senado.

Miren, cuando este impuesto se impone —por cierto, por un Gobierno socialista— sobre depósitos bancarios, el Gobierno del Partido Popular, entonces del señor Aznar, plantea un recurso de inconstitucionalidad por dos motivos: uno, que es que ya existía ese impuesto y que existía una doble imposición, el artículo 6.3 de la LOFCA, que era por el tema del IVA y el IAE, y el segundo tema, que sería su ámbito territorial, porque dificultaba la libre circulación de los capitales, el artículo 9 de la LOFCA.

Ante esta cuestión, el Tribunal Constitucional paraliza y suspende la aplicación de esta ley, y nosotros, desde luego, por lealtad institucional, planteamos, y mea culpa, error nuestro como grupo, en la última votación de los presupuestos, pensar que la lealtad institucional nos obligaba a todos y que, por lo tanto, por lealtad institucional, no podíamos seguir adelante con una ley que estaba suspendida hasta el momento en que se levantara esa suspensión.

Una vez que está la sentencia ya del Constitucional, se abría una posibilidad real, en unos momentos de importante crisis económica, de deficiente financiación de las comunidades autónomas, lo cual quiere decir que es deficiente financiación de las políticas sociales, se abría la posibilidad de implantar esta ley, que suponía, aproximadamente, cuarenta-cuarenta y cinco millones de euros en esta comunidad autónoma. Todas las cuestiones que hemos estado diciendo hoy se podrían financiar de forma bastante amplia.

Y ante esto, ¿qué supone la enmienda en el Senado que plantea el Partido Popular? Miren, primero supone una deslealtad institucional; segundo, que se hace a través de un claro fraude de ley, y la definición de «fraude de ley» es la vulneración de la normativa jurídica al amparo aparente de otra norma o disposición jurídica; supone una nueva agresión al Estado autonómico; es contraria a la corresponsabilidad fiscal que tanto demandaban el señor Montoro y el señor Guindos a las comunidades autónomas; es un vergonzante posicionamiento a favor de la banca, la saneamos a costa de las pensiones, la saneamos con un coste del 21% del PIB de toda España; supone que va a tener que compensar a otras comunidades autónomas con dinero de todos, también de los aragoneses, no solamente no podemos poner ese impuesto sino que tendremos que compensar con nuestros impuestos a otras comunidades autónomas.

Por eso quiero pedirles con toda sinceridad que, desde luego, en este tema pongan los intereses partidistas en un segundo plano, que pongan los intereses de Aragón, de los ciudadanos, de la capacidad del autogobierno, que es una cuestión fundamental y básica para el presente y el futuro de los ciudadanos aragoneses y de sus necesidades.

Miren, porque están claras las dudas jurídicas que existen sobre esta cuestión. Existen y les voy a plantear tres posibles escenarios, porque de lo que no cabe duda —creo— a estas alturas es de que es injusta y fraude de ley la enmienda que ustedes plantean en el Senado. Por cierto, fraude de ley, sobre todo, porque, además, ahora ya nos enteramos de que no es la enmienda del Senado un intento de bloqueo para que no se cree ese impuesto, no: a pesar de lo que decía anteriormente el señor Solana, a pesar de lo que decía el señor Octavio López, que decía que, realmente, crear ese impuesto supondría paralizar la salida de la crisis y que las capitales se marcharían, oiga, el señor Montoro, en el periódico *El Economista*, en *Expansión*, plantea que el Gobierno proyecta activar el impuesto de depósitos bancarios en el primer trimestre. Por lo tanto, señores del Partido Popular, señores diputados, no quieren parar el impuesto, no quieren que no exista ese impuesto: lo que quieren es expropiar la posibilidad de tener esa financiación a las comunidades autónomas y, en este caso, a Aragón. Ese es el problema que nos estamos encontrando. *[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]*

Y, ante eso, les decía que había tres escenarios.

Primer escenario: el no aprobar la ley en absoluto y recurrir. Es un recurso de inconstitucionalidad que se llama con carácter preventivo, pero de poco serviría: si al final no tenemos, ¿para qué vamos a recurrir la posibilidad de tener el impuesto si no apostamos claramente por tenerlo, al menos, desde luego, para que nos compensen?

Segundo escenario: sería aprobar la ley en su momento y recurrir. Desde luego, habría algo más de posibilidades, pero, en el mejor de los casos, nos pondríamos en un escenario a muy largo plazo la posibilidad de tener ese impuesto y, sobre todo, de recibir la compensación por él.

Y es lo que les voy a proponer yo de cara al futuro, por eso les pido que ahora planteen la aprobación de esta iniciativa: que se apruebe esta ley a través de la enmienda que tanto el Grupo Socialista como otros grupos hemos presentado a la ley de acompañamiento, porque eso nos dará dos posibilidades de recurso: una, el recurrir, por principio, la posibilidad de tener ese impuesto, un recurso de inconstitucionalidad, pero otro, que es más fácilmente ganable y a corto plazo, que sería recurrir algo que también es curioso en esa enmienda, que es la posibilidad que plantea la enmienda de la retroactividad al 1 de diciembre, esa condición de que tengamos ya esa ley. Esa es la que les planteo. Desde luego... *[corte automático del sonido]* ... posibilidad de la retroactividad, tendremos más facilidad de ganarlo a corto plazo.

Termino ya, señor presidente..., perdón, sería la presidenta, perdón.

Esta última posibilidad... *[corte automático del sonido]* ... de autogobierno y, sobre todo, defender a los aragoneses en sus necesidades presentes y futuras.

Nada más.

Muchas gracias.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Sada.

Es el turno de los grupos enmendantes.

Primer turno es Chunta Aragonesista. Ha presentado una enmienda. Señor Soro, es su turno para la defensa, tiene cinco minutos.

El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, señora presidenta.

Señor Sada, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista va a votar a favor de la iniciativa por los motivos que usted ha expuesto y porque, efectivamente, tenemos que dejar a un lado los criterios partidistas. Estamos hablando del futuro de Aragón, estamos hablando del autogobierno de Aragón, estamos hablando de la autonomía financiera de Aragón, y por eso es tan importante.

Sin duda, lo que hizo el Partido Popular (y, por tanto, el Gobierno central) con la enmienda que presentaron en su momento al proyecto de ley por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impuesto de la actividad económica no solo es un fraude de ley, que sí: es juego sucio. Yo decía un día que esto son las cloacas financieras del Estado. Es gravísimo. Es un ejemplo clarísimo de lo que caracteriza al Partido Popular: por un lado, actuar en contra de los ciudadanos y, por otro lado, actuar a favor de los bancos. Es gravísimo lo que hizo el Partido Popular, y por eso, por supuesto, vamos a apoyar la iniciativa.

Hemos presentado una enmienda, efectivamente, porque ya el año pasado, para el ejercicio 2012, el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista ya planteó una enmienda para crear este impuesto, el impuesto sobre depósitos a entidades financieras. Si se hubiera apoyado esa enmienda, ya habríamos recaudado dinero. Pero, además, usted lo ha dicho, señor Sada, ya estamos en una situación en la que se nos debería compensar por la recaudación que habríamos dejado de obtener. Por eso consideramos que era una lástima también no haberlo tenido ya, y ese es el motivo por el que presentamos la enmienda. Se acepte o no —ya adelanto—, apoyaremos sin duda la iniciativa.

Pero nos sabe mal en Chunta Aragonesista que lleguemos siempre los últimos. Ya sabemos que estaba la sentencia del Constitucional pendiente, ¿no?, pero lo que planteábamos el año pasado, en febrero de este año, era ser audaces y atrevernos ya a plantearlo aunque hubiera dudas de inconstitucionalidad.

Por cierto, según mis noticias, señor Boné, se va a votar también hoy esta ley, la ley enmendada por el Senado, igual que usted decía que se votaba hoy el proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, y es cierto —reconozco mi error, no pasa nada, nos equivocamos todos—, la sesión parlamentaria en el Senado empezaba el día 10, es la misma sesión a día de hoy, y ese ha sido el error, la confusión que he tenido de plantear que era el día 10. Así que llegamos tarde, me temo, porque ya hoy, en el Senado, se votará esta enmienda y ya volverá al Congreso; va a ser muy complicado pararlo. Pero, en todo caso, como digo, estamos completamente de acuerdo con el planteamiento.

Una vez que sea ley, lo que planteamos es que hay que dar un paso más allá de lo que están planteando ustedes en su segundo párrafo, eso que dicen de «todos los procedimientos políticos y jurídicos». Completamente de acuerdo. Tenemos registrada ya en el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista una proposición no de ley para llevar esta ley, cuando sea ley, al Tribunal Constitucional. No podemos hacerlo todavía, tiene que aprobarse, entrar en vigor; tendremos entonces plazo para recurrir al Tribunal Constitucional, traeremos aquí esa proposición.

Y espero que salga hoy adelante su propuesta y, como digo, espero que, en su momento, vuelva a salir también adelante la iniciativa de Chunta Aragonesista para recurrir al Tribunal Constitucional ese auténtico atropello, este fraude de ley, como digo, este juego sucio del Estado contra los ciudadanos y las comunidades autónomas.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.

Es el turno del Partido Aragonés. Señor Ruspira, puede defender su enmienda por un tiempo de cinco minutos.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes en el último tema de la jornada de hoy.

La verdad es que, efectivamente, hemos presentado una enmienda a un tema que creemos que es relevante. El hecho de la creación de un impuesto sobre los depósitos de entidades de crédito es un tema que hay que tener muy en cuenta.

Y, como bien decía el señor Soro, en estos momentos se está debatiendo el tema en el Senado. Señor Sada, el proyecto de ley se va a votar hoy en el Senado.

El dictamen de la Comisión de Hacienda lo tengo aquí, en mi mano. En el capítulo XI, que es el que incorpora a través de esa enmienda presentada de una forma curiosa, el artículo 19, «Impuestos sobre los depósitos en las entidades de crédito», dice dos cosas muy claras —no lo voy a leer entero—: en su punto 8, la cuota tributaria, que es base imponible del 0%, como bien sabe, y, en el punto 13, el artículo 19 dice, y creo que es muy importante remarcarlo, que «en la medida en que el impuesto que establece esta Ley recaiga sobre hechos imponibles gravados por las comunidades autónomas y esto produzca una disminución de sus ingresos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas» que, como bien sabe, lo que busca es la instrumentación de las medidas de compensación en favor de las mismas. Pero añade otro párrafo: «Lo dispuesto en el párrafo anterior será únicamente de aplicación [únicamente de aplicación] respecto de aquellos tributos propios de las comunidades autónomas establecidos en una ley aprobada [ley aprobada] con anterioridad al 1 de diciembre de 2012». Efectivamente, como decía el señor Soro, llegamos tarde por doble motivo.

Eso no quita para que el Partido Aragonés se posicione claramente al respecto, y creo que, con la enmienda, queda meridianamente claro. Miren, esto es una cuestión más de autonomía que de economía, entendiendo además que, sin economía, sin posibilidad de financiarse o de ordenar la actividad, no hay autonomía posible, y el Partido Aragonés defenderá el Estatuto de Autonomía de Aragón donde haga falta. Por eso, en nuestra enmienda hacemos referencia ex-

plícita a la Comunidad Autónoma de Aragón, porque estamos en las Cortes de Aragón, y creo que entiende —no deja de ser un matiz, pero creo que es importante— que se remarque ese planteamiento.

No vamos a criticar las formas de la enmienda que se ha incorporado en el Senado, pero sí el fondo reconocido abiertamente, como era el de la intención de bloquear las decisiones de las comunidades autónomas. Nos parece absolutamente reprobable.

No se entiende esa voluntad de hacer homogéneo el sistema financiero, porque difícilmente la incidencia de este impuesto le iba a restar eficacia; el ejemplo es el céntimo sanitario, que se aplica en unos sitios y en otros, no, y no hay ningún problema de ineficiencia.

Miren, tampoco se entiende que pudiera influir en el equilibrio o la disponibilidad de fondos de las entidades porque lo iban a repercutir en sus clientes. El problema de la fluidez del crédito en estos momentos en España no está, ni mucho menos, en este punto.

Mire, que nadie se confunda: el Partido Aragonés no está defendiendo la creación de este impuesto en Aragón, sino que está defendiendo la existencia de este recurso, de esta posibilidad en manos de la comunidad de Aragón. De ahí la enmienda presentada.

Saben —es conocido— el criterio del Partido Aragonés, lo hemos gestionado con ustedes durante doce años, estamos exactamente igual con el Partido Popular: no nos gusta incrementar la presión fiscal, lo saben ustedes perfectamente, esa presión fiscal que, en general, repercute a personas, familias, empresas o sobre el sector financiero. Tenemos nuestras dudas, todos creemos que el sistema financiero repercutiría este impuesto a los clientes depositarios en sus entidades financieras, pero, no obstante, lo que no queremos es perder la oportunidad. Y, en cualquier caso, hemos tenido una oportunidad al compás de Extremadura..., le agradezco la lealtad institucional a la que hacía mención el señor Sada, pero hemos tenido la oportunidad, y digo tenemos —fíjese que le digo primera persona del plural—, al compás de Extremadura, como decía, Andalucía o Canarias, para crear este impuesto, que ahora supondría compensaciones en virtud del artículo de la LOFCA, como le comentaba.

No se hizo en su momento, y hay que reconocerlo abiertamente y no pasa nada, se puede decir desde esta tribuna. Y, en este sentido, quiero que entiendan esta afirmación, evidentemente, como crítica, pero especialmente como autocrítica.

Crítica también que se sustancia en un privilegio, que es, como usted bien ha explicado, que el Estado, además, deberá compensar a las comunidades que he mencionado, a las tres, que así, aproximadamente, se está hablando de cien millones de euros en Andalucía, veintisiete en Extremadura y quince en Canarias, es decir, ciento cuarenta y dos millones de euros que, en vez de pagar las entidades financieras en esas tres comunidades, tendremos que pagar todos los contribuyentes a nivel nacional, con lo cual la verdad es que esta situación no nos agrada en absoluto.

Con lo mencionado, el Partido Aragonés se posiciona, como no puede ser de otra forma, en su enmienda al primer párrafo, suscribe al cien por cien el segundo párrafo (por eso no habíamos presentado enmienda de sustitución, evidentemente).

Y siempre se ha dicho que, desde el centralismo, la percepción de los ciudadanos sobre la validez de esta organización territorial autonómica estaba condicionada por la falta de corresponsabilidad fiscal de cara a la sociedad. Se ha ido corrigiendo con la cesión de porcentajes, de IRPF, de IVA y otros tributos, pero hay que profundizar en esta línea con impuestos como este, sometidos a decisión de las comunidades. Queremos ser corresponsables ante los ciudadanos, y es lo que estamos pidiendo, porque creemos en nuestra capacidad de autogobierno también en este aspecto. De allí, la enmienda presentada, señor Sada, y creo que está entendiendo perfectamente el mensaje que lanzamos desde el Partido Aragonés al respecto.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ruspira.

Es el turno de los grupos parlamentarios no enmendantes.

Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, señor Romero, por un tiempo de cinco minutos.

El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Poco nos queda que aportar ya a este debate después de las intervenciones de los anteriores portavoces, pero, en todo caso, sí que hay que decir que nuestra defensa al apoyo que le vamos a dar al Partido Socialista en esta iniciativa no va en la dirección del Partido Aragonés de que solamente esta comunidad tenga la posibilidad, sobre la base de sus competencias, de poder tener este tributo, sino que debería utilizar todas sus herramientas y todos sus instrumentos para que pudiera haber una ley en Aragón que permitiera que se gravara este tributo a las entidades financieras.

Sabemos que llegamos tarde. Este es un debate donde, a raíz del recurso de inconstitucionalidad que presenta el Gobierno del Partido Popular cuando gobernaba José María Aznar a una ley de la Junta de Extremadura, el fallo del Tribunal Constitucional ha sido reciente, ha fallado a favor de la Junta de Extremadura, y, a partir de ahí, ha surgido un debate en todo el Estado. La suerte la van a tener aquellas comunidades autónomas que, antes de la enmienda que ha presentado el Partido Popular en el Senado a la ley de medidas de acompañamiento de los presupuestos del ejercicio 2013, ya habían aplicado esta ley, ya tenían en vigor esta ley; las demás comunidades autónomas nos vamos a ver bloqueadas, sin posibilidad alguna, a pesar de que nos queda lo que hoy estamos haciendo, que es la pataleta de poderle decir al Gobierno que la comunidad de Aragón requiere de más financiación y que una buena solución podría ser esta ley.

Pero el Grupo de Izquierda Unida quiere introducir —digamos— un nuevo elemento al debate de esta iniciativa, y es que la sensación que nos da es que el Gobierno del Partido Popular siempre está blindando a las entidades financieras, y, con la medida que ha apoyado en el Senado, que está en debate en estos momentos, lo que sigue haciendo es seguir blindando a las entidades financieras. Decía antes mi compañera de grupo parlamentario, Patricia, en un debate sobre sanidad, que el Gobierno sigue practicando la política de ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes,

y es así: es curioso que, cada vez que el Gobierno del Estado pone sobre la mesa algo importante, qué casualidad que siempre beneficia a las entidades financieras, qué casualidad que siempre blinda a las entidades financieras.

Como es el caso de la propia Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que viene a decir, en su artículo 14, «prioridad absoluta de pago de la deuda pública», y viene a decir que «el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones (...) gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto». A partir de ahí, poco queda que decir.

Era lógico que el Partido Popular, después del fallo del Tribunal Constitucional, enmendara para bloquear que las comunidades autónomas pudieran tener una ley cada una de ellas para poder gravar a las entidades financieras y, en el momento excepcional que se vive, poder tener nuevos ingresos que fueran a parar a las realidades de los problemas que tienen los ciudadanos, pero se ha interesado desde el primer momento el Gobierno del Partido Popular por bloquear esa iniciativa y, nuevamente, dar un balón de oxígeno a las entidades financieras, que, curiosamente, no van a pagar este impuesto, lo va a tener que hacer el Gobierno, el Estado, a través de los ingresos de los ciudadanos, de los impuestos que aplican a los ciudadanos, para que, al final, compense a esas tres comunidades autónomas.

Nos parece que debería rebobinar el Gobierno, debería cambiar la actitud que tiene, exclusivamente de defender a las entidades financieras, de defender a los grandes por encima de los problemas de los ciudadanos, y, a partir de ahí, volver a situarse en un debate que se debe dar entre todas las comunidades autónomas, porque parece razonable, en los tiempos en los que estamos, y así lo hemos defendido desde Izquierda Unida en todos y cada uno de los debates sobre fiscalidad, que, en estos momentos, aquellos que más posibilidades tienen, como es el caso de las entidades financieras, más puedan aportar para la salida de la crisis, para trabajar, evidentemente, con los ciudadanos en el gasto social, estimular la economía y crear empleo.

Y, en ese sentido, nosotros apoyamos la iniciativa, porque esta iniciativa es muy difícil no poderla apoyar, pero decimos que tal vez nos hemos quedado en el vagón de cola del tren y que, en estos momentos, sabemos que va a ser muy difícil que esto pueda pasar a la práctica, que pueda ser una realidad en el futuro.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.

Es el turno del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular. Señora Vallés, tiene la palabra.

La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señora presidenta.

Señorías.

Intervengo para fijar la posición del Grupo Popular en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista para que en Aragón se establezca la tasa sobre los depósitos en las entidades de crédito. Eso sí, para que se pudiera establecer, hay que eliminar el obstáculo que supone la modificación introducida en las Cortes Generales, porque ya se ha votado mediante una enmienda en el Senado, por la que se crea la tasa nacional por este mismo supuesto o hecho imponible.

Hemos escuchado diferentes argumentaciones respecto a la necesidad de obtención de mayores ingresos o sobre que este ejemplo, últimamente, tiene como finalidad la defensa de los bancos o el blindaje de los bancos, una expresión que queda muy bien en esta tribuna, pero que queda lejos de representar la propia realidad, como intentaré exponer en mi intervención.

Empecemos diciendo que esta tasa sobre depósitos bancarios no es una tasa que se establece sobre los beneficios en los bancos, no es decir «no la van a pagar los propietarios ni los titulares de los bancos», si me permiten la expresión, sino que recae en la actividad bancaria y, concretamente, en los depósitos o, lo que es mejor dicho, en el ahorro. Así que, siendo una tasa sobre la actividad, es evidente que, a pesar de que se imponga a los bancos, estos repercutirán directamente el coste a los usuarios, usuarios que somos todos, y el coste recaería, evidentemente, más que sobre el ahorro, en otros ámbitos de la actividad. ¿Y por qué lo digo que recaería en otros ámbitos de la actividad? Porque la finalidad última de cualquier entidad bancaria es captar capital para poder prestar e invertir dinero, siendo este el aspecto central y básico del sistema bancario, y, por ello, tienden a proteger y a fomentar el ahorro. Por ello, hay que plantear un sistema impositivo, cuando se habla de un sistema impositivo al sistema bancario, completo, estudiado y estructurado, que evite desviaciones impositivas y también distorsiones territoriales.

Estando, pues, claro que el objetivo final de esta tasa son todos los usuarios de la banca, es decir, todos los ciudadanos en general, y que debe abarcar todos los aspectos, y no solamente un aspecto de las entidades bancarias, de la actividad bancaria, pasemos al efecto que el mismo pueda producir en el ahorro, en la capacidad de financiación y, en definitiva, en la actividad económica si este no tiene un ámbito nacional. Porque, señorías, esta propuesta es un ejemplo de las políticas económicas a las que nos tiene acostumbrado el Grupo Socialista o el Partido Socialista: en primer lugar, proponen las iniciativas fuera de lo que deberían haber propuesto cuando gobernaban, o también tienen en cuenta, simplemente, el efecto cortoplacista, pero no los efectos que puedan tener a dos o tres años, y de eso hemos tenido muchos ejemplos en los últimos siete años de Gobierno socialista.

Aragón forma parte de España y Aragón compite con el resto de las comunidades autónomas también en la captación del ahorro, y, por tanto, evidentemente, el establecimiento de un impuesto de ámbito territorial supondrá que, dependiendo del territorio donde uno tenga depositado, pueda tener más beneficios o pueda ser más gravoso su propio depósito, y no hay nada más fácil de manejar sin tener físicamente que el propio dinero. Por tanto, esto es lo que se ha atajado por vía del Senado: podría suponer fugas de ahorro entre las distintas comunidades autónomas, y quiero recordarles que Aragón tiene una de las tasas de ahorro por habitante más elevadas de España, y que hay una provincia en Aragón, la provincia de Teruel, mi pro-

vincia, que tiene la tasa de ahorro por habitante más elevada de toda España. Así que la medida nos podría suponer —no lo voy a negar— un ingreso inmediato, pero en dos o tres años nos podría suponer la fuga de entidades fuera de Aragón si esta tiene un ámbito puramente territorial.

Y, señorías, eso, ¿saben quién lo tiene más claro? Pues los ricos, las clases más altas, que saben manejar. ¿Saben quién terminaría pagando este impuesto? Pues lo terminarían sufriendo los cuentacorrentistas, los asalariados y los pequeños ahorradores aragoneses, con un ámbito puramente territorial.

Aragón, España, también forman parte de Europa, y, en Europa, en esta cuestión, ha quedado claro y se ha acordado recientemente buscar la unidad y el control de los sistemas financieros de los diferentes países, y también establecer un sistema impositivo común que evite distorsiones. Y ese mismo planteamiento de Europa es el que se quiere plantear y el que se ha planteado a nivel nacional.

La negociación y el estudio sobre la imposición de una tasa de transacciones bancarias y la necesidad de mantener la unidad bancaria que evite distorsiones entre las diferentes comunidades han sido los objetivos de la reforma introducida en el Senado de crear una tasa cero mientras se estudia la europea, y también los efectos que ha producido en Francia la implantación de las tasas bancarias. Acuerdo que, en estas Cortes, de acuerdo con nuestro propio Estatuto y, en su lectura, con la Constitución, nos impide su creación siempre que exista una de ámbito nacional.

Señorías, no se limita nuestro ámbito competencial, se ha ejercido una competencia estatal ante la ausencia de ejercicio por parte de esta comunidad autónoma. Las prisas, peticiones y lamentaciones de alguno las debían haber aplicado mientras gobernaban y ahora no lamentaría esas diferencias. Si no compartían la necesidad de mantener la unidad bancaria, podían ustedes, durante siete años del Gobierno de Zapatero, haber eliminado o retirado el recurso de inconstitucionalidad frente a una ley extremeña y ahora lo podríamos plantear.

Hay una tasa nacional, y ayer el ministro Montoro anunció... *[Corte automático del sonido.]* Yo les ofrecería dar un paso más en búsqueda del consenso y de acción positiva para esta comunidad, propuesta, que les voy hacer *in voce,* de sustitución, que vendría a decir lo siguiente: «Las Cortes de Aragón, ante el anuncio de la posible activación de la tasa sobre depósito a las entidades de crédito...

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Un momento, señora Vallés, por favor. Está leyendo una enmienda *in voce* y no le escuchan. Entonces, por favor, guarden silencio para que la señora Vallés puede formular su enmienda *in voce.*

Gracias.

La señora diputada VALLÉS CASES: ... instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al Gobierno de la nación al objeto de que la recaudación derivada de esta tasa repercuta directamente en las comunidades autónomas que no tuvieran establecido este impuesto».

Evidentemente, el Grupo Popular, por convencimiento, votará en contra de esta iniciativa a expensas que se determine la posibilidad de aceptar esta enmienda que les he realizado *in voce,* que busca trabajar por las soluciones y no luchar por quién representa la soberanía nacional, que son las Cortes Generales.

Muchas gracias.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vallés.

Señor Sada, ¿el grupo proponente puede fijarnos la posición para la votación?

El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

En cuanto a la enmienda *in voce* del Grupo Popular, no consideramos que sea, porque, vamos a ver, señora Vallés, hasta hoy era una cuestión si se ponía el impuesto a nivel autonómico o si se frenaba la imposición del impuesto a través de la enmienda del Senado; a partir de hoy, el señor Montoro lo ha dejado claro: o ponemos aquí el impuesto o lo van a poner y cobrar, además, en los mismos porcentajes, señora Vallés, con los mismos porcentajes, en el Gobierno central. Es que se trata de que o lo cobramos nosotros o nos lo expropian, así, directamente, eso es lo que ha cambiado fundamentalmente. Por lo tanto, no podemos aceptar esa enmienda.

En cuanto a la enmienda del Grupo Chunta Aragonesista, mire, ya se lo he dicho: le he dicho que lo lamento, lamentamos realmente que no se hubiera aprobado. Pero sí que quiero reivindicar una cuestión: la culpa no la tiene el que ha respetado y tiene un alto grado de lealtad institucional, sino que la culpa de que no podamos cobrarla en Aragón es de quien se salta la lealtad institucional constantemente, y sobre todo en este tema, de forma torticera y, sobre todo, además, con fraude de ley. Por lo tanto, permítame decirle que no se la voy a aceptar, en aras, desde luego, de buscar el mayor consenso, aunque, desde luego, lo lamentamos.

Sí que le aviso, señor Soro, de que, desde luego, apoyaremos, ya desde ahora, cuando sea el momento, porque ahora no lo es, el recurso de inconstitucionalidad.

Y en cuanto a la enmienda del Partido Aragonés, desde luego, creo que sí que aporta un tema, sobre todo en el primer párrafo, deja con más claridad lo que nosotros también queríamos expresar, y, en aras de ese consenso, desde luego, le acepto la sustitución de nuestro primer párrafo por el párrafo de la enmienda que plantea el Partido Aragonés.

Quedaría, pues, la proposición, en el primer párrafo, con la enmienda íntegra del Partido Aragonés y, en el segundo párrafo, tal como está en nuestra iniciativa.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Sada.

Comprendido, lo hemos entendido en la Mesa: lo que se acepta es la enmienda del Partido Aragonés.

Comienza la votación. Finaliza la votación... *[Rumores.]* Repetimos, se repite. Comienza la votación. Finaliza la votación. La proposición queda aceptada por treinta y seis votos a favor y treinta y uno en contra.

Señor Romero, tiene la palabra.

El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el escaño]: Nos disculpará que, con la enmienda *in voce,* no sabemos en este momento qué es lo que estamos votando. ¿Podría repetirlo si no le importa?

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Sí. *[Rumores.]* Señor Romero, señor Romero... Señor Sada, no tiene la palabra. Yo creo que se ha fijado la posición perfectamente y lo hemos repetido en tres ocasiones, con lo cual yo creo que ha quedado muy claro que la enmienda *in voce* no se ha aceptado y que tan solo votábamos con la aceptación del PAR. Con lo cual yo creo que se ha votado, ha quedado perfectamente, y es el turno de explicación de voto... ¡Ah, perdón, perdón! ¿No han votado los de Izquierda Unida? ¡Ah, perdón!

Repetimos la votación, pero estén atentos, por favor.

Se repite la votación. Finaliza la votación... *[Rumores.]*

Comienza la votación. Finaliza la votación. **Queda aprobada la proposición no de ley por treinta y cinco votos a favor y veintisiete en contra.**

Explicación de voto si hace falta.

¿Señor Romero? No.

¿Señor Soro? No.

¿Señor portavoz del Partido Aragonés? Señor Ruspira, tiene la palabra.

El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.

Primero, como debe ser correcto, agradecer la aceptación de la enmienda al Grupo Parlamentario Socialista.

Y segundo, y muy brevemente, incorporar una información que creo que es relevante: hace poco más de treinta minutos se ha votado el proyecto de ley que he mencionado en el Senado. El Partido Socialista reclamaba la devolución de ese proyecto de ley por seis enmiendas al Congreso; el Partido Aragonés, sus senadores, ha solicitado que se separara esa devolución por la enmienda 169, que es la que ha ocupado el tema; el Partido Aragonés ha votado con el Partido Socialista la devolución de la ley en ese sentido, ha decaído en la votación y, posteriormente, en la ley, el Partido Aragonés se ha abstenido en la votación. Para que quede meridianamente clara la posición y que no existen incoherencias cuando a veces hablamos del Senado.

Creo que es importante decir que el Partido Popular en Madrid tiene que cambiar esta ley inmediatamente.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ruspira.

Señor Sada.

El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Simplemente, y de forma muy rápida.

Primero, agradecer a los grupos que han apoyado esta iniciativa, tanto al Partido Aragonés, como a Chunta Aragonesista y a Izquierda Unida.

Yo creo que es un buen día y, sobre todo, es el principio, la primera etapa de lo que tenemos que ir avanzando. No nos jugamos, como decía antes, no nos jugamos el poner o no poner el impuesto, nos jugamos quién cobra el impuesto, si permitimos desde Aragón que nos expropien no solamente el impuesto y el dinero de ese impuesto, sino también la competencia para poder decidir sobre nuestra propia fiscalidad. Esa es la cuestión importante.

Y, por lo tanto, desde luego, sí que le animo a una segunda etapa, que sería con las enmiendas presentadas a la ley de acompañamiento, para tener más fuerza en todos los recursos jurídicos. Porque, y se lo digo especialmente al Partido Aragonés, señor Ruspira, no nos vamos a jugar si ponemos o no ponemos el impuesto —se va a poner—, sino quién cobra y quién tiene la posibilidad de poner ese impuesto.

Por lo tanto, les animo a todos, desde luego, a que, para tener más fuerza legal, en las enmiendas y en las votaciones que vayan a ser en la ley de acompañamiento, también con esta misma mayoría, podamos sacarla adelante.

Nada más, y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Señora Vallés, tiene la palabra.

La señora diputada VALLÉS CASES [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

La verdad es que desde el Grupo Popular vamos a lamentar que esta votación se haya producido en diciembre del 2012 y no se produjera en diciembre del 2010, porque, seguramente, en estos momentos no estaríamos ni hablando de esta cuestión ni tampoco hablando de pataleo.

Hoy hemos aprobado una iniciativa..., bueno, han aprobado ustedes y este Parlamento han aprobado una iniciativa de pataleo y de oposición y de crítica. Nosotros les hemos planteado... *[rumores]* ... ya que usted tanto... *[Rumores.]* Yo le he respetado sus intervenciones, señor Sada; espero que, por lo menos, respete la mía.

Ya que usted ha dicho que lo que ahora no consiste saber quién va a poner o no el impuesto, sino en quién lo va a cobrar, le voy a decir que el Partido Popular ha presentado una enmienda en la cual planteaba que sean las comunidades autónomas y que se trabajara para que sean las comunidades autónomas quienes cobren directamente ese impuesto, y eso es lo que le hemos planteado y usted ha dicho que no. Pues, evidentemente, usted sabrá si lo que buscaba era, simplemente, la foto y que aquí saliera una determinada votación o buscaba la eficacia práctica de este determinado impuesto.

Miren, ustedes pueden considerar que se ha expropiado una competencia de las comunidades autónomas. Yo le voy a decir otra cosa: yo creo que el Estado ha ejercido una competencia ante la falta de ejercicio de competencia de algunas comunidades autónomas. Y en un criterio: mantener la unidad del sistema bancario, es decir, que todas las comunidades autónomas, para evitar que se produzcan fugas de capitales entre

los distintos territorios, todas tuvieran la misma tasa y no hubiera diferencias ni tampoco lugares donde sí y lugares donde no, porque eso, evidentemente, produce muy importantes distorsiones en algo tan frágil y tan volátil como son los depósitos y los ahorros.

Yo les pediría, evidentemente, que hicieran ustedes una reflexión de lo que hoy ha ocurrido en estas Cortes: en estas Cortes hemos votado dos iniciativas que tenían por objeto establecer impuestos y una iniciativa que ha tenido por objeto eliminar impuestos; ustedes, en ambos casos, han intentado ir al contrario: cuando piden imponer impuestos, porque nosotros no queremos, y, cuando nosotros los ponemos, porque ustedes no quieren, como ha ocurrido con la ley energética.

Yo creo que, en este sentido, en materia impositiva, habría que ser un poco más coherente. *[Rumores.]* No hay que buscar ingresos, simplemente, por saber en qué los podemos invertir, hay que buscar impuestos que sean adecuados a la capacidad de los ciudadanos y a la situación económica, y con un objetivo económico. Y en este caso, en el impuesto de las tasas bancarias, no estamos hablando de crear impuestos para que la comunidad autónoma tenga o no más ingresos, estamos hablando de que los ciudadanos paguen todos los mismo para evitar distorsiones y que el dinero que se cobre vaya a los ciudadanos, que va igual si lo recibe el Estado o lo reciben las comunidades autónomas.

Muchas gracias.

[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vallés.

Se suspende la sesión *[a las veinte horas y cuarenta minutos]* hasta mañana a las nueve y media.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión *[a las nueve y veintinueve minutos].*

El punto número catorce del orden del día correspondiente a la interpelación número setenta y uno ha sido retirado, se ha pospuesto para otro pleno.

Y pasamos en consecuencia al número quince, al número de orden del debate número quince: interpelación número 82/2012, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de empresas públicas, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Aso, que tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 82/2012, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de empresas públicas.

El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Gobierno de Aragón...

El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.

El señor diputado ASO SOLANS: Señorías, como decía, el Gobierno de Aragón en la pasada presentación del ejercicio presupuestario, vino a decir que en Sodemasa y Sirasa (las dos empresas públicas que han sido fusionadas) iba a haber tan solo ajustes de despidos en el ámbito de los directivos; sin embargo, este año el presupuesto en personal desciende en seis millones de euros. Evidentemente, con una sencilla cuenta del coste que pueda tener un trabajador, las cifras de despido podrían ser considerables, por encima de los ciento cincuenta probablemente, y, por tanto, una cuestión central es si estos trabajadores que pudieran ser despedidos, habida cuenta de un mero ejercicio contable de la disminución de la partida de contratación de personal, pues cuántos de esos trabajadores iban a ser o pueden ser despedidos; por tanto, hay varias preguntas que quiero decir en este sentido.

La primera, que cuándo van a empezar a despedir, habida cuenta de que evidentemente cuánto más tarde probablemente para llegar a cumplir estas partidas, mayor tendrá que ser el número de despidos, y, por tanto, me gustaría, señor consejero, que nos aclarara cuándo tiene previsto el departamento tomar medidas en este sentido, más allá de que, evidentemente, nosotros no lo deseamos; y, por tanto, la otra pregunta sería que cuántos trabajadores tiene el Gobierno de Aragón intención de poder despedir en la empresa Sarga consecuencia de la fusión de Sodemasa y Sirasa.

Señorías, el año pasado en la presentación vimos que la partida de personal en el ámbito de Sirasa se reducía en unos siete millones, apenas se redujo la de Sodemasa. Y en dos presentaciones de presupuestos podemos decir que no han rondado los trece millones de euros. Luego probablemente se hayan apañado los números a lo largo del ejercicio presupuestario, pero estas desde luego eran las consignaciones que se ponían en la partida de personal. Y, con esos datos, la pregunta central es si alguien cree a día de hoy que no se han despedido más allá de las promesas que se hicieron de despedir solamente directivos.

A ese respecto me gustaría que nos aclarase cuántos trabajadores tenían dados de alta las empresas Sodemasa y Sirasa cuando entró el gobierno del Partido Popular en colaboración con el Partido Aragonés en 2011, hacia julio del 2011, y cuántos pueden estar dados de alta en estos momentos. Probablemente veremos la magnitud real de los despidos que se han producido en el ámbito de esas empresas, porque lo que es cierto, lo que sí es cierto es que prácticamente todos los trabajadores que tenían contratos parciales, contratos de fin de obra, han venido siendo despedidos o no renovados y, por tanto, se han aminorado las cantidades de manera muy sustancial en ese apartado, de tal modo que los trabajadores prácticamente en un porcentaje muy elevado ahora son trabajadores que tienen contratos más o menos indefinidos.

Señor consejero, yo lo que sí le quiero pedir en nombre de mi grupo, porque le tengo por una persona seria, es que detrás de cada uno de estos números, detrás de cada una de estas cifras de personal y de reducción de plantilla, de reducción presupuestaria, hay personas, hay familias y hay gente que quiere saber qué va a ser de su futuro, y, por tanto, es urgente, nosotros pedimos que lo aclare, lo aclare en esta cámara, lo aclare en el día de hoy, si es posible, y si no cuanto antes. Que se reúna con los sindicatos, les dé las cifras reales, y a partir de allí puedan ponerse a trabajar para, evidentemente, evitar la posibilidad de despidos o

plantear nuevos programas que hagan de esta empresa pública mayor servicio a la sociedad, más rentable y por tanto que podamos evitar los mismos.

Es evidente que Sarga nace con dos realidades distintas. Una, a partir de la empresa pública Sodemasa, y otra, de Sirasa. Y estas dos realidades distintas, desde luego, vienen también a producir resultados económicos distintos a lo largo de los procesos de trabajo de estas dos empresas. De tal modo que, por ejemplo, Sirasa nos consta que ha tenido mejores resultados económicos en ese aspecto que Sodemasa, e incluso en la fusión puede ayudar a conjugar algunas de las pérdidas que pudo tener esta empresa.

Tuvo distintos modelos de gestión, distintos modelos también y de sentido empresarial y de servicio que prestaba a la sociedad, y distintos responsables políticos en el anterior gobierno, de tal modo que una era gestionada por el partido socialista, dependiente del Departamento de Agricultura, y otra por el de Medio Ambiente, dependiente del Partido Aragonés.

Desde luego, también en el ámbito de la gestión hubo diferentes cuestiones. Sin ir más lejos, a Sodemasa se le hizo requerimientos incluso por el Justicia de Aragón en relación con garantizar la igualdad, mérito y capacidad de acceso a la empresa. Eso fue algo que sucedió, el mismo Justicia de Aragón lo hizo público, y, por tanto, queremos que recuerde usted aquí las palabras de la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, en su discurso de investidura cuando dijo aquello de garantizar la igualdad, mérito y capacidad para el acceso y la pertenencia en la administración pública.

Por todo eso, señor consejero, sí que mi grupo quiere hacerle algunas preguntas, porque lo que nos trasladan, y desde luego a nosotros nos parece que es muy serio, y creo que es oportuno que lo pueda aclarar aquí, es si esta empresa resultado de la fusión de las dos anteriores se pueda estar utilizando de manera partidista. Si es cierto, y creo que sería oportuno que lo aclarara aquí con datos, que se eliminaron directivos, tal y como el Gobierno de Aragón dijo, pero esos directivos o un gran número de los mismos siguen trabajando en la empresa pública en un nivel inferior cobrando el mismo dinero que cobraban cuando eran directivos de las empresas públicas.

Nos gustaría, señor consejero, que nos lo aclarara, porque desde luego, de ser eso así, de ser eso cierto que muchos de esos directivos han sido recolocados con el mismo salario en un segundo nivel, estaríamos ante un engaño a la sociedad y un engaño a esta cámara.

Señor consejero, también me gustaría que nos aclarara si es cierto que algunos de estos directivos están percibiendo salarios por encima de lo que cobraría un funcionario del Gobierno de Aragón, de la DGA, que ocupe el mismo nivel laboral, y, por tanto, tenga aproximadamente la misma responsabilidad.

Creo que es oportuno, porque lo que sí que nos parece también significativo es que trabajadores que no están en el ámbito de los directivos están trabajando por menos salario que sus homólogos en el Gobierno de Aragón; por tanto, esa dualidad no acabamos de entenderla.

Y sí que nos parece, al hilo de estas preguntas, un poco sospechoso, y le quiero preguntar si le parece razonable que esta empresa pública, por ejemplo, mantenga delegados provinciales en Huesca y en Teruel. Entendemos que haya un delegado provincial del gobierno central, bien, pero que haya un delegado del Gobierno de Aragón en Huesca ya es un poco, en fin, con calzador, pero que haya delegados provinciales de una empresa pública no nos parece del todo razonable, y desde luego nos gustaría saber si mantener estos puestos de delegados territoriales en Huesca y Teruel tiene que ver con la posibilidad de que estos cargos sean ocupados por dirigentes de partidos políticos con representación en esta cámara y que forman parte de la coalición del gobierno, concretamente del Partido Aragonés.

Señoría, ¿por qué también se están manteniendo algunos puestos que parece que al hilo de la fusión, y eso de que se dijo de la reducción de directivos, cargos, parece razonable que no se mantengan? Por poner un ejemplo de algunos datos que hemos podido obtener, parece que hay responsables, por ejemplo, de recursos humanos, en que se están manteniendo dos puestos cuando parece evidentemente que debería haber un responsable. O lo mismo sucede con, por ejemplo, alguna otra área de la empresa pública.

Y, por todo eso, y como son preguntas muy serias, señor consejero, le pido concreción y claridad, porque Sarga no puede permitirse un ERE, y mucho menos si este tiene visos de tener algún cariz de hacer un ERE político, que espero que eso no sea así. Desde luego, nosotros estaremos muy atentos para que eso no pueda suceder.

Señor consejero, nosotros entendemos que las partidas que han traído para esta empresa pública pueden afectar de manera importante a la extinción de incendios. Y me gustaría que nos dijera cómo va a afectar; si es cierto, como se les ha dicho a los trabajadores, a los responsables de los trabajadores, que a partir del dinero que se va a inyectar a las comarcas se les va a aportar dinero para la extinción de incendios a estos servicios. Lo digo porque muchas van a recibir dinero y tampoco tienen áreas que proteger, y por otro lado también el Gobierno de Aragón ha dicho que ese dinero se iba a destinar a fines sociales. Por tanto, creo que es oportuno que aclare aquí si ese dinero va a ir concretamente para extinción de incendios, y, por tanto, mantener puestos de trabajo.

Señor consejero, se me acaba el tiempo.

Creemos en el ámbito de esta empresa que no hay un plan de empresa. Nos gustaría que nos explicara cuál es el plan para la empresa, para hacerla viable, para consolidar los puestos de trabajo y que en el futuro puedan mantenerse. Creemos que tienen la obligación de explicar cuál es el plan y tienen la obligación de explicar a los trabajadores cuál es la realidad, cuál va a ser su futuro; desde luego, creemos que debe hacerlo cuanto antes. No vemos un plan de futuro serio para la misma, y eso nos preocupa...

El señor PRESIDENTE: Termine, señor...

El señor diputado ASO SOLANS: Sí, voy acabando ya, señor presidente.

No entendemos que abran el monte con modificaciones legislativas para la iniciativa privada y que no piensen en el futuro de una empresa pública que podría hacer perfectamente muchas de estas cuestiones.

No entendemos que se externalicen servicios en una empresa pública cuando puede hacer esos mismos servicios...

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.

Pasamos a la respuesta del señor consejero. Tiene diez minutos. Le ruego que sea estricto en el tiempo.

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (LOBÓN SORINO): Señor presidente.

Señorías.

Señor Aso. Con toda la claridad, y con toda la rapidez también, voy a intentar responder a las preguntas tan concretas que me ha formulado. Y lo hago encantado porque, lógicamente, el planteamiento que estamos siguiendo no tiene nada que ocultar y además estamos haciendo lo que hemos dicho desde un principio. Desde un principio he dicho, y a ello me atengo, todas las intervenciones que en esta materia he tenido han sido las siguientes: vamos a hacer una fusión de las dos empresas y posteriormente los ajustes de todo tipo que haya que hacer se dialogarán y se negociarán con el comité de empresa. Eso es lo que he dicho en todo momento y eso es precisamente lo que estamos haciendo.

Como ustedes saben, el 21 de marzo, aproximadamente, se autorizó por el Gobierno la fusión. En el mes de mayo hubo un nuevo director; desaparecieron los dos directores generales que había y el nuevo director general asumió el liderazgo de la fusión, fusión que se completó en el mes de octubre, el día 1. Y el día 5 tuvo lugar el primer consejo de administración de la nueva sociedad, en el que se hizo el siguiente planteamiento: se vio el estado de las cuentas —y con esto le respondo ya a una de las preguntas que me ha hecho— y se vio que la empresa, tal y como estaba estructurada, con la dimensión de personal y de negocio que tenía, si no se hacía nada, iba a incurrir el próximo año en un déficit de entre cuatro millones y medio de euros y cinco.

Por lo tanto, se hizo un plan de negocio, se está haciendo, mejor dicho, un plan de negocio, con el fin de llegar a la reducción a cero de ese déficit. Esa reducción a cero de ese déficit se puede conseguir, se está estudiando para conseguir por dos vías: o bien aumentar el tipo de trabajo que desarrolla esta sociedad o bien un ajuste de personal; son las dos vías. En la medida en que se consiga una, no hay que echar mano a la otra y, viceversa, la otra invalida la una. Y eso es lo que la sociedad está estudiando.

Se dijo por otra parte que el planteamiento global se haría cuando se tuviera constancia fehaciente de los presupuestos, y a ellos nos remitimos. Y dijimos también en aquel momento que cuando se conociesen perfectamente los presupuestos habría un nuevo consejo de administración donde se haría el planteamiento global, y automáticamente se informaría a los sindicatos para comenzar con ellos el proceso de diálogo y de negociación. Y eso es lo que estamos haciendo. Como digo, tan pronto como tenga lugar el próximo consejo de administración, que está a tenor de los presupuestos, va a tener lugar la información total y permanente a los sindicatos, y comenzará el proceso de negociación.

Con respecto a la estructura de la sociedad y a las preguntas concretas que me ha dicho de directivos o distintas personas, puedo decirle que lo que en el consejo de administración del pasado día 5 de octubre se aprobó fue el organigrama directivo, que está formado por diez personas. Esas diez personas con los cargos están ya aprobados por la sociedad. Salvo eso no hay nada aprobado y salvo eso todo lo demás es lo que se va a someter a objeto de negociación con las centrales sindicales y con los sindicatos de la empresa.

La estructura que se aprobó en aquella reunión fue la siguiente: hay cinco áreas funcionales, que son infraestructuras, servicios forestales, servicios agrícolas, servicios ganaderos y servicios medioambientales; al frente de los cuales hay una persona. Y hay también otras áreas que son de complemento y de apoyo a estas, que son control de gestión, servicios jurídicos, innovación y comunicación, recursos humanos y servicios financieros. Eso son diez personas. Cada una de esas personas ha hecho una elaboración, o está haciendo, mejor dicho, está terminando de hacer una elaboración del planteamiento de cada una de las cinco áreas fundamentales, para conseguir que cada una de estas cinco áreas pueda funcionar autónomamente; es decir, que pueda mantenerse sin tener déficits. Y ese es el planteamiento que tan pronto como tengamos el próximo consejo de administración será comunicado a los sindicatos para comenzar con ellos el proceso de ajuste de forma dialogada.

En estos momentos —y le respondo a otra de las pregunta que me ha hecho— la plantilla es la siguiente: en la línea de infraestructuras hay cincuenta y tres personas; en la de servicios forestales, novecientos tres; en la de servicios agrícolas, cuarenta y uno; en la de servicios ganaderos, ciento veinticinco; en la de servicios medioambientales, doscientas cuarenta y una. En total, mil trescientas sesenta y tres personas. Y las otras líneas, las de apoyo a estas: en control de gestión hay una persona; en servicios jurídicos hay once; en innovación y comunicación hay treinta y nueve; en recursos humanos y organización, sesenta y dos, y en servicios financieros, ocho. En total, ciento veintiuna, más lo anterior: la plantilla actual de la sociedad es de mil cuatrocientas ochenta y cuatro personas.

Pues bien, como digo, estas diez personas, junto con la dirección, están terminando de plantear el ajuste de la empresa por las dos condiciones: por el posible aumento de trabajo y el posible ajuste de personal. Eso será visto en el próximo consejo de administración, y, nada más aprobado con el plan de negocio de la sociedad en el consejo de administración, será comunicado a los sindicatos para comenzar con ellos el proceso de negociación. Y ese próximo consejo de administración yo espero y deseo que se haga antes de que termine este mes, con el fin de que tan pronto como se tenga un planteamiento claro de los presupuestos se pueda empezar a ajustar totalmente y comenzar el proceso negociador, y que ese proceso dure lo que haya de durar, porque la voluntad es que haya un diálogo permanente con transparencia.

Eso es todo lo que he venido diciendo a lo largo del tiempo y es todo lo que puedo repetir. Y yo creo que con esto se responden prácticamente a todas las preguntas que ha hecho.

La decisión del nuevo director general, como de todo lo demás, se ha tomado por carácter exclusivamente personal, sin ninguna connotación política. Habla

de distintos cargos a mantener o no mantener; eso es precisamente lo que va a ser objeto de la negociación, porque, como le he dicho, salvo las diez personas que se aprobaron en el consejo de administración del día 5 de octubre, todo lo demás es lo que está sometido a revisión. Todo lo demás, ese todo lo demás es lo que se va a ver en el próximo consejo y es lo que se va poner a disposición de las centrales sindicales para empezar el diálogo. Lógicamente, con el objetivo, por una parte, de conservar el mayor talento posible que existe en la sociedad, que existe mucho y muy bueno, y al mismo tiempo hacer los ajustes necesarios para que la sociedad, tal como manda la propia ley de medidas urgentes y racionalización, consiga tener una estabilidad presupuestaria, una sostenibilidad financiera y que los ingresos cubran realmente a los gastos. Creo que con esto más o menos le he respondido a todas sus preguntas, si no recuerdo mal.

Con respecto a delegados provinciales, mismos salarios o no..., es lo que va a ser objeto de la negociación, dentro de un planteamiento, como digo, absolutamente riguroso y totalmente transparente.

Y con respecto a lo que dijo la presidenta de garantizar el mérito, ciertamente esa es la línea que estamos siguiendo y esa es la única razón por la que estamos haciendo todo el planteamiento.

Creo que le he respondido con esto a todo cuanto me ha preguntado. Me preguntaba cuándo empieza; ya le digo que va a empezar tan pronto como tenga lugar el próximo consejo, que será dentro de este mes. Y con respecto al cuántos, eso es lo que no le puedo decir, porque eso tiene que aprobarlo el consejo de administración. Con respecto a la urgencia del procedimiento, por supuesto que lo comparto. Estamos haciéndolo con el máximo rigor, nuestra intención es que sea cuanto antes. Ha sido complejo. Ciertamente, esta es la sociedad de mayor número de personas que tiene la corporación, y nos parece que, aunque haya ido un poco más lento de lo que todos deseamos, nuestra intención es que se haga con rigor, y ese rigor lo hemos mantenido desde un principio y lo vamos a mantener en todo momento. Rigor, transparencia y completo diálogo son las tres cuestiones que nos hemos marcado y las tres cuestiones que vamos a llevar hasta el final.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

Señor Aso, puede intervenir por tiempo de cinco minutos.

El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, usted siempre da la razón, y otra cosa es que luego yo creo que hace lo que considera, ¿no?

Cuando un grupo como es el nuestro, o como los aquí presentes en la cámara, ve alguna noticia como la que ha salido en el día de hoy en relación con las posibles responsabilidades penales en la gestión de una empresa y cuando uno trae a colación algunas preguntas, que ciertamente no tienen que ver con esa cuestión, aunque usted es consejero del departamento, y por tanto como hoy no tiene a colación no le voy a preguntar, pero entenderá que cuando uno conoce algunos hechos de estas empresas públicas, que como digo tienen que ver con el departamento anterior, pues uno tenga cierta duda y ganas de que se le aclaren cuestiones que no ha aclarado.

Y, como me quedan cuatro minutos, tampoco los voy a agotar para ver si es posible una mayor concreción.

En primer lugar porque no nos ha dicho nada de cuál es el plan de futuro, qué es lo que quiere que esta empresa sea de mayor, qué proyectos tiene pendientes, qué proyectos espera poder desarrollar más allá de la prevención y extinción de incendios, que esperamos y deseamos que la plantilla no sea solo para extinción de incendios y que suceda, como el año pasado, que se contrató una vez que ardió Castanesa y luego se quitaron antes porque había que ahorrar dinero, y, por tanto, esa es una cuestión. Tienen que trabajar todo el año: ¿qué planes tienen para que eso suceda y, por tanto, cuál es el plan de futuro?

Una pregunta que le he hecho central y me gustaría que respondiese, y por eso yo no voy a utilizar todo mi tiempo, es si es cierto, porque nos parece muy seria esa pregunta y me parece que debe responderla, que hay directivos que no ejercen de directivos, que estaban en las anteriores empresas y que siguen contratados, pese a haber sido despedidos muchos trabajadores o no renovados sus contratos, porque está en tela de juicio la palabra del mismo Gobierno de Aragón. ¿Es cierto, señor consejero, que hay directivos que siguen en la empresa cobrando lo mismo en un nivel inferior? Y, si es cierto, ¿cuántos?

Y, para finalizar, al hilo de las preguntas que le he hecho, pues nos gustaría que nos dijera que cuándo se va a hacer el ERE, pues, evidentemente, usted dice lo de la negociación y que se va a negociar, y nos parece muy bien, a nosotros nos parece extraordinario, pero, claro, hay seis millones que recortar, y cuanto más dure la negociación más habrá que recortar para llegar a los seis millones. Por tanto, ¿cuándo van a empezar y por qué no han empezado antes?, porque ya llevan un tiempo trabajando con esta empresa.

Y, como decía, una última pregunta: si le parece razonable, y si va a tomar alguna medida usted como consejero, que una empresa pública tenga delegados territoriales. Porque, vamos, es que esto no es Estados Unidos, es una comunidad de tres provincias; yo entiendo que no es muy razonable, pero nos parecería oportuno que aclarara ese hecho, si considera oportuno que haya delegados territoriales.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.

El señor consejero puede contestar.

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente, señorías.

Señor Aso, empiezo por decir que le doy la razón siempre. Usted dice que es un asunto importante y urgente, y yo estoy de acuerdo en que es importante y urgente, ¿cómo voy a quitarle la razón en ese aspecto? Se la tengo que dar de todo corazón.

Con respecto al plan de futuro, sí que hay plan de futuro. El plan de futuro justamente consiste, en primer lugar, en hacer que la empresa sea rentable, eficaz-

mente, que mantenga los servicios que está manteniendo en estos momentos, porque no se quita ninguna línea, y que se ocupe fundamentalmente, sin perjuicio de otros, de los incendios y de la recogida de cadáveres. Y ya le anticipo que en estos dos servicios no va a haber ninguna restricción de personal, porque son servicios fundamentales.

Con respecto a lo que me decía de los directivos he empezado por decirle que, salvo las diez personas que están aprobadas por el consejo de administración, todo lo demás es objeto de negociación, tanto en los puestos, en los cargos como en el dinero y como en lo que haga falta, y eso es justamente lo que queremos negociar a partir del momento en que se haga el próximo consejo de administración Más claro no le puedo ser.

Y con respecto al ERE, yo no he pronunciado la palabra ERE en ningún momento; habrá ERE o lo que tenga que haber, pero eso precisamente es lo que hay que negociar con los sindicatos. Lo que nosotros queremos llevar a los sindicatos, y con esto le respondo también, va a ser dentro de este mes, por eso me preguntaba cuándo se va a empezar, ya, dentro de este mes, antes de que acabe este mes, lo que se va a llevar a los sindicatos es el planteamiento global que le estoy diciendo, con todos los matices, con todos los pormenores y con todas las estructuras en las distintas áreas, y lo que salga de esa negociación hará que haya ERE o lo que tenga que haber. Más claro no le puedo hablar.

En cuanto al planteamiento general de si esta empresa, como decía antes, está o no politizada, le voy a decir, y le digo con toda claridad, como le he dicho antes, que no lo está, hay una dirección profesional y la voluntad es que sea profesional. Otra cosa es que dentro de la empresa pueda haber personas de un partido, de otro o de ninguno. Empiezo por decirle que para el director general se buscó una persona independiente, un profesional que procedía de la corporación de empresas y que no estaba adscrito a ningún partido político.

Yo creo que le he respondido con toda claridad, y termino como empecé al principio: tenemos ganas de que sea cuanto antes; lo que pasa es que en cuestiones tan delicadas como esta hemos preferido ir con los pasos contados y, eso sí, haciendo en todo momento lo que había que hacer y diciendo lo que hacíamos.

Por eso, yo creo que hemos cumplido en este aspecto ese mandato que se dice tradicionalmente que debe funcionar en la vida pública, que es decir lo que se va a hacer, hacer lo que se dice y responder de lo que se hace.

Hemos dicho en todo momento lo que íbamos a hacer, hemos hecho y estamos haciendo lo que se dice y, por supuesto, responderemos de lo que vamos a hacer.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.

Pasamos al siguiente punto del orden del día: interpelación número 90, que formula a la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte la diputada señora Pérez, que tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 90/12, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de educación y, en concreto, en la educación desarrollada en el ámbito rural.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías, señora consejera.

Convendremos seguramente ustedes y nosotros, por lo menos en el discurso, en la importancia de la escuela rural, en el papel que tiene además en el conjunto de nuestro territorio por nuestra realidad sociodemográfica y territorial.

Las características demográficas, geográficas, sociales y económicas de los territorios determinan sin duda su modelo educativo y cómo debe de configurarse. Precisamente estas características y estas situaciones concretas de cada comunidad autónoma configuran la escuela rural, y pasa a tener la escuela rural un papel predominante y preponderante por parte de todas las administraciones, por parte de todos los gobiernos para protegerlas.

Estamos en un país con muchísimo territorio, en una comunidad autónoma en concreto, la nuestra, la aragonesa, donde la dispersión es palmaria, donde la despoblación lo es, y, por tanto, la escuela rural juega un papel fundamental para garantizar un modelo educativo equitativo y en el que se puede acceder en igualdad de condiciones, y la escuela rural, y en particular la escuela pública, es quien garantiza realmente esa igualdad de condiciones.

Deben promoverse, pues, desde nuestro punto de vista, una serie de medidas específicas que garanticen esa equidad y la calidad educativa en aquellos municipios que por sus peculiaridades y por sus características de acceso y comunicación, de distribución de población o de condiciones de desarrollo económico así lo demanden.

Hay que recordar que en Aragón tan solo ocho, no, trece creo que son, trece poblaciones en Aragón tienen más de ocho mil habitantes, trece, un dato que yo creo que es fundamental para diseñar, como digo, ese modelo educativo que responda a las necesidades que tienen los ciudadanos y a garantizar ese derecho a la educación.

Por tanto, la escuela rural debe considerarse como un elemento también de cohesión territorial, de equilibrio demográfico y un espacio positivo para la innovación también en la calidad educativa, y de hecho han sido referencias muchos modelos innovadores en la educación, en la escuela rural, objeto de la escuela rural.

Sin embargo, la política de reducción y de recortes de los distintos gobiernos, lejos de promover esas medidas de atención específica, de discriminación positiva para el medio rural, han ahondado en la brecha entre el ámbito rural y el urbano, traduciéndose en una mayor desigualdad en la prestación de los servicios educativos en ambos sentidos.

La aprobación, por un lado, del Real Decreto de racionalización del gasto público, ese maldito real decreto de julio de 2012, que ha atacado gravemente,

gravemente, muchas de las conquistas que se habían alcanzado en la educación y que garantizaban la calidad de la educación, los presupuestos generales del Estado, tanto los del 2012 como los que están presentes en este momento para el año 2013, que suponen un descenso de más de cinco mil setecientos millones de euros en la educación para el conjunto del país, cómo los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que en este presupuesto que estamos debatiendo plantean una reducción del 14% de la educación no universitaria, están promoviendo, a nuestro juicio, desigualdades profundas en las condiciones de acceso y ejercicio del derecho a la educación entre localidades y centros.

Y ¿cuál es la consecuencia o los efectos directos de estas decisiones? La reducción de unidades en centros rurales, que eso lleva implícitamente una reducción y una pérdida de puestos de trabajo, de cierres de escuelas y de la obligación a las familias y a sus hijos a desplazarse de su municipio de origen.

Además de esto, el profesorado, gracias a sus medidas y a sus políticas de revisar absolutamente todo lo anterior, ha visto mermadas sus posibilidades de formación durante este curso escolar, pues se han reducido, diría yo, casi a la inexistencia sus posibilidades de formación continua y actualización profesional, tan importante en el profesorado, pero más, si cabe, en el profesorado del medio rural, que debido a su situación se encuentran en muchos momentos aislados y solos, y que los centros de profesores y recursos, aquellos centros que se crearon precisamente para dotar de un mayor apoyo al profesorado de la escuela rural, han desaparecido por voluntad de su gobierno. Y le haría la siguiente pregunta: ¿qué modelo, qué alternativa ofrece el gobierno, señora Serrat, a la formación para el profesorado de la escuela rural, no solo para la formación, para la ayuda en su quehacer, en el desempeño de su actividad diaria? ¿Qué recursos pone el Gobierno de Aragón al servicio del profesorado de la escuela rural en materia de formación y de actualización profesional?

Las dotaciones de nuevas tecnologías se han reducido también drásticamente. Tenemos que recordar que la escuela 2.0, los *tablets*, un proyecto que fue referente no solo en el conjunto del país sino a nivel mundial, empezó en un pueblo de la provincia de Teruel, en Ariño. Y escuchábamos hace poquito a una alumna que empezó a estudiar en ese sistema y decía que sus capacidades habían aumentado enormemente no solo en el uso sino que había incorporado a su propio proceso de aprendizaje las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que también suponen romper con esa brecha, o con esa barrera territorial que muchas veces tenemos para poder acceder a los municipios.

Por lo tanto, entendemos que es una parte fundamental el apoyo de las nuevas tecnologías por esa parte, y, por otra, para también intentar ir avanzando en la eliminación de los libros, en eso que ustedes han obligado de nuevo a las familias a pagar, y sin embargo entendemos que si se apostara por la digitalización, por la utilización de las nuevas tecnologías, también supondría un ahorro importante. Pero para eso hay que seguir apostando, como digo, por la dotación de nuevas tecnologías en las escuelas rurales. También le pregunto, señora consejera, qué modelo o qué propuesta tiene en concreto para ir avanzando en esta cuestión.

No ha mejorado para nada tampoco la situación de los comedores escolares, otro servicio fundamental y que hacía que los alumnos de un pueblo de cien, de doscientos habitantes, tuvieran los mismos servicios que podía disfrutar un alumno nacido en la ciudad de Zaragoza. La situación del comedor escolar y del transporte escolar, que ya le avanzo que hemos hecho sendas enmiendas para poder avanzar y aumentar su propuesta.

Claro, además de la subida, entendemos exponencial, que ustedes han producido al comedor de manera general del 25%, que le supone cien euros a las familias pagar por el comedor de sus hijos, aquí lo que se está planteando, debido a una instrucción del departamento y de su director general —que además aprovecho para saludar, que lo veo en la tribuna—, bueno, pues exigía que no puede haber déficit en el servicio del comedor; es decir, que debería ser un servicio rentable, algo que en la educación es muy difícil. Y, si me permite, señora consejera, en la educación en el mundo rural mucho más porque, efectivamente, supone un esfuerzo económico importante, una discriminación positiva, un ejercicio de solidaridad que tienen que hacer los grandes con los pequeños.

Por lo tanto, que sea rentable el servicio de comedor es difícil en un municipio. Sabía que se cubría con la colaboración entre el ayuntamiento y la comunidad autónoma; en este caso los ayuntamientos, de verdad, no están como para echar cohetes en la situación económica, y no van a poder cubrir ese déficit. Por lo tanto, la respuesta que se va a dar clara y real es el cierre de los comedores.

La educación infantil ha sufrido otro duro golpe con las políticas del Partido Popular. La educación infantil, me refiero al primer ciclo de cero a tres años, que era otra de las medidas que hacían compatible, que hacían ese equilibrio entre la escuela en el mundo rural y en el ámbito urbano, ha sufrido un nuevo golpe, como digo, además de en las formas, que yo creo que son absolutamente inaceptables, que a final de año se haya producido un recorte de más de un 40% del importe acordado, y que las administraciones habían negociado... Bueno, pues los presupuestos que ustedes presentan este año certifican, evidentemente, la muerte de este proyecto, que consideramos esencial para los alumnos y desde luego para la cohesión y para el equilibrio territorial.

En definitiva, todo esto está propiciando la creación de una doble red de escuela pública, que entendemos que no debemos de permitir, además de un duro revés para muchos municipios que, sin escuela o con una escuela de segunda, están condenados al éxodo de la población joven.

Me gustaría, señora consejera, que respondiera a todas las cuestiones.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.

La señora consejera puede responder por tiempo de diez minutos.

La señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señor presidente.

Señoras y señores diputados, en primer lugar, buenos días.

Señora Pérez, creo que coincidimos plenamente por lo menos en lo que es el análisis o la importancia de la escuela rural y en los esfuerzos que se han hecho y se siguen haciendo en esta comunidad autónoma para mantener una escuela rural de calidad, sabiendo y partiendo de que es difícil dar el mismo trato o dar las mismas condiciones de igualdad a las escuelas del ámbito rural que a las del ámbito urbano. Pero los esfuerzos siguen siendo importantes.

La interpelación preguntaba cuál era la política general del Gobierno y, en concreto en este ámbito, y le tengo que decir que la política general se mueve, como no puede ser de otra manera, en dos coordenadas. Por una parte, la obligación de prestar un servicio educativo que garantice la escolarización de todos los niños, sobre todo los de la etapa obligatoria, pero también al máximo los de la pre y la postobligatoria, y por otra parte promoviendo medidas que garanticen la calidad.

Pero, por otra parte, y la otra coordenada, es la necesidad de garantizar una viabilidad y una sostenibilidad del sistema educativo. Una cuestión que en la actual coyuntura obliga a hacer análisis detallado del funcionamiento de nuestro sistema educativo, de cómo se consumen los recursos económicos y materiales de este sistema educativo y un control estricto de la gestión. Control estricto que empieza en lo que son los servicios centrales del propio departamento, que continúa en las direcciones provinciales y que alcanza a todos los centros, para reducir o, si ustedes prefieren, recortar aquellos gastos o inversiones cuya necesidad no esté claramente demostrada o no sea sustancial para mantener o aumentar la calidad de la educación.

Y es verdad que nos gustaría que los recursos, en lugar de decrecer, crecieran; pero la realidad económica, la realidad actual del país es la que es, y al final tenemos una obligación, que es la de contribuir a esa estabilidad presupuestaria.

Con relación, y en concreto con la política educativa de este gobierno en el ámbito rural, ha sido precisamente la de fomentar y mantener la escuela rural.

Cuando hablamos de ámbito rural podríamos tener ya una primera duda: es decir, de qué estamos hablando, dónde ponemos el límite de ruralidad. Cuando se habla de ámbito rural no es el mismo el concepto que tenemos en nuestra comunidad autónoma que el que tienen otras comunidades autónomas. ¿Qué es ruralidad? ¿Qué es un pueblo? ¿Los de menos de quinientos? ¿Los de menos de mil? ¿Los de menos de dos mil? ¿Los de menos de tres mil? ¿Los de menos de cinco mil? Hay comunidades autónomas que consideran rural los de menos de cinco mil. Si aquí hiciéramos eso, en nuestra comunidad autónoma, estaríamos perdidos.

Pero yo creo que, al margen de definiciones y de conceptos, tenemos claro que hablamos del ámbito rural prácticamente en todos aquellos municipios que no forman parte de lo que son las tres capitales de provincia y poquito más. Usted misma decía que pocos municipios tienen más de ocho mil habitantes. Por lo tanto, ¿cómo se estructura la política educativa en el ámbito rural? Yo creo que sobre tres, cuatro patas. Una, que estaría en relación con las escuelas infantiles —después hablaré, aunque ya tuvimos oportunidad, ya tuve oportunidad de contestarles en una pregunta específica—; otra, las escuelas rurales, aulas rurales y centros rurales agrupados, centros incompletos; por otra parte, lo que es la educación postobligatoria en el ámbito rural para educación secundaria, para bachillerato, para formación profesional, y, por último, podríamos hablar también de la educación de adultos, que también es muy importante en el ámbito rural.

Yo le quería, a partir de eso, dibujar un poco en cifras cuál es el panorama actual y el esfuerzo que se ha seguido haciendo porque, lejos de disminuir, se han aumentado recursos en el ámbito rural, si no económicos al menos de efectivos. Y le explico.

En las escuelas infantiles, en estos momentos, tenemos ciento noventa y cinco escuelas infantiles. Se han inaugurado diez más. Es verdad que han disminuido las aportaciones económicas para el año 2012 a siete millones doscientos ochenta mil euros, y es verdad que hay prevista una disminución de la aportación del Gobierno de Aragón a las escuelas municipales, que ya dijimos y comentamos en el presupuesto que se iba a compensar con las aportaciones que se han hecho a las comarcas con esa triple colaboración.

Esas ciento noventa y cinco escuelas infantiles atienden a cinco mil quinientos alumnos. Si uno hace una simple división, veremos que tenemos una seria complejidad que viene marcada por nuestra distribución poblacional, pero que verdaderamente lleva a que ninguna escuela infantil pueda cerrar sus ejercicios sin déficit, y eso es un problema para los ayuntamientos.

Y me decía usted: «es que los ayuntamientos no están para echar cohetes». Yo me atrevo a decirle que el Gobierno de Aragón tampoco está para echar cohetes, y que estos recortes, estos ajustes presupuestarios, que se han tenido que hacer a mitad de recorrido en el año 2012, vienen marcados por los propios ajustes presupuestarios que se han tenido que hacer en el Gobierno de Aragón.

Y, cuando un tiene que priorizar, y siendo muy importantes las escuelas infantiles, hay que tener en cuenta que estas no son competencia directa del departamento y que, por lo tanto, tenemos que ir a fórmulas de colaboración.

Y lo hemos hecho y lo hemos pedido a las diputaciones provinciales y lo estamos pidiendo y lo vamos a pedir a las comarcas cara al futuro. Pero eso no quiere decir que no sigamos creyendo en las escuelas infantiles; lo que pasa es que hay que tomar decisiones que yo entiendo que siempre son difíciles y siempre impopulares.

Pero vamos al núcleo central de lo que es la formación en el ámbito rural y que tiene lugar, precisamente, en ese modelo que se inició en el año 1987 a raíz del Decreto 2731/1986, que son lo que llamamos los centros rurales agrupados. Usted sabe que antes de esto el modelo normal era el de escuela unitaria. Se intentó para poder, de alguna manera, llevar otro tipo de recursos, recurrir a la especialización, ir a estos centros rurales agrupados.

Un modelo que, como le digo, se inicia en el año 1987; ha llovido mucho desde el año 1987 y eso no quiere decir que pueda ser el modelo único, pero es verdad que es lo que tenemos y que sigue teniendo ventajas.

Y esas ventajas son la mayor y mejor integración con el entorno social y natural, la posibilidad de acercar la escuela y mantener la escuela en el territorio, la posibilidad de esa gestión más flexible del tiempo y recursos.

Pero eso no quiere decir que no tenga inconvenientes, y posiblemente el inconveniente más importante en estos momentos es el de la socialización en este tipo de centros.

En cualquier caso, la apuesta, y creo que ha quedado demostrada en los presupuestos, es mantener los centros rurales agrupados, y este año, como usted conoce, y son datos ya reales del año 2012, tenemos setenta y cuatro centros rurales agrupados, que agrupan ochocientas treinta y siete unidades o aulas rurales y que atienden a nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro alumnos, con una ratio media de 11,5 alumnos.

De estas unidades, este año, doce tienen menos de cinco alumnos y doscientas sesenta y seis tienen menos de diez alumnos. Evidentemente, esos datos nos hacen muy difícil el poder decir que a estos centros llegan los mismos recursos que pueden llegar a centros de mayor tamaño o a centros completos.

Pero en cualquier caso se ha hecho el esfuerzo para garantizar la presencia no solo de los maestros, sino también de los especialistas y, sobre todo, de todos aquellos que tienen que ver con la atención a la diversidad.

Pero, como les decía, en los centros rurales no solo tenemos educación infantil y primaria; tenemos también educación secundaria. ¿Cómo está la oferta en nuestra comunidad autónoma? Pues mire, en estos momentos hay treinta centros públicos en la provincia de Huesca, diecisiete institutos con dos secciones añadidas, ocho CRA que dan formación de secundaria y tres centros de primaria que dan formación de secundaria, para atender a un total de cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho alumnos. Estoy hablando de la provincia de Huesca.

En la provincia de Teruel tenemos doce institutos con una sección, diez CRA y tres centros de educación infantil y primaria que dan educación secundaria para atender a tres mil ciento noventa y dos alumnos.

Y en Zaragoza tenemos treinta centros públicos, veintidós institutos y ocho secciones, que atienden a ocho mil ochenta y siete alumnos.

Estamos en estos momentos haciendo un trabajo detallado, centro a centro y aula a aula, para medir exactamente no solo la ratio media del centro, sino medir la ratio exacta de cada uno de estos centros.

En formación profesional, también para que tengan los datos, en Huesca se está impartiendo en diecisiete centros; seiscientos cuatro alumnos, ciclos formativos de grado medio; trescientos ochenta y dos de grado superior, y ciento diecinueve PCPI.

En Teruel, catorce centros dan formación profesional: tenemos ciento sesenta y cuatro PCPI, tenemos quinientos setenta alumnos en grado medio y doscientos treinta y cinco en grado superior.

Y, en Zaragoza, tenemos formación profesional en *[corte automático del sonido]*... centros, doscientos noventa y cinco alumnos en PCPI, mil ochenta y ocho en grado medio y seiscientos noventa y ocho en grado superior.

Todo eso en el ámbito rural.

No me diga, señora Pérez, que no se está haciendo esfuerzo cuando hemos aumentado ciclos formativos, cuando hemos mantenido los centros en una situación de disminución de los recursos.

El esfuerzo y la apuesta por la escuela rural es importante, y en la segunda parte le contestaré a las otras preguntas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.

La señora Pérez puede contestar: tiene un tiempo de cinco minutos.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presidente.

Señora consejera, efectivamente me he dejado algunos aspectos que son importantes, pero fíjese, como ustedes suelen hacer, hay que priorizar en momentos de extremada dificultad, y es eso por lo que está atravesando la educación en este momento.

Está gravemente atacada y, por tanto, he priorizado en el poquito tiempo que tenemos en esta tribuna para fijar cuál es nuestra máxima preocupación, y es en este momento el mantenimiento y la situación de la escuela rural, que, como digo, garantiza ese derecho a la educación que marca nuestra Constitución y que, desde luego, yo creo que a lo largo de estos últimos años, basado en un modelo de cohesión territorial, habíamos logrado alcanzar y poner al nivel, como mínimo, de una escuela urbana.

Y hablaba de la escuela municipal, de las escuelas municipales infantiles, y decía: «nosotros no estamos para echar cohetes». Yo le decía: «los ayuntamientos no están para echar cohetes», efectivamente, pero sí que se habían comprometido a asumir aquello que habían firmado con el Gobierno de Aragón y que ustedes unilateralmente han decidido no hacerlo; es decir, ellos corrían con su parte; lo que no pueden pedirles es que corran también con la suya; eso es absolutamente injusto e institucionalmente yo creo que ha sido una falta de respeto sin precedentes.

Pero le pregunto: ¿y aquellos que no están comarcalizados? En Zaragoza y su área metropolitana, ¿cómo van a financiarse esas escuelas municipales infantiles, que también existen? Y que además atienden a una proporción enorme de la población aragonesa. Le hago esa pregunta.

En cuanto a la educación permanente, tengo que decirle que, efectivamente, es importantísima, pero, señora consejera, hay que cundir con el ejemplo: ¿tan importante es que para ustedes se ha reducido un 40% el presupuesto para transferir a las corporaciones locales en la ayuda de escuelas de adultos? Esa es la propuesta que ustedes han hecho en este presupuesto que nosotros, por supuesto, también hemos enmendado.

Señora consejera, ¿en qué consiste la reestructuración de los CRA? ¿En qué consiste? ¿Cómo va a afectar a la escuela rural el recorte de ciento nueve millones de euros, la bajada del 14% que ustedes han planteado en el presupuesto del año 2013 para la educación no universitaria? ¿Cómo va a afectar a la escuela rural, que, como usted ha dicho, y casi se ha puesto la venda antes de la herida, es más difícil por la situación, por el alumnado que ocupa, pero también por las dificultades y el mismo derecho que tienen de recibir una educación de calidad gratuita, universal, independien-

temente de dónde se haya nacido? ¿Cómo va a afectar ese recorte, señora consejera?

Porque me decía que tienen aulas con menos de diez alumnos: ¿me quiere decir que están tomando como criterio el cierre de escuelas unitarias por debajo de diez alumnos? Le hago esta pregunta porque ha dicho: «estamos haciendo un estudio», porque, claro, eso supondría la reestructuración de los CRA que ustedes plantean en su memoria, que, por cierto, muchos quedarían prácticamente inviables en su estructura porque quedarían con muy pocas unidades, incluso con una unidad; eliminación de profesorado, no solo de los maestros y de las maestras necesarios para poder atenderlos sino de los especialistas; el cierre de los CRIE, por cierto, un modelo que nació en el año 1986 en la provincia de Teruel, exportado en el conjunto del país y que servía como un elemento de compensación y de socialización de los niños que vivían en sus pueblos aislados y que durante una semana, cada trimestre podían socializarse y compartir experiencias tanto alumnos como profesores con el resto. Ustedes también han atentado contra ese derecho cobrando a las familias, todo lo solucionan pidiendo un esfuerzo a las familias, esfuerzo que deja de hacer la administración, que debe protegerlos en estos momentos de mayor dificultad.

Pero fundamentalmente supondría una pérdida de ocupación del territorio de nuestra comunidad autónoma y de nuestras provincias, porque, señora consejera, la supresión de las escuelas... Claro, si esta medida la acompasan con esa reforma que quieren hacer ustedes de la administración local y plantean también la supresión y la eliminación de ayuntamientos, pues, claro, entiendo... Pero la supresión de las escuelas, igual que pasará con la de los ayuntamientos, supone la eliminación de un referente básico de convivencia y de relaciones sociales en nuestro territorio, y sobre todo de garantía de acceder a los mismos derechos en igualdad de condiciones que creo que debemos de preservar desde los gobiernos y desde las administraciones públicas. Y sería, desde luego, agravar nuevamente más el tema de la desertización humana de nuestro territorio.

Creo que requiere un esfuerzo, creo que las partes deben *[corte automático de sonido]*... sociedad, ya sean personales o territoriales, requieren el esfuerzo y el compromiso de la administración; y eso es lo que le pedimos encarecidamente desde este grupo parlamentario.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.

Señora consejera, puede replicar.

La señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señora Pérez, a mí ya me gustaría poderla tranquilizar y darle respuestas concretas a día de hoy. Lo que sí le puedo decir es que, claro, ustedes por principio se oponen a cualquier cambio en el modelo que ustedes habían planteado y a cualquier ajuste económico porque su única aportación hasta ahora es que todas las partidas las tendría que aumentar.

Y yo le tengo que preguntar que, cuando me dice que aumente una partida, me tendrá que decir de dónde la tengo que reducir, y que sea realmente factible en vía de presupuestos.

Que la escuela rural sigue siendo una prioridad, no tenga la menor duda; que no se vayan a cerrar los CRA, no tenga la menor duda; pero que tenemos que racionalizar las escuelas... ¿Cómo? Lo veremos y lo estamos analizando. No solo pensando en los aspectos económicos, yo creo que pensando también en los aspectos pedagógicos. En estos momentos en las escuelas muy pequeñas, no ahora, desde siempre, hay problemas. Pero hay un elemento que es singular de nuestra comunidad autónoma y son aquellos centros, aquellos CRA y aquellos centros de educación infantil que imparten enseñanzas de educación secundaria. Esto tiene un elevado coste y un bajo resultado académico. Está comprobado que los alumnos de secundaria que permanecen en el CRA o en un centro de primaria durante primero y segundo de secundaria, cuando se incorporan a tercero, tienen un 30% de fracaso escolar superior al de los alumnos que han iniciado su vida en el centro escolar.

Esa es una medida que ya le adelanto que estamos estudiando, pero no por una cuestión económica, que también, sobre todo por una cuestión pedagógica.

En cualquier caso, por eso le he dicho que estamos haciendo un análisis centro a centro en el ámbito rural, lo haremos también en el ámbito urbano; pero, desde luego, eliminación de CRA no, restructuración...

Me decía usted que, claro, hemos mermado las posibilidades de formación del profesorado. No, señora Pérez, lo hemos cambiado. Hemos cambiado el modelo, centrando la formación en los centros. Siendo... Señora Pérez, se conoce en los centros; y hay centros en los que ha empezado a funcionar, y, es más, en este año 2013 yo creo que incluso podremos tener algún recurso más para esa formación del profesorado, que es tan importante. Y eso se enlaza en una de las facetas posiblemente más importantes de formación, al margen de las lenguas extranjeras, que es el uso de las nuevas tecnologías.

De nada sirve que existan los instrumentos en los centros si no está bien la conectividad y si los profesores no saben utilizar las nuevas tecnologías como herramienta pedagógica. No me estoy refiriendo al manejo del ordenador, sino a la nueva pedagogía.

Por otra parte, se está trabajando, pero esto no solo desde la comunidad autónoma —que también—, sino incluso desde el ministerio, en lo que van a ser las nuevas plataformas digitales para la información y la educación. Y en Aragón, la cosa que está funcionando bien, que es referente, que es la plataforma de contenidos digitales del Catedu, que por desgracia es más conocida fuera de la comunidad autónoma que dentro de nuestros propios centros. Y se sigue trabajando en ello.

Propuesta concreta, ya le digo: en estos momentos estamos con el análisis; la voluntad es no cerrar los CRA, pero estudiar todas y cada una de las unidades, porque tenga en cuenta que al alumno que tenemos que desplazar, como usted bien sabe, se le paga el transporte y el comedor; por lo tanto, no hay ahorro económico. Lo que queremos es rentabilizar los recursos humanos para poder mejorar la calidad pedagógica.

No hay ningún cierre previsto porque todo está en estudio y todo está abierto. Y es verdad que hay que hacer ajustes importantes, pero no se engañen: parte de estos ajustes los hemos hecho ya en el año 2012. El presupuesto que ustedes están comparando es el inicial del 2012 con el inicial del 2013, pero en muchas cuestiones hemos conseguido ya un importante ahorro de las inversiones de recursos que creo que nos van a ayudar a que este año las medidas puedan ser más suaves.

Creo que me planteaba... profesorado, formación. Yo creo que nos tienen que dar el margen de confianza para ver el nuevo funcionamiento y el que la formación esté planteada en el centro; y eso no es solo para el ámbito rural, sino también para el ámbito urbano.

Y me decía con el tema de las escuelas infantiles: con el Ayuntamiento de Zaragoza —como en casi todo— se tienen contactos a nivel bilateral. Estudiaremos en qué forma podemos llegar a convenios, que tenemos muchas cosas para compensar. El ayuntamiento de Zaragoza había colaborado hasta este año en el tema de las becas de comedores escolares, y este año no ha colaborado directamente en nada.

El señor PRESIDENTE: Termine ya, señora consejera.

La señora Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Como ese es un tema que tenemos que cambiar, lo iremos analizando.

Yo espero que nos ayude a tranquilizar a la comunidad educativa, no a ponerle más en incertidumbres cuando todavía no hay decisiones tomadas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.

Pasamos al siguiente punto del orden día.

Interpelación número 97/2012, formulada al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, que no veo en el escaño, por la portavoz del grupo parlamentario de Chunta Aragonesista, señora Ibeas, que tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 97/12, sobre la política general del Gobierno de Aragón en relación con los laboratorios de análisis para diagnóstico clínico del Salud.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Me parece un poco fuerte salir a interpelar a la nada.

El señor PRESIDENTE: No sería la primera vez, señora Ibeas.

En este parlamento las cosas se han hecho y lo han ido oyendo desde fuera. No sería la primera vez.

La señora diputada IBEAS VUELTA: No me puede contestar ningún miembro porque...

El señor PRESIDENTE: Lleva menos tiempo que yo en las Cortes, señor Sada. No sería la primera vez. Con un consejero de Industria ocurrió.

Puede salir, señora Ibeas.

[Pausa.]

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor presidente.

Señor consejero, la interpelación que hoy nos ha parecido importante traer aquí a este debate, a un debate de las Cortes de Aragón, tiene que ver con los cambios, con el cambio de modelo del Servicio de Aragonés de Salud, y yo creo que con el cambio de modelo en la sanidad en general.

Nos preocupan mucho algunas derivas que está teniendo la sanidad y sobre todo los servicios públicos; lo que nos preocupa muchísimo es que teniendo como tiene el Servicio Aragonés de Salud una red de laboratorios clínicos de diagnóstico que tiene reconocida la calidad, que tiene reconocida oficialmente una acreditación por la entidad nacional de acreditación, resulta que ahora usted pretende cambiar el modelo, pretende de alguna forma vaciarles de contenido y dejar todo un poco patas arriba, cuando tiene usted abiertas muchas brechas en la sanidad pública, y se lo dije a raíz de la pregunta oral en el Pleno que ya se sustanció hace varias semanas. En este caso, creo sinceramente que no hay razones objetivas para el meneo que usted pretende darle.

El Servicio Aragonés de Salud cuenta, como digo, con una red de laboratorios que trabajó bien y que trabajó mucho para poder tener reconocida esa calidad. Se funciona bien. No ha habido ninguna denuncia, no ha habido ninguna alarma al respecto, no ha habido tampoco ninguna alarma llegada desde la propia entidad nacional advirtiendo que ante malas prácticas se iba a rebajar o a eliminar esa acreditación, y, a través de los medios de comunicación, conocimos su intención de tomar una decisión que afecta a los servicios de bioquímica y de análisis clínicos sobre un proyecto de centralización de los laboratorios en un macrolaboratorio (permítame la expresión) de gestión público privada, de gestión mixta... Nunca se ha aclarado suficientemente bien cómo va a ser, no conocemos el nombre de la empresa que en principio se encargaría. Se supone que tiene que haber un contrato; pero, bueno, ahora estamos en situación de que usted aclare todo lo que tenga que aclarar porque las declaraciones que usted realizó en respuesta a la pregunta que mi grupo le formuló fueron bastante poco precisas.

Nos preocupa sobre todo que ese proyecto de laboratorio centralizado tenga un impacto, porque lo tendrá, en la asistencia a los pacientes, sin duda lo tendrá, porque va a significar alejar la prestación de un servicio necesario de la realidad asistencial, en este caso de la ciudadanía, de personas que ya de por sí tienen que hacer desplazamientos importantes para dirigirse hasta los centros hospitalarios de referencia en el sector sanitario donde están atendidos, y que ahora ya veremos a ver cómo se resuelve ese problema de alejamiento.

Nos preocupa asimismo también el impacto que puede tener y que tendrá en la propia consolidación del Servicio Aragonés de Salud, porque hay hospitales que sin duda se van a ver debilitados, se están sintiendo ya debilitados, simplemente con el anuncio que usted ha planteado públicamente a través de los medios de comunicación y, sobre todo, a raíz ya de los movimientos internos que hay en el propio Servicio Aragonés de Salud, porque se ha demandado información, se está hablando sobre el tema, no se ha contado con

los profesionales que han estado trabajando tan seriamente para conseguir esta calidad en los laboratorios, y es normal que exista un malestar.

Luego, riesgo de ese impacto en la prestación sanitaria a la ciudadanía, riesgo evidente en la debilitación de nuestro propio sistema público de salud, y, si no, que se lo pregunten al Hospital de Barbastro, al Hospital de Calatayud, al Hospital de Alcañiz (ya no sabemos ni qué decir del pobre, cómo puede estar)...

Usted nos aclaró, eso sí, que no tenía intención de suprimirlos, sino de reducir la actividad analítica de estos hospitales, sobre todo de los laboratorios de los hospitales, a una prestación básica de urgencias y a la atención en este caso a las personas que están ingresadas.

Bueno, yo le pregunté muchísimas cosas. Le pregunté: ¿cuántos puestos de trabajo están en juego con este meneo que usted pretende darle a los laboratorios clínicos? ¿Dónde están los problemas en la actualidad, dónde están los problemas actuales que le llevan a usted a tomar una decisión de estas características? ¿Qué es lo que hay que cambiar que no se ha podido cambiar con mejoras en la propia gestión de los laboratorios desde el sistema público de salud? No tuve ninguna respuesta a eso y, si ha revisado las declaraciones que usted formuló en aquella ocasión, entenderá lo que yo le quiero decir, y por eso nos pareció importante poder tener este debate con usted.

Creemos que tenemos y que usted tiene concretamente como gestor demasiados frentes abiertos en la sanidad pública, insisto. Los tiempos de demora en las listas de espera crecen y crecen, y la única solución que usted entiende que es la válida es la externalización o la privatización, es derivar pacientes a la privada. Pero, evidentemente, como no se produce un refuerzo de las plantillas y de los medios del sistema público, pues al final la privatización o la externalización, esa derivación de la prestación sanitaria fuera del Salud es la única medida que estamos viendo. Y que, además, se va a comer al propio sistema público porque ustedes no lo refuerzan sino que le recortan los recursos.

Con la excusa para la externalización ustedes han encontrado la fórmula mágica y es que la sanidad pública está colapsada. Bueno... ¿Usted me quiere decir que los laboratorios en estos momentos están colapsados y que por eso tiene que buscar otra salida fuera? ¿Cuál es la realidad que hay en estos momentos? Porque, insisto, no tenemos datos de problemas de funcionamiento. Quiere centralizarlo en uno solo, quiere centralizarlo en principio en Zaragoza... Pero la única vía que usted ve es finalmente la externalización. ¿Por qué? ¿Por qué la externalización? ¿Por qué vaciar de contenido esos laboratorios? ¿Por qué querer otra vez emprender la vía de la externalización?

¿Qué mejoras concretas está buscando? ¿Qué pasa con la calidad acreditada? ¿Cuál es el coste real —le vuelvo a formular esta pregunta— en el personal? ¿Qué fechas concretas está usted barajando?

Le recuerdo que yo le formulé en nombre de mi grupo parlamentario veintiuna preguntas por escrito para que usted me respondiera a algunas de estas cuestiones. Preguntas desde la 2640/12 hasta la 2660/12, y las respuestas volvieron a ser bastante, bastante vagas.

Es verdad que usted remitía a la existencia del documento sobre las líneas estratégicas del Salud, donde se señala expresamente que puede existir esta propuesta de centralización para evitar... no decía exactamente cómo iba a ser la fórmula, pero sí que querían trabajar en la línea de evitar duplicidades, conseguir mejores resultados en eficiencia y calidad.

Mire, esas son palabras tan huecas hoy día que o nos concreta exactamente dónde están los problemas que quiere resolver, o, si no, mi grupo deducirá o confirmaremos nuestras sospechas de que, bueno, usted prefiere favorecer el negocio privado de alguna empresa a reforzar realmente el sistema del Salud para poder tener la mejor asistencia sanitaria y la mejor prestación.

Usted me respondía a mí, fíjese, hace no demasiado tiempo, el 7 de noviembre, que estaban barajando varias líneas de trabajo, pero al mismo tiempo los medios de comunicación ya daban por sentado esto que yo le estoy poniendo a usted encima de la mesa, luego usted tampoco fue excesivamente franco con mi grupo parlamentario.

En una de ellas dijo del laboratorio centralizado que estaban haciendo un estudio. Pero ¿cuántos estudios tiene usted abiertos, señor consejero, en su departamento? Si tiene estudios, estudios, estudios... Pero, para cuando acaben esos estudios, no me cabe la menor duda de que ya todo estará perfectamente cerrado. Usted está yendo en paralelo con esa dilación en las respuestas que tiene que dar a la oposición con la propia gestión que usted está haciendo, y usted va encaminándose en esa línea.

Usted me decía que estaba valorando qué modelo de gestión podría haber, qué tamaño de laboratorio, la ubicación... Pero si todo el mundo da por sentado ya que es Zaragoza, que va a ser un macro laboratorio unitario y que el modelo de gestión es una gestión mixta.

¿Hay algo diferente de lo que yo le estoy diciendo? Pues explíquenoslo porque creo que es obligado.

Usted está negando, eso sí, en las respuestas que vaya a haber ningún perjuicio a los pacientes por aumento de molestias, niega que vaya a haber ningún cambio con estas medidas, que vaya a haber un retraso, por ejemplo, en la obtención de los resultados... Pero le pregunto concretamente: ¿cómo va a tener la misma calidad asistencial una persona que antes se tenía que desplazar de la Ribagorza o del Alto Gállego o de donde fuera, por ejemplo, al Hospital de Barbastro, y que ahora a lo mejor se va a tener que desplazar a Zaragoza? No es lo mismo. No es lo mismo. Si nos acabamos de desayunar otra vez esta mañana con nuevas medidas de copago, repago, ayer ya salieron ustedes otra vez con el tema del transporte sanitario... No es lo mismo.

Luego, su medida de la eficacia y de la eficiencia, ¿en qué le mejora la calidad de vida a la gente? Porque estamos aquí para hablar de eso: la calidad de vida de la gente. Eso es lo que más nos interesa.

Dice que se mantendrán los análisis de pacientes de urgencias, ingresados, cirugías... Otra pregunta: ¿pero ustedes han pensado, por ejemplo, en los pacientes de hemodiálisis, de oncología ambulatoria, de consultas externas, etcétera? ¿Cómo se va a resolver eso? Y las muestras extraídas —y concluyo— de los pueblos que deben ser trasladadas a Zaragoza, ¿cómo va a garantizar que no se empeore las condiciones en las

que llegarán? Porque, evidentemente, hay un deterioro progresivo en el trayecto...

¿Y me dice que no hay consecuencias negativas? Bueno, creo que ahora tiene usted la obligación de responder a estas y otras cuestiones de las que seguiremos hablando.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.

Señor consejero, puede responder por tiempo de diez minutos.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, señor presidente.

Señora Ibeas, voy a intentar responder creo que a todas las cuestiones que ha planteado.

Pero voy a empezar por lo fundamental. A lo mejor lo tenía que decir al final, pero lo voy a decir ya al principio: una de las cuestiones fundamentales, por no decir la cuestión fundamental que tiene pendiente de solucionar la sanidad y otros ámbitos de actuación del sector público es reducir, y si es posible eliminar, la brecha que hay entre el avance de las nuevas tecnologías, entre el avance en la cualificación de los profesionales a nivel técnico, a nivel médico, y, por otra parte, los modelos de gestión, los modelos de organización y los modelos de estructura.

Dentro del diagnóstico de la sanidad al que usted ha hecho referencia, que dio lugar a las cuatrocientas medidas a las que también usted ha hecho referencia, creo que sabrá que hay una serie de líneas estratégicas que se articulan en base a cuatro ejes.

Hablábamos de un eje de innovación, en el sentido de que hay que superar los viejos patrones de organización; hablamos de un eje de excelencia, en el sentido de que la mejora continua en lo cotidiano es una cuestión que nunca hay que perder de vista; hablamos de un eje de sostenibilidad económico financiera, basada en la eficacia y la eficiencia, por cierto, palabras que no son vacías, tienen detrás medidas y tienen detrás actuaciones, en la línea de conseguir una gestión acorde con los tiempos (eficaz, clara y transparente), y hablamos también de una línea estratégica de adecuación de la estructura, en el sentido de disponer y ordenar los recursos humanos, los técnicos, las infraestructuras, los económicos, los recursos de gestión, los equipos y los sistemas para obtener los mejores resultados posibles en términos de salud.

Pues, bien, este proyecto de centralización de pruebas analíticas cumple con las cuatro líneas que acabo de comentar: con la innovación, con la excelencia, con la sostenibilidad y con la adecuación de la estructura.

¿El modelo? Brevemente le voy a explicar en qué consiste. El modelo consiste —y yo creo que tampoco es malo estudiar y planificar, ustedes creo que pertenecen a una línea ideológica que apuesta por la planificación, y me extraña que critiquen lo que ustedes abogan por bueno, y creo que además siempre hay que planificar para saber por dónde se va— en lo siguiente: el modelo consiste en organizar un laboratorio centralizado como centro de referencia —luego le comentaré qué significa esto— junto con una red de laboratorios periféricos, de forma que en el primero se realizaría la analítica de rutina y la analítica compleja, como tal centro de referencia. Y en los laboratorios periféricos, que son los existentes, se seguirán realizando las analíticas urgentes y aquellas pruebas de rutina que requieran realizarse in situ por cuestiones técnicas, que las hay, y muchas.

Por otra parte, como herramienta para definir o diseñar este modelo, entendemos que por razones de economía de escala y por una cuestión fundamental, que es poder contar en cada momento con la tecnología punta (y esto es fundamental para un proyecto de estas características), es conveniente ir de la mano de la colaboración privada, en este ámbito y en otros.

Lo cual no significa privatizar, porque en todo caso (y esto lo he dicho públicamente y lo vuelvo a decir), garantizaremos que el control de ese formato, de esa fórmula, va a ser siempre del sector público, sea cual sea el modelo que se establezca. Y ya le digo de antemano que hay otras fórmulas que no pasan por esa premisa, pero que en todo caso para mí es una cuestión también fundamental.

¿Por qué vamos hacia este modelo? Pues por una razón fundamental. Ustedes abogan normalmente, cuando hablan de que hay que hacer cosas, de que faltan recursos por la vía de los impuestos; nosotros abogamos por obtener recursos por la vía de la eficiencia: actuando con eficiencia también se liberan recursos. Y esta es una medida que va en la línea de la búsqueda de la eficiencia. Mejora los rendimientos, abaratará (cuestión muy importante) el coste de los reactivos, mejorará el tiempo de respuesta y sin ninguna merma en la calidad.

Me duele mucho, señora Ibeas, no solamente porque usted lo haya planteado sino porque también lo plantean algunos otros mandatarios políticos, por ejemplo, el alcalde de Barbastro habitualmente, que se ponga en duda una cuestión tan sensible como la calidad de las muestras o la calidad de las analíticas, que es una cuestión que va directamente dirigida a la calidad de la atención. Eso, por supuesto, no hace falta que le diga que, si fuera así, si hubiera la menor duda de que esto fuera así, este consejero no apostaría por un proyecto de estas características, y si lo hago es porque tengo muy claro que esta cuestión está totalmente resuelta.

Le digo más, le digo que es un proceso que se debería de haber acometido incluso en época de bonanza, porque esa brecha a la que me he referido al principio está allí desde hace mucho tiempo y, como gestores públicos, los de ahora y los de antes, creo que tenemos la obligación de reducir o eliminar esa brecha.

Que le quede claro que los pacientes no sufren ningún perjuicio, no se van a tener que desplazar a ningún sitio diferente al que se han desplazado hasta ahora, no es verdad lo que usted ha comentado, que le quede muy claro. Las muestras se van a extraer en los mismos sitios donde se extraen ahora. Incluso está previsto —a mí me gustaría y está previsto— que se puedan ampliar los centros de extracción.

Se pueden recibir los resultados en el mismo centro donde los reciben ahora, incluso en menor tiempo en algunos casos del que ahora se tienen los resultados, teniendo en cuenta además que los medios informáticos avanzan rápidamente. Es decir, se garantiza la máxima fluidez y rapidez en la obtención de los resultados y en el traslado de estos resultados al paciente.

El proyecto tiene fundamentalmente dos ejes: por una parte, la concentración de los recursos y, por otra parte, un eje fundamental, que es el control de la red del traslado de muestras, que a usted le preocupa y a mí también, evidentemente, en un proyecto de estas características.

Pero a tal respecto le comento que va a ser un proceso evaluado por la Entidad Nacional de Acreditación, igual que esta entidad evalúa todos los procedimientos desde la extracción de la muestra hasta la obtención del resultado en los laboratorios de nuestros hospitales en estos momentos. Esto significa que se va a garantizar, a través de esta acreditación, a través de la norma ISO15189, la calidad en todo el proceso analítico, desde la extracción hasta la obtención del resultado, pasando por la manipulación, transporte y el procesamiento de la muestra. Que, por cierto, no es asistencia al paciente. El procesamiento de la muestra no es asistencia al paciente. Y hoy, y ayer, y más mañana (y eso lo sabe usted y lo saben los profesionales), este procesamiento se hace con medios cien por cien técnicos.

Esto que le estoy comentando es para mí un requisito fundamental para la creación de este laboratorio centralizado, porque de alguna manera garantiza el núcleo del proyecto, que es la calidad en la prestación del servicio.

Cada hospital va a seguir contando con su laboratorio para dar respuesta inmediata, por supuesto, a necesidades de ese centro o de esa zona. No es verdad lo que se ha dicho de que cuando haya un paciente que esté siendo intervenido se tenga que coger al paciente y trasladarlo a no sé dónde para extraer las muestras. No es verdad. El laboratorio del hospital estará ahí para atender las necesidades urgentes y las necesidades de los ingresados, más lo que he comentado antes: aquellas pruebas para las que haya que realizar la extracción in situ por razones técnicas.

Muchas de las pruebas que ahora mismo se están realizando en laboratorios de otras comunidades autónomas —para lo que, por cierto, parece ser que no hay problemas en los traslados, para otras cosas sí, pero para esto no— se van a poder realizar en el laboratorio centralizado porque va a ser un laboratorio, un centro de referencia con más capacidad, con más potencia de resolución para absorber esa externalización, en este caso esa externalización que estamos haciendo desde la comunidad autónoma de muestras a laboratorios de Madrid, de Barcelona, de Salamanca, de La Coruña, de Sevilla, etcétera. Nos cuestan aproximadamente 1,2 millones de euros al año. Por cierto, derivaciones que hacen los responsables de nuestros laboratorios. Y, ya digo, para estas derivaciones no hay problemas con el transporte de las muestras, parece ser.

Más cuestiones. En muchas ocasiones (y esto creo que también lo sabe y lo saben los profesionales), muchas pruebas, para poder realizarse, precisan de un volumen de muestras determinados. Aumentar la capacidad de procesamiento permite, precisamente, aumentando este volumen, realizar estas muestras y al concentrar los procesos se puede reducir el tiempo de *[corte automático de sonido]*...

Lo fundamental, lo importante es que el paciente no va a notar ninguna diferencia de la situación de hoy y que solo cambia, en algunos casos, el procesamiento de la muestra, no el de la extracción ni el de la obtención de los datos.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Es el turno de la portavoz interpelante, señora Ibeas.

Tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos.

La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, pues entonces, si todo va a seguir igual, usted está poniendo en marcha un proyecto que va a significar duplicaciones y duplicidades de gastos y de pruebas. ¿Dónde está entonces la ganancia? Porque usted mismo se está contradiciendo.

Vamos a ver, usted dice que va a haber una serie de parámetros que son esenciales para el momento actual: eficiencia...; sí son palabra vacías. ¿Por qué es poco eficiente en estos momentos el sistema? No me lo ha respondido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Pero cuestiones concretas. Es que lo único que le estoy pidiendo es esto: mire, esto no funciona y esto tiene que funcionar mejor, y la única forma que vemos es que funcione de esta otra manera. Eso es lo que le estoy pidiendo que me diga. Porque tiene a los nuevos jefes de los laboratorios hospitalarios del Salud, los tiene enfrente. Es que usted está dando pasos enfrente del personal que está resolviendo día a día los problemas con los que se encuentran.

Y luego, a ver, yo no estoy de acuerdo en algunas de las declaraciones que usted realiza, porque decir que los laboratorios, mire usted, como que no tengan nada que ver con los pacientes, como que prácticamente todas las pruebas están robotizadas. Oiga, ¿y qué cree usted que hacen entonces las personas que están trabajando en los laboratorios? Si hay una relación muy importante también con los pacientes, si hay un proceso de información previa incluso, o que es diferente pero complementario a la propia fase analítica, que eso no se puede obviar. Eso se está dando, eso también está en riesgo. Y, si eso está en riesgo, evidentemente, hay un perjuicio, un riesgo de perjuicio para la ciudadanía.

Yo creo sinceramente que ustedes buscan excusas, porque no me ha convencido, no me ha dicho cuántos puestos de trabajo están en juego en estos momentos. Claro, porque dice que lo centraliza, dice que hay eficiencia de recursos, pero al mismo tiempo dice: «no, si se necesita, en los hospitales habrá». ¿Qué? ¿Cuántos puestos de trabajo, señor consejero? ¿Cuántos puestos de trabajo en estos momentos están vinculados a los laboratorios? Primera pregunta.

Segunda. ¿Cuántos de esos puestos de trabajo cree usted que ya no tendrán que estar vinculados a los laboratorios? Y no hablo de plazas estructurales, hablo de puestos de trabajo y de contratos que en estos momentos hay. A mí me da la impresión, a mi grupo nos da la impresión de que usted gestiona la sanidad pública aragonesa como si fuera un negocio, como si fuera un negocio. Y entonces va a buscar ahora la fórmula de que ese negocio pueda ser más rentable. Así es como se ve. Así es como usted actúa, y, desde

luego, es la única forma de poder explicar lo que están diciendo. Y en algunas de las simplificaciones ni voy a entrar; ustedes hablan de eficiencia y nosotros de impuestos. Mire, eso es una simplificación que ahora no tiene ningún sentido. Ustedes se ponen el techo de gasto, los demás nos lo tenemos que comer, y están aquí diciéndole a todo el mundo que es que no hay más dinero. Si no se atreve ni tan siquiera a reclamarlo en Madrid. Si se está comiendo absolutamente todos los recortes que le dice la ministra de turno. Claro que hay una línea ideológica en todo, hay una línea ideológica muy clara en su manera de actuar. Ahorro, no lo acabamos de ver.

Otra pregunta, señor consejero, además de la relacionada con los puestos de trabajo: ¿qué estudio han planteado ustedes sobre el grado de eficiencia existente en el momento actual que les aconseja que tomen otras medidas? ¿Qué estudio hay? Porque además se lo pediré por artículo 12. Porque ahora usted está viendo cómo se puede reconvertir o hacia dónde se puede ir. No. Queremos el estudio previo.

Otra pregunta: ¿qué estudio han encargado, señor consejero, sobre el ahorro económico y burocrático que supondría la realización de, por ejemplo, concursos centralizados para la adquisición de productos y, en concreto, los reactivos, por ejemplo, de los laboratorios?

Otra pregunta: ¿qué estándares de calidad, señor consejero, conoce usted que permitan el envío de muestras no procesadas en trayectos de más de doscientos kilómetros y en tiempos de más de cuatro horas? Bueno.

Tal y como están las cosas, y recogiendo las cuestiones que usted ha dicho —insisto—, creo que están buscando los pretextos para ir adelante, adelante, adelante, y van en esta vía del desmantelamiento del sistema sanitario público. A usted no le gusta oír hablar de desmantelamiento, pero desmantelar es esto, es debilitar el sistema público. Y usted debería ser muy consciente de las importantes inversiones que se han hecho, por ejemplo, recientemente en el hospital y en el laboratorio de Barbastro, incluso aquí también en el Miguel Servet, en el Clínico, etcétera, etcétera. ¿Ya no vale ese dinero, ya no vale?, ¿o qué es lo que pasa? Ese dinero, como lo invirtieron otros gobiernos, ya no lo vamos a tener en cuenta.

Usted habla de transparencia. Transparencia, ¿cuál, qué transparencia? Ya ve, si tenemos que estar siguiéndole la pista a lo que dicen los medios de comunicación. No veo qué quiere usted decir, porque lo de la sostenibilidad, como digo, y la eficiencia, etcétera, todo son palabras, palabras bastante vacías. Lo único que sé, y concluyo, es que tiene a los profesionales muy, muy preocupados y francamente molestos, que la Sociedad Aragonesa de Microbiología Clínica está señalando por activa y por pasiva que cualquier diagnóstico en cualquier enfermedad *[corte automático del sonido]*... necesariamente se tiene que realizar en un laboratorio de microbiología de cada uno de los hospitales para asegurar calidad, por cuestiones económicas, por y para la formación de los especialistas y por la seguridad del personal que trabaja en los laboratorios.

La eficiencia: mire, eso es, insisto, una cuestión de negocio. Usted está hablando solo de negocio. El enfoque científico: me tendrá que demostrar ahora con sus palabras que no se están haciendo las cosas bien en los laboratorios actualmente, y entonces tal vez podríamos hablar. Pero es una pena que usted renuncie a mejorar todo lo que hay que mejorar en el sistema público con los recursos que tiene la sanidad pública aragonesa, con los valiosos profesionales que tenemos en la sanidad pública y, sobre todo, con el compromiso de los poderes públicos, que deberían ir en esa línea, y no en la de prepararle un negocio a alguna empresa que pronto sabremos ya cuál es, porque no voy a decir ahora ningún nombre.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.

Es el turno de dúplica del señor consejero.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.

Señora Ibeas, quiero dejarle claro que la línea que estamos siguiendo, la decisión que hemos adoptado de seguir una línea de trabajo concreta, que tiene que ver, como he comentado antes, con el diagnóstico y con las medidas de sostenibilidad del sistema sanitario aragonés, no tiene que ver nada con malas prácticas de nuestros profesionales. Eso, en ningún momento lo he dicho ni lo diré. Lo cual no quiere decir que lo que haya, no la práctica del día a día de cada uno de nuestros profesionales, sino lo que es el modelo de gestión, no sea mejorable.

Y le voy a decir una cosa: la eficiencia no es un fin —por lo menos para mí no es un fin—: es un medio, y se lo he comentado antes. Ustedes abogan por tener recursos para hacer no sé qué cosas, por ejemplo, aumentando impuestos, aumentando ingresos a partir de las rentas o de los ingresos de los ciudadanos. Yo abogo por obtener o liberar recursos a partir de la eficiencia.

Y no hay recursos ilimitados. Tenemos que buscar en cada ámbito de actuación medidas de eficiencia para liberando recursos poder hacer otras cosas que personas como usted, con buen criterio, eh, demandan que haga la sanidad. Si no hay recursos no se podrán hacer. Si quiere que lo hagamos déjeme por lo menos a mí generar esos recursos a través de medidas de eficiencia, que además no perjudican al paciente —al revés—, no perjudican al paciente. Y para mí, en estos momentos, y mañana sobre todo, el paciente es lo importante. Porque hay otra diferencia entre ustedes y nosotros: ustedes están pensando en el paciente de hoy; yo tengo que pensar en el paciente de hoy y sobre todo en el paciente de mañana. Y de eso ustedes se olvidan. Y estas medidas van fundamentalmente encaminadas a eso, a que mañana a nuestros pacientes se les pueda seguir atendiendo en condiciones, sin minorar la calidad de atención en ninguno de los apartados de prestaciones que perciben o que reciben en estos momentos.

Ha comentado algunas cuestiones que le voy a intentar aclarar. Ha insistido con el tema de desplazamiento de pacientes. Los pacientes no se van a desplazar, los pacientes se van a quedar donde están. Se desplazan las muestras, y para eso, no se preocupe —lo recalco—, se establecerán las mismas medidas

de control que se establecen cuando las muestras de pacientes aragoneses van como van ahora a otros laboratorios muy alejados de nuestra comunidad autónoma. Y que sepa, y que sepa, por si no lo sabe se lo digo, que hay muestras que atraviesan todo el océano Atlántico desde Brasil hasta Madrid, son analizadas y remitidas vía informática al médico brasileño para que al día siguiente le dé el resultado a su paciente, y no hay ningún problema con el traslado de las muestras; y eso lo saben los profesionales aragoneses y españoles. Lo saben perfectamente porque muchos de ellos están colaborando en este tipo de cuestiones.

No quiero decir con esto que en alguna de las cuestiones que están planteando los profesionales no tengan razón, pero que sepan que todas las dudas que ellos plantean nosotros las hemos planteado con antelación, y que no se preocupen porque en el momento adecuado serán llamados a consulta. Serán llamados para informarnos, para asesorarnos, no en el qué sino en algunos aspectos del cómo; porque el qué, la estrategia, la gestión, la decidimos los que en estos momentos tenemos la potestad y competencias para hacerlo. En el cómo es cuando tienen que intervenir las personas que técnicamente conocen la materia. Y eso que le quede muy claro, y lo saben perfectamente nuestros profesionales.

Respecto a los puestos de trabajo. Vuelvo a la brecha: yo no tengo la culpa de que el modelo de la sanidad aragonesa en estos momentos, su estructura, su organización y su gestión, la que hemos heredado, sea la que es. Lo que sí que sé es que los medios técnicos y el conocimiento de los profesionales van muy por delante de estas estructuras, de estos modelos de gestión y de este sistema sanitario que tenemos, no solamente en Aragón, en otras partes de España también.

Creo que es responsabilidad de cualquier gestor, y en estos momentos mía, reducir esa brecha. Si reducir esa brecha, pensando fundamentalmente en el paciente, significa que hay que utilizar medios técnicos para avanzar en eficiencia, para avanzar en calidad, para avanzar en prestaciones y que, como consecuencia de eso, tenemos que redistribuir recursos humanos, yo por supuesto lo voy a hacer.

En estos momentos, le adelanto que no hay ningún estudio detallado hecho sobre las repercusiones en materia laboral. ¿Qué va a haber repercusión laboral? Seguramente la habrá, por lo que estoy comentando. Si hay medios técnicos, no de ahora, de hace años, que han permitido una evolución rapidísima en esta materia, ¿tiene sentido mantener la misma estructura de personal como cuando los análisis se hacían de otra manera? ¿Tiene sentido?

Ni siquiera son necesarias, y lo saben los profesionales, las mismas cualificaciones. Hoy por hoy la analítica la hacen técnicos de laboratorio. El médico está al final del proceso, analizando los análisis. Desde la extracción hasta la obtención de resultados se hace todo con procesos informáticos, procesos técnicos, donde intervienen técnicos de laboratorio. Nuestras plantillas hoy por hoy están conformadas para realizar análisis como los hacían veinte años, y ese es el problema, y mi labor y mi responsabilidad como gestor es reducir esa brecha que he comentado antes y solucionar este problema, por el bien de los pacientes aragoneses de mañana.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Siguiente punto: interpelación número 105, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de discapacidad, formulada al consejero de Bienestar Social y Familia por la diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida señora Luquin.

Señora Luquin, tiene diez minutos para la exposición de su interpelación.

Interpelación núm. 105/12, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de discapacidad.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, señorías, buenos días.

Izquierda Unida trae a este pleno una interpelación para hablar de cuál es la política general del Gobierno de Aragón en materia de discapacidad, pero, concretamente, además o muy especialmente, todo lo relacionado con la discapacidad intelectual y la parálisis cerebral.

Porque necesitamos, y sobre todo aquellas personas que llevan trabajando muchísimo tiempo con personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral, necesitan certezas, necesitan certezas, necesitan tranquilidad y saber que el Gobierno de Aragón, entre sus prioridades, desde luego, desde el Departamento de Sanidad, Servicios Sociales, Bienestar Social y Familia los tiene absolutamente en su agenda política, porque la sensación que se tiene es que desde luego no están en la agenda política del Gobierno de Aragón ni del gobierno central.

Y lo digo porque ustedes son plenamente conscientes, porque se les ha dicho por activa y por pasiva las reivindicaciones múltiples y variadas y las necesidades que están puestas encima de la mesa, y porque en este primer fin de semana de diciembre hubo una movilización histórica, por primera vez en la historia, todas la asociaciones de discapacidad en España fueron a Madrid a manifestarse por la preocupación que tienen en estos momentos ante los recortes en ayudas, en subvenciones y ante la preocupación de cómo se está tratando la discapacidad por parte del Gobierno central y, en el caso de Aragón, por cómo se está tratando por parte del Partido Popular y del Partido Aragonés en todo lo relacionado con políticas que vayan encaminadas a la integración y al desarrollo total de todas las personas, y, cuando se habla de todas las personas, están incluidas aquellas personas que tienen discapacidad.

Hoy por la mañana venía escuchando a Peter Finn: Peter Finn es un profesional, un analista de comunicación estadounidense, que decía que a los votantes o a los ciudadanos no les importaba quién había generado el problema, sino que querían saber si usted era la persona que lo iba a solucionar. En este caso se lo digo a usted, al señor Oliván, si es usted aquella persona que va a poder solucionar y garantizar los problemas, que son muchos, son muchos en estos momentos, que tienen las personas con discapacidad.

Le voy a hacer un repaso rápido sobre el marco legislativo porque a veces tenemos la sensación de que cuando se habla de derechos en esta cámara, parece que los derechos se conviertan en favores, y los favores se dan o no se dan, y los derechos se ejercen, y los poderes públicos tienen la obligación de garantizarlos y de remover cualquier tipo de obstáculo para garantizarlos.

Por lo tanto, de lo que estamos hablando y de lo que voy a hablar aquí hoy es de derechos, de derechos reconocidos por ley, de derechos que reconocen prestaciones y de derechos que en estos momentos no se están garantizando y es una obligación de los poderes públicos.

Lo digo porque el artículo 9.2 de la Constitución deja claro que son los poderes públicos los encargados de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas y, por lo tanto, es obligación de esos poderes públicos poner todas las herramientas encima de la mesa para poderlo garantizar.

Pero se lo digo a usted porque la competencia del Gobierno de Aragón, el Estatuto en su artículo 71, en el punto 34, deja claro que la acción social es exclusiva de este gobierno y comprende la organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda, entre otras, a las personas con discapacidad.

Hemos hablado de la Ley de Servicios Sociales, una Ley de Servicios Sociales que fue absolutamente reivindicada, demandada, que se aprobó con muchísimo consenso y que en su artículo reconoce derechos, derechos subjetivos, es decir, que si la Administración no los da puedan ser reclamables por vía judicial.

Y de eso están hablando las asociaciones y las personas con discapacidad: que puedan ejercer sus derechos y que puedan tener acceso a las prestaciones que les corresponde.

En estos momentos, le voy a hablar de cuatro temas que creo que importan y que, desde luego, están encima de la mesa, porque usted es plenamente consciente, por parte de las organizaciones que llevan los temas de discapacidad intelectual y de parálisis cerebral en esta comunidad autónoma, que han dejado claro y que quieren tener soluciones y, por lo tanto, le voy a hacer preguntas concretas desarrolladas con todo lo relacionado con los precios públicos y los compromisos de pago, con los centros especiales de empleo, con el copago en las plazas y con la creación o no creación de plazas en residencias.

Estamos hablando de derechos de discapacidad, de derechos de discapacidad, que ha costado mucho, que quedaba mucho trabajo por recorrer, pero es verdad que se había ido avanzando, y se había ido avanzando de forma conjunta por parte de la Administración, por parte de las asociaciones y las entidades que llevan trabajando muchísimo tiempo con las personas con discapacidad y, por supuesto, con ellas.

Y lo que cuesta mucho conquistar, lo que cuesta mucho tener encima de la mesa, cuesta muy, muy poco que pueda desaparecer y retroceder. Y lo que desaparece y lo que está retrocediendo en derechos es prácticamente irrecuperable.

Por lo tanto, es entendible en estos momentos la preocupación que tienen todas las personas que en estos momentos ven cómo ustedes los están asfixiando económicamente. Las ayudas económicas, el recorte en subvenciones para las entidades que trabajan en programas de discapacidad son drásticas y brutales, tan drásticas y tan brutales como que están poniendo en peligro que algunas de esas asociaciones puedan seguir desarrollando las labores que están desarrollando en estos momentos.

Y se lo he dicho muchas veces y se lo vuelvo a decir hoy: entidades y asociaciones que desarrollan una labor no solo fundamental, sino exclusiva, porque si no la hacen ellas no la hace nadie. ¿Qué alternativa da usted a todas estas personas con discapacidad en el caso de que esas entidades no puedan seguir prestando, prestando, la asistencia y los servicios que en la actualidad están haciendo?

Porque la opción es una opción muy dura, la opción es una opción muy dura, que es ¿volverlos a mandar a casa como hace cuarenta o cincuenta años? Eso es absolutamente grave, es lo que hemos conseguido poder avanzar y poder trabajar.

Por lo tanto, ¿qué alternativas da si usted no piensa garantizar con dinero suficiente a esas entidades que puedan seguir trabajando como lo estaban haciendo al menos hasta ahora? Porque no solo es la reducción drástica en las ayudas y las subvenciones sino también en cómo suelen a veces poder cobrar esas ayudas o esas subvenciones.

Por lo tanto, le pongo encima de la mesa: ¿hay un compromiso por parte de este gobierno para que en tiempo y en forma se vaya a poder pagar a estas asociaciones y entidades sociales sabiendo la tensión en tesorería que supone y los desajustes que supone en tesorería esperar determinado dinero para poder hacer frente a las prestaciones, para poder hacer frente a los trabajadores que hacen un trabajo ímprobo también para poder trabajar con las personas discapacitadas, para poder cobrar en tiempo y forma?

Porque la sensación de vulnerabilidad que tienen es absoluta. Por lo tanto, me gustaría que hoy aquí hubiera un compromiso claro y certero por parte del Gobierno de Aragón y, en su caso, por parte del consejero, de que se va a garantizar, que se van a cobrar todas las ayudas y las subvenciones en tiempo y en forma.

Hay otro tema del que usted es plenamente consciente con los precios públicos desde el 2008; lo que ha pasado es que se han ido disparando los costes, y en estos momentos lo que hay es un gran desnivel, un desajuste entre los precios públicos. ¿Hay algún tipo de iniciativa o medida por parte del departamento para poder equilibrar ese desajuste que hay en estos momentos con los precios públicos? Teniendo en cuenta, como digo, que desde el 2008 lo que se han disparado han sido los costes, pero se han congelado los precios públicos. También me gustaría que usted lo pudiera contestar.

Me voy a centrar de forma un poco más concreta en lo que hace referencia a los centros especiales de empleo, porque yo creo que es una de las piezas angulares y desde luego una de las cosas que más preocupan en estos momentos.

Hay datos que han salido de la encuesta de población activa, de la base estatal de personas con dis-

capacidad correspondientes al 2011 que dicen algo que ya sabemos, pero que está bien que lo pongamos encima de la mesa, y es que hay personas con discapacidad ocupadas en el 2011, eran en todo el Estado trescientas treinta y siete mil trescientas personas. La tasa de empleo es del 26,7%, es decir, treinta puntos inferior a la media, que supone en estos momentos de crisis que va aumentando.

Por tanto, los centros especiales de empleo no solo son fundamentales y necesarios, sino que son prioritarios, porque usted es plenamente consciente de que este sector que es especialmente vulnerable, donde puede tener cierta lógica, donde pueden estar en estos momentos apoyados por parte de las ayudas y de la administración pública, pudiendo desarrollar un trabajo, es en los centros especiales de empleo. Y en estos momentos, si la crisis golpea de forma brutal a cualquier persona, a las personas con discapacidad intelectual y a aquellas personas, ya no vamos a hablar de con parálisis cerebral, hace prácticamente inviable que, si no trabajan en centros especiales de empleo, puedan trabajar en ningún sitio.

En estos momentos me gustaría también que usted asumiera el compromiso de garantizar que va a haber recursos económicos suficientes para que estos centros especiales de empleo puedan seguir dando trabajo y puedan seguir garantizando a miles de personas —en el caso de Aragón más de mil personas— que van a poder seguir trabajando, porque para estas personas el trabajo es algo más que ir al trabajo; significa una forma de desarrollo, una forma de integración; por lo tanto, significa poder integrarse de forma más plena en *[corte automático de sonido]*… la cantidad de contratos públicos que se están registrando estos tipos de centros y todas aquellas que suponen en estos momentos de pérdida de personal, ¿la administración va a liderar y va a garantizar que estos centros especiales de empleo siguen realizando el trabajo fundamental y prioritario que supone para personas con discapacidad intelectual para poder desarrollarse íntegramente, o desarrollarse de forma integra, en la sociedad?

Necesitaré el turno de réplica porque yo creo que es importante, la necesidad de hablar del copago en estos momentos, del copago de los servicios, lo haré en la siguiente parte, con las aportaciones que vienen haciendo las familias entre el 25% y el 30% del valor de la plaza, con estas nuevas modificaciones y reales decretos que van a hacer que muchas personas...

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Debe ir terminado, señora Luquin.

La señora diputada LUQUÍN CABELLO: Voy terminado ya.

... que tienen problemas económicos, que no vayan a poder acceder a este tipo de plazas, y desde luego el aumento... Lo haré en el siguiente turno porque realmente es un tema que tiene muchos flancos, que tiene muchos flecos y, sobre todo, tiene muchas dudas por parte de las personas y de las entidades que trabajan con la discapacidad, y me gustaría que aquí hoy salieran con un compromiso certero, claro, por parte del Gobierno de Aragón.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.

Señor consejero, es su turno de respuesta.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.

Señora Luquin, antes de responderle a lo que parece ser que no estamos haciendo, ya que la pregunta tenía que ver con la política general del gobierno en materia de discapacidad, en concreto discapacidad intelectual, le voy a decir lo que estamos haciendo porque parece ser que no hacemos nada.

Voy a ser muy rápido, voy a enumerar brevemente algunas acciones, algunas medidas, algunos instrumentos que el gobierno tiene en esta materia. En algunos casos incluso se lo cuantificaré.

Por ejemplo, becas para la atención en los centros de servicios sociales especializados para personas discapacitadas. Incluye prestaciones económicas, indirectas, para personas concretas, para sufragar los gastos que supone la atención de estas personas en dichos centros. Que sepa que la nómina de diciembre por este concepto han sido diez mil euros o van a ser diez mil euros.

Pensiones no contributivas por invalidez: son prestaciones, evidentemente, de seguridad social, pero que gestiona el IAS. La nómina de diciembre son veintisiete mil euros.

En el marco de la Ley de integración social para las personas con discapacidad, la famosa LISMI, hay una serie de prestaciones en materia de garantía en esos mínimos, de ayudas para tercera persona, para gastos de transporte, incluso para asistencia sanitaria, prestación farmacéutica... La nómina de diciembre son novecientos sesenta y cinco mil euros, también de ámbito estatal, pero gestionado por el IAS.

Ayudas individuales para personas con discapacidad y personas en situación de dependencia. El presupuesto para este ejercicio son doscientos cincuenta mil euros.

Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos para prevención de situación de dependencia y promoción de la autonomía personal, para entidades sin ánimo de lucro, en la orden del veintidós de junio se publicó la convocatoria de subvenciones con un presupuesto de 1,7 millones de euros.

Contrato de atención temprana, 3,3 millones de euros dentro del programa de atención temprana dirigido a menores de cero a seis años.

Tramitación preferente de los PIA (programas individualizados de atención) para menores de seis años. Cuestión que acabamos de poner en marcha hace un mes, aproximadamente, que supone favorecer a treinta y nueve menores de esta comunidad autónoma, que sufren graves limitaciones psíquicas y físicas. Entendemos que de alguna manera hay que priorizar en el ámbito de la dependencia. Afecta, como digo, a treinta y nueve menores de nuestra comunidad autónoma y ha supuesto un desembolso de diecisiete mil euros en la nómina de noviembre.

Plazas en centros residenciales, plazas de discapacidad. Tenemos las del acuerdo marco y la red de centros propios. Red de centros propios con doscientos treinta y dos plazas, y un acuerdo marco suscrito en el año 2011, en el que se ofertan dos mil seiscientas

plazas en Zaragoza, ochocientas una en Huesca y trescientas siete en Teruel.

Luego está la actuación de los centros de base, atención para personas discapacitadas en Zaragoza, Huesca y Teruel, en el ámbito de la valoración y orientación para las personas con discapacidad, que atienden aproximadamente doce mil consultas al año.

Por otra parte, estamos trabajando con el Inaem el reforzamiento de acciones de empleo, intentando coordinar acciones tanto en materia en centros especiales de empleo como de inserción laboral. Asimismo, con función pública se ha establecido un sistema de coordinación para inserción de personas con discapacidad intelectual, fundamentalmente dirigido a puestos de trabajo de ordenanzas y de limpiezas.

Está también, y usted lo sabe, la tarjeta de discapacidad para facilitar la accesibilidad y la comodidad; y también las guías de recursos para la discapacidad, que en este año se publicaron diez mil ejemplares, aparte de encontrarse colgadas en la página web del departamento.

Pretendemos, cuando los recursos nos lo permitan, ampliar la atención temprana, una atención post-temprana para chavales de seis a dieciocho años con unos procedimientos, con una metodología similar, pero en el cuadro evidentemente de las circunstancias de las personas con estas edades.

Tengo que nombrar también el plan de salud mental en cuanto a juvenil (de cero a dieciocho años), que ha sido un ejemplo de coordinación interinstitucional e intersectorial, con la participación de todos agentes que trabajan en nuestra comunidad autónoma en esa cuestión, y que se va a poner en marcha en breves fechas.

Y, por último, lo quiero señalar, porque me ha llamado la atención una cosa que ha comentado... Como que no está en nuestras agendas este tema. Le quiero recordar que no hace ni siquiera dos meses se suscribió un acuerdo entre el Gobierno de Aragón y las plataformas de la discapacidad para la utilización y sostenibilidad de entidades sociales y de sus actividades a través de medidas de empleo y asistenciales, que incluyen: materia de adjudicación de plazas asistenciales, créditos presupuestarios de acción concertada, apoyo a centros de empleo, régimen de pago a entidades, desarrollo del catálogo de servicios sociales y la creación de una mesa sectorial de la discapacidad.

Si lo han suscrito las plataformas que reúnen al cien por cien las entidades de la discapacidad de nuestra comunidad autónoma será porque están de acuerdo con la política que el gobierno está siguiendo en esta materia, aun siendo conscientes de que las limitaciones económicas nos impiden analizar más actuaciones de las que nos gustaría.

En cuanto a cuestiones generales, estamos en estos momentos trabajando intensamente en el marco de la mesa de la discapacidad con las entidades que representan a los colectivos de la discapacidad en unas cuestiones que usted ha apuntado que en mi opinión son fundamentales para solucionar a corto, medio y largo plazo el problema de este colectivo.

Son fundamentalmente tres. Por una parte, en el marco de la adecuación de la Ley de Dependencia a nuestra comunidad autónoma, todo lo concerniente a trasladar prestaciones económicas en el entorno familiar a servicios, cuestión, como usted bien sabe, largamente demandada por estos colectivos.

En segundo lugar, y una cuestión que ya se ha puesto sobre la mesa en estas reuniones, que tienen un carácter técnico, por comisiones, y luego un carácter más institucional, en otras comisiones, otra cuestión fundamental, la que usted ha señalado, la del copago. Ahí queremos analizar, primero, el impacto del copado en los diferentes colectivos de la discapacidad, sobre todo psíquica, y posibles medidas compensatorias para, aplicando la normativa, cuestión a la que estamos obligados, intentar que el efecto sobre los discapacitados no sea excesivo.

Y, en tercer lugar, la tercera cuestión a la que usted ha aludido y que ya le he comentado mientras nos cruzábamos que no es mi competencia, pero le voy a responder, es la materia de centros especiales de empleo. Y ahí le voy a comentar lo siguiente: ahí hay dos cuestiones: por una parte la cuestión económica, fundamentalmente la reducción del 75% al 50% de la aportación de la administraciones por plaza, cuestión, por cierto, no aprobada por nuestro gobierno sino que se deriva de medidas del gobierno anterior, y que soy consciente de que supone un impacto importante en estas entidades.

Pero, por otra parte, le digo otra cosa: los centros especiales de empleo no dejan de ser empresas, donde trabajan personas especiales, eso es cierto, pero como empresas, apoyadas por la administración, tienen que buscar su puesto, su lugar en el mercado, y allí tiene que estar la administración, y va a estar para reorientar en la medida de lo conveniente, de lo necesario, estos centros hacia actividades, que hoy, en el año 2013, tengan sentido de mercado. Creo que será una buena forma de garantizar la pervivencia de estos centros y, en consecuencia, la atención a las personas con discapacidad que están trabajando en ellos.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Su turno de dúplica, señora Luquin. Tiene cinco minutos.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, le he hecho la primera pregunta que había escuchado esta mañana… Al ciudadano, y en este caso a las personas con discapacidad, les importa poco quién o no quién generó el problema sino si usted es el que va a solucionarlo, y usted hoy en parte de su intervención me ha dicho el dinero, la cantidad de dinero que ponen encima de la mesa, y le vuelvo a hacer las mismas preguntas: ¿cree usted que eso es suficiente? ¿Por qué piensa que el primer fin de semana en diciembre todo el mundo de la discapacidad estuvo movilizándose en Madrid? ¿Es que ustedes hacen muchas y las suficientes cosas y tienen un problema de comunicación para poderlo trasladar? Realmente la gente se moviliza porque está muy preocupada, se moviliza porque está muy preocupada, muy preocupada por los recortes, muy preocupada por la política que se está llevando en materia de discapacidad, esa es la realidad.

Aquí tiene usted, y es plenamente consciente, el observatorio para la discapacidad intelectual y parálisis cerebral, con ocho organizaciones que llevan una trayectoria larguísima, que conocen perfectamente el mundo de la discapacidad intelectual y de parálisis cerebral porque conviven con ella al día a día y representan más del ochenta por ciento de las personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral en esta comunidad autónoma.

Estamos hablando de siete mil personas, que están preocupadas por la política de su departamento y preocupadas por el nivel de recortes en las ayudas y en las subvenciones. Le vuelvo a hacer la pregunta: ¿se compromete usted aquí a incrementar ayudas y subvenciones para los programas de discapacidad de manera suficiente para poder garantizar que puedan seguir desarrollando el trabajo y las prestaciones que están haciendo?

Usted sabe que con lo que tienen consignado en el presupuesto en el 2013 es claramente insuficiente, claramente insuficiente; por lo tanto, ¿hay un compromiso de aumentar esas ayudas para esas entidades, sí o no? Porque si es «no», posiblemente algunas de ellas tengan problemas para poder seguir subsistiendo, e, insisto, si no desarrollan ellos el trabajo y la labor que están haciendo, no la hace absolutamente nadie, no la hace la administración pública.

Por lo tanto, ¿qué alternativas pone usted encima de la mesa? Porque no puede ser que usted reduzca el dinero, que se las apañen, si no se apañan se cierran; entonces ¿qué hacemos con las personas con discapacidad intelectual y con parálisis cerebral en esta comunidad autónoma? A casa no les vamos a volver a llevar, nos ha costado cincuenta años normalizar y que estuvieran fuera. No se puede retroceder, los derechos cuesta mucho conquistarlos y cuesta muy poquito perderlos.

Y le vuelvo a insistir: los derechos son derechos, ni beneficencia ni caridad ni favores, porque los derechos y las prestaciones que se están exigiendo vienen reconocidos por la ley.

Le vuelvo a poner encima la Ley de Dependencia: usted es plenamente consciente de que con los reales decretos que han aprobado y con la asfixia económica, solo hay que ver los presupuestos, lo que está consignado en materia de dependencia, no es que sean manifiestamente mejorables: es que es absolutamente insuficiente en estos momentos.

Y vuelven a insistir en que lo que tiene que ser subsidiario es la prestación económica frente a la prestación de servicios sociales, que sabe que nosotros hemos defendido siempre la necesidad de una red potente de servicios públicos y de servicios sociales.

Pero es que en este momento no hay ni una cosa ni la otra, ni la una ni la otra, porque ¿con qué inversión económica, con qué recursos usted va a garantizar esa red de servicios que insiste tanto que está usted mirando? Porque eso es lo importante, y esa es la pregunta que usted tiene que responder, que no lo hace.

Porque ahora va a resultar que se les va a quitar la prestación económica, pero la prestación del servicio tampoco la van a tener. ¿Qué alternativa real pone encima de la mesa? Porque a mí me preocupan también las personas con discapacidad, las del futuro muchísimo, pero desde luego las del presente, que las tengo aquí y ahora y necesitan soluciones y en estos momentos no tienen.

Por último, con el tema del copago. Usted es plenamente consciente lo que está suponiendo otra vez más el penalizar a estos sectores vulnerables. Hablamos del coste de las plazas, estamos hablando de transporte urgente no sanitario que tenemos que ponerlo encima de la mesa, estamos hablando de prótesis, estamos hablando de un nivel de costes que hace muy, muy preocupante que, si no paralizan el decreto que pusieron encima de la mesa, muchas personas no vayan a poder acudir, no vayan a poder acudir a determinados servicios, no vayan a poder tener determinadas prestaciones porque no tienen recursos suficientes, recursos suficientes.

Por lo tanto, le pido que paralice —dice usted siempre dentro del cumplimiento de le ley porque siempre dentro del cumplimiento de la ley hace, en estos momentos, que sea inviable para muchas personas el poder seguir manteniendo, no tener recursos económicos suficientes para pagar el coste de lo que supone lo que le he puesto encima de la mesa—, le preguntaría si ustedes han valorado la posibilidad de paralizar la aplicación del nuevo copago establecido en la resolución de la Secretaría de Estado Servicios Sociales de Igualdad del 3 de julio de 2012, porque eso serían gestos...

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Debe ir terminando, señora Luquin.

La señora diputada LUQUIN CABELLO: Voy terminando ya, señora presidenta, un momentito.

… Porque eso serían gestos reales de que ustedes se toman en serio las políticas en materia de discapacidad intelectual y de parálisis cerebral.

Yo no digo que usted no lo tenga en la agenda, yo lo que digo es si es suficiente, y es claramente insuficiente, porque tienen ustedes a las entidades, a los profesionales y a los usuarios movilizándose porque están realmente preocupados por las políticas que ustedes llevan entre manos en materia de discapacidad intelectual y de parálisis cerebral.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.

Señor consejero, es su turno para la dúplica. Tiene cinco minutos.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.

Mire, señora Luquin, lo que le voy a decir creo que va a dejar meridianamente clara la voluntad de este gobierno por solucionar este problema y la importancia que tiene este tema para este gobierno.

Si un tema ha supuesto más dedicación de horas y la intervención de más consejeros, si hay un tema que ha supuesto dedicación de horas y más intervención de consejeros, ha sido este.

Aquí están los tres consejeros, junto con el que le habla, que están actuando de manera decidida para solucionar este problema: consejero de Economía, competente en materia de asuntos de empleo; consejero de Hacienda, competente, evidentemente, del tema económico, y el consejero de Presidencia que, aun no

siendo su responsabilidad, también ha asumido su labor en este asunto, más el que les habla. Lo cual creo que indica la importancia que este tema tiene para este gobierno, y por supuesto la presidenta, que es la que ha organizado y ha ordenado esta labor.

Creo que con eso le queda suficientemente clara la importancia que tiene el tema para este gobierno, y de esto pueden dar fe las personas que representan a la discapacidad, tanto las del observatorio como las que no pertenecen al observatorio, tanto las de Cermi como las que estando en Cermi no se encuentran cómodas del todo en Cermi, y creo que me entiende.

La política del gobierno en esta materia se la voy a resumir. Creo que la he expuesto anteriormente, pero se la voy a resumir. Es muy sencilla: por una parte continuar, con las limitaciones económicas, efectivamente, que hacen que tengamos un presupuesto que no es suficiente, porque para esto nunca hay suficiente presupuesto, y hay que decirlo así, nunca es suficiente, serían necesarios muchos más recursos para responder a todas las necesidades de estos colectivos... La política pasa por mantener las prestaciones, las subvenciones, las ayudas, las concertaciones y, por supuesto, los centros propios, dentro del límite presupuestario que acabo de comentar.

La política de este gobierno en esta materia pasa por mantener un diálogo permanentemente abierto con estos colectivos, hayan suscrito o no hayan suscrito el convenio que antes he comentado. Dentro del convenio está la mesa de discapacidad, donde hay un diálogo permanente a nivel técnico y a nivel institucional, con muy buenos resultados y con tres objetivos que antes he comentado: servicios de dependencia, solución al problema del copago, que a usted le preocupa y a mí también, pero no el copago de transporte sanitario, del que ya hablaremos en su momento, hablo del copago en Servicios Sociales, y el tema de centros especiales de empleo.

Y otra cuestión importante: dentro de nuestra política está unir de una vez definitiva al sector de la discapacidad en esta comunidad autónoma. Uno de los problemas con los que mi administración se enfrenta y con los que se enfrentó la administración anterior es la desunión que hay en el colectivo de la discapacidad, y a esto voy a dedicar y estoy dedicando mucho tiempo, porque entiendo que es fundamental para conseguir, con las limitaciones que tenemos, los objetivos que creo que a las dos partes, al colectivo de discapacidad, al gobierno y, en definitiva, a los ciudadanos nos preocupan.

Esto es fundamental, porque, habiendo pocos recursos, si hay desunión, estos pocos recursos no se utilizan de manera eficiente. De eso son conscientes los colectivos, tengo que decir que está habiendo un esfuerzo por parte de todos para alcanzar esta unión, y yo no reblaré en mi esfuerzo hasta que esto lo consiga, porque por esto pasa la consecución de los objetivos que he comentado antes, dentro de la política de mi gobierno en esta materia.

Y recalco lo que he dicho: si hay un tema al que este gobierno dedica tiempo y dedica consejeros, es este.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Siguiente punto del orden del día: interpelación número 111, relativa a la racionalización del empleo público, formulada al consejero de Hacienda y Administración Pública por la diputada del Grupo Parlamentario Socialista señora Fernández Abadía.

Señora Fernández, tiene diez minutos para exponer su interpelación.

Interpelación núm. 111/12, relativa a la racionalización del empleo público.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor consejero de Hacienda, una vez más, el Grupo Socialista le quiere interpelar en relación con los recursos humanos de la administración pública.

Hemos hablado en mucha ocasiones de la constante agresión que el gobierno del Partido Popular realiza a los empleados públicos; vimos ya las medidas adoptadas por Rajoy donde se les retiraba la paga extraordinaria de diciembre, que es salario, evidentemente, y donde se les suprimían una serie de derechos; eso, como digo, ya lo hemos debatido en otras ocasiones. Hoy mi pregunta va dirigida a cómo está usted gestionando los recursos humanos dentro de la comunidad autónoma, a qué está haciendo en relación con la racionalización el empleo público.

Porque en los últimos tiempos hemos visto que hay despidos de personal laboral, despidos de interinos, que hay amortizaciones de plazas, a la vez que se crean otras, y que hay, desde nuestro punto de vista, una excesiva concesión de comisiones de servicio, y consideramos que todo esto afecta a la carrera profesional, afecta a la estabilidad de los empleados públicos aragoneses, y lo que afecta a las personas que prestan los servicios públicos afecta a la ciudadanía, que son los destinatarios de los servicios públicos.

Si hay menos médicos, si hay menos profesores, si están mal tratados en el sentido de que no se les reconoce su trabajo, lógicamente, eso va en detrimento de los ciudadanos. O sea, que no hablamos solo de un sector determinado, que ya es importante, un sector de trabajadores de la administración pública, sino que hablamos de la repercusión que la situación de este personal produce en los servicios de atención a los ciudadanos.

En relación con el tema de la racionalización de recursos humanos, como digo, hemos visto que ustedes, desde que están en el gobierno, han creado nuevos puestos para altos funcionarios; en concreto, leí en un medio de comunicación que eran cincuenta nuevos puestos los que se habían creado para altos funcionarios, mientras se amortizaban trescientas setenta plazas.

Que en este momento hay alrededor de doscientos asesores técnicos en los departamentos, sin contar con los organismos autónomos, y yo le preguntaría: ¿no le parece excesiva esta figura del asesor técnico, que no es precisamente lo regular en la estructura de la función pública? ¿No le parece a usted excesivo ese número de asesorías técnicas?

También hemos visto otro problema en relación con los ceses que ustedes han realizado de determinado personal en puestos de libre designación, personal cesado en cuyo puesto ha entrado personal reciente, por decirlo de alguna forma, es decir, fundamentalmente funcionarios que acabaron de ingresar o que son de la última oposición o que llevan poco tiempo en la administración, en detrimento de esas personas que tienen un mayor grado, un mayor nivel consolidado, que tienen una experiencia.

Claro, con el personal cesado en puestos de libre designación, evidentemente, ustedes están en su derecho, pero lo que realmente tienen que hacer, y creo yo que no lo han hecho, es que cuando cesan a un empleado público lo deben ubicar en otro puesto, porque hablamos de eficacia y de eficiencia, y, si hablamos de eficacia y eficiencia, hay que ser eficientes en la utilización de los conocimientos de los empleados públicos, y sabemos que todavía hay empleados públicos que no tienen asignado un puesto, es decir, todavía quedan empleados públicos que en su día fueron cesados y que en este momento no están realizando ninguna función dentro de la administración pública. Para nosotros eso no es eficiencia en la utilización de los recursos humanos.

Porque eso nos indica, señor Saz, que ustedes creen poco en la función pública, porque parece que piensan que quien ha estado trabajando técnicamente para un gobierno no puede hacerlo para otro de distinto signo; eso es lo que parece, parece que no se fían de determinados funcionarios, ven fantasmas donde no los hay, y, claro, tienen un problema: el anterior gobierno estuvo doce años el mismo gobierno, imagínese la cantidad de empleados públicos en determinados puestos que según esa circunstancia tienen ustedes que modificar, si realmente es lo que están haciendo.

En relación con los empleados públicos, fundamentalmente son grupo A que entran en la administración..., bueno, por supuesto todo el mundo tiene derecho a adquirir un nivel superior y a ir haciendo su carrera administrativa, pero lo que nos parece muy poco oportuno es que precisamente sea a esos funcionarios a los que ustedes ubican en un puesto superior, en un nivel superior, porque el puesto base cuando se entra es el nivel 22, y hay muchos de ellos que han sido situados en el nivel 28 o en el nivel 29. Porque, claro, eso implica un aumento de salario, un aumento de salario que no se están ahorrando ustedes con el personal que han cesado, porque, si tienen el grado consolidado, tienen que estar cobrando, lógicamente, la consolidación de esas retribuciones.

Por lo tanto, además de que no aprovechan ustedes sus conocimientos y su experiencia, lo que hacen es gastar más dinero precisamente porque están pagando a los de más bajo nivel con un nivel superior y a los que tenían el nivel superior haciendo menos pues les tienen que estar pagando lo mismo.

Esos son dos de los problemas que, como digo, hemos detectado.

Un tercer problema tiene que ver con la concesión de comisiones de servicio. Sabe que le hice yo una pregunta por escrito, y usted me contestó que desde que están en el Gobierno han dado cuatrocientas trece comisiones de servicio. Cuando ustedes plantean al principio de la legislatura que van a acabar con la interinidad en un porcentaje muy alto dentro de la administración de la comunidad autónoma y que van a iniciar un macroconcurso para que todos los funcionarios puedan acceder a un puesto determinado, y, por lo tanto, tener estabilidad en ese puesto, nosotros pensamos que realmente lo van a hacer.

Un año y medio después, en lugar de hacer eso, que es lo que prometieron, lo que están haciendo es dar muchas más comisiones de servicio; con lo cual, va a ser muy difícil, cuando ustedes inicien el macroconcurso, que realmente puedan reubicar a todo ese personal, porque han ido agrandando ese porcentaje de personas que están de forma interina porque no han podido acceder a esos concursos.

Me queda poco tiempo, y quería entrar también en el tema de las medidas que realizan ustedes en la función pública a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos. No me voy a poder dedicar a todas ellas, pero sí tengo que decir que toda esta desregularización que, desde nuestro punto de vista, están haciendo ustedes, esta discrecionalidad con que tratan al empleo público, eso —que ya lo hacen, como digo— lo plasman para que ahora ya sea por ley, para que ya esté por ley, en la ley de medidas, en la ley de acompañamiento a los presupuestos. Y a nosotros nos parecen muy graves muchas de las disposiciones que ustedes modifican ahí porque van directas a flexibilizar su forma de actuar como gobierno con una total discrecionalidad.

Voy a poner solo dos ejemplos, que son la disposición adicional vigésima y la adicional vigesimoprimera. Lo que hacen con esta modificación es plantear la libertad absoluta en el camino de la adscripción de puestos de trabajo de un departamento a otro. No existen límites a esa flexibilidad, no prevén ningún tipo de negociación con los representantes de los trabajadores. Hasta ahora la regulación en materia de reasignación, de redistribución de efectivos y de cambios de adscripción estaba regulada en un decreto, en el decreto de provisión; ahora ustedes quieren que eso esté regulado a través de una ley, para que haya más dificultades.

Otra forma que persigue la desregulación desde nuestro punto de vista es la vigesimoprimera, la adicional vigesimoprimera *[corte automático del sonido]*... previa a los concursos de las relaciones de puesto de trabajo para —y termino ya, señora presidenta— poder retirar plazas de dichos concursos, con lo que los interinos podrían ser cesados antes de los famosos macroconcursos.

Por lo tanto, señor consejero, ¿qué significa para ustedes racionalizar? Para nosotros, lo que ustedes llaman racionalización es desregulación de la función pública.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández Abadía.

Señor consejero, es su turno para la respuesta. Tiene diez minutos.

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (SAZ CASADO): Presidenta.

Señorías.

Señora Fernández.

Bueno, comparecemos ya no sé si es para hablar de la racionalización o una mezcolanza de debate de medidas, debate de presupuestos, debate de la ley extraordinaria que... en fin. Yo le voy a contar lo que hemos hecho, es decir, por la función pública, con el máximo respeto a la función pública y como funcionario público que también soy. Por tanto, le voy a contar lo que hemos hecho.

La primera medida que dijimos que íbamos a acometer cuando se accedió al gobierno, y lo he repetido muchas veces, es que cerca de un 40% de nuestros empleados públicos se encontraba en una situación de provisionalidad —por diversos caminos habían llegado a una situación de provisionalidad— y que, por lo tanto, eso había que solucionarlo; y que para solucionar esa situación había que iniciar un recorrido que tenía varias fases.

La primera de esas fases, ¿cuál era? Era la fase de que había que aprobar las relaciones de puestos de trabajo, el catálogo de los funcionarios del Gobierno de Aragón, de la Diputación General de Aragón. Pues bien, por fin, o sea, hemos ido desde el 24 de febrero del 2012, que se aprobó en Consejo de Gobierno la primera de las relaciones de puestos de trabajo; la última se ha aprobado este mes, en diciembre del 2012. Por lo tanto, ha sido un proceso que ha durado once meses. En el primer trimestre se aprobaron la de Presidencia del Gobierno, Presidencia y Justicia, Administración Pública y Hacienda, Industria e Innovación; en el segundo trimestre, Política e Interior, Economía y Empleo; en el tercer trimestre, Sanidad, Agricultura, Educación; y ahora, en el cuarto trimestre, que van a salir publicadas las últimas el martes, el lunes y el martes, que van a salir publicadas el lunes y el martes, que son Obras Públicas, IASS, Salud, los centros docentes y los servicios provinciales de Agricultura.

Por lo tanto, este proceso, que ha durado once meses porque significa elaborar el catálogo de la relación de todos los puestos de trabajo de la Diputación General de Aragón, ya está concluido; y, por la tanto, la primera de las fases que nos comprometimos que había que hacer ya está concluida. Bueno, concluirá el próximo lunes y martes con la publicación en el *Boletín Oficial de Aragón*, ¿no? Por lo tanto, ya está esa fase. Esa era una fase previa, necesaria, indispensable; ya la tenemos.

La segunda fase, una vez que se ha concluido esta primera, es la de ir sacando el concurso escalonado, porque para ello hace falta tener la relación de puestos de trabajo, y, por lo tanto, esa fase se ha avanzado un poquito, se ha iniciado un poco este año, se han sacada seis concursos, pequeños, pero, bueno, de fisioterapeutas, de economistas, directores de las oficinas del Inaem, jefes de secciones del Inaem, y otros pequeños concursos para ir cubriendo plazas que sí que corrían prisa y había urgencia por dotarlas con personal.

Bien, pero lo que sí le digo es que, una vez que tenemos las relaciones de puestos de trabajo aprobadas, van a empezar ya, inmediatamente, a lanzarse los concursos respecto de los jefes de todos, es decir, escalonadamente: jefes de sección, jefes de negociado, administrativos, auxiliares, también los cuerpos especiales y algunos concretos como analistas de laboratorio y demás. La intención es que salgan en dos grandes concursos. El primero va a ser inminente, y, por lo tanto, hasta que no esté resuelto el primero, no se podrá pasar al segundo porque es un proceso escalonado hacia abajo, y es una tarea que nos llevará varios meses a lo largo del año 2013, y por fin se habrá suprimido esa provisionalidad cuando se hayan resuelto estos concursos, que llegaba al 40%-42% de los funcionarios del Gobierno de Aragón. Por lo tanto, son noticias que yo creo que agradecen los funcionarios, es decir, que dotan de estabilidad a la función pública, porque tienen que tener plaza dotada con una cierta estabilidad, si es que estamos pensando de verdad en el interés de los empleados públicos.

Cuando me menciona que, al hilo de lo que estamos comentando, las comisiones de servicio, es decir, las comisiones de servicio que ustedes tanto han utilizado, porque es un procedimiento normal, y que nosotros hemos utilizado porque es un procedimiento normal…; si usted me pregunta: ¿han hecho ustedes... han cubierto plazas con comisiones de servicio? Sí. ¿Van a seguir ocupando plazas con comisiones de servicios? Sí. Entonces, el compromiso, ¿cuál es? El compromiso es que, cuando una persona, un funcionario, un empleado público está en comisión de servicio, no puede quedarse en esa situación seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, trece o catorce años, esa es la relevancia. Por lo tanto, una vez al año por lo menos, una vez al año, ha de hacerse un procedimiento concursal —los principios de mérito y capacidad— para que toda esa transitoriedad, esa provisionalidad de las plazas que están dotadas, cubiertas mediante comisiones de servicios... pasen a ser ocupadas en propiedad por los funcionarios. Y, por lo tanto, la cuestión no es si hay o no en comisión de servicio, que, por otra parte, hay tantos como... la media es la misma, en torno a cuatrocientos cada año en los seis últimos años, tengo los datos, es lo normal, es decir, son plazas que quedan por jubilaciones, que quedan por maternidades, que quedan, por enfermedades, libres y que hay que ocupar, no podemos dejar de prestar el servicio, y se cubren mediante esas comisiones de servicios. La cuestión clave es que la comisión de servicio... no puede quedar esa plaza, ese funcionario en esa situación provisional durante más de un año, hay que sacar cada año un concurso para limpiar esas situaciones.

En cuanto a las amortizaciones, ¡claro que se han producido amortizaciones de plazas! Es decir, cuando llegamos al Gobierno, hace un año ahora, nos encontramos varios cientos de plazas que estaban en las relaciones de puestos de trabajo vacantes, pero que no tenían dotación presupuestaria. ¿Qué vamos a hacer? ¿Las mantenemos? ¡No, hombre, no!, son plazas de funcionarios sin ocupar para las cuales no hay ni un solo euro, ni un solo crédito en los seis últimos años y que, por lo tanto, estaban ocupando en el organigrama una plaza que en teoría existía, pero que, de facto, no había dotación presupuestaria para cubrir esa plaza. Bueno, pues se trata de limpiar esas relaciones, de alguna forma adaptarlas a la realidad, porque ¿para qué queremos tener plazas que no han tenido en los seis últimos años dotación, ustedes no han dotado presupuestariamente y no hay intención de hacerlo? Pues, bueno, se trata de readaptar la situación a la realidad. Por lo tanto, esos son reajustes.

Sucede lo mismo como consecuencia de los reajustes entre las consejerías de Hacienda cuando ha ha-

bido fusiones de Agricultura y Medio Ambiente, claro que se producen unas duplicidades y han de producirse unas amortizaciones para que no haya una duplicidad en el empleado público.

Por lo tanto, son, fundamentalmente, reajustes o reorganizaciones o plazas... Yo, por ejemplo, he firmado como consejero de Administración Pública varias amortizaciones referidas a plazas que llevaban casi dos años sin cubrirse, que nadie las quería cubrir. Si no hacen falta y se da la circunstancia de que no hay funcionarios que las quieren cubrir, pero, sobre todo, no hacen falta y no causamos lesión al servicio público que se presta, lo mejor que se puede hacer es amortizarlas.

Yo creo que no se puede utilizar el punto de vista un poco demagógico respecto de la amortización de las comisiones de servicios, que sí van a seguir manteniéndose, pero no a lo largo de más de un año, porque esa es la idea en este aspecto.

Más cosas que ha hecho el Gobierno de Aragón. Sí, tenemos preparado un decreto de selección y provisión de personas con discapacidad, es decir, es una novedad o una cuestión novedosa que vamos a ver si somos capaces de lanzarla y de ponerla en marcha para que se puedan incorporar a la función pública personas con una cierta discapacidad y en el cumplimiento de determinados cometidos del servicio público. También lo tenemos en marcha, anteayer, por ejemplo, tuvimos unas jornadas técnicas sobre ello, que se publicitaron.

Le podría decir más Si acudimos a los planes económico-financieros que se presentaron a principio de año, esta comunidad autónoma siempre abogó por que no afectase a las retribuciones de sus empleados y fue de las cuatro o cinco que no tomó ninguna medida autonómica que pudiera afectar a la retribución de sus empleados, y eso ahí esta y fue comentado en la prensa nacional. Por lo tanto, el interés de este Gobierno era que sus planes económico-financieros, que tenían que producir los reajustes que se produjesen como consecuencia, fundamentalmente, de una mala previsión de ingresos de los gobiernos anteriores, del gobierno anterior, nacional, por supuesto, no me refiero al de aquí, pues no afectasen a la retribución de los empleados, y está publicado y no verá usted ningún aspecto que tenga impacto en la retribución de los empleados como propuesta de este Gobierno.

Más cuestiones que hemos planteado. Pues el plan anual de la inspección de los servicios. Se ha hecho un plan anual de la inspección de los servicios que afecta a la calidad que prestan nuestros empleados, un plan que hacía once, doce años que no se ponía en marcha y que por fin lo hemos recuperado. ¿Es algo bueno? ¡Claro que es algo bueno!, donde podemos testar la calidad de nuestros servicios públicos para mejorarlos, no es otra visión diferente, donde se van a hacer una serie de encuestas sobre la percepción por parte del ciudadano respecto de los servicios públicos que se prestan. Yo creo que eso es una buena cosa, es decir, ¿qué piensan los receptores del servicio público respecto del servicio que se presta por la Administración?

En conclusión, yo creo que hay muchas normas, una renovación normativa, no me olvido del Estatuto Básico del Empleado, está incipiente, en el año 2013 veremos su aprobación, la adaptación de la normativa básica nacional del Estatuto Básico del Empleado en esta comunidad autónoma, que lleva ya desde el año 2007, cinco años de retraso, y que debería de haberse hecho, pero vamos a poder hacerlo por parte de este Gobierno.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Es su turno de réplica, señora Fernández Abadía, tiene cinco minutos.

La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, la ley del empleo público de Aragón la va a traer cuando ya hayan resuelto ustedes todo, porque la ley de acompañamiento a los presupuestos, de la cual no me ha hablado en absoluto, recoge una serie de modificaciones de la Ley de ordenación de la función pública, que usted, prudentemente, tendría que haber esperado a traer la ley del empleado público de Aragón en lugar de modificarla unilateralmente sin contar con nadie, eso es lo que le he dicho antes y se lo vuelvo a repetir.

Entonces, ya ha colado por ahí una reforma muy importante que desregula. Yo le hablo de regulación de la función pública y le he hablado de racionalización, y me dice que he hecho una mezcolanza, y, aquí, el que ha hecho mezcolanza ha sido usted. Porque, claro, me está hablando ahora del plan de inspección, me parece perfecto, pero eso es calidad de los servicios, y yo, ahora, hoy, no venía a hablar de calidad de los servicios, venía a hablar de qué están haciendo ustedes con los recursos humanos, cómo los modifican, cómo los cambian, cómo les quitan dos niveles y los trasladan de un departamento a otro, todo eso que están haciendo, de lo que usted no me dice nada, y que, además, ahora lo ponen por norma con la ley de acompañamiento de los presupuestos, y sigue sin decirme nada.

Y otra cuestión a la que usted no me ha contestado, que yo tenía mucho interés, es saber cuánto cuesta, cuánto le cuesta todos esos puestos de libre designación que están dando a personas que todavía no tienen un grado, digamos, de capacitación y una experiencia determinada, mientras a los funcionarios, altos funcionarios, los están dedicando a no hacer nada, a algunos de ellos, no a todos, y cuánto cuesta eso a la Administración, pagar a los nuevos más de lo que tendría que pagarles si estuvieran en su nivel de entrada mientras que les tiene que seguir pagando, lógicamente, las retribuciones a los anteriores: esa es una de las cosas que a mí me interesaba.

Y en el tema de los macroconcursos y las RPT siempre me dice lo mismo, «hemos sacado todas las RPT». Bueno, pues ya se ha visto que no ha sacado todas las RPT, dice que queda todavía... ha nombrado algún departamento. Yo visto que todas las RPT no están; oye, en año y medio decir, como vienen ustedes repitiendo, que es que las RPT... Bueno, pues todavía no tenemos todas las RPT. Y el macroconcurso sigue sin iniciarse, porque, claro, si lo que van a continuar haciendo ustedes es sacar un concursillo de seis plazas, de siete plazas, no va a haber manera de que la gente, de que el personal pueda acceder a una de esas plazas si no tiene la posibilidad de saber qué plazas van a sacar

en el conjunto, y, desde luego, la idea que nosotros teníamos cuando la contó en su día el señor Garcés era otra. Toda esa provisionalidad que el anterior Gobierno, vuelve usted a repetir, tenía en la Administración de la comunidad autónoma la iban a resolver poniendo a cada funcionario en su puesto, y eso se hace de otra forma a cómo lo están haciendo ustedes. Desde luego, desde mi punto de vista, se hace de otra forma; si siguen sacando seis plazas, seis plazas y seis plazas, igual no acaban ni para 2030.

Claro, no ha hablado para nada de todo el personal al que ustedes han... de todos los puestos que han suprimido; no ha dicho tampoco nada del personal de Educación, por ejemplo, todos los interinos que han salido a la calle o aquellos interinos que, precisamente en otra medida de la ley de medidas, en otra disposición, se verán privados de la paga de todo el año y que solo se les pagará el curso escolar, y, por supuesto, de la incorporación a la función pública de personas con discapacidad, que esto tampoco entraba en el tema porque no es racionalización, pero, claro, yo ahí le tengo que decir: ¿qué personas con discapacidad van a entrar en la función pública si no salen plazas en la función pública? ¡Si lo que hacen ustedes es recortar efectivos! ¿Cuánto va a haber posibilidad de que esta normativa que están ustedes haciendo pueda tener alguna virtualidad?, porque igual están trabajando ustedes para nada. Porque, evidentemente, tal y como está la situación y lo que están haciendo ustedes y cómo están gestionando el empleo público en esta comunidad autónoma, va a ser complicado que personas con discapacidad y sin discapacidad puedan entrar a formar parte del empleo público de esta comunidad autónoma, con lo cual nos sirve para poco que hagan ustedes esa modificación o que innoven. Tengo que decirle que no es tanta innovación porque, evidentemente, ya hay una normativa en la función pública que permite el acceso de las personas con discapacidad con un procedimiento diferente.

Y termino, señor presidenta.

Me gustaría que pudiera contestarme a esas dos preguntas concretas que le hago. En relación con los puestos de alta dirección no me ha dado tiempo a comentarle nada, pero yo le preguntaré por escrito también en ese sentido para que nos informe de si, realmente, todas las personas que están ustedes ubicando en puestos de libre designación cumplen los requisitos de mérito y capacidad, a los que ustedes en tanto momentos han hecho alusión, pero que ahora que están gestionando el empleo público y la Administración pública de la comunidad autónoma obvian absolutamente en determinadas cuestiones.

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández Abadía.

Señor consejero, es tiempo de su dúplica.

El señor consejero de Hacienda y Administración Pública (SAZ CASADO): Presidenta.

Señora Fernández.

Siempre que hablamos de función pública acabamos hablando de lo mismo, y usted termina diciéndome que por qué no hemos hecho en diez meses lo que ustedes no han hecho en ciento sesenta meses, y siempre terminamos con esa discusión. *[Rumores.]* Y yo le digo: deme un poco más. Estamos cerrando las relaciones de puestos de trabajo en once meses, ya se han cerrado *[rumores]*, un trabajo que viene desde atrás. Once meses.

Usted tiene otra idea, ¡claro que tiene otra idea!, y ahora le voy a explicar las diferencias entre lo que hemos estado haciendo en este Gobierno y vamos a terminar haciendo y lo que se ha estado haciendo anteriormente.

Relaciones de puestos de trabajo. Síntesis. Primero: este Gobierno cierra el catálogo, un compendio de la relación de todos los puestos de trabajo de la función pública y hace sus diez departamentos, los publica, y, por lo tanto, lo primero que hace es elaborarlo, cosa que estaba pendiente de hacer de una forma organizada.

Segundo, diferencia también: se publican —es cierto, hay una que no está publicada, o dos o tres, que salen el lunes le estoy diciendo, están en el *Boletín*, están aprobadas ya desde... pero sale el lunes publicado.... Por lo tanto, antes de acabar el año estarán publicadas el 100%, que es lo que siempre he dicho, el 100% de las relaciones de puestos de trabajo, el día 17 y el día 18 se concluye con la publicación, por lo tanto, dentro del año 2012.

Segunda diferencia: las relaciones de puestos de trabajo, además, se cuelgan en el portal del empleado. Transparencia, señora Fernández, que cualquier empleado de esta comunidad autónoma, si lo respetamos, pueda ver la relación de puestos de trabajo. ¿Por qué tanto oscurantismo en los años anteriores, que no tenían acceso a la publicación, a esa transparencia de las relaciones de puesto de trabajo? Bueno, pues otra diferencia: transparencia en las relaciones de puestos de trabajo, que el funcionario público, el empleado público, al que se le respeta, por supuesto, sepa qué plazas hay en la relación, en el catálogo, en las relaciones de puestos de trabajo, porque ha de saberlo y ha de conocer las características de las plazas por si en algún momento quiere concurrir a los concursos que se puedan lanzar en cualquier momento. Luego, otra diferencia.

Comisiones de servicios, diferencia con la actuación del Gobierno anterior. Todavía no se puede decir en cuanto a los hechos de facto porque no ha pasado más de... o sea, el tiempo que tiene que haber pasado para demostrar si lo que digo se va a cumplir o no, pero la intención de este Gobierno es que en comisión de servicios no se aguante más de un año porque deba de salir cada año un concurso que reorganice la función pública y elimine esa provisionalidad. Eso también es respetar a los empleados públicos, eso le están demandando y, por lo tanto, hay que hacerlo, y lo estamos haciendo y lo vamos a mantener, cada año debe de salir un concurso para reorganizar las plazas que están en comisión de servicios.

Además, en comisión de servicios, algunas de las medidas —este no es un debate ni de ley de medidas ni de ley de presupuestos, ¿verdad?— que se han hecho para racionalizar precisamente la organización mediante la comisión de servicios son que, cuando una persona accede a un puesto por concurso, al menos ha de transcurrir un año para que acceda a una comisión de servicio, es decir, en la plaza que se le ha concedi-

do mediante los procedimientos de mérito y capacidad ha de permanecer, mínimo, un año. Eso también dota de estabilidad al sistema del empleado público, esa es otra diferencia y, además, es buena.

Segundo, los concursos. Ya lo he dicho, una vez realizada porque, hasta que no estaba aprobada la relación de puestos de trabajo, no se podían iniciar las fases de concursos. Se van a iniciar sobre todo con dos grandes concursos, no ni de cinco, ni de dos, ni de cincuenta, no, no, van a ser de cientos de plazas cada uno de esos concursos, ya lo verá usted.

En cuanto a la ley de la calidad, es importante, tiene vinculación con la prestación de los servicios públicos por parte de los empleados y, por tanto, hay que mencionarlo y hay que considerarla.

Y le voy a decir algo más. Me dice que no sacamos plazas de la función pública. Dos mil uno, ustedes no sacan oferta pública; 2002, ustedes no sacan oferta pública; 2003, sacan oferta pública y se impugna; 2004, sacan las mismas del año anterior; 2005, no sacan oferta pública; 2006, no sacan oferta pública; 2007, sacan oferta pública y la anula el Tribunal Supremo; 2008, no sacan oferta pública; 2009, una oferta pública por fin; 2010, sacan oferta pública y la anulan judicialmente; 2011, no; 2012, sacan oferta pública y se anula judicialmente. ¿Qué me dice de sacar oferta pública de empleo? *[Rumores.]* ¿Qué me dice? ¡Por favor! *[Aplausos.]* Por lo tanto, yo no sé a qué se refiere.

¿Qué le puedo decir yo? Que, desde el Gobierno de Aragón, las ineficiencias que se puedan producir respecto del ejercicio de la organización de la función pública en cuanto a los principios que le he dicho, vamos a trabajar para reorganizarlos y, sobre todo, para dotarlos de estabilidad.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Siguiente punto: interpelación número 112, relativa a crecimientos turísticos y, más en concreto, en turismo rural, formulada al consejero de Economía y Empleo por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor García Madrigal.

Señor García Madrigal, tiene el tiempo y puede hacerlo perfectamente desde el escaño.

Interpelación núm. 112/12, relativa a crecimientos turísticos y, más en concreto, en turismo rural.

El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta, por su licencia.

Señor Bono, hoy sí que vamos a estar frente a frente y no de modo esquinado, y, por tanto, con toda la transparencia del mundo le voy a decir que estamos ya quasi a un año del gobierno del señor Rajoy, a año y medio del gobierno de la señora Rudi, del Gobierno al que usted pertenece, y todos estamos perjudicados, todos y todo está más depauperado, más empobrecido. De manera que cualquier dibujo sobre la situación de Aragón o de España es un dibujo patético en la medida en que, extraigamos al azar cualquier titular, es el dibujo de la incompetencia, de la ineficiencia.

De manera que titular de la prensa económica de estos días: «España, a la cabeza de la destrucción de empleo de la OCD». España, 25,8%, en contraste, por ejemplo con Noruega, el 3%. Titulares de la prensa regional: «Los jubilados van a perder una media de más de cuatrocientos euros al año». Los trabajadores sociales reclaman un salario básico por la falta de cohesión social, la exclusión social, la emergencia que hay en España. Y ya, el que más concierne al debate y a la interpelación, pero dentro de este contexto: Cierres totales o parciales de la práctica totalidad de los paradores nacionales de turismo en Aragón: Teruel, Alcañiz y Bielsa, por un eufemístico plan de reestructuración o plan de racionalización. De manera que todas estas noticias, señorías, se concatenan en Aragón y en España bajo la advocación de los gobiernos del Partido Popular: paro, pobreza, carestía, exclusión social y desmantelamiento del sector público y de aquello que es y resulta más emblemático, como los paradores nacionales de turismo. ¡Si don Manuel Fraga levantara la cabeza! De manera que don Manuel Fraga, que en su etapa de Ministro de Información y Turismo generó unos crecimientos de dos millones de turistas a veinte millones de turistas, expandió la red y ustedes, ahora, la deconstruyen como si fueran malos cocineros. De manera que los yacimientos básicos del empleo en España allá donde somos líderes o en Aragón… pues ustedes solo saben vender las joyas de la corona.

Hemos hablado estos días: privatizar sanidad, privatizar educación, privatizar servicios públicos de empleo, privatizar el Registro Civil, el Registro Civil, que nuestros datos sobre mortalidad se van a convertir en datos susceptibles de mercantilismo al privatizar el Registro Civil, y, ahora, el turismo y sus emblemáticos paradores, y más en un territorio como Aragón, que venimos planteando equilibrios territoriales y que los paradores se ubicaban en enclaves naturales, como el de Bielsa o el de Alcañiz o el mismo de Teruel, en una encrucijada de caminos precisamente donde no había competencia con los hoteles. Desde ese punto de vista, lo único que hacen ustedes… no sé si obedecen a las presiones de las cadenas hoteleras, habida cuenta de los pésimos resultados, y a los que nos estamos refiriendo, se minora el turismo rural y habrá que minorar otras empresas públicas para ver si se genera negocio privado. Es decir, han pulverizado ustedes el estereotipo de la derecha de la eficiencia económica.

Señor Bono, exprese ahora más que sus propios duelos en la opinión pública, qué va a pasar con nuestros paradores en Aragón, si van a hacer ustedes, y, en concreto, el Departamento de Economía, va a hacer como con los servicios públicos de empleo, obedecer cabizbajo a los recortes, de manera que se haga un hachazo de casi cien orientadores de empleo y ahora se haga un hachazo de casi cien empleos directos en nuestros paradores. ¿Va a ocurrir lo mismo? ¿Cuál es su visión sobre los crecimientos turísticos negativos que tenemos en Aragón?, que se han convertido en estructurales todos los crecimientos. Y no soy partidario de dar cifras por que no las observe la competencia, pero, hoy, después de muchos días de no dar, sí que las daré por el motivo de la interpelación, que se cifra en crecimientos negativos turísticos.

En 2012, nos bajaron el presupuesto ya el 33% en materia turística; en 2013 baja otro 17,4%, no sé si son las corresponsabilidades que tocan, donde se le da al PAR en un lugar se le quita en otro, porque, claro,

nueve millones para decir «ordenación, promoción y fomento del turismo» donde tenemos que caminar a generar el 10% del empleo y donde en algunas circunscripciones como Huesca tenemos el 20% del PIB, pues, realmente, esto no es serio salvo que obedezca a la inacción, a la expulsión al mercado privado o a algún tipo de corresponsabilidades de equilibrio con el Gobierno que ustedes detentan con otro partido.

Los datos referidos a octubre son bajadas interanuales en número de viajeros, en ocupación hotelera, campings y turismo rural, indicadores que nos preocuparon mucho porque nos perjudican mucho, menos 18,2% interanual en un mercado en donde somos líderes, o éramos líderes, mejor dicho, en materia de turismo rural, frente a una caída de 1,4. Imagínense ustedes, 18,2 cuando somos, normalmente, el segundo destino en turismo rural de España, frente a 1,4 en el total nacional, algo está ocurriendo. En un territorio como el aragonés, que es como Suiza de grande, que necesita de equilibrios territoriales y cuyo uno de sus mayores aportes era el turismo rural, Los datos de octubre son desidia del Gobierno en materia turística hotelera: menos 7,4 en viajeros, menos 8,7 en pernoctaciones, menos 12,2 en personal empleado, que es lo más triste, menos 7,5 en cuota de mercado… Es decir, todo crecimientos negativos que ustedes están normalizando con unas políticas de recortes inversores y con unas políticas de crecimiento vegetativo negativo. Noviembre, menos 7% en número de viajeros, menos 8,3 en pernoctaciones, menos 6,9 en cuota de mercado. Verdaderamente, es preocupante, señor Bono, que nos arrojan ustedes a un precipicio en materia turística. Nos tienen ustedes en un tobogán de mucha altura con un suelo absolutamente duro que no cumple las condiciones de higiene ni de seguridad, un suelo muy bajo.

Señor Bono, no sé si usted ha recibido a los trabajadores de paradores de Teruel a título piadoso, como ocurrió con los orientadores tutores de empleo, y ahora, después, se les va a guillotinar. Esto es preocupante por lo que significa. Un parador como el de Teruel, en una encrucijada de caminos, que tiene ya más de sesenta años y que, por tanto, no tienen ustedes solvencia para denunciar el cinismo que se está produciendo en el Gobierno central con el tema de paradores, el modo espurio con que se está actuando porque primero se produjo una distracción con ese plan de reestructuración para colar luego, por la puerta de atrás y de modo traicionero, una enmienda en el Senado diciendo que se va a privatizar la gestión de los paradores, cuando todos sabemos que han sido emblemáticos. Y si repasamos la propia literatura de los paradores de este Gobierno, habla de empresas productivas, eficientes, emblemáticas, referencia local, nacional, internacional, e incluso se habla de que la red de paradores, que siempre son un sitio a visitar por cualquiera por lo que significa, es para los españoles el alojamiento hotelero como referencia por excelencia en términos de lo que representa el turismo en España. Ya digo, ¡si don Manuel levantara la cabeza!

Es decir, imagínense ustedes, que la mayoría de los parlamentarios de esta Cámara tenemos menos de sesenta años, casi sesenta años, como el parador de Teruel, si nos dijeran que caminemos hacia la guillotina, que caminemos hacia el final. Dígannos ustedes si van a ser cómplices de los cierres de empresas públicas, de la red de paradores, si van a ser las cabezas de turco, si van a mantener ustedes estos crecimientos negativos en materia turística, si obedecen a intereses de privatización como en los otros sectores. Y el problema es que ya los propios analistas están diciendo que ustedes están produciendo un daño en la sociedad española que tardaremos veinte años en recuperar, claro, si ustedes no siguen haciendo expolios como el de las empresas públicas, expolios como lo de los paradores.

Y, en definitiva, también qué va a ocurrir con aquellos que están a la espera para revitalizar nuestros territorios tan necesitados como en el caso de Veruela.

En consecuencia, señor Bono, nosotros sufrimos por esto que está ocurriendo y, sencillamente, lo único que le planteamos es nuestra disposición, a nuestro mejor saber y entender, para acabar con esta sangría de la privatización que ya afecta a todas las instituciones (sanidad, familia, educación) y también a una institución básica en España como el turismo.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor García Madrigal.

Señor consejero, yo creo que debe salir a la tribuna. Tiene diez minutos para su respuesta.

El señor consejero de Economía y Empleo (BONO RÍOS): Gracias, presidenta. Como no llevo muletas, vamos a salir aquí como siempre.

Bueno, empezar por decir… pero, bueno, esto ya tantas veces lo hemos dicho: en sus intervenciones, habitualmente, el 95% es siempre lo mismo, que no tiene que ver con el tema, y al final tiene que ver con el tema. Pero centrémonos en el tema, centrémonos en el tema concreto.

Primer punto, el tema paradores. El tema paradores, me va a dejar —si me escucha— que lo dejemos para un poco más adelante por una razón: porque, si yo le cuento ahora y se hace público lo que estamos haciendo con el tema paradores, va a dificultar, incluso a penalizar, la solución que tengamos con paradores. Luego, por pura discreción estratégica, le digo únicamente que yo he quedado ya con la secretaria de Estado de Turismo para hablar del tema, aunque hemos hablado por teléfono en dos ocasiones, y que, por razones estratégicas de cara a la solución mejor para Aragón, no solamente para Teruel, también para Bielsa, no lo voy a decir públicamente; yo se lo puedo contar en privado, pero públicamente no se lo puedo decir porque, repito, iría en contra de la mejor solución.

Al hilo de eso, si el señor Fraga levantara la cabeza, estaría muy orgulloso. Usted ha citado a Cervantes aquí y también ha citado al señor Fraga, luego es un elenco importante, ¡si don Manuel levantara la cabeza!

Pero no se preocupe, con el tema paradores estamos encima del asunto, como no podía ser menos. O sea, yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho de la importancia de la red de paradores, de la importancia para las provincias respectivas, y no dude que haremos lo mejor para que no haya con esto un problema, habrá momento de explicarle lo que sea.

En cuanto al tema turístico, bueno, con el asunto de las estadísticas estaremos siempre igual. Claro, usted ha dado unas que son las malas, yo puedo dar otras que son las buenas, porque no son todas malas ni son todas buenas en ningún tema. ¿Qué esta ocurriendo con el tema turístico? Ha citado los porcentajes de Aragón; bueno, son muy similares, en unas cosas más que en otras, a lo que está pasando con los cambios de hábito de turismo y con el problema del turismo y tantos sectores en nuestro país. Efectivamente, en cuanto al turismo rural, en el mes de octubre, la variación mensual nos sale peor que la media española, pero, en el acumulado de los doce meses, el descenso es exactamente igual, 2,5 en España, 2,5 en Aragón, lo cual es un mal dato, pero no cabe atribuirle a Aragón un comportamiento peor.

En tema de camping andamos un poquito más bajos, pero porque hay un cambio de hábitos. Sin embargo, lo que no dice usted, que no es que sea ninguna excusa de nada, en apartamentos turísticos, mientras España baja en viajeros un 0,19, Aragón sube un 14,6, frente a una baja del 0,19. Esto ni es bueno ni es malo, esto es que estamos asistiendo a un cambio importante de hábitos turísticos de, sobre todo, viajeros españoles. Cuando comparamos con España, hay que tener dos cuestiones en cuenta en los agregados: uno, que el turismo de playa este año ha sido el segundo o tercero mejor año de la historia, con lo cual penaliza los datos del turismo interior, y dos, que ese aumento de manera importante viene dado por el turismo extranjero, el turismo extranjero sobre todo, cosa que en turismo interior no tiene la misma incidencia. Quiero decir que el que está pagando el pato del turismo, sobre todo por el viajero nacional, y ahí tenemos un problema todos. Y repito, el tema del cambio de hábitos se refleja ¿en qué? En que viajeros y pernoctaciones en hoteles han bajado mucho, ha bajado en turismo rural, ha subido en apartamentos turísticos y ha bajado en general el número de días de pernoctas. Es un problema que tenemos todo el sector turístico motivado por la crisis que tenemos encima, es así de claro. Ahora, no atribuya un escenario peor a Aragón porque es muy similar al del caso nacional.

En el caso de turismo rural, tengo que decirle que sí que hay —que es la pregunta concreta que se hacía— un pequeño descenso en el mes de octubre, pero, repito, idéntico al nacional en el conjunto del año, en lo que llevamos de año. Mal dato, pero, bueno, para todos; no quiero decir que mal de muchos, consuelo de tontos, ¿eh?, ojalá fuera positivo el dato aragonés, pero es más o menos el de todos.

En tema de turismo rural, en el plan de promoción del turismo que estamos llevando a efecto y que ya digo que tendrá mucha más efectividad en 2013 puesto que partimos ya con presupuesto nuevo y estrategia realmente propia de la consejería, y que está diseñado en el plan diferencial de turismo, tengo que decirle que con turismo rural estamos haciendo exactamente lo mismo que con el resto de sectores o subsectores del turismo. No vemos por qué hacer un plan discriminatorio positivo a favor del turismo rural cuando es todo el sector el que está inmerso en él. Habrá que hacer acciones específicas de turismo rural; una de ellas es, por ejemplo, la presencia en ferias nacionales e internacionales. Así como le digo que se ha reducido a la mitad el número de ferias en general de turismo a las que asistimos, por razones de que muchas de ellas han perdido el sentido, le digo que, aunque se ha reducido a la mitad la asistencia a ferias, se han mantenido las mismas en lo que se refiere a turismo rural, que se hacen en colaboración estrecha y directa con la Asociación de Turismo Rural de Aragón. Son ferias especializadas, hemos estado en la feria de Mendiexpo y estamos trabajando también por vía de marketing *on line* en ese segmento de población más afín al turismo rural.

Se ha presentado recientemente una guía en formato app móvil con información de toda la oferta turística de nieve de Aragón. Es, por cierto, la primera guía turística de nieve que hay… perdón, de viaje que hay en España con ese formato de app móvil. Se ha empezado con el turismo de nieve por la cercanía de la temporada de esquí, pero se aplicará a todo el conjunto de promociones turísticas. Pero digo que es la primera, supongo que se copiará enseguida, y, lógicamente, al turismo rural le tocará el turno cuando llegue el momento preciso de más demanda de ese tipo de turismo.

Se están llevando a cabo viajes de familiarización para prescriptores turísticos internacionales; Peña Guara sería un caso, pero hay otros; campings sería otro caso. Hay presentaciones de productos y destinos a grandes empresas, que cada vez más es un mercado potencial que lleva a cabo el departamentos de recursos humanos. Se ha creado un club de cliente, que se llama Amigo de Aragón, para trabajar junto con las asociaciones empresariales en materia de Internet. Se está terminando de confeccionar la promoción de paquetes turísticos completos segmentado por tipos de visitantes, y turismo rural, lógicamente, también entra en ellos. Y también está, ya se ha iniciado, principalmente con el Ayuntamiento de Zaragoza, pero con otras instituciones, una coordinación que verá los frutos a comienzos del próximo año cuando se llegue a la firma de convenios respectivos con ellos. Otro de los temas es la potenciación del turismo gastronómico como línea transversal de promoción turística.

Por terminar, en lo que afecta en concreto al turismo rural, aparte de lo que ya le he comentado, en el plan se prevé, ya se están haciendo, pero se prevé firma de convenios con las asociaciones de turismo rural y turismo verde, que son las dos que representan a todos los asociados, para promoción de sus propios productos. También se ha creado, están trabajando ya, comisiones de trabajo dentro del consejo de turismo para analizar los planteamientos del propio sector a la hora de la promoción de ese turismo. También quiero decir que, de acuerdo con Turespaña, estamos en la comisión que se ha creado recientemente sobre turismo rural, específicamente en Turespaña, para trabajar conveniado a nivel de Turespaña y en cada comunidad.

Y finalmente, he de comentarle que estamos dentro de Turespaña también trabajando, y con las asociaciones aragonesas, en un proyecto de homologar todas las casas rurales españolas para darles una categorización en forma de estrellas como tienen otros alojamientos, de manera que la oferta al extranjero, importante en este momento, se pueda hacer con unas clasificaciones que faciliten al viajero la posibilidad de elegir adecuadamente.

Gracias, presidenta.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Señor García Madrigal, tiene su tiempo para la réplica, cinco minutos.

El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señor Bono, veo que ha mejorado usted en las predicciones económicas porque remite ya a Dios, cuando yo soy más partidario de remitirle las rogativas a la virgen del Pilar, aunque sea por mayor proximidad. Digo esto, y no sé si usted ama a un autor como Popper —aunque sea liberal, yo lo aprecio—, decía Popper que la ciencia económica se ha convertido en una ciencia histórica porque solo es capaz de explicar los aconteceres económicos una vez que han pasado. Y, claro, esto pasa en su Departamento de Economía. Como economista, que yerre es muy correcto porque la economía y sus predicciones no sirven, pero, claro, como político, que es lo que venimos a requerir aquí, no.

No se puede dar el argumento del silencio, que se convierte en cómplice ante los destrozos que está haciendo el gobierno del señor Rajoy, como con los cien orientadores tutores de empleo. Estamos siempre planteando el secretismo en materia económica como si fueran de mayor confidencialidad los datos económicos cuando se tienen que debatir con transparencia que los propios de nacer o morir del Registro Civil. Es decir, que esto no puede ser. De manera que, realmente, podemos ver qué planteamientos hay en términos de lo que veníamos y de los datos que usted aporta en términos de crecimiento negativo. Porque, claro, promoción, ustedes lo deben de entender, promoción, ¿son datos negativos? Los promocionamos, más negativos. Fomento. Bueno, pues vamos a fomentar los crecimientos negativos. No se puede hacer una interpretación complaciente cuando nos la jugamos.

Un botón. Los terribles y desastrosos datos sobre turismo rural en Aragón pueden visualizarse bien, a pesar de que el consejero se hace experto en la reinterpretación menos mala de los datos negativos, pueden verse con los datos del Pirineo aragonés que vienen en las encuestas turísticas, y son unos datos realmente terribles, absolutamente lesivos.

Como lesivo es ya lo que han hecho en relación con la red de paradores. El mismo hecho de cuestionar el funcionamiento de los paradores de Bielsa, Alcañiz, Teruel, la espera del de Veruela y la amenaza del de Sos nos está planteando que ya es un daño en sí mismo porque pierde referencias en el relicario de los españoles el tema de los paradores.

Digo datos del turismo rural: menos 38,2% —me refiero al Pirineo aragonés— en número total de pernoctaciones, casi menos 40%, menos 13,07% en estancia media en días y, en personal empleado, menos 11,18%. Por todo esto, nosotros le decimos, por favor, cambien, que estamos hablando de política que tiene que arrastrar los comportamientos económicos, no de predicciones económicas que se cumplen a sí mismas de un modo inescrutable y de un modo divino y de un modo inequívoco.

De manera que le requerimos a que, con toda urgencia, tomen en consideración nuestras propuestas, que no queremos enfrentarnos, que queremos cooperar, pero ustedes tienen la mecánica de negar todo lo que queremos aportar los grupos parlamentarios y, en concreto, el Grupo Socialista. Es que ustedes son con el turismo y con el turismo rural como con la Armada Invencible, son los elementos, y esto que usted contesta aquí, señor Bono, se lo han hecho sus asesores en respuesta a las múltiples baterías de preguntas escritas que hemos hecho en términos de turismo. Es decir, han dicho: la climatología adversa en invierno y la climatología adversa en verano.

Nosotros queríamos decir —que se agota el tiempo—, oiga, vamos a sentarnos todos los partidos políticos, vamos a hacer una comisión especial en estas Cortes y, oiga, atiendan ustedes todas las iniciativas que les estamos planteando en las enmiendas para hacer un programa de activación del turismo rural, las enmiendas económicas, y en todas las iniciativas que hemos desplegado en términos de cuestiones que pueden acometerse en Aragón para modificar la tendencia al crecimiento de los datos negativos que se han convertido en estructurales.

De verdad, queremos trabajar porque es el yacimiento de empleo más importante de Aragón en turismo y, más en concreto, en turismo rural, por el bien de nuestra tierra.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor García Madrigal.

Consejero Bono, su turno para la dúplica.

El señor consejero de Economía y Empleo (BONO RÍOS): Gracias, presidenta.

Como me ha preguntado por Popper, pues, mire, sí lo conozco, y da la casualidad de que, de los tres cursos de doctorado que tuve que hacer al acabar la carrera, uno era sobre Popper, o sea, que sí que me lo conozco, pero, bueno, no vamos a hablar de esto. Dijo más cosas que las que usted ha dicho ahora, muchas más cosas, pero, bueno, no es el tema.

No entiendo las acusaciones o las referencias a silencio y secretismo, no sé a qué se refiere, no lo entiendo, pero, en fin, ya me lo explicará otro rato.

Vamos a ver, datos desastrosos. Son datos malos, claro. Lo que le quiero decir, lo que le decía antes es que son datos que tienen que ver, por un lado, con el turismo, claro, que se ha visto afectado, como es natural, económicamente. El gasto por viajero y la frecuencia de los viajeros se han visto afectados en el turismo como en todo. Cuando baja la renta disponible, se ven afectados todos los sectores, claro que sí. ¿Que es una mala noticia? Malísima noticia, pero le está pasando como a los demás.

Y luego, la segunda parte, que por eso hacía referencia a datos buenos y malos. Hay un cambio importante en los hábitos del turista, del viajero. Yo, cuando le decía que han bajado los campings y ha bajando el turismo rural, pero han crecido mucho, muchísimo, los apartamentos turísticos, que el dato lo tiene igual, eso ¿qué es? ¿Porque ahora resulta que al viajero le gusta más ir a un apartamento que ir a la casa rural? No, lo que hace es que, con su nueva renta, va a aquello que le supone un precio más ventajoso, y por eso crecen un tipo de apartamentos y crece otro. Por eso es distinta

la cifra de número de viajeros que la de número de pernoctaciones, y es muy distinto lo que han manejado ustedes, el dato muy malo de 38%, porque solamente coge el mes de octubre, que es un mal mes turístico, y, sin embargo, sería muy distinto si cogiera el dato acumulado del año porque bajaría, en lugar de un 29%, sería solo un 7%, etcétera.

Es decir, en el tema de las estadísticas, podemos estar aquí toda la mañana entera tirándonos los trastos con las buenas y con las malas. En resumen, el turismo está teniendo problemas en Aragón y en todas las partes de España y del mundo y lo que habrá que hacer será trabajar, trabajar para conseguir minimizar el impacto de esa tendencia negativa.

Siempre he comentado el sentarse los partidos políticos, los grupos, para hablar de este tema u otro. Yo no tengo ningún inconveniente, lo que sí le puedo decir es una cosa: hay seis mesas de trabajo muy operativas, donde no hay partidos políticos, donde están todos los representantes del sector turístico aragonés. Yo no tengo ninguna desconfianza respecto a las aportaciones técnicas que puedan hacer los grupos políticos, en lo que sí tengo seguridad es en que, técnicamente, en cuanto a propuestas de mejora del sector, lo que sí va a tener más efectividad es que sea el propio sector turístico el que en esas comisiones refleje lo que quiere hacer. De todas maneras, si llega el caso de tener que comentar esto con los grupos, naturalmente, lo haremos.

Pero vuelvo al principio. No confundamos unos datos que afectan solamente a un sector, afectan a toda la economía, y no perdamos de vista que lo que hay que hacer es adaptarnos a ese cambio de hábitos que está teniendo el turista. Posiblemente, tengamos que ver todavía mayores descensos en un tipo de alojamiento, puede ser turismo rural, puede ser camping o el que sea, y tengamos que ofrecer en la comunidad un tipo de alojamiento o de paquete de viaje o de oferta turística que se adapte mejor a los gustos nuevos del cliente, vamos a hablar del cliente, o del turista. Y todo es ver en conjunto del sector lo que está pasando y, sobre todo, adaptarnos a lo que actualmente está ocurriendo.

Ya le digo por delante una cosa: un punto importante en el que actuar tiene que ser el turismo extranjero. Hasta ahora, hasta hace dos años, en el caso de Aragón; en el caso del turismo de interior, era un sector secundario. En este momento, dada la baja del turismo interior nacional y dado que el gasto por viajero es mucho mayor en el extranjero, una acción importante —y ahí el turismo rural tiene una gran potencialidad porque ofrece un tipo de alojamiento importante, diferencial sobre otros países— tiene que ir dirigida al turismo extranjero precisamente. Eso es en lo que pensamos trabajar, junto con otras cosas.

Gracias, presidenta.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, consejero.

Pasamos al turno de preguntas.

Pregunta número 2869, relativa al nuevo edificio de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, formulada a la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la diputada del Grupo Socialista señora Pérez.

Señora Pérez, tiene la palabra para la formulación escueta de la pregunta.

Pregunta núm. 2869/12, relativa al nuevo edificio de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

¿Cuándo cree el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte que puede estar operativo el nuevo edificio de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.

Señora consejera, su turno.

La señora consejera de Educación Universidad, Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: Señora Pérez, para que pueda estar operativo, la primera condición es que se terminen las obras, y yo espero que sea cuanto antes.

Lo que sí le puedo adelantar es que en el próximo Consejo de Gobierno, esta semana que viene, se autorizará ya la transferencia a la universidad de los 2,3 millones previstos en la disposición adicional quinta del presupuesto del año 2012, con lo cual esperemos que se puedan reanudar las obras y seguir avanzando para que terminen cuanto antes.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.

Señora Pérez, su turno de réplica.

La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, estamos ante una situación extrema, yo creo, de esas en las que se exige estar a la altura de las circunstancias a los responsables políticos. Mire, ayer, los alumnos salieron a la calle, alumnos y profesores salieron a la calle a dar sus clases normales. Llevan numerosas iniciativas, yo creo que originales y que recurren al ingenio, concretamente para llamar la atención, para hacer visible su difícil situación, que llevan ya unos cuantos años. Y yo creo que lo hacen, señora consejera, ante la indiferencia, permítame que le diga, o la ineficiencia de su departamento y suya como responsable. Ellos han recurrido a muchas iniciativas, incluso a esa lista de multimillonarios, esa lista Forbes a la que se han dirigido para intentar buscar ese apoyo económico que ustedes les niegan o que, por lo menos, de momento no han desbloqueado.

Año y medio después de alcanzar el gobierno, señora consejera, un edificio está sin concluir. En el año 2010 se iniciaron las obras, ocho lugares diferentes están siendo necesarios para poder atender las necesidades del alumnado que quiere estudiar, que quieren ser futuros profesores en esta comunidad autónoma. Ocho edificios, con la complejidad que eso conlleva en la gestión, e incluso en la propia logística del profesorado. Dos mil doscientos alumnos, ciento ochenta

profesores más cuarenta personal auxiliar y de servicios que están sufriendo una situación insostenible.

Y le niego la mayor, le escuchaba, yo creo que como una huida hacia adelante, justificar ese retraso o justificar la dificultad de poder acabar con esas obras porque estaba sobredimensionada. Le digo que no, que no. Ahora mismo, los alumnos de la Facultad de Educación no pueden hacer muchas de sus cosas, muchos de los planteamientos que tienen, tanto por el compromiso y el esfuerzo que realiza su profesorado, por falta de medios técnicos, no por falta de ganas ni de recursos humanos.

Hay que resolverlo ya, señora consejera, ya, ya es tarde, pero hay que resolverlo ya y, como mínimo, antes de marzo, que es cuando la empresa va a devolver al órgano contratante el edificio. Por lo tanto, hay que resolverlo ya. Le pido que tratemos y cuidemos a nuestros futuros profesores, están despreciando a los que ya lo son y, desde luego, maltratan a los que quieren serlo.

Señora consejera, la autoridad comienza —y esto no es mío, son palabras de un profesor— con una formación de los futuros docentes en un espacio digno, y eso es lo que le pedimos hoy.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora diputada.

Consejera Serrat, su turno de dúplica.

La señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: Señora Pérez, me gustaría separar lo que es el problema crónico de la Facultad de Educación vinculado a la falta de espacios, ese es un problema que viene de antiguo —cuando yo empecé como decana de la Facultad de Medicina en el año 1997, ya existía este problema, y ese es el motivo por el que estaba incluido, me imagino, en el Plan de infraestructuras—, y otro es el problema actual, del que estamos hablando, que es el de las obras de la Facultad de Educación, y ese es un auténtico problema pero es un problema heredado, posiblemente un problema más de los heredados al que hay que dar solución.

Y cuando digo esto, se trata de plantear que la Facultad de Educación se planteó como un proyecto muy ambicioso, y le recuerdo que en el año 2010, cuando salió a concurso, salía por un importe de 20,5 millones de euros, que se adjudicó por 15,6 y que el año pasado hubo que hacer un nuevo reajuste a la baja, que es lo que llevó al retraso en la culminación de las obras. Estaba previsto que se acabaran en marzo del año 2012 y, con el reajuste económico, se retrasó su ejecución.

En estos momentos, de este proyecto se han pagado ya 9,5 millones de euros, 5,3 millones por parte del Gobierno de Aragón, de la Diputación General de Aragón, y 4,5 por parte de la universidad. Pero el problema es que, cuando se inició este proyecto, ya estábamos en una situación de crisis; que se autorizó ese proyecto sin tener el presupuesto disponible; que dentro del Plan de infraestructuras 2006-2012 no se cumplió por parte del anterior Gobierno ni un solo año lo que eran las aportaciones económicas vinculadas al Plan de infraestructuras. Y eso ha generado una bola y un problema al que tenemos que estar dando solución. Por eso le he dicho que la buena noticia que inicia el cambio es que podemos cumplir, y espero que la semana que viene, como le he dicho, se apruebe en el Consejo de Gobierno esa aportación de 2,3 millones de euros que permite continuar con la obra y terminarla cuanto antes. Quedarán por pagar 1,3 millones más la liquidación, que creo que lo tendremos que buscar en el presupuesto del año 2013, y ojalá para el curso que viene tengamos resuelto el problema.

El hecho de que los alumnos estén hoy en la calle dando las clases como forma de reivindicación la comprendo, pero entiendo que ese problema no viene del último año, sino que es un problema crónico del pasado.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.

Pregunta número 2973, relativa al coste de su decisión de cerrar los sábados las bibliotecas de la Diputación General de Aragón y, entre ellas, la Biblioteca de Aragón, formulada a la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la diputada de Chunta Aragonesista señora Ibeas.

Señora Ibeas, tiene la palabra para la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 2973/12, relativa al coste de su decisión de cerrar los sábados las bibliotecas de la Diputación General de Aragón y, entre ellas, la Biblioteca de Aragón.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señora consejera, ¿cuál es su opinión ante las consecuencias que tiene su decisión de cerrar los sábados las bibliotecas dependientes de la Diputación General de Aragón y, entre ellas, la Biblioteca de Aragón, desde el punto de vista de la calidad del servicio que deben prestar?

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.

Consejera Serrat, tiene la palabra.

La señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: Pues mire, señora Ibeas, es una medida de carácter económico, siempre dolorosa y, por supuesto, siempre impopular, aunque siga siendo necesaria, y creemos que es la menos gravosa para la calidad del servicio.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.

Señora Ibeas, puede responder.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Dice «dolorosa», «la menos gravosa»... ¡Hombre!, vamos a ver, dependerá de lo que usted entiende que es una biblioteca y el papel que tiene que tener, porque, desde luego, para mi grupo parlamentario es absolutamente obligado que los poderes públicos prote-

jan y potencien el libro, e ir al contrario, ir en la línea que usted está marcando, porque no hace falta más que ver los presupuestos, significa volver al tiempo de las cavernas, y de allí va a ser muy difícil regresar.

Esto va en la línea de lo que el Partido Popular lleva planteando aquí y en Madrid porque, en cuanto llegó el señor Rajoy, una de las primeras medidas que adoptó fue hacer desparecer la Dirección General del Libro, de Archivos y Bibliotecas con la excusa de la reorganización. Con la excusa de «vamos a ver qué más eficacia», sabemos cómo son al final las cosas con ustedes. Y cerrar una dirección general como esa, hacerla desaparecer, eso es mucho más que un símbolo. Cerrar un solo día las bibliotecas públicas de Aragón, las que dependen de su departamento, es mucho más que un símbolo, señora consejera, porque usted sabe que las bibliotecas desempeñan una función social importante, cultural importante y educativa importante. Es de los pocos espacios donde se puede desarrollar de una forma fluida actividad cultural y actividad educativa, pero, si no hay dinero, es imposible que puedan hacer nada.

¿Cuál es el temor en estos momentos? Pues que ustedes han empezado ahora con los horarios, sabemos cómo están los presupuestos, hablaremos de eso ahora, y lo siguiente es directamente recortar plantilla o recortar, si no personas, contratos de personas que no están en plantilla, pero que desarrollan un papel (número de becarios, personal funcionario…), y estamos muy, muy por debajo de cómo se encuentran los estándares en otros países europeos en número de funcionarios bibliotecarios o de personas que están atendiendo en ese caso a las bibliotecas, en infraestructuras, en fondos bibliográficos, señora consejera.

Entonces, eso de que es muy doloroso en estos momentos, oiga, pues pásele el dolor, no sé, a Motorland, ¡qué quiere que le diga!, pero no puede estar usted cerrándole puertas aquí a la gente porque es importante también que marquen ustedes sus prioridades.

Mire, ustedes dicen: «Queremos alcanzar en la red de bibliotecas de Aragón el nivel de dotación bibliográfica que se considere óptimo según pautas internacionales». Internacionales ¿de dónde? ¿De Gambia? ¿De dónde, señora consejera? ¿Con mil euros que dejan para la biblioteca de Zaragoza, de Huesca y de Teruel y la Biblioteca de Aragón aquí, en Zaragoza, con todo lo que conlleva en su interior?

Creo que es irresponsable y es un error dejar morir por inanición la cultura, y eso lo pagaremos, lo pagarán ustedes, pero lo pagará nuestra sociedad aragonesa.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.

Su turno de dúplica, señora consejera.

La señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: Vamos a ver, señora Ibeas, la Biblioteca de Aragón abre sesenta horas a la semana y lo que procuraremos es una reducción de cinco horas semanales, lo que supone un ahorro de cerca de ochenta mil euros.

Las bibliotecas de Aragón están abiertas desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche, de lunes a viernes, doce horas al día, posiblemente el servicio público que más horas de atención al público tiene porque creemos que es necesario. Hemos apostado por mantener la gratuidad del servicio, no como otras instituciones, como el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha apostado por cobrar, por abrir menos horas y por no tener abierto los sábados. Por lo tanto, hemos hecho un tremendo esfuerzo.

Pero es que, además, la decisión de cerrar los sábados por la mañana no la hemos tomado sin hacer un estudio de la ocupación, y le tengo que decir que, las bibliotecas, la máxima ocupación la tienen los lunes, que tienen un 21,6% de los ocupantes, que, a partir del lunes, el número de ocupantes disminuye, hasta el sábado, cuando la ocupación es de un 7,8%; del 21,6% de los lunes al 7,8% de los sábados. También me puede decir: bueno, es que los lunes abren todo el día y los sábados abren solo por la mañana. Pues hemos hecho el estudio de ocupación teniendo en cuenta solo las mañanas: de lunes a viernes, la ocupación de las mañanas de las bibliotecas es del 37,8%, los sábados, del 7,8%.

Por lo tanto, verdaderamente, cuando se han tenido que tomar medidas restrictivas, que siempre son dolorosas —por eso se lo decía—, hemos pensado que cuando menos se afectaba, era menos gravoso para el servicio público, eran los sábados.

Si usted me pregunta a nivel teórico si me parece que las bibliotecas tienen que estar abiertas todos los días: sí. ¿Tienen que estar abiertas las veinticuatro horas del día? También. Pero la verdad es que luego nos tenemos que ajustar a las necesidades de ocupación y a las necesidades presupuestarias.

También le tengo que decir que los representantes de las bibliotecas me han pedido una reunión para buscar alternativas. Estoy dispuesta a escucharlos y, si la alternativa que me plantean es viable, estaremos encantados de aplicarla.

Muchísimas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.

Pregunta número 2968, relativa a las medidas de apoyo al sector del calzado de la comarca del Aranda, formulada al consejero de Economía y Empleo por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor García Madrigal.

Señor García Madrigal, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 2968/12, relativa a las medidas de apoyo al sector del calzado de la comarca del Aranda.

El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

¿Qué medidas reales, apoyos presupuestarios y plan de futuro tiene el Gobierno de Aragón para el sector del calzado del Aranda y la exportación en el año 2013?

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor García Madrigal.

Señor consejero.

El señor consejero de Economía y Empleo (BONO RÍOS) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

De manera específica no hay una referencia concreta al sector del calzado, como, prácticamente, a ningún sector. Solamente hay casos muy, muy puntuales por razones diferentes, como puede ser el energético, el jamón de Teruel... Con lo cual, lo que se aplican son medidas transversales que van desde el fomento a la cuestión internacional por vía de Arex o por la serie de mecanismos financieros, de los cuales ya algunas empresas del sector del calzado en la zona se han beneficiado y están en trámite de conseguir ayudas.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Señor García Madrigal, su turno.

El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Usted conoce que el Grupo Socialista ha venido reiterando mediante distintas iniciativas que se continúan la necesidad imperativa de medidas urgentes en esta comarca del Aranda como comarca tradicionalmente industrial en Aragón. Hay que revitalizar la comarca habida cuenta de la cuestión que ocurre en ella (número de pueblos, desertización, tradición textil, primero, y, después, industrial). Obviamente, usted conoce que más del 50%, hasta el 64%, de la ocupación se cifra en esos sectores productivos o en el sector industrial. Lo que vemos nosotros es que tuvo una iniciativa el presidente del Grupo Parlamentario Socialista de visita a la zona y ustedes lo único que han hecho miméticamente después es copiarla, pero, claro, ustedes son gobierno, de manera que lo que tienen que hacer son medidas concretas para internacionalizar y exportar.

Es verdad que aquí preguntamos, en octubre, para que vea que continuamos... Si usted recuerda, vimos que usted era el transversal y se hablaba de industria, y hablamos de la revitalización del *cluster*... ¿Qué ha pasado? Porque, antes, los apoyos y la ayuda al *cluster* venían de la mano de Industria. ¿Qué ha pasado respecto de la disposición que se hizo de revitalización de apoyos, de ayudas económicas y de proyección del *cluster* del calzado? A su vez, acabamos, por decirlo de modo más reciente, una proposición no de ley del Partido Socialista en relación con las ayudas I+D+i, financiación y exportación.

Sí que hemos seguido su visita y sus declaraciones, sí que conocemos lo que ha hecho Sodiar a Zampiere para la internacionalización y que había un proyecto de crecimiento en el empleo, pero, al margen de esas medidas de transversalidad que usted anunciaba de modo genérico, así es fácil torear. Arex, Sodiar, Avalia, que han reducido sus presupuestos algunos en 50% en materia de explotación, ¿qué hacen ustedes de modo real, de modo local en la comarca?, puesto que más del 70% de la mano de obra son pequeñas factorías de doce a veinticinco trabajadores. En definitiva, dejen ustedes las visitas protocolarias. Y nos preocupa que también vaya el consejero de Administración Territorial y diga que los planes tienen que ser a cuatro años. Es decir, ¿es que no piensan hacer nada? ¿Pegarse cuatro años pensando para después no hacer nada? Hagan algo en concreto.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor García Madrigal.

Señor consejero Bono.

El señor consejero de Economía y Empleo (BONO RÍOS) [desde el escaño]: Mire, no quiero entrar en algunas cosas de forma, entraré en las de fondo.

Nosotros no hacemos visitas protocolarias. Su portavoz ha hecho una visita, supongo protocolaria y propagandística, a la zona; yo he hecho tres viendo las empresas con problemas o las empresas con demanda de ayudas y, en esas tres visitas, las empresas finalmente han conseguido ayudas por diferentes vías. O sea, nuestras visitas no son de propaganda ni protocolarias, son para trabajar, que es nuestra obligación por otra parte, ¿eh?, ¡ojo!, nuestra obligación.

¿Temas como el *cluster*? Del tema del *cluster* le voy a decir una cosa: es una pena que dejara de existir, pero, claro, habrá que preguntarles a los empresarios por qué ellos por su propia voluntad abandonaron el *cluster*. Esto no ha sido una cuestión en la que haya intervenido el Gobierno; ellos, voluntariamente, decidieron abandonar el tema… siguen asociados de alguna forma, pero no en la forma de *cluster*.

Finalmente, la comarca ¡claro que nos preocupa! El sector del calzado lleva muchos años con problemas en todo el país, el nuestro en particular, hay bastantes menos empresas de las que había y merece la preocupación y la atención por nuestra parte. A lo que yo me refiero es a que como el calzado hay muchos sectores y, entonces, la actuación que estamos haciendo es de manera transversal, por medio de ayudas. No hay un plan específico, se lo digo de verdad, para el calzado; a lo mejor tendremos que hacerlo, y para toda la comarca del Aranda, no le digo que no, ¿eh? Pero en estos momentos estamos actuando por la vía de transversalidad en empresas concretas con las que, por razones diversas, por problemas o simplemente por crecimiento orgánico de la empresa, estamos colaborando.

Sí que desearía, también lo digo, no sé si en *cluster* o en otra forma, que se volviese a algún tipo de asociación de las empresas porque como interlocución para el Gobierno, para la consejería, es muy útil y muy interesante. Yo espero que podamos seguir con esa colaboración.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Pregunta número 2976, relativa al abastecimiento de agua a la comarca de Cariñena, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado del Grupo Socialista señor Vicente.

Señor Vicente, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 2976/12, relativa al abastecimiento de agua a la comarca de Cariñena.

El señor diputado VICENTE BARRA [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, ¿qué proyecto y qué plazos de ejecución baraja el Gobierno de Aragón para el abastecimiento de agua a la comarca de Cariñena y para

la puesta en marcha del regadío de la zona, dada la importancia de estos proyectos para el territorio?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Vicente.

Señor consejero, puede comenzar su respuesta.

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: Señora presidenta.

Señor diputado.

Con respecto a la primera parte, no nos consta que haya ningún proyecto concreto. Parece ser que lo que hay, eso sí es cierto, es una subvención del Instituto Aragonés del Agua de unos quinientos mil euros para modificación de redes en el casco antiguo, subvención de la que, por lo visto, faltan todavía de justificar sesenta mil euros y con la que se han hecho un par de cambios de redes en dos calles del casco antiguo, pero tanto como proyecto no hay. Lo que sí parece que hubo en el mes de julio, a raíz de la sequía, fueron conversaciones del alcalde con el Instituto con el afán de que se cambiase el concepto de la subvención, en lugar de ser para redes, para otras cosas, pero la cosa quedó en nada.

Y con respecto al proyecto de regadíos, sí que existe un proyecto, un proyecto ambicioso, interesante, bastante caro también, de veintitrés millones, y que supone, además, un gran coste energético, que está contemplado dentro del catálogo de proyectos que tenemos en cartera, eso sí que existe.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, consejero.

Señor Vicente, tiene la palabra.

El señor diputado VICENTE BARRA [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Gracias, señor consejero, por la respuesta.

Le voy a reformular y voy a centrar un poquito más el tema. Usted sabe que Cariñena tiene problemas de agua de boca, Cariñena y su comarca, ha habido pueblos este año mismo (Longares, Alfamén, incluso Paniza, Cariñena, desde luego) que han tenido problemas de abastecimiento de agua. Y lo mismo ocurre con el regadío, usted sabe que el regadío en la comarca de Cariñena actualmente pasa por serias dificultades porque todo se resuelve a través del acuífero de Alfamén, que es un acuífero que también conoce que, por falta de control y por sobreexplotación, ahora mismo está pasando por serias dificultades y se ha quedado bastante bajo. En un principio, parece que la solución de todos los proyectos que están ahora mismo encima de la mesa pasa por recargar ese acuífero, bien con agua del canal, o bien con agua de Mularroya, o con otros proyectos que puedan surgir en el territorio.

En el tema del agua de boca, hasta donde nosotros sabemos, había un proyecto de Acuaebro, que es una empresa pública nacional, que tenía previsto llevar una ramal de la Loteta para dar respuesta al agua de boca de la comarca de Cariñena. Eso estaba, había proyecto desde el año 1999-2000, se había revisado y estaba previsto sacarlo a concurso; en el año 2012 en concreto estaba previsto sacar ese ramal para llevar el agua de boca a la comarca de Cariñena. Y es precisamente ahí donde yo quería saber, si usted tiene conocimiento de esto, cómo está el proyecto, qué intención tiene el Gobierno central, si eso se va a hacer o no, para resolver el agua de boca.

Con respecto al agua de regadío, actualmente, con el acuífero de Alfamén, como le digo, se están regando, aproximadamente, unas cuatro mil... bueno, malregando, unas cuatro mil-cuatro mil quinientas hectáreas de terreno, en una comarca extensa en la que el vino, las vides tienen un papel muy importante, y, desde luego, en estos momentos están sufriendo también verdaderos problemas.

Si conseguimos recargar el acuífero, se consigue recargar el acuífero de Alfamén, como mucho conseguiremos seguir manteniendo esas cuatro mil-cuatro mil quinientas hectáreas, que no es nada desdeñable, es importante el dato, pero, claro, quedan muchísimas más hectáreas en Cariñena y nuestra pregunta, mi pregunta en concreto era por dónde va a ir el futuro. ¿Cariñena solamente tiene el acuífero de Alfamén como respuesta o podemos pensar que podemos buscar entre todos soluciones para resolver el problema también del regadío?

Gracias, señora presidenta.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Vicente.

Consejero, tiene la palabra para su dúplica.

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: Señora presidenta.

Señor diputado. Si hay de Acuaebro, pues puede ser, eso no lo puedo negar porque no lo conozco, lo que sí le digo es que, con respecto al Instituto, lo único que hubo fue petición del alcalde para hacer pozos en lugar de para redes, pero, en fin, me informaré de ello y le tendré informado.

Y con respecto a lo segundo, lo de regadíos, sí, ciertamente, hay un proyecto, como le he dicho, importante. Se barajó una alternativa, como usted ha apuntado, de emplear agua de Mularroya como, por lo visto, está prescrito en el plan hidrológico y se hizo un estudio comparativo entre los dos proyectos por parte de la DGA y salió como más interesante el de Mularroya porque era menos costoso, ciertamente. El proyecto que existe es de unos veintitrés millones y hay que elevar cuatrocientos metros, creo, aproximadamente, el agua, con lo cual hay un fuerte componente energético, pero los regantes del acuífero de Alfamén dijeron que les gustaba más ese. Y luego hubo también un estudio, una posibilidad de hacer un tercer proyecto a base de hacer eso mismo, pero con financiación público-privada, pero que se desechó, con lo cual no queda más que ese proyecto, que son veintitrés millones, que tiene un problema importante financiero y es que la parte de subvención que tendría que tener el Gobierno de Aragón son unos catorce millones y en estos momentos no hay más que diez en el próximo presupuesto, pero, en fin, es un problema importante, como puede comprender.

De todas maneras, como le he dicho antes, está contemplado en nuestro catálogo y yo me puedo comprometer a estudiar la posibilidad de incluirlo dentro

de las prioridades, pero a más cosas no me puedo comprometer por la limitación económica.

Nada más.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Pregunta número 3027, relativa a las personas de las que prevé prescindir el Gobierno de Aragón en Sarga en 2013, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor Laplana.

Señor Laplana, puede formular su pregunta.

Pregunta núm. 3027/12, relativa a las personas de las que prevé prescindir el Gobierno de Aragón en Sarga en 2013.

El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señor consejero, ¿de cuántas personas prevé prescindir el Gobierno de Aragón en Sarga en 2013 y cuáles serán los servicios afectados por los recortes del personal?

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Laplana.

Señor Lobón, tiene la palabra para su respuesta.

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: Señora presidenta.

Señor Laplana, cuántas no se lo puedo decir porque tendrá que decirlo el consejo de administración, que se va a celebrar dentro de este mes, como he dicho hace un rato, esta mañana, hace unas tres horas, y ese planteamiento, nada más hecho por el consejo, será comunicado a los sindicatos.

La otra parte es qué servicios. No se va a suprimir ningún servicio, se van a menguar algunos, puede ser, pero en todo caso no van a menguarse en absoluto los dos servicios que también le he comentado esta mañana, que son el de operativo de incendios y el de recogida de cadáveres. Los demás servicios, que son el de infraestructuras y obras públicas, servicios agrarios, ganaderos, forestales, medioambientales y mantenimiento de espacios naturales, se van a mantener las mismas líneas que había antes, con la reducción lógica, que es lo que se verá, como digo, en el próximo consejo de administración, y que, insisto, será dentro de este mes.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Señor Laplana, su réplica.

El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Consejero.

Estas dos empresas que ahora se han fusionado han tenido una importante repercusión en el mundo rural en la línea de generar puestos de trabajo, dar estabilidad a esos puestos de trabajo, aunque a veces eran temporales. Han sido muy bien vistas y estamos de acuerdo en que, en vez de hacerlas desaparecer, que era el planteamiento de la señora Rudi antes de las elecciones, hoy ya hayan tomado la decisión de fusionarlas.

Pero yo creo que es el momento de decirle a la sociedad qué coste va a tener esa fusión, cuando vemos que en los presupuestos tienen para personal seis millones de euros menos. Los sindicatos, incluso los trabajadores, han hecho rápidamente números y calculan que puede haber trescientos trabajadores que se tendrán que buscar la vida fuera ya de esas empresas en una sociedad en la que ustedes, en un año y medio de gobierno, han generado veinte mil parados más. Vamos a ver qué hacemos entre todos, y ustedes, que tienen la máxima responsabilidad, para intentar aminorar esto.

Nosotros hemos presentado una enmienda a los presupuestos de una partida que hemos visto que se ha ampliado para externalizar servicios, para ver si con ese personal de la casa, que son unos excelentes profesionales, pueden cubrir ese trabajo que querrían externalizar, a no ser que su filosofía sea la única filosofía de privatizar servicios. Y si es así, díganlo, la sociedad quiere ya saber hoy qué va a pasar con esa empresa, qué personal se va a quedar fuera, qué tipo de personal, porque parece ser también que a veces a los directivos se les degrada de puesto de trabajo pero se les mantiene en la empresa con los mismos sueldos, según dicen los sindicatos y algunas notas de prensa que hemos visto por ahí.

Yo creo que ha llegado el momento de decir la verdad, de decir: señores, con estos presupuestos hay que echar a trescientos trabajadores… cien, doscientos… Me parece muy bien que hablen de que va a haber una negociación, pero el dinero es el que hay y, de momento, con el dinero que tienen, si no se remedia con la aprobación de enmiendas para pasar de partida, hay que echar a gente, y no es un momento muy bueno para dejar a gente en la calle.

Pero es que, además, queremos saber también qué gente se va a ir a la calle, la que entró por la vía de SIRASA, la que entró por la vía de Sodemasa, qué criterio se va a seguir. Eso es lo que queremos que usted nos explique hoy y, si tiene a bien, atiendan nuestra petición de no echar a personal cambiando una partida presupuestaria. Y en cuanto a esos excelentes trabajadores que tienen ahí, como tienen en el Departamento de Agricultura, ha llegado el momento de que trabajen y hagan proyectos con vistas al futuro, porque yo estoy convencido de que de esta crisis, al final, saldremos y los proyectos que estén se harán.

Nada más y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Laplana.

Señor consejero, su dúplica.

El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: Señora presidenta.

Señor Laplana, empezaba diciendo usted que ha llegado el momento de decir la verdad. La llevamos diciendo desde el primer momento y la vamos a seguir diciendo, no hemos hecho otra cosa más que decir la verdad y los pasos que estamos dando.

Si usted me pregunta, como me ha preguntado, cuántos, le digo que en estos momentos no se lo puedo decir,

que se lo diré antes de quince días, pero que en estos momentos no se lo puedo decir.

En cuanto a que hay un personal excelente, lo ratifico plenamente.

Y en cuanto a que nuestro deseo es que la mayor parte del personal se mantenga en la sociedad, también lo he dicho y lo sigo diciendo. De ahí que, como decía hace tres horas también, las dos formas de reajustar, como manda la ley de medidas urgentes, que obliga a actuar con estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, son el ajuste de personal o el aumento de competencias. Por eso, cuando se refundó o se hizo la fusión de las dos sociedades, el objeto social es lo suficientemente amplio para que pueda convertirse no solamente en sociedad gestora del Departamento de Agricultura, sino de toda la casa, e incluso de otras casas, y en esa labor comercial se está trabajando desde hace un par de meses.

Ese balance de las dos cosas es lo que se verá en el próximo consejo y, como digo, se dialogará con los sindicatos para buscar la mejor solución para las personas y para la estabilidad de la sociedad.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Pregunta número 2980, relativa a las graves consecuencias del drástico recorte, casi del 90%, de las ayudas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales a la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la diputada del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

Señora Ibeas, tiene la palabra para la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 2980/12, relativa a las graves consecuencias del drástico recorte, casi el 90%, de las ayudas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales a la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, ¿tiene usted conciencia de las graves consecuencias que tiene en la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad auditiva el drástico recorte de casi el 90% de las ayudas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales a la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón?

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.

Señor consejero, su tiempo.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes de la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza que nos acompañan, y responderle, señora Ibeas, que tengo consciencia y conciencia de este tema por lo siguiente.

El interés de esta consejería sobre las demandas de la comunidad sorda que preconiza la lengua de signos es máximo, otra cosa es que los presupuestos con los que contamos no sean los que nos gustaría, son, lo tengo que decir, sustancialmente inferiores a los de otra época. Y, además, le digo una cosa: el marco normativo de subvenciones ha cambiado como consecuencia de la aplicación del Plan estratégico de subvenciones y de la puesta en valor de los proyectos por encima de las asociaciones que los presentan.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Señora Ibeas, su turno.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Pero, señor consejero, las realidades de las personas sordas no tienen nada que ver con la crisis porque tienen el mismo derecho que usted y yo a acceder a todos los servicios en igualdad de condiciones, y en estos momentos van a tener muchísimas más dificultades por culpa de sus recortes.

Hay una ley, como usted sabe bien, la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconoce la lengua de signos española, las españolas, y se regulan medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordo-ciegas. Esta ley está pendiente de desarrollo en Aragón, pero usted, como consejero, sabe que tiene la máxima responsabilidad para garantizar la mayor calidad de vida a estas personas.

Es de justicia, señor consejero, que, si su departamento no puede asumir personalmente todas las necesidades, la cobertura de todas las necesidades que tienen las personas sordas, evidentemente, tendrá que respaldar a aquellas entidades que están trabajando en esa línea, como la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón desde hace más de ochenta años. Y en estos momentos se va a hundir completamente por culpa de sus recortes y por culpa sin duda de la nefasta gestión del director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que en estos momentos ya no está. Esperemos, señor consejero, que la nueva directora gerente tenga por lo menos la sensibilidad necesaria para hacerse cargo de las responsabilidades que le corresponden.

Pero su departamento, hoy por hoy, no está dando una respuesta adecuada a estas entidades y a otras que están a punto de desaparecer. Un recorte de más del 90 %, señor consejero, de casi el 90 %, casi el 90 % en las subvenciones hunde a una asociación, la que sea, y cuando están trabajando, como están trabajando, al límite. Y aquí no hay imaginación que valga, no hay más cinturones que apretarse, es que no han podido ni tan siquiera prepararse para el recorte que les ha llegado.

Y la nefasta gestión, como digo, en este caso del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en el fondo, no es también más que un desprecio a las personas sordas y un desprecio a la ley que tienen que cumplir. Yo no sé si, en este caso, el director gerente o usted mismo, señor consejero, si usted ha visitado las instalaciones de la Agrupación, porque, si las visitara, comprendería perfectamente todo lo que está en juego, el trabajo que realizan, la atención integral que garantizan a las personas sordas en empleo, en educación, en todo. La asocia-

ción, la Agrupación no puede asumir en estos momentos, señor consejero —concluyo—, los retos que tienen pendientes si no los asume directamente su departamento.

Haga, por favor, todo lo que esté en su mano para que se pueda resolver y para que en el año 2013 puedan afrontar todos los servicios que tienen que dar.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.

Señor consejero, su turno de dúplica.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señora Ibeas, le recuerdo que la convocatoria de subvenciones de este ámbito se produjo el día 27 de junio de 2012. Como usted bien sabe, la cantidad consignada era de 1,7 millones. Le informo de que se presentaron doscientos un proyectos correspondientes a ciento veinte entidades sociales y que, el día 22 de octubre, el IASS resolvió la concesión de subvenciones, concediendo las mismas a noventa y cinco proyectos correspondientes a sesenta y siete entidades.

Dicho esto, le tengo que decir que a mí, personalmente, me sorprendió la subvención concedida a la Agrupación y me sorprendió, fundamentalmente, por la diferencia que se constataba en comparación con las cantidades que venían recibiendo durante los últimos ejercicios. Pero también le digo algo: en ningún caso hubiéramos podido mantener el porcentaje de subvención atribuido a esta asociación en los mismos niveles que venía recibiendo en los últimos ejercicios.

No obstante, comprobada esta cuestión y a solicitud de la asociación, hemos mantenido ya una reunión, conmigo personalmente, al margen de algunas más que han mantenido con la directora del IASS, y le informo que, de mutuo acuerdo, se planteó por parte de la Agrupación un recurso dentro del plazo establecido para que se reevaluara la documentación presentada, en concreto los proyectos presentados, a fin de que, si se comprueba que son susceptibles de una mayor puntuación, se disponga lo oportuno a efectos de que la subvención se acreciente, se complemente.

Pero en estos momentos todavía no puedo avanzar al respecto porque se está evaluando la documentación presentada por la asociación.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Pregunta número 2981, relativa a la convocatoria para contratar servicios presenciales de intérpretes de lengua de signos, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la diputada de Chunta Aragonesista señora Ibeas.

Señora Ibeas, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 2981/12, relativa a la convocatoria para contratar servicios presenciales de intérpretes de lengua de signos.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, ¿cree usted que la convocatoria del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para contratar servicios presenciales de intérpretes de lengua de signos para 2013 permite cubrir las necesidades de las personas con discapacidad auditiva en Aragón?

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.

Señor consejero, su turno de respuesta.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Señora Ibeas, mi respuesta es que sí. Cuando se define una convocatoria de este tipo, se analizan las necesidades, se analizan los fines, los ámbitos de actuación, los periodos de aplicación, y se asigna la cantidad económica que se estima necesaria.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, consejero.

Señora Ibeas, su turno.

La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Pues, señor consejero, se equivoca, se equivoca porque esa convocatoria no cubre, no cubre en absoluto los servicios elementales. Porque, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, solamente los concreta en el ámbito de la atención primaria, pero no hay nada en el ámbito de la atención especializada, es decir, en los centros médicos de especialidades y en los hospitales, no hay nada en lo relativo a la atención sociosanitaria, no hay nada tampoco en lo relativo a la salud mental... ¡Hombre!, creo que no se puede decir que eso es cubrir todas las necesidades que tiene cualquier persona, imagínese que usted está en esa misma situación.

Tampoco lo cubre en el ámbito educativo porque las personas que son, en este caso, sordas, padres o madres de niños, niñas que están escolarizados que son oyentes tampoco van a tener cobertura en este sentido. Y le voy a poner un ejemplo concreto: las tutorías. ¿Cómo se van a resolver en estos momentos? No está cubierto.

Tampoco señor consejero —se lo comunico también para su información— se prestan servicios de especial relevancia como pueden ser las llamadas telefónicas, la traducción de textos, la redacción de escritos, el acceso al deporte, el acceso a la cultura, el acceso al ocio, el acceso al transporte (tren, aeropuerto, autobuses), los servicios notariales, los servicios jurídicos básicos, la participación política. Todo eso, señor consejero, todas las personas que estamos aquí lo tenemos resuelto, pero las personas con problemas de estas características no pueden acceder en igualdad de condiciones a todas estas prestaciones, a todas estas acciones o a todos estos servicios.

Y esto se tendría que haber resuelto en la convocatoria, en esa convocatoria en la que en absoluto se contemplan estas necesidades. Y eso sí que es doloroso porque, por culpa del recorte del 90 % en las ayudas en el año 2012, señor consejero, la Agrupación no va a poder hacer frente a lo que no vaya a poder resolver ya hasta el momento, porque no tiene posibilidades, no ha podido ni concurrir a esa convocatoria, porque usted sabe que no tenían la situación económica y ad-

ministrativa para poder hacerlo. Si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a resolver usted?

La pregunta que le hago es: ¿cómo piensa resolver desde su departamento toda la falta de atención que estas personas puedan en este caso tener a partir de ahora por culpa de los recortes económicos y, sobre todo, de los recortes a la Agrupación? Porque el Instituto Aragonés —termino— de Servicios Sociales no ha sufragado gasto de ningún servicio de intérpretes para personas sordas en el año 2012. Es muy duro, ¿eh?, señor consejero, es muy duro.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.

Señor consejero, su tiempo de dúplica.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señora Ibeas, desde 2004, el IASS viene conveniando con Asza en materia de intérpretes de lengua de signos. Como usted bien sabe, desde este año 2012, el formato se ha cambiado a contrato público, en concreto, un contrato de servicios para intérpretes de lengua de signos, con una dotación de cien mil ciento setenta euros desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de diciembre de 2013. Los ámbitos —usted los ha señalado— eran servicios sociales y salud y tramitación de documentación oficial en los ámbitos de la comunidad autónoma.

En el acto de constitución de la mesa de contratación, realizado el día 19 de noviembre, quedó desierta la convocatoria por no presentación de ninguna propuesta. Lo que vamos a hacer, evidentemente, es analizar las razones por las que no se ha presentado ninguna propuesta, hablar con las entidades potencialmente interesadas en el tema, en este caso en concreto con la Agrupación, para definir un nuevo contrato para el año 2013 que responda de mejor manera a las necesidades de la Agrupación, pero, sobre todo, a las necesidades de las personas que necesitan los servicios de la Agrupación.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Pregunta número 3010, relativa al mapa sanitario de Azuara y Belchite, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor Vicente.

Señor Vicente, tiene la palabra.

Pregunta núm. 3010/12, relativa al mapa sanitario de Azuara y Belchite.

El señor diputado VICENTE BARRA [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, ¿cuándo prevé el Gobierno de Aragón proceder a modificar el mapa sanitario de Azuara y Belchite y qué planes concretos sanitarios tiene previstos para esta comarca?

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Vicente.

Señor consejero.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señor Vicente, previsto lo tenemos de hace tiempo. La reunión del Comité de Ordenación Sanitaria, que es el órgano que resuelve estas cuestiones, se va a celebrar el día 18 de diciembre, por lo cual poca más información le puedo dar. En esa reunión, en la que participan, como usted bien sabe, representantes de la Administración sanitaria y de las entidades locales, se determinará la resolución a todas las cuestiones que se han planteado por parte de las direcciones de primaria junto con las alegaciones o sugerencias planteadas por las entidades locales.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Señor Vicente, su turno de réplica.

El señor diputado VICENTE BARRA [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señor consejero, espero que su respuesta no lleve implícito que, efectivamente, se va a aprobar. La reunión será el 18, veremos a ver el resultado, porque yo voy a intentar darle argumentos para ver si entre todos somos capaces de cambiar el criterio.

Mire, el mapa sanitario de Aragón lo aprobamos, o se aprobó, en el año 1986 y fue un documento que, cuando se hizo, tuvo en cuenta muchísimos parámetros. Desde luego la dispersión, desde luego, la población, las carreteras, el clima... muchos, pero, sobre todo, hubo dos parámetros, dos, que se tuvieron mucho en cuenta, que fueron los criterios y la opinión de los usuarios y de los trabajadores. Y eso es lo que ha hecho que el mapa sanitario —después ha habido modificaciones puntuales cada año— haya sobrevivido durante muchos años con variaciones mínimas, sobre todo en el medio rural, y casi todas, casi todas las modificaciones que ha habido en el medio rural han sido como consecuencia de iniciativas del territorio y han venido avaladas por la opinión de los trabajadores de los centros y, desde luego, de los propios ciudadanos.

La modificación que ustedes plantean… yo creo que lo que van a hacer es equivocarse porque, al final, le van a poner encima de la mesa una resolución que creo que no es acertada. No se puede hacer una modificación de un mapa sanitario en la zona rural solamente desde un despacho y sin saber las consecuencias que puede tener para el territorio.

Mire, los que, fundamentalmente, saben lo que supone hacer una urgencia a las cuatro de la mañana, coger tu coche y, un 4 de enero, irse al pueblo que sea, a Torrecilla, por ejemplo, o al revés, un ciudadano de Torrecilla coger el coche y tener que ir hasta el centro de salud para que sea atendido, son los que lo están viviendo, es, fundamentalmente, el territorio y son los profesionales, y tienen que contar con ellos.

La propuesta que ustedes tienen encima de la mesa va a ser nefasta para Azuara; desde luego, lo van a dejar sin punto de atención continuada, con lo cual todo el territorio de Azuara, todas las localidades del

centro de salud de Azuara tendrán que desplazarse a Belchite. Pero en Belchite, con los mismos recursos que tienen ahora, van a tener una situación que va a ser muy complicada. Si un médico en un momento determinado se tiene que desplazar hasta Torrecilla para atender una urgencia, dejará el centro de salud —cuarenta minutos de ir y cuarenta de volver más la atención sanitaria— alrededor de hora y media o dos horas sin médico en el centro; eso puede ocurrir una vez al mes o dos veces en el mismo día. Y eso va a suponer no solamente para Azuara, sino también para Belchite, una importante merma de su calidad de asistencia. Desde luego, también para Muniesa porque hay pacientes que ahora mismo van al Hospital Miguel Servet y van a tener que desplazarse hasta Alcañiz.

Por lo tanto, yo le pido que reflexione, que reflexione la decisión, que es una decisión muy complicada, y que, desde luego, cuenten con el territorio, que cuenten con los profesionales, que cuenten con los alcaldes y con la población porque, si no, como le digo, creo que se van a equivocar y no es esa nuestra intención.

Gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Vicente.

Señor consejero, su dúplica.

El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señor Vicente, me llama la atención que entre los criterios que usted estima que hay que tener en cuenta para elaborar un mapa de salud en primaria en este caso en concreto no incluya uno muy importante, que es la carga asistencial. También hay que tener en cuenta la carga asistencial, igual que la población, con todas sus características, y las isocronas. Nosotros tenemos en cuenta los tres criterios.

Respecto a si lo hemos desde el despacho, ya le pasaré las dietas y los kilometrajes que voy a pagar... que voy a firmar que se van a pagar a las personas de mi departamento que se han recorrido kilómetro tras kilómetro toda la comarca de Azuara a Belchite para determinar, fundamentalmente, las isocronas; se los pasaré cuando los tenga.

Le recuerdo que cada año, hasta el 30 de septiembre, tienen de plazo las direcciones de primaria de cada sector para presentar la propuesta correspondiente a las posibles modificaciones en el área que sea en el ámbito del mapa sanitario de primaria. Una vez que se plantean estas propuestas, se trasladan a las entidades locales que tienen que ver con las zonas donde se pretende realizar alguna modificación; posteriormente, se analizan esas alegaciones o sugerencias. Es ahí, en ese proceso, en esa fase, en la que estamos. Quiero decir esto porque no se ha tomado todavía ninguna decisión, y el día 18, cuando se reúna el Comité de Ordenación Sanitaria, donde están también las entidades locales, se tomará una decisión sumando todo (la propuesta del Salud y las propuestas de las entidades locales) y, una vez que el Comité se reúne, eleva la propuesta al consejero, que es el que la firma. O sea, en definitiva, seré yo, cuando me llegue, el que determinará la solución a este tema.

No obstante, le voy a decir tres cosas para terminar. Primero, que le pida un poquito más de tranquilidad al alcalde de Azuara, un poquito más de tranquilidad y que no utilice calificativos como los que está utilizando porque al final se tendrá que arrepentir y tendrá que pedirme perdón. Se lo adelanto ya, va a tener que pedirme perdón; por favor, dígaselo, se lo digo en buen tono, eh, dígaselo, por favor, porque me tendrá que pedir perdón.

Luego, que no van a influir para nada en la decisión que se va tomar las movilizaciones que se están realizando, no van a influir para nada. Y eso no significa que no tengamos en cuenta la opinión de la población, que se está teniendo en cuenta, mucho más, mucho más de lo que se creen el alcalde y las personas que se están movilizando.

Y luego, una cuestión para terminar, que es para aplicar a esto y a todo: las decisiones no se toman para perjudicar a nadie, sino para favorecer a todos.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Pregunta número 3024, relativa a la reestructuración del personal a partir de la fusión de Sodemasa y SIRASA, formulada al consejero de Presidencia y Justicia por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista señor Laplana.

Señor Laplana, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 3024/12, relativa a la reestructuración del personal a partir de la fusión de Sodemasa y SIRASA.

El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el escaño]: Gracias, presidenta.

Señor consejero de Presidencia, ¿sigue manteniendo el consejero de Presidencia y Justicia, Roberto Bermúdez de Castro, que la reestructuración del personal de la fusión de las empresas Sodemasa y SIRASA solo afectará a los cuadros directivos?

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Laplana.

Consejero de Presidencia.

El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚDEZ DE CASTRO MUR) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Señor Laplana, me imagino que me hará esta pregunta en mi condición de antiguo consejero durante mes y medio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, no como consejero de Presidencia, que no tengo competencias en la materia.

Haciendo memoria y buscando en el libro de sesiones, en el boletín, hablé dos veces del tema, en una interpelación al señor Palacín sobre el tema de las OCA y en la presentación de los presupuestos debatiendo con usted, que fui el que sustituía en ese momento al portavoz. Dije en ese momento que la principal reestructuración... dije dos cosas principalmente: que la principal reestructuración iba a ser en el ámbito directivo —yo creo, no estoy encima, que se debe de estar haciendo—, y dos, dije que no se iba a perder... ¿No se oye? ¿No se oye? *[Rumores.]* Tampoco he dicho nada muy interesante, ¿eh? Y la segunda cosa que dije *[rumores]* —perdón— era que no se iba a perder ni un puesto de trabajo en

extinción de incendios, como así consta en el acta. Y yo le digo que no se va a perder ni un puesto de trabajo en la extinción de incendios, como así consta.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Señor Laplana, tiene... para poder replicar.

El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el escaño]: Señor consejero, lo que usted dijo fue lo siguiente: «La idea es muy sencilla: ningún trabajador de base de SIRASA y Sodemasa debe tener el más mínimo temor, ningún trabajador de extinción de incendios debe tener el más mínimo temor, porque no va a pasar nada; simplemente, se van a racionalizar cargos directivos, sueldos de más de ochenta mil, noventa mil y cien mil euros». Yo le pregunté cuántos había. Así que esto era un aviso para navegantes. Y yo creo que ya no se está cumpliendo porque ya hay gente a la que no se le ha renovado el contrato. Lo que quiero preguntarle, como consejero de Presidencia, que yo creo que tiene la máxima responsabilidad horizontal sobre todos los departamentos, si lo que dijo aquel día fue un calentón o fue que tiene suficiente mando en plaza para poder cumplirlo.

Porque, claro, la gente empieza a estar ya cansada y nerviosa porque sueldos de cien mil, ochenta mil, noventa mil, yo creo que no habría muchos, no habría muchos. Pero es que vamos a hacer un seguimiento a ver si es que lo cobran con menos responsabilidad ahora, que es lo que parece ser que está pasando, queremos saber si es verdad. Queremos saber a quién se ha echado y a quién no de esos de ochenta o noventa mil, si han echado, y vamos a hacer un seguimiento, porque tampoco es que nosotros queramos que echen a los de ochenta o noventa, lo que pasa es que lo que se dice se debe cumplir para que la gente tenga credibilidad.

La señora Rudi ya planteó que se iba a cargar las dos empresas, nos parece acertado que no se las cargara, pero es que ahora queremos saber cómo se hace la fusión, con qué coste, qué parte de las dos empresas se lleva el mayor coste, porque también nos gustaría saber eso, y luego, al final, queremos saber qué afección va a tener sobre los trabajadores de a pie, que al final va a tenerla porque sin dinero —y en los presupuestos no está— no se les va a poder pagar.

Y luego, me gustaría que reconozca usted que se equivocó en aquellas declaraciones, y no pasa nada. Usted, aquel día, eventualmente, tuvo que hablar de agricultura, aunque sí que sobre el personal tiene mucho que decir porque es el consejero de Presidencia, y diga: oiga, pues lo que dije no lo puedo cumplir, y punto. Porque a gente ya se ha echado.

Nada más y muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Laplana.

Señor consejero, su turno.

El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚDEZ DE CASTRO MUR) [desde el escaño]: Gracias, señora presidenta.

Yo, sobre el personal, no tengo que decir nada porque es competencia del consejero de Hacienda, señor Laplana, o sea que... ¿No se oye?, creo. Si no, me tengo que poner así, tipo cantante... *[Rumores.]*

[La señora vicepresidenta primera, sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles.]

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Ahora sí.

El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚDEZ DE CASTRO MUR) [desde el escaño]: Ahora, ¿sí?

Luego, otro tema, señor Laplana, ya me canso de decirlo, yo tengo la responsabilidad que tengo, no se crea usted que tengo más responsabilidad sobre todos los departamentos. Yo soy consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno, nada más y nada menos, solamente eso, no me valore usted más de lo que tengo, que ya está bien y suficiente.

Yo entiendo perfectamente —como, encima, hacía el gesto el señor Pina—, tiene razón, la gente tiene miedo y es normal, yo comparto plenamente que es necesario que de una vez por todas se sepa realmente cómo va a quedar la empresa Sarga y cómo va a quedar su estructura de personal, y yo eso lo entiendo, lo comparto y sé que están completamente asustados con el futuro.

Yo le digo una cosa, la gente que se ha ido de Sarga —o yo, el conocimiento que tengo— son contratos finalizados, contratos de obra y servicio que se contrataban para una fecha para hacer una obra y, cuando se acababa esa obra (de regadíos, de reparcelación, de mejora de cualquier infraestructura), se acababa el contrato, y eso es normal, lo hacía el anterior Gobierno y lo hace este Gobierno, y eso, señor Laplana, es absolutamente normal.

Mire, cuando yo estuve mes y medio de consejero en funciones, simplemente, yo hice cosas que creo que eran importantes: ser más transparentes, les di los contratos, que no los tenían, di la relación de puestos de trabajo, di los sueldos, que no los tenían. Yo pienso que eso es importante para empezar a negociar.

También le puedo decir que había gente que había sido despedida y esos despidos se echaron atrás porque yo, cuando estaba ahí —y el actual consejero también lo ha hecho—… es no despedir a nadie hasta que no se haga un concepto global de la empresa para no echar a nadie.

Yo creo que la empresa debe conseguir la máxima estabilidad, como ha dicho el consejero en la interpelación, en su anterior pregunta, y buscar la máxima estabilidad económica y de personal.

Yo le digo una cosa, y para acabar, incluso en nuestro departamento estamos buscando encargos de trabajo para Sarga para que la afección de personal sea lo mínimo posible, y lo verá, desde el ámbito de la justicia, ¿eh?, desde el ámbito de la justicia, estamos buscando contratos posibles para Sarga para intentar que la afección de personal sea la mínima posible.

Y luego, en intentar solucionar temas laborales y mínimos despidos, tanto usted como yo trabajaremos para que en Sarga y en cualquier empresa de Aragón sean los mínimos posible, y en eso, a mí, no tiene ninguna duda de que me encontrará.

Muchas gracias.

La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.

Pues, finalizado el orden del día, se levanta la sesión *[a las trece horas y treinta y tres minutos].*

ÍNDICE DE TRAMITACIONES

1. Proyectos de ley
2. Proposiciones de ley
3. Decretos leyes
4. Proposiciones no de ley
5. Mociones
6. Interpelaciones
7. Preguntas
8. Resoluciones del Pleno
9. Cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón
10. Comparecencias
    - 10.1. Del Presidente de la Diputación General de Aragón (DGA)
    - 10.2. De consejeros de la DGA
        - 10.2.1. Ante el Pleno
        - 10.2.2. Ante la Comisión de Reglamento y Estatuto de los Diputados
        - 10.2.3. Ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas
        - 10.2.4. Ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario
        - 10.2.5. Ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública
        - 10.2.6. Ante la Comisión de Economía y Empleo
        - 10.2.7. Ante la Comisión de Industria e Innovación
        - 10.2.8. Ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
        - 10.2.9. Ante la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
        - 10.2.10. Ante la Comisión de Política Territorial e Interior
        - 10.2.11. Ante la Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia
        - 10.2.12. Ante la Comisión de Educación, Universidad, Cultura y Deporte
    - 10.3. De altos cargos y funcionarios de la DGA
    - 10.4. Del Justicia de Aragón
    - 10.5. Otras comparecencias
11. Debates generales
    - 11.1. Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de Aragón
    - 11.2. Otros debates
12. Varios

CORTES DE ARAGÓN - Palacio de la Aljafería - 50071 Zaragoza
www.cortesaragon.es
Edición electrónica: Cortes de Aragón - Servicio de Publicaciones
Depósito Legal: Z-1466-1983 - ISSN: 1138-1167